DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021

PROCESO LEGISLATIVO	
01	**1)** 27-09-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Presentada por el Sen. Cruz Pérez Cuellar (MORENA). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates, 27 de septiembre de 2018.
	2) 18-10-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates, 18 de octubre de 2018.
	3) 25-10-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; se adiciona una fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un párrafo en materia de delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de comunicación en la Ley de Seguridad Nacional; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vías de Comunicación. Presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates, 25 de octubre de 2018.
	4) 31-10-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de sanciones por portación ilegal de armas. Presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. Diario de los Debates, 31 de octubre de 2018.
	5) 13-12-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz (PVEM). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera. Diario de los Debates, 13 de diciembre de 2018.

PROCESO LEGISLATIVO	
	6) 20-12-2018 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte (PAN). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Gaceta Parlamentaria, 20 de diciembre de 2018.
	7) 19-03-2019 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por la Sen. Verónica Martínez García (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos. Diario de los Debates, 19 de marzo de 2019.
	8) 22-05-2019 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armonización del marco legal de la prisión preventiva oficiosa. Presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores. Diario de los Debates, 22 de mayo de 2019.
	9) 12-06-2019 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por el Congreso del Estado de Baja California Sur. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Diario de los Debates, 12 de junio de 2019.
	10) 10-07-2019 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por el Sen. Ricardo Monreal Ávila (MORENA). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores. Diario de los Debates, 10 de julio de 2019.
	11) 14-08-2019 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto; adiciona el párrafo sexto; y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; adiciona el artículo 6 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; adiciona el artículo 41 bis a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos; adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud. Presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores. Diario de los Debates, 14 de agosto de 2019.
	12) 29-10-2019 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota (PRI). Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

PROCESO LEGISLATIVO	
	Diario de los Debates, 29 de octubre de 2019.
02	29-07-2020 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 56 votos en pro, 25 en contra y 7 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 29 de julio de 2020. Discusión y votación 29 de julio de 2020.
03	02-09-2020 Cámara de Diputados. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General en materia de Delitos Electorales, General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, y Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes General de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Vías Generales de Comunicación. Se turnó a la Comisión de Justicia. Diario de los Debates, 2 de septiembre de 2020.
04	13-10-2020 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 266 votos en pro, 127 en contra y 2 abstenciones. Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. Diario de los Debates 6 de octubre de 2020. Discusión y votación 13 de octubre de 2020.
05	20-10-2020 Cámara de Senadores. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Diario de los Debates, 20 de octubre de 2020
06	18-02-2021 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se

PROCESO LEGISLATIVO	
	reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de prisión preventiva oficiosa. **Aprobado** en lo general y en lo particular, por 62 votos en pro, 36 en contra y 1 abstención. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 16 de febrero de 2021. Discusión y votación 18 de febrero de 2021.
07	19-02-2021 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se concede el uso de la tribuna al Senador Cruz Pérez Cuellar, para presentar a nombre propio y del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del grupo parlamentario del Partido Morena, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en materia de prisión preventiva.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ACTUAL PÁRRAFO SÉPTIMO AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 92 A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

(Presentada por el Senador Cruz Pérez Cuéllar, a nombre propio y del Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El Senador Cruz Pérez Cuellar: Con su permiso, señor Presidente.

Los que suscriben, Cruz Pérez Cuellar, Julio Ramón Menchaca, Blanca Estela Piña Gudiño, integrantes del grupo parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, venimos a presentar la siguiente iniciativa.

El pasado 20 de septiembre de 2018 presentamos un proyecto de Decreto de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación a nuestra Carta Magna tiene como objeto fundamental incluir cuatro conductas lesivas de bienes jurídicos altamente sensibles para la sociedad, que en los últimos años han venido generando una crisis en diversos ámbitos, como el de seguridad pública, el económico y el social. De tal manera que en estos momentos nos encontramos en un estado de emergencia nacional que amerita con carácter de urgente, acciones firmes y contundentes que den paz, seguridad y condiciones dignas de vida a millones de mexicanas y mexicanos que lamentablemente sufren los embates de la violencia y la pobreza.

Se trata de cuatro conductas tipificadas en el Código Penal Federal y las diversas leyes especiales que aborda cada una de ellas, nos referimos a los delitos en materia de corrupción, robo de hidrocarburos, electoral y armas de fuego y explosivos, respecto de las cuales se dan supuestos de tal gravedad que se debe de impedir que los autores de los ilícitos lleven su proceso en libertad y abusen de las instituciones para burlar la ley, evitar el castigo y generan con ello impunidad, que tanto ha agraviado a nuestro país.

No nos es desconocido el progreso que ha tenido nuestro sistema penal, el cual, a partir de la reforma constitucional de 2008, transitó de ser inquisitivo a ser de adversarial, acusatorio y, por supuesto, garantista, lo cual sin duda constituyó un gran avance en materia de impartición de justicia, aunque en los hechos observamos que, aún después de su implementación desde el año 2016, los niveles de violencia, inseguridad y saqueos a las arcas públicas no han disminuido, por el contrario, en la actualidad parecen incontrolables.

Una obligación imperante con nuestro país, sin duda alguna, es el combate a la corrupción, que en los últimos sexenios se ha convertido en un cáncer que corroe en gran medida a nuestras instituciones y que, hoy, cuando el pueblo mexicano ha optado por una verdadera y profunda transformación en la materia de hacer política, de ejercer el poder público, es que el grupo parlamentario de Morena plantea reformas encaminadas a fortalecer nuestro marco jurídico, para aportar herramientas legales efectivas que abonen a erradicar este mal.

Si bien la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo como finalidad coordinar acciones en todos los niveles de gobierno para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción, aún falta un largo camino para erradicar el enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos a costa del dinero del pueblo de México.

Según Transparencia Mexicana, en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, la calificación de México empeoró un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que va de cero a 100, donde cero es el país peor evaluado en corrupción y 100, en mejor en la materia.

Conforme a los datos que ofrece esa Organización No Gubernamental, esto ubica a nuestro país en la posición número 135 de 180 naciones evaluadas en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, por lo que hace al robo de combustible, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos fue publicada el 12 de enero de 2016. A partir de esta legislación, se establecieron importantes penalidades para delitos en la materia, como la sustracción y el aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer con arreglo a la ley.

De acuerdo con la información difundida públicamente, Pemex señala que entre 2012 y el primer trimestre de 2017 se extrajeron 12 millones 487 mil barriles de gasolinas de tomas clandestinas. En el mismo periodo se presentaron ante la PGR 20 mil 868 denuncias por el robo de combustibles, siendo 2015 el año que concentró el mayor número.

El costo de reparar los equipos dañados por tomas clandestinas es alto, entre 2010 y 2016, estos gastos ascendieron a 4 mil 234 millones de pesos.

En este contexto, consideramos que en la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos aún existen diversos delitos cuya comisión es de suma gravedad que ameritan, en consecuencia, incorporarse al catálogo de ilícitos en los que es posible el juzgador dicte la prisión preventiva oficiosa.

También nos referimos al tema de los delitos electorales y a los delitos que tienen que ver con las armas de fuego, siendo consecuentes con la iniciativa que hemos presentado para hacer estos delitos de carácter grave y que no haya de ninguna manera posibilidad de salir bajo fianza.

De esta manera, señor Presidente, le solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates, por cuestiones de tiempo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsiguientes; así como la fracción XII del actual párrafo

séptimo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

27 SEP 2018 SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; DE SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ACTUAL PÁRRAFO SÉPTIMO, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 92 A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

Los que suscriben, **Senador Cruz Pérez Cuellar y Senador Julio Ramón Menchaca Salazar,** integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta Cámara iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 20 de septiembre de 2018 presentamos un proyecto de Decreto de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta modificación a nuestra Carta Magna tiene como objeto fundamental incluir cuatro conductas lesivas de bienes jurídicos altamente sensibles para la sociedad, que en los últimos años han venido generando una crisis en diversos ámbitos, como el de seguridad pública, el económico y el social, de tal manera que en estos momentos nos encontramos en un estado de emergencia nacional que amerita, con carácter de urgente, acciones firmes y contundentes que den paz, seguridad y condiciones dignas de vida a millones de mexicanas y mexicanos que, lamentablemente, sufren los embates de la violencia y la pobreza.

Se trata de cuatro conductas tipificadas en el Código Penal Federal y las diversas leyes especiales que aborda cada una de ellas: nos referimos a los delitos en

materia de corrupción, robo de hidrocarburos, electoral, y armas de fuego y explosivos, respecto de las cuales se dan supuestos de tal gravedad que se debe impedir que los autores de los ilícitos lleven su proceso en libertad y abusen de las instituciones para burlar la ley, evitar el castigo y generar con ello impunidad, que tanto ha agraviado a nuestro país.

No nos es desconocido el progreso que ha tenido nuestro sistema penal, el cual, a partir de la reforma constitucional de 2008, transitó de ser inquisitivo a ser de corte adversarial, acusatorio y, por supuesto, garantista, lo cual sin duda constituyó un gran avance en materia de impartición de justicia dentro del marco jurídico, aunque en los hechos observamos que, aún después de su implementación desde el año 2016, los niveles de violencia, inseguridad y saqueos a las arcas públicas no han disminuido, por el contrario, en la actualidad parecen incontrolables.

Esta realidad debe preocupar y ocupar al Poder Legislativo federal y a los de los estados: las y los legisladores tienen la obligación de analizar constantemente las circunstancias que imperan, durante el tiempo que les corresponde atender la alta función de optimizar las leyes. No es posible que ante una crisis como la que estamos viviendo simplemente cerremos los ojos y nos conformemos con la regulación que actualmente existe, sin ir más allá en el imperativo de castigar a los culpables de lesionar con estas graves conductas a la sociedad. Puede ser duro para algunos, pero ésa es, lamentablemente, nuestra realidad.

Una obligación imperante con nuestro país es, sin duda alguna, el combate a la corrupción, que en los últimos sexenios se ha convertido en un cáncer que corroe en gran medida a nuestras instituciones y que, hoy, cuando el pueblo mexicano ha optado por una verdadera y profunda transformación en la manera de hacer política, de ejercer el poder público, es que el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República plantea reformas encaminadas a fortalecer nuestro marco jurídico, para aportar herramientas legales efectivas que abonen a erradicar este mal.

Si bien la creación del Sistema Nacional Anticorrupción tuvo como finalidad coordinar acciones en todos los niveles de gobierno para que las autoridades

competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción[1], aún falta un largo camino para erradicar el enriquecimiento ilegal de funcionarios públicos a costa del dinero del pueblo de México.

De acuerdo con Carlos Alejandro Álvarez Flores, "pueden distinguirse cuatro elementos que caracterizan la corrupción: 1) toda acción corrupta consiste en la transgresión de una norma; 2) se realiza para la obtención de un beneficio privado; 3) surge dentro del ejercicio de una función asignada, y 4) el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento" [2].

Por ello, es necesario que en el ámbito sancionatorio penal se concatenen acciones legislativas para consolidar el marco ya existente en el Código Penal, en el cual ya se ha incorporado, a partir de julio del 2016, un Capítulo Décimo relativo a los "Delitos por hechos de corrupción", mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción.

Esto constituye un avance, sin embargo, tales conductas han cobrado gran trascendencia en perjuicio de la sociedad, mermando la capacidad del Estado mexicano para afrontar sus responsabilidades nacionales y propiciando, en no pocas ocasiones, daños graves a la vida y patrimonio de las personas, como en el caso de los edificios que se vinieron abajo en el sismo de septiembre de 2017, precisamente porque las obras fueron autorizadas y realizadas sin cumplir con las reglas para su construcción.

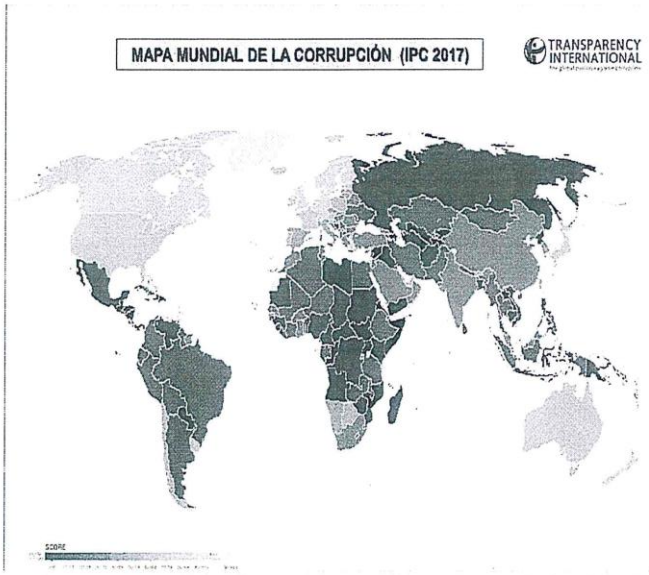
Según Transparencia Mexicana[3], en el *Índice de Percepción de la Corrupción 2017*, la calificación de México empeoró un punto, pasando de 30 a 29, en una escala que

---

[1] Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsna.htm
[2] Vizcaíno Zamora, Álvaro (coordinador). *Combate a la corrupción*, México: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2011.
[3] Transparencia Mexicana. "Cae de nuevo México en Índice Global de Corrupción: Transparencia Mexicana", 21 de febrero de 2018. Consultado en: https://www.tm.org.mx/ipc2017/#no-link el 23 de septiembre de 2018.

va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100, el mejor en la materia.

Conforme a los datos que ofrece esa organización no gubernamental, esto ubica a nuestro país en la posición número 135, de 180 naciones evaluadas en materia anticorrupción[4]. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina y Colombia, y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es, además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G20, y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Por lo que hace al robo de combustible, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 12 de enero de 2016. A partir de esta legislación, se establecieron importantes penalidades para delitos en la materia, como la sustracción y el aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de

[4] Transparency International. *Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International*. Consultado en: https://bit.ly/2GghFkk el 23 de septiembre de 2018.

ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Debido a posteriores reformas publicadas en el *DOF*, en mayo del presente año, tales conductas son sancionadas en la referida ley del ámbito federal con penas que pueden ser de 10, 12, 17 y hasta 30 años, es decir, se ha considerado una gravedad especial para este tipo de delitos y, dada su naturaleza y forma de comisión, son considerados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, según se desprende del artículo 3º de este ordenamiento.

No obstante, el robo de hidrocarburos ha tenido un aumento considerable en nuestro país, de tal forma que no sólo se han visto mermadas la economía y la operación de Pemex, sino que se ha puesto en grave riesgo la vida y seguridad de familias y comunidades enteras.

De acuerdo con la información difundida públicamente[5], Pemex señala que entre 2012 y el primer trimestre de 2017 se extrajeron 12'487,000 barriles de gasolinas de tomas clandestinas. En el mismo periodo, se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) 20,868 denuncias por el robo de combustibles, siendo 2015 el año que concentró el mayor número, con 5,261 denuncias, y 2012 el del menor número, con 1,874 denuncias. De hecho, 2017 terminó con la cifra récord de 10,363 perforaciones ilegales en todo el país[6]. El costo de reparar los equipos dañados por tomas clandestinas es alto: entre 2010 y 2016, estos gastos ascendieron a $4,234'000,000 (cuatro mil doscientos treinta y cuatro millones de pesos).

---

[5] Noticieros Televisa. "Pemex pide a legisladores endurecer penas por robo de combustible", 31 de agosto de 2017. Consultado en: https://bit.ly/2xHlKq0 el 23 de septiembre de 2018.

[6] Aroche Aguilar, Ernesto. "Con EPN, el registro de tomas clandestinas en ductos de Pemex supera por ocho veces al de Calderón", en Animal Político, sección Nacional, 7 de febrero de 2018. Consultado en: https://bit.ly/2Dt8w7B el 23 de septiembre de 2018.

En ese contexto, consideramos que en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos aún existen diversos delitos cuya comisión es de suma gravedad y ameritan, en consecuencia, incorporarse al catálogo de ilícitos en los que es posible que el juzgador dicte la prisión preventiva oficiosa.

Son de todos conocidas las terribles consecuencias que ha provocado el grave delito conocido como "huachicoleo", no sólo para el patrimonio de la nación, sino que ha generado condiciones mayúsculas de inseguridad y violencia en las regiones en donde se focaliza.

En el tema relativo a los delitos electorales, hemos de advertir, en principio, que el proceso de democratización que vive nuestro país ha implicado una lucha incansable de la sociedad y de líderes auténticos de nuestro pueblo, lo que ha desembocado precisamente en que se haya modificado radicalmente el mapa político mexicano, y que nos encontremos ahora ante una verdadera transformación nacional.

No dejamos de admitir que se han hecho grandes esfuerzos en aras de consolidar nuestro sistema democrático: de ello dan cuenta diversas reformas constitucionales que se han alcanzado desde el año 1997[7] hasta nuestros días. Sin embargo, lamentablemente, persiste el empeño de actores políticos por realizar prácticas que van en contra de esta vocación democrática, lo cual atenta contra la libre voluntad popular ciudadana expresada en las urnas, afectando gravemente a las instituciones de nuestro país y poniendo en riesgo la estabilidad social de las comunidades.

De acuerdo con el *Informe de Actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales*[8] (FEPADE), correspondiente a junio de 2008, los tres delitos más denunciados durante ese mes fueron: 1) Alterar el Registro Federal

[7] Monreal Ávila, Ricardo. *Desafíos. El Senado en la Cuarta Transformación*, México: agosto de 2018.
[8] *Informe de Actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales*, México: junio de 2018.

de Electores, 2) Realizar algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado y 3) Apoderarse, destruir, alterar, poseer, vender o suministrar de manera ilegal, documentos públicos electorales; y de enero a junio del presente año, la FEPADE abrió 726 carpetas de investigación, y los agentes del Ministerio Público de la Federación determinaron un total de 2,851 expedientes.

Algunos casos relevantes involucran a servidores públicos[9]:

- Se determinó el ejercicio de la acción penal contra un exgobernador de Aguascalientes, por transportarse el día de la jornada electoral en un autobús con el logotipo de un partido político.
- Se ejerció acción penal contra un exgobernador de Chihuahua, por la utilización ilícita de recursos públicos relacionados con descuentos a servidores públicos, mismos que eran destinados a un partido político.
- Se ejerció acción contra un exgobernador de Veracruz, por obstaculización de actividades del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al negar los recursos económicos para su operación.
- Por primera ocasión, se ejerció acción penal contra un ministro de culto religioso de Chiautla, Estado de México, por presionar el sentido del voto en el desarrollo de actos propios de su ministerio.
- Se ejerció acción penal y se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos en el estado de Veracruz, por destinar de manera ilegal servicios que se encontraban bajo su responsabilidad en apoyo a un partido político y por condicionar programas sociales.
- A cuatro de ellos se les dictó auto de formal prisión, entre ellos dos exsecretarios del estado, dos expresidentes municipales y una regidora en funciones.
- Se ejerció acción penal y se obtuvieron cuatro órdenes de aprehensión contra una presidenta municipal en funciones, un ex oficial del Registro Civil, un exregidor y un ex funcionario municipal en el estado de Chiapas, por gestionar y participar en la expedición ilícita de credenciales de elector a diversos ciudadanos guatemaltecos.
- Se ejerció acción penal y se obtuvo auto de formal prisión en contra de la ex Consejera Presidenta y cuatro ex consejeros electorales del Instituto de Elecciones

[9] Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. *5º Informe de Labores 2016-2017*

y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, por la alteración del listado de electores chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de la fórmula de Diputado Migrante, al usurpar la identidad de ciudadanos.

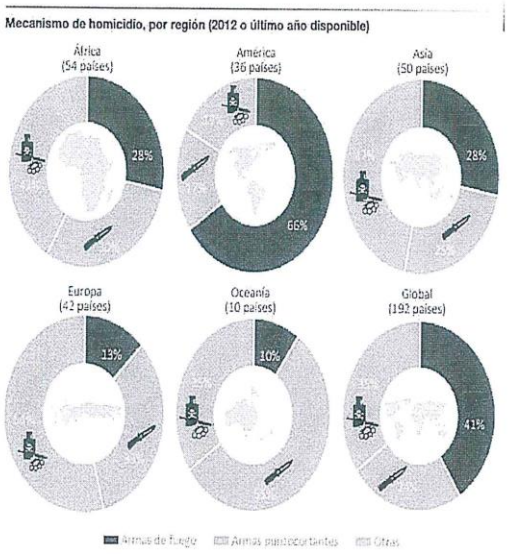
- El 30 de marzo de 2017, la FEPADE realizó una diligencia de cateo, previa autorización del juez de control con jurisdicción en el estado de Coahuila, con apoyo de policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, en el municipio de Torreón, estado de Coahuila de Zaragoza, donde se aseguraron diversos artículos que presuntamente serían utilizados para apoyo del entonces candidato a gobernador del PRI.
- Se obtuvo vinculación a proceso contra seis servidores públicos de la delegación Coyoacán, por su probable participación en la alteración al Registro Federal de Electores, toda vez que los imputados proporcionaron ante la autoridad electoral un domicilio que no les correspondía, para obtener una credencial para votar con fotografía.

No es posible seguir permitiendo ilícitos en materia electoral; cada vez los procesos comiciales son más competidos y el Estado mexicano debe garantizar plenamente el desarrollo de éstos en condiciones de auténtica democracia y evitar que se trastoque ilegalmente el voto ciudadano, así como a las instituciones electorales y a las de la administración pública, en beneficio de partidos y candidatos los cuales, aun sin gozar de la mayoría de las preferencias, se valen de prácticas ilegales para conseguir su fin personal.

En cuanto a los delitos que involucran el uso de armas de fuego y explosivos, tenemos que, de acuerdo con el *Estudio Mundial sobre el Homicidio*, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en América Latina predomina el uso de armas de fuego para cometer homicidios.[10] Refiere tal estudio que "las armas de fuego son las que se usan más, dado su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 10 homicidios a nivel global."

[10] Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Estudio mundial sobre el homicidio 2013. Resumen ejecutivo*, Organización de Naciones Unidas. Consultado en: https://bit.ly/1JWCSKQ el 23 de septiembre de 2018.

ESTUDIO MUNDIAL



Por su parte, el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por México el 25 de septiembre de 2013, insta a todos los estados a aplicar medidas nacionales eficaces para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito y el comercio no regulado de armas convencionales, en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales.

En nuestro país, en el transcurso de la última década, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios cometidos. Es una realidad que los grupos delictivos emplean este tipo de armas para asolar comunidades y regiones, asesinando, secuestrando o asaltando, sin que las corporaciones policiacas tengan la capacidad para repeler tales agresiones, dada las características superiores del armamento de aquéllos, el cual, se ha constatado, es de alto poder: granadas, fusiles, ametralladoras, entre otros.

La capacidad del Estado mexicano se ha visto significativamente mermada para combatir este tipo de ilícitos, pues si bien los operativos son cada vez más frecuentes, no tienen la eficacia que deberían, lo que ocasiona que las redes de tráfico ilegal de armas operen prácticamente en la impunidad, y se constituyan en peligrosas organizaciones delincuenciales, altamente estructuradas y dotadas de un buen número de armas, como las de las mafias de narcotraficantes.

Así, hemos de señalar, es necesario robustecer los mecanismos de control de armamento, mediante el endurecimiento de las leyes que sancionan los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, como la legislación federal que se plantea reformar mediante la presente iniciativa.

Es revelador lo señalado por José de Jesús González Rodríguez:

> Las consecuencias en violencia y en costos humanos del contrabando de armamento hacia nuestro país pueden apreciarse de manera cotidiana. Aunque existan discrepancias en las cifras de personas asesinadas o lesionadas por armas de fuego en México, prevalece la percepción de que el ingreso de ese armamento ha sido determinante para explicar tales decesos y para comprender la espiral de violencia en que se ha visto inmerso nuestro país en los últimos años[11].

En ese contexto, consideramos que es imprescindible generar propuestas legislativas encaminadas a sancionar severamente las conductas delictivas que hemos reseñado en el presente documento, con la finalidad de ponerlas a la consideración de las comisiones especializadas y de personas expertas en la materia.

No podemos pasar por alto la gran afectación que estos delitos provocan en la sociedad: alteran la paz pública y deterioran gravemente el patrimonio de la población. A pesar de que no siempre lo más deseable es el impulso de la medida de prisión, las circunstancias de emergencia nacional nos llevan a plantearlo en el

---

[11] González Rodríguez, José de Jesús. *Tráfico de armas. Entorno, propuestas legislativas y opinión pública*, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, Documento de Trabajo núm. 183, diciembre de 2014. Consultado en: https://bit.ly/2O6zm9T el 23 de septiembre de 2018.

terreno legislativo, independientemente del apoyo decidido que se debe dar a las políticas públicas de prevención y combate del delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSIGUIENTES; ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ACTUAL PÁRRAFO SÉPTIMO, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 92 A LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.

Artículo Primero. Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsiguientes; así como la fracción XII del actual párrafo séptimo; al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167…

…

…

…

…

…

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa, diversos a los que se refiere el párrafo anterior.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

I a XI...

XII. Hechos de corrupción, previstos en los artículos 214, fracciones III a VI; 215, fracciones VI a IX, XIV, XV y XVI; 217, 219, 220, en relación con el último párrafo; 221, 222, en relación con el párrafo décimo primero; 223, en relación con los párrafos séptimo y octavo y 224 en relación con el párrafo séptimo.

...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.-...

Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra. **Además de los previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los delitos señalados en los artículos 10, incisos a) y b); 11 y 12 de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.**

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. **Los delitos señalados en los artículos 11, fracciones II y III; 14 y 15 de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.**

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 92.- Los delitos señalados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis fracción II, 84 y 86 fracción II, párrafos segundo y tercero, de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.

TRANSITORIOS

Único: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a 27 de septiembre de 2018

Sen. Cruz Pérez Cuellar

Sen. Julio Ramón Menchaca Salazar

Blanca Piña

13

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Pérez Cuéllar. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Senadora Lucía Trasviña, sonido en su escaño, por favor.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: (Desde su escaño) Solicito se turne a la Comisión de Seguridad Pública esta iniciativa también.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se concede el turno también a la Comisión de Seguridad Pública.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armas réplica.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes a mis compañeras Senadoras y a mis compañeros Senadores.

"Hay un nuevo y creciente consenso en que la proliferación de las armas de cualquier tipo, sean armas de destrucción masiva o armas pequeñas, inherentemente constituye una amenaza a la paz". Esto lo dijo Kofi Annan.

Y qué razón tenía cuando refería cualquier tipo de arma, porque hoy nos vamos a referir a las armas réplica, a las armas que, sin ser armas de fuego, simulan ser armas que finalmente serían letales.

En la mayoría de los foros de discusión se está tocando este asunto de las armas réplica, porque están siendo utilizadas por la delincuencia para generar la misma sensación de amenaza a la vida y a la integridad física, al igual que las armas de fuego.

En el contexto internacional estas armas réplica están teniendo reacciones muy importantes; por ejemplo, Australia ha prohibido la importación de armas réplica que no tengan permisos especiales y registro.

El comandante de la fuerza fronteriza australiana aseguró que las armas réplica representan un riesgo considerable por la dificultad de distinguirlas de las reales.

El fiscal general de Nueva York, declaró que fueron cometidos cientos de delitos con armas réplica. La ley de esta ciudad, Nueva York, prohíbe la venta de armas réplica o de juguete en color negro, azul o gris que pueda simular un arma letal.

Canadá por su parte, ha prohibido la fabricación e importación de arma réplica.

Boston tiene prohibido el uso de arma réplica en espacios públicos.

Y ahora tenemos la amenaza también de que pueden ser realizadas mediante manufactura aditiva, es decir, con la impresión 3D.

En el contexto nacional no tenemos registro de las dependencias federales, no se han llevado a cabo registro de este uso de las armas réplica; sin embargo, está aconteciendo a diario, los asaltos se cometen, de cada 10, cuando menos 5 con armas réplica.

En los estados de Nuevo León, Sonora, el Estado de México, Jalisco y la propia Ciudad de México, el Código Penal habla de la equiparación para efectos de robo agravado del uso de armas réplica.

Sin embargo, y ahí está en sus pantallas, en los documentos que se agregan para consulta, ustedes pueden ver, por ejemplo, que en 28 casos de robo agravado, 28 casos que tomamos en un análisis rápido, 41 personas detenidas, 29 quedaron en libertad.

¿Por qué conceptos? Porque los jueces dijeron, como se amagó a la víctima con un arma réplica, no se considera arma de fuego y, por lo tanto, no hay lugar a prisión preventiva.

No se considera medio violento el arma de fuego, no se considera como violencia moral equiparada, no se venció la resistencia de la víctima ya que era un arma réplica.

Estos son algunos de los conceptos por los que esas personas quedaron en libertad.

Hoy estamos proponiendo y estamos presentando una iniciativa.

Voy a tomar un poco de mayor tiempo del acordado, conforme el reglamento, señor Presidente, para poder exponer lo que sigue.

Lo que estamos proponiendo nosotros es reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

¿Por qué? Porque si hacemos esta sencilla reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales vamos a poder evitar este espacio de impunidad, me refiero al artículo 167.

Hoy este artículo dice: “El juez de control ordenará la prisión preventiva oficiosa cuando se trate de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos”.

Sin embargo, con los criterios de los juzgadores, estas armas réplica no son consideradas armas y, por lo tanto, se decreta la libertad.

La adhesión señalaría: “Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivo y funcionales o no y que sirvan para amagar, intimidar a la víctima”.

Y yo les pregunto, Senadoras y Senadores, ¿si podríamos distinguir en un asalto alguna de estas armas?

Estas son réplica, no se asusten.

Estas son las armas réplica, son las que se utilizan en los asaltos, y le voy a mostrar al Presidente y a la Mesa.

Estas armas las pueden conseguir con 2 mil pesos. Estas cuestan 2 mil, esta cuesta mil pesos. Las voy a pasar para que las vean.

Por eso considero muy importante que podamos aprobar y podamos discutir esta iniciativa, porque con estas se están cometiendo, y cuando cometen el asalto con estas armas no decretan la prisión preventiva, dado que no eran reales y no se había amagado la resistencia de la víctima.

Yo quiero ver a una víctima, cualquiera de nosotros, que ofrezcamos resistencia ante la exhibición de estas armas…

PRESIDENCIA DE LA SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Mancera, perdón.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Hemos terminado.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No, no, no. No lo estoy cortando, lo que pasa es que el Senador Jorge Carlos Ramírez, quiere hacerle una pregunta.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Sí, con mucho gusto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: ¿Le pueden dar sonido al escaño donde está el Senador Ramírez, por favor?

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: (Desde su escaño) Gracias.

Preguntarle al Senador Mancera, si no considera que con la redacción propuesta, podemos poner al delincuente en la situación de poder decir en cualquier momento que se trataba de un arma réplica.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Por el contrario. Precisamente lo que estamos buscando con esta redacción, para los efectos de este artículo, es decir, de que se decrete la prisión preventiva oficiosa.

“Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos en los que se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego”.

Es decir, se equipara al medio comisivo como si fuera un arma real. Eso es lo que estamos buscando, precisamente.

Hoy, los jueces determinan cuándo es un arma, o cuándo se vence la resistencia, distinguido Senador.

Eso es lo que buscaríamos.

Muchas gracias, señora Presidenta.

Muchas gracias.

Iniciativa

Ciudad de México a 17 de octubre de 2018



SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE.

El que suscribe **MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA,** Senador de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE ARMAS Y ARMAS RÉPLICA, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las réplicas de las armas de fuego, también llamadas "armas réplica", son objetos no letales que en principio simulan el color, la forma, la textura y el material de un arma de fuego. Se les da este nombre específico en la mayoría de los foros de discusión ya que son utilizadas por la delincuencia para cometer robos, asaltos y en general para amagar a las víctimas.

Con esta iniciativa se busca reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar el uso de "armas réplica" en la comisión de delitos, así como de las armas no funcionales. Por lo que toca a los modelos que simulan armas reales por su apariencia, son usadas para generar la misma sensación de amenaza a la vida y a la integridad física igual que con la utilización de un arma de fuego.

A este respecto, se propone la pena por la utilización de este tipo de objetos, dado que se vulnera la libertad y la capacidad de las personas que son amagadas a resistirse al delito bajo la percepción de que es un arma real.

Contexto Internacional.

También países como Australia y los Estados Unidos enfrentan problemas severos por el uso de este tipo de armas, en particular robos a mano armada; por ello, en sus respectivos órganos administrativos y legislativos están discutiendo las estrategias para combatir este problema.

Por ejemplo, **Australia**, prohíbe cualquier importación de armas réplica que no posea un permiso especial previo y sin registro. Así, el 18 de agosto del 2018, un hombre fue arrestado por la importación ilegal de armas réplica. El comandante de la Fuerza Fronteriza Australiana aseguró que las armas réplica representaban un riesgo considerable, por la dificultad de distinguirlas de las armas reales.

En 2015, el Fiscal General de la Ciudad de **Nueva York** declaró que fueron cometidos cientos de delitos mediante el uso de armas réplica. La ley que rige a esa ciudad prohíbe la venta de armas de juguete de color negro, azul o gris que simulen el color de un arma real.

Canadá, Estados Unidos y Australia, también han alertado del uso de estas armas, ya que la dificultad de distinguirlas de las reales ha provocado varios tiroteos y muertes producto de la confusión de las autoridades. En este sentido **Canadá** ha prohibido la fabricación e importación de armas réplica.

Otra ciudad que ha tomado medidas para prohibir el uso de armas réplicas en espacios públicos es **Boston, Estados Unidos**; las autoridades consideran que el riesgo de confusión con un arma real así como que se utilicen para cometer delitos son muy altos.

Además, un riesgo hacia el futuro que se hace cada vez más visible e inminente es el de armas réplica que puedan generarse mediante manufactura aditiva, comúnmente llamado impresión 3-D. La manufactura aditiva es una colección de métodos que mediante el uso de programas de diseño y la asistencia de una impresora/moldeadora, permiten a una persona crear y manufacturar sus propias piezas y objetos sin la necesidad de herramientas o procesos industriales adicionales. Estos métodos permiten a cualquier persona con acceso a una impresora de objetos tridimensionales crear sus propias réplicas de armas sin tener que acceder al mercado de estas.

Contexto Nacional.

No existe información oficial a nivel nacional que permita conocer la magnitud de este fenómeno, las dependencias federales encargadas de los temas de combate a la delincuencia no disponen de datos que distingan este tipo de delito, ni el número de víctimas que son afectadas por estas conductas. Solamente existe información periodística.

Estados como Nuevo León, Sonora, Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México han tomado acciones para combatir este flagelo y sancionan el uso de "armas réplica" en la comisión de delitos de robo calificado o robo con la agravante de la violencia moral equiparada. Siendo estos dos últimos en donde expresamente, en sus respectivos Códigos Penales, se precisa la utilización de "armas réplica".

Contexto en la Ciudad de México (CDMX).

La Ciudad de México no es ajena a este tipo de conductas al igual que a nivel nacional y otros estados de la república, ha avanzado en la identificación del fenómeno y en la necesidad de reforzar la legislación.

A manera de ejemplo, en la revisión de algunos casos el resultado es el siguiente: de **abril a octubre del presente año, encontramos 28 de robo agravado, robo calificado, cometidos con armas réplica por 41 personas en contra de al menos 34 víctimas.**

- **De 41 personas detenidas, 29 quedaron en libertad (71%),** bajo alguno de los siguientes argumentos jurisdiccionales: ***"aún y cuando se haya amagado a las víctimas con una "arma réplica" la misma no es considerada un arma de fuego; no se consideró un medio violento con arma de fuego; no se consideró como violencia moral equiparada ya que no se venció la resistencia de la víctima cuando el imputado la amenazó; que las réplicas no están consideradas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; que al ser de municiones, no fue para causar daño o lesión a las víctimas; fue solo violencia moral al mostrar la réplica del arma y no fue un hecho cometido con violencia con arma; no se utilizó arma de fuego, sino de plástico"***, entre muchos otros criterios más.

  Las **víctimas identificadas que presentaron denuncia por estos delitos ascienden a 24** (aunque se detectan casos que reflejan un número mayor no determinado por 2 casos de robo a los usuarios de una unidad de transporte público, 1 en un café, 1 en una veterinaria, 1 tienda naturista, 1 a una empresa y en 1 tienda de abarrotes).

En todos estos casos se negó la prisión preventiva oficiosa cuando se solicitó y solamente se autorizaron medidas cautelares de presentación mensual o quincenal, no acercarse a la víctima ni al lugar de los hechos o solo una garantía económica menor.

- **De las 12 personas que quedaron en prisión (29%)**, los criterios de los juzgadores se inclinaron por establecer medularmente: ***"el acreditamiento de la violencia moral equiparada por el uso de una pistola aunque no sea arma de fuego; asimismo, concedieron la prisión preventiva oficiosa o calificaron de legal la detención y vincularon a proceso a los detenidos".***

  Las **víctimas identificadas que presentaron denuncia por estos delitos ascienden a 10** (aunque se detectan casos que reflejan un número mayor no determinado por 3 casos de robo a tienda y 1 a los pasajeros de una unidad de transporte público).



La **diferencia de criterios entre los juzgadores en el sentido de que unos consideran a las armas réplica como "violencia moral equiparada" y otros que no resultan ser armas de fuego** es notoria, pues como pudimos observar en la muestra analizada **el 71% de los detenidos quedaron en libertad sin poderles dictar la prisión preventiva oficiosa**; esto constituye un **elemento más para incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales el tema de "armas replica" y evitar así, la libertad de los probables responsables** que las utilizan en la comisión del delito y a su vez, generar la necesidad de mayor atención a las víctimas, que como vemos, son mucho más que las que denuncian.

El Código Penal para el Distrito Federal, en el mismo espíritu que el de Boston y Nueva York en Estados Unidos y Adelaide en Australia, reconoció la gravedad de la amenaza y amago a la víctima que se logra mediante el uso de estos objetos en la comisión de delitos como el robo a la amenaza que se produce cuando una persona es sujeto de este mismo delito con un arma real, ya que la víctima es incapaz de distinguir que lo que está frente a ella no es un objeto letal.

Este reconocimiento dio lugar a la violencia moral equiparada, un agravante que se actualiza de

manera específica cuando se utilizan armas réplica para forzar la voluntad de las personas.

- Esto es, la **violencia** y la intimidación son hechos reprimidos tanto por el **derecho** penal como por el **derecho** civil. Se denomina **violencia** a la coerción grave, irresistible e injusta ejercida sobre una persona para determinarla contra su voluntad, a la realización de un acto jurídico. Asume dos formas: **violencia** física o moral.

- La equiparación deviene del término: **"equiparar**. tr. Comparar [una pers. o cosa] con otra, considerándolas iguales o equivalentes", lo que actualiza una forma de comisión delictiva que requiere elementos específicos.

El artículo, que existe en el Código desde su promulgación en 2002, precisa el tema de la siguiente forma:

> **"ARTÍCULO 225**. Las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán con prisión de dos a seis años, cuando el robo se cometa:
>
> I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado; o
>
> II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos.
>
> **Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido".**

La tesis que se cita a continuación refuerza el argumento de que la violencia que se ejerce a través de la amenaza con un arma réplica, es decir, con un objeto que simule un arma real, es una forma específica de comisión de un delito que puede equipararse a la violencia moral.

> **"ROBO CALIFICADO. LA VIOLENCIA MORAL Y LA EQUIPARADA CONSTITUYEN DOS CALIFICATIVAS DIVERSAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).**
>
> El precepto citado prevé dos tipos de violencia moral en la comisión del delito de robo: una genérica contenida en su fracción I, en la que la amenaza o el amago no exige algún medio específico de comisión; y otra equiparada, referida en el último párrafo, la que es especial en relación con el primer caso, pues requiere como medio comisivo, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido. Así, cuando en la ejecución de dicho ilícito se emplee un objeto de los referidos en la segunda hipótesis (violencia moral equiparada), en atención al principio de especialidad establecido en el artículo 13, fracción I, del Código Penal para la Ciudad de México, que expresamente rechaza la aplicabilidad genérica cuando existe una disposición especial, debe excluirse la aplicación de la violencia moral; de lo contrario, se transgrede el derecho de exacta aplicación de la ley en materia penal, previsto en

> el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, **si del evento fáctico se advierte que se actualizó la agravante de violencia moral equiparada prevista en el último párrafo del numeral 225 del Código Penal para la Ciudad de México**, y no obstante ello, la representación social formula su acusación en términos de la fracción I -violencia moral genérica-, entonces, en el supuesto de que la autoridad judicial modifique la deficiencia ministerial, no sólo se estaría supliendo la deficiencia referida, sino que también se aplicaría de manera inexacta la ley penal, **toda vez que la violencia moral equiparada implicaría una circunstancia modificativa agravante diversa a la violencia moral genérica**".

El gran impacto que representa la utilización de las armas réplica, en donde la victima sufre violencia moral equiparada, cuyo amago la intimida a grado tal que no le permite distinguir si se trata de una arma real o no, constituyen elementos suficientes para que en términos de la Legislación Penal Federal, el Juez de control, en el ámbito de su respectiva competencia, ordene la medida cautelar consistente en la **prisión preventiva oficiosa**, por considerar dicha utilización de armas réplica, como una agravante diversa a la violencia moral.

Aunado a lo anterior, el **Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco**, en su artículo 236 señala:

> **"Artículo 236.** El delito de robo se considera calificado, cuando:
>
> ...
>
> VII. Los responsables lleven armas, sin que en el caso hagan uso de ellas, aun cuando las mismas no funcionen o estén descargadas o aseguradas, **o cuando utilicen objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas**;".

Siendo este Código junto con el de la Ciudad de México, los únicos que contemplan el uso de "armas réplica".

En ese sentido, es necesario que se considere de la misma manera que a las "armas réplica" a las armas reales descargadas o no funcionales.

Por lo anterior expuesto, se considera que los elementos empíricos citados completan el estudio de racionalidad que establece la necesidad de regular de manera adecuada y contundente este tipo de actos; asimismo, se considera que los elementos jurídicos en términos de la Legislación actual y de la doctrina judicial aplicable, sustentan la intención y la obligación de proteger a la ciudadanía de este flagelo que se encuentra en los niveles más altos de atención inmediata, con base en lo siguiente:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
Texto Vigente	**Texto Propuesto**
Artículo 167. Causas de procedencia ...	Artículo 167. Causas de procedencia ...

...	...
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	
	Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.
...	...
...	...
...	...
...	...

Por ello, a continuación sometemos a consideración de ésta H. Cámara de Senadores la siguiente propuesta de modificación:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO: SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Y SE RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN MATERIA DE ARMAS Y ARMAS RÉPLICA.

Artículo 167. Causas de Procedencia

...
...
...

Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios

violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

...
...
...
...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación a que alude el presente decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de su entrada en vigor.

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ. SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES.

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO. SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño del Senador Añorve Baños.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Para sumarnos, si me lo permite el Senador Miguel Ángel Mancera, a su iniciativa, a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Rementería del Puerto, por favor.

El Senador Julen Rementería del Puerto: (Desde su escaño) Por su conducto, ¿le pude preguntar al Senador Mancera, a ver si nos permite sumarnos como grupo parlamentario del PAN, a la propuesta que ha hecho?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: OK.

La Senadora Murguía, lo mismo ¿verdad?

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Rocha.

El Senador Rubén Rocha Moya: (Desde su escaño) Para adherirme a la iniciativa, si lo permite el Senador Mancera.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El grupo parlamentario de Morena y el grupo parlamentario del PT.

Senador Mancera, le hacemos la consulta, si acepta la adhesión a su iniciativa.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Claro que sí, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El Senador Mancera ha aceptado, por lo que le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que recabe las firmas de los adherentes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño de la Senadora Kenia López Rabadán.

La Senadora Kenia López Rabadán: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Solicitarle, de la manera más atenta, se pudiera dar turno a la Comisión de Derechos Humanos, para opinión y dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pedimos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que para dicha iniciativa, se ha ampliado el turno para opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE ADICIONA UN PÁRRAFO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LAS VÍAS FERROVIARIAS Y VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN EN LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Buenas tardes, compañeros, compañeras. Gracias, señor Presidente.

Quiero llamar su atención, y he pedido que me apoyen con los elementos tecnológicos de uso en el Senado de la República, con las pantallas, y en las pantallas de ustedes también van a encontrar una gráfica a lo que nos vamos a referir, precisamente va de la mano con la iniciativa que ha presentado el Senador Alejandro González Yáñez.

El día de ayer, con la presencia del Senador Ricardo Monreal, con la presencia del Senador Dante Delgado, de la Senadora Sasil, es decir, de todos y cada uno de los integrantes, del Senador Damián Zepeda, y de todos y cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios, escuchamos la preocupación fundada de un clima de impunidad que está generando el incremento multiplicado del robo al transporte ferroviario. Esto no es un tema aislado.

Yo les quiero decir que en esa gráfica que está en sus pantallas y que se refiere a delitos contra transportistas, ustedes van a ver cómo a partir de estas implementaciones a las que hemos aludido ya, que han generado la puerta giratoria, se ha incrementado por mes de 400 a más de mil delitos de esta naturaleza. Y esto es importante porque entre más de estos delitos se cometan, más caro le va a costar a la gente todo lo que tiene que ver con la canasta básica, todo lo que se transporta en las carreteras y se transporta en los ferrocarriles. Por eso es que estamos proponiendo que se atienda esta materia en específico.

Les quiero decir que solamente en cuatro estados, entre ellos Puebla, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, se han cometido, estamos hablando de los primeros dos trimestres del año, más de 381 delitos de esta naturaleza. Algo tenemos que hacer.

Lo que estamos proponiendo nosotros es primero modificar, adicionar en la Ley de Seguridad Nacional, porque miren aquí existe el proyecto de hacer el Tren Maya, pero hoy la Ley de Seguridad Nacional no considera el ataque a los ferrocarriles como de seguridad nacional, como sí lo considera respecto de los aviones y respecto de los barcos, pero no de los trenes, entonces, lo primero es que debiéramos de decir: “oye, cualquier cosa que tenga que ver con nuestros ferrocarriles es un tema de seguridad nacional”, que me parece que eso es importante.

Y segundo. Sumándonos a la propuesta que ya había hecho el Senador Alejandro González Yáñez, él toca la parte constitucional, pero podemos modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir los robos que se refieren precisamente a las fracciones XVI y XVII del artículo 381 del Código Penal.

Perdonen que llame la atención de mis compañeros de Morena, con el Coordinador Ricardo Monreal, pero estamos hablando del tren, ¿eh? Conste, ahí está.

Fíjense lo que dice aquí:

“Además de la pena que corresponda, se aplicarán las penas previstas en este artículo cuando se cometa en caminos o carreteras, o cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes, equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que transporten”.

Ahí está, es una reforma muy puntual, me parece que le haremos mucho bien a todos los estados en donde está sucediendo esto y, por supuesto, que le vamos a hacer mucho bien también a la gente para que no suban de precio la canasta básica, porque muchos de estos productos se transportan en los trenes, en las carreteras y hoy están padeciendo.

Ahí está la gráfica, la que ustedes ven en color naranja son robo con violencia, de 400 a mil delitos al mes.

Nada más es lo que ha pasado.

Muchas gracias, señor Presidente.

Es cuanto.

Iniciativa

25 OCT 2018 Se turnó a las comisiones unidas de justicia y de estudios legislativos

PRD SENADO LXIV

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA.

PRESENTE

El que suscribe **MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA**, Senador de la República,con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de este Pleno **El Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal; se añade una fracción al Artículo 167 del Códdigo Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un párrafo en materia de Delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de comunicación en la Ley de Seguridad Nacional y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en la Ley General de Vías de Comunicación:**

Lo anterio, con fundamento en el siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I CONTEXTO

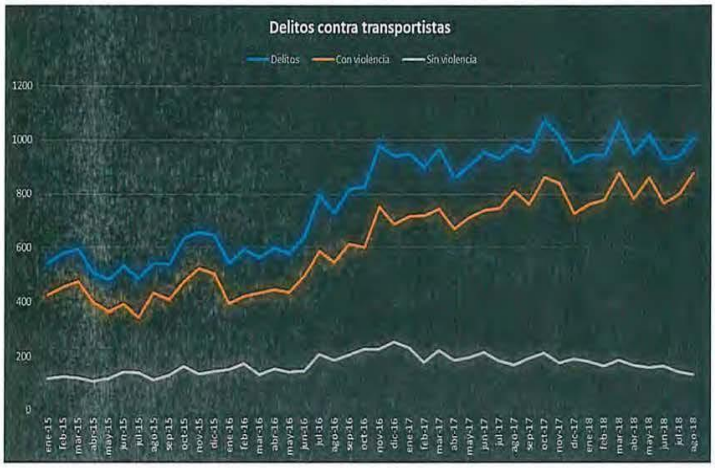
Las vías de comunicación son fundamentales en la estabilidad y desarrollo de las sociedades modernas. Estas vías permiten el desplazamiento rápido de objetos informáticos y físicos, lo que ha permitido el crecimiento acelerado de las economías y de las comunidades en este siglo. Las vías de comunicación físicas **(VCF)** pueden dividirse en terrestres: aquellas que se encuentran instaladas sobre el suelo no sumergido; acuáticas: aquellas que se establecen en cuerpos de agua aereas: las que se establecen en los distintos niveles de la atmósfera de la tierra.

Las **(VCF)** tradicionalmente han sido objeto de ataques y actividades delictivas debido a la oportunidad que presentan para captar bienes y personas en tránsito. Entre los ejemplos mas clásicos están los piratas, dedicados al robo y pillaje de barcos, los ladrones de paso y los asaltantes de trenes que hemos visto en películas y programas del viejo oeste norteamericano. Por otro lado, los grupos adversos a los estados como por ejemplo: paramlitares y organizaciones de la delincuencia, suelen atacar las **(VCF)**, bloqueándolas o destruyéndolas, con el fin de interrumpir el flujo de transporte necesario, generar incertidumbre y desestabilizar a las comunidades.

En el caso de Mexico, las vías terrestres son especialmente importantes, ya que acumulan el 95 por ciento del fenomeno de transporte del pais. Las vías de comunicación terrestre principales son las carreteras y los ferrocarriles. El nivel de inseguridad en el país ha aumentado en los ultimo 4 años, las actividades de los grupos delictivos se han intensificado y el asalto realizado en las vías generales de comunicación ha mostrado un aumento significativo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, los delitos a trans-

portistas **cometidos con violencia**, tienen una tendencia creciente desde 2015.



Los actos ilícitos cometidos contra las vías ferroviarias también han aumentado, de enero de 2016 a julio de 2018.

Este aumento genera impactos negativos en dos dimensiones:

- Por un lado, genera perdidas economícas millonarias a empresas de transporte fundamentales para el desarrollo del suministro básico del país .
- Por el otro, genera costos sociales en la victimización de las personas que utilizan las **(VCF)** para cualquier fin, en particular actividades de suministro y logística.

Dada la importancia de las vías generales de comunicación **VGC** en el bienestar y el desarrollo de las personas, el asalto a vías generales de comunicación es una actividad considerablemente dañina para la sociedad y por tanto, implica la necesidad de una fuerte intervención estatal que desincentive su realización.

La desincentivación de una conducta particular es posible a través de la imposición de un costo a realizarla. En el caso de los delitos, el costo suele ser una pena privativa de la libertad a la que se le llama pena o castigo, dependiendo de la disciplina académica que se estudie. Para que la pena privativa de la libertad sea efectiva es necesario que la probabilidad subjetiva, es decir, la impresión que tiene la del castigo. Por tanto, es necesaria una acción por parte del Estado para mostrar la vaersión y reproche social a estas conductas ilícitas. Se propone que los delitos cometidos en contra de las **VGC** sean parte del catálogo de delitos graves, por medio del aumento de las penas, de manera que los sujetos que lleven a cabo conductas que actualizan el tipo penal, no sean susceptibles de salir bajo fianza.

PRD
SENADO
LXIV

PROPUESTA DE REFORMA

Se propone reformar la **LEY DE SEGURIDAD NACIONAL**, el **CODIGO NACIONA DE PROCEDIMIENTOS PENALES** y la **LEY GENERAL DE VÍAS DE COMUNICACÍON** de la manera que se expone a continuación:

CUADRO COMPARATIVO

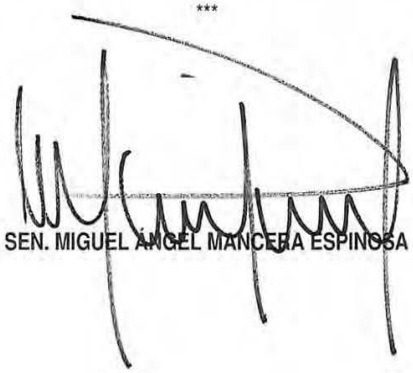
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 5: Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:. I. a X. XI. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia y	Artículo: Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: I. a X. XI. Actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia y contrainteligencia; **XIII. Actos ilícitos realizados contra el transporte ferroviario, y**

LEY GENERAL DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mńimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal. Artículo 534. El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, incurrirá en multa de veinticinco a doscientos pesos.	Artículo 533 Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, **recibiran una pena de dos a nueve anõs de prisión y multa de 200 a 1000 unidades de medida y actialización.** Artículo 534 El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **recibirá una pena de tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 100 unidades de medida y actualización.**

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:	Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: **XII. Los previstos en el artículo 381, fracción XVI y XVII y 371 Párrafo tercero**

PRD
SENADO
LXIV

***



SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

SEN. JUAN MANUEL ZEPEDA HERNÁNDEZ

SEN. ANTONIO GARCÍA CONEJO

SEN. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ

SEN.MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES

ASUNTO:	FECHA:
INIC. SEN MANCERA ART. 167 CÓDIGO NAL. PROCEDIMIENTOS PENALES	25 OCT 2018

NOMBRE	FIRMA
Mauricio Kuri G.	
Joel Padilla Peña	
Eduardo Ramírez el Jaguar de Hueso	
Maribel Villegas	
Gabriela Benavides Cobos	
DANTE DELGADO R	
MIGUELA OSORIO	
Claudia Ruiz Massieu	
Sylvana Beltrones	



ASUNTO:
INIC. SEN MANCERA VÍAS FERROVIARIAS

FECHA:
25 OCT 2018

NOMBRE	FIRMA
Veronica Martinez	
Beatriz Paredes	
America Villarreal Anaya	
Nestora Salgado	
Jose Luis Pech Varguez	
Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes	
Delhi Gina Alicia	

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, al Senador Miguel Ángel Mancera. Se turna su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Ángel Osorio, por favor.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Preguntar al Senador Mancera si nos permite adherirnos, al grupo parlamentario del PRI, a su iniciativa.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Edith Anaya Mota para presentar, a nombre propio y del Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de sanciones por portación ilegal de armas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, a nombre propio y del Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.

La semana pasada el Senador Eruviel Ávila presentó una reforma constitucional que habla sobre la prisión preventiva oficiosa para quien porte armas de uso exclusivo del Ejército.

Pero no solamente en la Constitución se habla sobre la portación de armas de fuego y sobre la prisión preventiva oficiosa.

Él se ofreció, la semana pasada, a presentar en esta semana una serie de reformas que tienen que ver con la regulación transversal de la portación de armas.

Ya había yo trabajado también algo al respecto, incluso cuando fui Diputada Federal de la Legislatura que acaba de terminar. En la LXIII Legislatura, presenté una iniciativa muy similar a ésta.

Y quiero decirles algo, siempre que uno quiere modificar los tipos penales para incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aparecen muchos cabilderos que nos van a decir que no; aparecen muchos cabilderos que nos van a decir que dejemos el Sistema de Justicia Penal como está.

Lo cierto es que los que recorremos las calles todos los días, más los que somos de entidades federativas donde hay mucha extensión territorial, nos toca ver situaciones que son muy difíciles de atender.

La reforma que hoy se presenta tiene que ver con uno de los temas que más nos ha ocupado en la agenda de este Senado, que es el tema de la seguridad pública y tiene que ver con las armas que son de uso exclusivo del Ejército.

Las armas son, quizás, el primer instrumento que el hombre primitivo creó para su supervivencia, y el desarrollo de la carrera armamentista, aún en etapas primitivas de la historia, determinó en mucho la configuración de la modernidad. Basta como ejemplo la conquista de América por Europa.

Hoy día, nuestro país mantiene una neutralidad sobre el acceso a las armas de fuego por parte de los ciudadanos.

A través del artículo 10 constitucional y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tenemos una reglamentación para el acceso a ellas, y sobre todo, la tipificación como delito o para el acopio, el tráfico, la posesión y la portación cuando se incurre en algún carácter ilícito, litis.

Sin embargo, hoy día nos enfrentamos a un fenómeno delictivo que requiere especial atención y tratamiento.

Existen grupos delincuenciales que viajan por poblaciones y caminos de todo el Estado ostentando armas de alto poder, lo hacen como un desafío al estado de derecho. Estas armas no son equiparables a las que posee, por ley, la mayoría de las policías de carácter civil, y que en muchos de los casos hacen inútiles las medidas de protección que traen los policías, como los chalecos antibalas o los cascos.

Es claro que el poder letal de este tipo de armamento está muy por encima de la protección convencional.

Esta es una de las razones por las que las Fuerzas Armadas están hoy en la calle, y por la que vemos un continuo enfrentamiento entre los grupos y las fuerzas del orden. En consecuencia, esto resulta desastroso para todos.

La política de seguridad pública no circunscribe acciones policiales o ministeriales.

Quiero hacer patente que también, desde el Congreso de la Unión, tenemos la responsabilidad para adecuar nuestra legislación a esta realidad ineludible y prevenir estos enfrentamientos.

La portación de armas de alto poder por parte de los grupos delincuenciales ya es un delito sancionado, pero es necesario que esta conducta amerita la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, dado que quien utilice este supuesto, no tiene únicamente la intención de agredir la integridad y el patrimonio de las personas, sino que resulta claro que pretende superar en fuerza a la autoridad legalmente constituida.

La prisión preventiva otorgada por oficio es una medida restrictiva de libertad, pero no es una pena anticipada o una sentencia directa, es una acción que protege, no sólo a la población civil, sino a los operadores judiciales, ministerios públicos y policías, de la actuación de estos grupos.

Dada la porosidad que tienen nuestras fronteras, es muy fácil que pasen armas de fuego, que no está permitido portar. Es por eso que tenemos que tratar varias iniciativas para regular este tema.

Dicta la Corte: “Que el Legislativo debe ejercer su tarea observando criterios de proporcionalidad y excepcionalidad en cuanto establece sanciones penales o medidas de procedimientos”.

Obedeciendo estos principios, esta iniciativa acata ambas, porque se regula el manejo y se regulan de mejor manera los permisos de las armas portadas.

Esta iniciativa también intenta diferenciar entre los tipos de armas para distinguir cuáles ameritan permiso y cuáles ameritan prisión preventiva, también armoniza términos, conceptos y procedimientos de todas las leyes federales que hablan al respecto.

En medida de armas, es bien importante que actuemos, ya que bien lo decía nuestro antecesor, Cicerón: “En medio de las armas las leyes enmudecen”.

Es por eso que es importante mantener firme la voz de la legalidad y seguir construyendo una sociedad más segura y con mejores posibilidades de desarrollo.

México hoy se encuentra en una encrucijada, o mantenemos el imperio de la ley, o sucumbimos ante la dictadura de las armas.

Sería cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

31 OCT 2018 SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

SENADO Grupo Parlamentario LXIV Legislatura PRD

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Los suscritos, Claudia Edith Anaya Mota y Eruviel Ávila Villegas, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente **Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 y 162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la definición de Max Weber, *"El Estado es aquel que tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio dado"*. La autoridad es la única capacitada para dirimir los conflictos que sucedan entre individuos con intereses contrarios, dando sentido a la justicia y los ciudadanos tienen la ineludible obligación de observar el orden que ha determinado la ley.

Así, uno de los aspectos fundamentales para preservar el orden social, es la exacta aplicación de la ley. Para ello, es necesaria una constante actualización y revisión del marco normativo para que éste clasifique e identifique los fenómenos sociales, sobre todo aquellos que son característicos de delitos.

El delito debe ser tipificado en la legislación penal con una adecuada taxonomía, que permita una identificación clara de la conducta y sobre todo que su sanción sea proporcional en justa medida, considerando el mérito y las agravantes, así como la prevención para que no se repita. De igual forma, las sanciones, económicas, penales o restaurativas deben conducir a que el sentenciado no sea un riesgo para la comunidad y tenga el derecho a la reinserción.

De acuerdo con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1] debe *"existir una proporción entre la gravedad del hecho antijurídico y el grado de afectación al bien jurídico protegido."* El Legislador debe observar este principio al momento de fijar las penas correspondientes, por lo que en todo momento deberá

[1] Amparo Directo en Revisión 3798/2015, Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz.

establecerse con claridad cuál es el bien jurídico que se pretende proteger con la norma y, en consecuencia, determinar la aplicación no solo de la pena, sino de los instrumentos procesales correlativos al hecho.

Esta breve introducción tiene como finalidad anteceder a la exposición de los motivos, que sustentan una nueva clasificación y taxonomía jurídica sobre la conducta denominada "Portación de Armas de Fuego".

Para establecer un punto base para la discusión entre la situación actual en la norma y la realidad que se vive en nuestro país, se citan a continuación los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal Federal:

Artículo 160.- **A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas**, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.

Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos.

Artículo 161.- Se necesita licencia especial para portación o venta de las pistolas o revólveres.

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:

...

III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;

...

V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161.

En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas.

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.

De igual forma los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en cuyo texto se lee:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, **a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.**

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Artículo 83.- Al que **sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:**

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble.

En las citas anteriores se describe el tipo penal de portación de armas de fuego, para lo cual se expone el siguiente cuadro comparativo, de acuerdo con la clasificación de la Ley Federal en comento:

CONDUCTA	SANCIÓN	TIPO DE ARMA
"Quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente" Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Art.81.	De 2 a 7 años de prisión. 50 a 200 días de multa.	Art. 9: LFAFE I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos

		similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas. **II.-** Revólveres en calibres no superiores al .38 Especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum. III.- Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.). **Art. 10: LFAFE** **I.-** Pistolas, revólveres y rifles calibre .22, de fuego circular. **II.-** Pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia. **III.-** Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.).

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

		IV.- Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre. **V.-** Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7. 62 mm. y fusiles Garand calibre .30". **VI.-** Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional. **VII.-** Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las Secretarías de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
"Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del	3 meses a 1 año de prisión 1 a 10 días de multa.	**Art. 11 LFAFE** **i).-** Bayonetas, sables y lanzas.

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Art.83 F. I		
Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Art.83 F. II	3 a 10 años y de cincuenta a doscientos días multa	**Art. 11 LFAFE** **a).-** Revólveres calibre .357 Magnum y los superiores a .38 Especial. **b).-** Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores.
Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Art.83 F. III	De 4 a 15 años de Prisión De 100 a 500 días de multa En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.	**Art. 11 LFAFE.** **c).-** Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos. **d).-** Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres. **e).-** Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial. **f).-** Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms.

		de diámetro) para escopeta. **g).-** Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. **h).-** Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento. **j).-** Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento. **k).-** Aeronaves de guerra y su armamento. **l).-** Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito Código Penal Federal. Art. 160	De 3 meses a 3 años de Prisión De 180 a 360 Días de Multa Decomiso	Instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas,
Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160 Código Penal Federal. Art. 162, F. III	De 6 meses a 3 años de prisión De 180 a 360 días multa **Decomiso**	Instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en

		actividades laborales o recreativas, Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas
Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161. Código Penal Federal, Art. 162, F. V	De 6 meses a 3 años de prisión De 180 a 360 días multa Decomiso	Pistolas o revólveres.

Expuesto lo anterior es propio discutir las diferencias y similitudes así como las conductas y sanciones que cada ordenamiento expresa, de forma que se pueda consolidar una reforma integral y armónica.

Del Código Penal Federal.

Resulta importante atender a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 160, que a la letra dice:

> **Artículo 160.-** A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito **instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas**, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.

La definición "*instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas*" no es del todo precisa y puede resultar ambigua.

Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la aplicación de este tipo penal esta determinado en función del uso ilícito dado por el portador, pero no determinado por la naturaleza misma del objeto:

> ***PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL INSTRUMENTO QUE SE PORTE (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO Y MORELOS).***

*En estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los artículos 219 y 245 de los Códigos Penales para los Estados de Querétaro y Morelos, respectivamente, al prever, entre otros, el delito de portación de arma prohibida, contienen los mismos elementos del tipo penal en tanto que ambos sancionan "**a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas**". Así, la descripción típica exige un elemento subjetivo específico consistente en que la conducta se realice "sin un fin lícito"; **de ahí que para determinar cuándo un instrumento sólo puede utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir, a la intención de usarlo para agredir. En ese tenor, se concluye que para verificar la configuración del delito de portación de arma prohibida debe atenderse a los hechos y a las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo, independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del mencionado instrumento**. Lo anterior es así, porque cuando el tipo penal señala que los instrumentos no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se refiere a la forma en que se utilizan y no a la materialidad y al objetivo con que fueron creados, pues independientemente de sus características y de que hayan sido hechos para una actividad laboral o recreativa, pueden portarse con la finalidad de utilizarlos para agredir, por lo que resulta relevante la aplicación que el sujeto activo del delito les dé, lo cual ha de desprenderse de las circunstancias y de los hechos que rodean la conducta desplegada.*[2]

Es evidente que la descripción actual del tipo penal contenida en el artículo 160 antes citada, es por demás subjetiva y ambigua, así como carente de los elementos que claramente ha señalado la Suprema Corte de Justicia en la tesis en supralíneas, en el sentido que para la actualización del delito se deba acreditar "la intención de agredir", para que la simple portación de las armas no sea per se un delito, y garantizar la presunción de inocencia.

De acuerdo con el texto de la fracción I del apartado B del Artículo 20° Constitucional la presunción de inocencia es un derecho de las personas imputadas, por lo que en consecuencia lógica la portación de instrumentos definidos por el párrafo primero

[2] Contradicción de tesis 106/2007-PS.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito (actualmente Primero del mismo circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.—13 de febrero de 2008.—Mayoría de tres votos.—Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Jaime Flores Cruz.
Tesis de jurisprudencia 21/2008.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinte de febrero de dos mil ocho.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 287, Primera Sala, tesis 1a./J. 21/2008; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 286; y véase voto en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 309.

del artículo 160 del Código Penal Federal, solo puede configurarse como delito en el momento mismo de su uso con fines ilícitos, de otra manera el ciudadano que porte dichos instrumentos se deja en la indefensión ante el arbitraje de las autoridades policiales, quienes a su vez pudieran hacerse valer de esta inexactitud para incurrir en conductas contrarias a la aplicación del derecho, puesto que si no radica un uso ilícito de dicho instrumento, su simple portación no puede determinar la intención para su uso indebido en los términos dispuestos por la Suprema Corte. No se pierde de vista lo establecido por el Máximo interprete de nuestra constitución, respecto al concepto de "arma":

> ***ARMA, CONCEPTO DE.***[3] ***Por arma debe entenderse el instrumento fabricado para el ataque o la defensa.***
> *Amparo directo 5013/61. Benito Rodríguez Montañez. 26 de octubre de 1961. Cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón.*
>
> ***ARMAS. EL SIGNIFICADO DE ESTE VOCABLO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 10 Y 19, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDE AL DEFINIDO POR EL DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA COMO INSTRUMENTO, MEDIO O MÁQUINA DESTINADOS A A T ACAR O A DEFENDERSE Y NO EXCLUSIVAMENTE A LAS DE FUEGO.***[4] *Del análisis del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los habitantes del país tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, que no sean de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, así como que la reglamentación detallada de este artículo se dejó al legislador ordinario federal, quien al emitir la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, previó en sus artículos 12 y 13 que son armas prohibidas las señaladas en el Código Penal Federal, y no consideró con tal carácter los utensilios, las herramientas o los instrumentos idóneos para realizar trabajos del campo o de cualquier oficio, arte, profesión o deporte, pero limitó su uso al lugar en que se trabaje o practiquen; sin embargo, estableció en el artículo 160 del citado código diversas penas para cualquier persona que porte sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. Por otra parte, de la exposición de motivos de la reforma al artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no se colige que dentro del vocablo "armas" se haya comprendido solamente a las de fuego, sino que su redacción es genérica, esto es, comprende tanto a éstas como a aquellas que sirvan para*

---

[3] Época: Sexta Época: Registro: 260653; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen LII, Segunda Parte; Materia(s): Penal; Tesis:; Página: 11

[4] 165340. XVII.2o.P.A.36 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, Pág. 2793.

agredir, sin que requieran deflagrar cartuchos; además, el legislador del Estado de Chihuahua tampoco hace referencia en exclusiva a las armas de fuego en el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, pues igualmente se refiere al término genérico "arma", lo que se corrobora con el contenido de la fracción II del artículo 212 del Código Penal del Estado, que prevé penas agravadas cuando el delito de robo se cometa empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. ***Consecuentemente, el significado del vocablo "armas" contenido en los artículos 10, 19, segundo párrafo, de la Constitución Federal y 173 del Código de Procedimientos Penales de la entidad corresponde al definido genéricamente por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española como instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse y no exclusivamente a las de fuego.***

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 224/2009. 12 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Pánfilo Martínez Ruiz.

Con respecto a las tesis expuestas, es claro que la Suprema Corte ha definido el concepto de "arma", en concordancia con el concepto del Diccionario de la Real Academia Española, como ***el instrumento fabricado para el ataque o la defensa***, mencionando que esto ***corresponde no exclusivamente a las de fuego.*** Y que, como ya se señaló, para la actualización del delito descrito en el artículo 160 del Código Penal Federal, es necesario que para su actualización se acredite ***la intención de agredir***. Por lo expuesto, y para efectos de eliminar los elementos subjetivos y posiblemente violatorios del derecho humano a la presunción de inocencia se propone modificar la descripción del referido tipo penal.

Además vale la pena señalar lo que el jurista Ochoa Romero ha expresado sobre la imprecisión del marco de aplicación de esta disposición penal, toda vez que existe la posibilidad de que los instrumentos objeto del fin ilícito puedan tener un uso distinto, generando una inseguridad jurídica a quien, sin el ánimo de causar una afectación hace uso de dichos instrumentos:

[...] la cuestión más debatible respecto a este tipo penal es la que tiene que ver con indicar cuáles son los instrumentos que pueden aparecer como objeto material de la infracción, pues el propio artículo 160, párrafo tercero, indica que las sanciones aplicables por este tipo de delitos se imponen sin perjuicio de lo señalado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En consecuencia, los aludidos instrumentos no son las armas a que se refiere dicha ley federal, sino otras. ¿Cuáles son? En este sentido son imaginables (y por ello imprecisos) ciertos objetos por ejemplo, una manopla, una daga, un verduguillo y otros instrumentos que tienen (o pueden tener) una función lesiva. No obstante, cabe la posibilidad de que tales instrumentos puedan tener un uso distinto, lo que imprimiría una cierta imprecisión en el radio de acción de tipo y, por ello, aporta una buena dosis de inseguridad jurídica. Así,

no existe certeza con respecto a cuáles son los objetos que pueden, portarse, fabricarse, importarse o acopiarse y cuales no.[5]

De igual forma es conveniente hacer notar la inadecuada descripción de las armas de las que se prohíbe su portación, en referencia a las fracciones I, III y V del artículo 162, las cuales de igual forma tienen una interpretación ambigua, en particular el comparativo del artículo 160 y 162 fracciones I y III, que se muestra a continuación:

Art. 160 CPF	Art. 162 Fr. III
Artículo 160.- A quien **porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas,** se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso. Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas. Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos.	**Artículo 162.-** Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso: ... I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o las regale o trafique con ellas; III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160; V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161

Por lo que, sería conveniente la derogación de las fracciones I y III, toda vez que, no necesariamente las armas contenidas en el artículo 160 per se son prohibidas, y la simple portación, importación, fabricación o venta de las mismas, no puede ser objeto de sanción penal, como ya se ha expuesto.

Finalmente, la fracción V del Artículo 162 hace referencia a *revólveres y pistolas,* sin embargo al no especificar su calibre entre otras características como si lo hace la LFAFE en sus artículos 81 y 83, haciendo referencia a los artículos 9, 10 y 11, entonces nuevamente la taxatividad expresada en el Código Penal es ambigua.

[5] Ochoa Romero, R., Manual sobre delitos en particular, temas selectos; Fondo de Cultura Económica, 2018, ISBN 978-607-16-5622-3, pp. 73

Por otra parte, en lo que toca a la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos**, se considera necesario incorporar de manera explícita el decomiso, en atención a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 406 párrafo tercero en cuyo texto se lee:

> **Artículo 406. Sentencia Condenatoria.**
> ....
> La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente.

Por otra parte, ya que existe evidencia de que una ley restrictiva con las armas de fuego reduce el índice de homicidios de una comunidad"[6], la propuesta considera modificar la pena de prisión, de modo que la media aritmética sea mayor a cinco años, para que el beneficio se reduzca. Al respecto, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala lo siguiente:

> ***Código Nacional de Procedimientos Penales.***
> ***Artículo 202. Oportunidad.***
> ...
> ...
> ...
> ***<u>En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos</u>****, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.*

Por lo expuesto se propone la siguiente modificación a los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, así como 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de	**Artículo 160.-** A quien porte, fabrique, importe o acopie **instrumentos fabricados para el ataque o la defensa con la finalidad de agredir**, se le impondrá prisión **de tres a ocho años y de quinientas a mil Unidades**

[6] https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/armas/181-armas-pequenas-y-ligeras-caso-mexico/file

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.	**de Medida y Actualización, así como el decomiso de los mismos.**

Artículo 162.- Se aplicará de ~~seis meses a tres~~ años de prisión ~~o de 180 a 360 días multa y~~ decomiso:	**Artículo 162.** Se aplicará de **tres a ocho años de prisión, además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el** decomiso:
~~I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o las regale o trafique con ellas;~~	Se deroga
II.- Al que ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario;	...
~~III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;~~	Se deroga
IV.- Al que, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hiciere acopio de armas, y	...
~~V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161.~~	Se deroga
En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas.	...
Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas ~~necesarias~~ para el ejercicio de su cargo.	Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas que el ejercicio de su cargo **requiera.**

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 81.- Se sancionará con penas de ~~dos~~ a ~~siete~~ años de prisión y de ~~cincuenta~~ a ~~doscientos~~ días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.	**Artículo 81.** Se sancionará con penas de **tres a ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, **así como el decomiso**, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.	**...**
Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:	**Artículo 83.** ...

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura
PRD

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;	**I.** Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;
II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y	**II.** Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.	**III.** Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.	...
Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble.	...
Artículo 83 Bis.- Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:	**Artículo 83 Bis. ...**
I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y	**I.-** Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, **así como el decomiso,** si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y
II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.	II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso,** si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.	...
Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.	...
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:	**Artículo 83 Ter. ...**
I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;	I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;
II.- Con prisión de ~~uno~~ a siete años y de ~~veinte a cien~~ días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y	**II.** Con prisión de **cuatro** a siete años y **de cien a trescientos** días multa, **así como el decomiso**, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.	**III.** Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:	**Artículo 83 Quat. ...**
I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y	**I.** Con prisión de **dos** a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, **así como el decomiso,** si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y
II. Con prisión de ~~dos a seis~~ años y de ~~veinticinco a cien~~ días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.	**II.** Con prisión de **cuatro a siete años** y de **doscientas a quinientas** días multa, **así como el decomiso**, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:	**Artículo 83 Quintus. ...**
I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.	**I.-** Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.
II.- Con prisión de ~~dos a cinco~~ años y de ~~cien a doscientos~~ días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.	**II.** Con prisión de **tres a ocho** años y de **doscientas a cuatrocientas** días multa**, así como el decomiso,** cuando se trate de más de cinco cargadores.
Artículo 84 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión.	**Artículo 84 Bis.** Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión, **así como el decomiso.**
Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma previa expedición del recibo correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.	**...**
Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.	**Artículo 85.-** Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa, **así como el decomiso,** a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

La presente propuesta también involucra modificaciones a **Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.**

De acuerdo con la definición establecida en la Ley en materia, delincuencia organizada es:

> ***Artículo 2o.***- *Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:*
>
> ...
>
> ***II.*** *Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;*

México esta padeciendo desde hace más de dos décadas, los constantes enfrentamientos entre organizaciones criminales, que buscan controlar territorios de forma violenta. A manera de ejemplo, el 75% de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2017 fueron "ejecuciones" del crimen organizado[7].

En este sentido, la portación de armas, debe ser considerada también dentro de las hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin importar el calibre, dado que resultan igual de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del ejercito.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de enero a septiembre del presente año, se han iniciado 10,531 averiguaciones previas por delitos comprendidos en la LFAFE. En el delito de homicidio doloso con arma de fuego se han levantado 21,383 averiguaciones previas y en su modalidad de culposo con arma de fuego 103, por el delito de lesiones dolosas con arma de fuego se contabilizan 7,721 carpetas de investigación mientras en el rubro de culposas con arma de fuego se tienen 312 carpetas, en cuanto al delito de Robo, sea a casa habitación, vehículos, autopartes, en el transporte público, en la vía pública entre otros se tienen averiguaciones por 528,490 casos, destacando el robo a transeúnte con violencia registrando 33,907 y en el transporte público con violencia en 8,447 casos, muchos de ellos cometidos con arma de fuego.

Estas cifras ejemplifican la importancia de considerar como delito grave a la portación de arma de fuego, para incluirlo en el catálogo de delitos que ameritan la medida cautelar de "prisión preventiva oficiosa" relacionada con la delincuencia organizada.

---

7 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/comete-el-crimen-organizado-75-de-homicidios-en-mexico-en-2017

La Iniciativa se pronuncia por reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2°, párrafo primero, fracción II, adicionando la portación de armas de fuego a efecto de que se otorgue la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa para los integrantes de las organizaciones criminales.

Dado que el artículo 3° de la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada, en su párrafo segundo señala que los delitos descritos en el artículo 2° serán meritorios de la medida cautelar descrita, basta incorporar en el artículo en comento, la portación de arma de fuego en términos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como se propone:

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	
TEXTO ACTUAL	**TEXTO PROPUESTO**
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: ... II.- Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;	**Artículo 2o.-** Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: ... **II.- Acopio, portación y tráfico de armas de fuego, previstos en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.**

Finalmente, la propuesta considera cambios al **Código Nacional de Procedimientos Penales**.

La principal herramienta utilizada por la delincuencia para la comisión de delitos violentos es el arma de fuego. Si bien es cierto que existe una legislación especializada que sanciona las conductas que se relacionan con la ilegal portación de armas de fuego, también lo es que la legislación adjetiva en materia penal no prevé la prisión preventiva oficiosa para este tipo de conductas delictivas.

La portación ilegal de armas de fuego, debe estar prevista como una de las excepciones para la aplicación oficiosa de la medida cautelar, consistente en la prisión preventiva, dada la peligrosidad que implica que una persona este armada sin mediar autorización.

De esta manera la presente iniciativa contiene una propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal de armas de fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa y en consecuencia siga su proceso en detención.

Es importante precisar que la presente iniciativa no afecta en lo absoluto la portación de aquellas armas que se obtienen para actividades que realizan los clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y que conforme a la normatividad vigente, están debidamente registradas en las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional. También queda a salvo la garantía constitucional de contar con armas en el domicilio.

De manera ilustrativa, sirve de referencia la descripción de la regulación del delito de portación ilegal de arma de fuego, que se precisó en la tesis emitida por el Poder Judicial Federal que se cita a continuación:

> *ARMA DE FUEGO, SE INTEGRA EL ILÍCITO DE PORTACIÓN DE, CUANDO SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y SE TIENE FACILIDAD PARA SU DISPOSICIÓN. De acuerdo a las condiciones políticas, sociales y económicas del país, para combatir el pistolerismo se limitó la garantía individual que consagra el artículo 10 de la Carta Magna, en el sentido de sujetar la posesión y portación de armas en el país a los límites exigidos por la paz y tranquilidad de sus habitantes; por ejemplo, se consagró el derecho de los ciudadanos para poseer armas de cierto calibre en su domicilio; asimismo, la historia legislativa muestra que las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tienden a establecer penas rigurosas para los infractores, con la finalidad de desmotivar la comisión de los ilícitos contemplados en dicho ordenamiento, pues según la exposición de motivos existe una seria preocupación de los legisladores, en virtud de que la portación de armas de fuego representa un peligro, tanto real como potencial que atenta contra la seguridad pública, el cual se actualiza y redimensiona al utilizarse las mismas en delitos que revisten especial gravedad que lesionan bienes jurídicos fundamentales, causando alarma e inquietud en la sociedad, aparte de que el índice de criminalidad es una consecuencia de la proliferación de armamento; en atención a tales circunstancias imperantes en el territorio mexicano, animan a reflexionar para calificar cuándo la conducta consistente en llevar consigo un arma de fuego dentro de un automotor tipifica el ilícito de portación y no de posesión. En primer lugar, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no define el significado de los vocablos "portar" y "alcance", por lo que el juzgador, para llegar a una interpretación armónica de la ley en consulta, debe auxiliarse de datos de orden lingüístico (gramatical), lógico, teleológico y sistemático; por ello, no obstante que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define portar como: "(del lat. Portare) Tr. Ant. llevar o traer." y la palabra*

"alcance", proviene del infinitivo "alcanzar" y que es la distancia a que llega el brazo de una persona por su natural disposición, o por el diferente movimiento o postura del cuerpo; interpretando de manera letrista tales acepciones, se llegaría al extremo de considerar que se configura el ilícito de portación de arma de fuego cuando la persona sin realizar mayor esfuerzo que el que le permita el movimiento giratorio de su cuerpo se apodere del arma, postura que se contrapone a la intención del legislador reflejada en la exposición de motivos a las reformas que sufrió la ley de la materia, pues la paz y tranquilidad de sus habitantes resultan potencialmente afectados desde el instante en que un particular lleva consigo un arma a la que tiene facilidad para tomarla dentro del vehículo que transita o se encuentra en la vía pública, toda vez que el delito de portación de arma de fuego es de los llamados de peligro, porque precisamente esa conducta comprende la posibilidad o riesgo de que el sujeto utilice el arma en razón de su cercana disponibilidad, particularidad que no puede quedar condicionada a los diversos movimientos que se tengan que realizar para su apoderamiento, verbigracia, cuando el arma la trae el activo en una mochila debajo del asiento del conductor o cuando se lleva en la cajuela del vehículo, pues si bien es cierto en la primera hipótesis se debe estirar la mano, tomar la mochila y abrirla para tener en la mano el arma, en tanto que en la segunda se debe bajar del vehículo y abrir la cajuela, también lo es que el que tenga que desplegar el sujeto varias maniobras para utilizar el arma en nada favorece a restituir la seguridad y tranquilidad de la colectividad en general, bien jurídico protegido por la norma, si al final de cuentas al estar el arma dentro de su esfera material puede hacer uso de ella cuando lo decida; de ahí que para considerar que se surte la figura jurídica de portación de arma de fuego sin licencia o de las reservadas a las instituciones armadas del país, cuando se asegura alguna de éstas al activo en su vehículo, se debe eliminar el concepto de inmediatez en su utilización y darle a la expresión "portar" un contenido extensivo, esto es, que significa llevar consigo, lo que se traduce en que basta que se tenga facilidad para el apoderamiento del arma, independientemente de la parte del vehículo en que se localice, para que se agote la infracción penal de que se habla, pues el llevar consigo no debe entenderse que la persona la tenga en la cintura o en el bolsillo, sino simplemente que pueda disponer del artefacto en un momento determinado.[8]

Es el caso que el Nuevo Sistema Penal, se desprende que la Constitución Federal permite restringir el derecho de libertad del gobernado, al disponer la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar para asegurar que todo procesado por delito o delitos expresamente citados en las leyes por su gravedad, enfrente el proceso que se le sigue, para conservar la materia de la litis, y/o para evitar un grave

[8] 185822. III.2o.P.82 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, Pág. 1332. -1-

e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de dicho proceso.

Así, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar de carácter personal, la cual tiene como principal finalidad:

a) Asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se requiera su presencia.

b) Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la comunidad en general; y,

c) Evitar la obstaculización del procedimiento o el desarrollo de la investigación.

En ese orden de ideas, debe decirse que en el ámbito internacional, en sentido amplio, se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está, entre otras cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva.

En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar daños a las víctimas y a la sociedad.

De tal suerte que, la libertad de una persona, a título de prisión preventiva oficiosa, puede restringirse cuando se le investigue o procese por un delito considerado como grave, como debe ser la portación ilegal de armas de fuego, dado que por su naturaleza existe peligro de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, peligro de obstaculización del desarrollo del proceso y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la sociedad.

Es el caso que el delito que de portación ilegal de armas de fuego constituye un grave riesgo para la sociedad la cual esta continuamente expuesta a la comisión de este delito el cual se deriva en otros que atentan contra su propiedad, libertad, integridad física y sin duda alguna su propia vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2/97, ha considerado las causas por las cuales se puede ordenar una prisión preventiva siendo estas las siguientes:

• **La sospecha de que el acusado cometió un delito.**

• **El peligro de fuga.** En cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia.

• **Riesgo de comisión de nuevos delitos**. Al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, en relación con el detenido, reiteró que debía tenerse en cuenta la gravedad del delito.

• **Necesidad de investigar y posibilidad de colusión.** Plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial.

• **Riesgo de presión sobre los testigos.** El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación.

• **Preservación del orden público**. En circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado.

• Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento.

De estas conclusiones, es claro que la portación ilegal de armas de fuego genera a la sociedad un grave riesgo de lesión y rompe con la preservación del orden público lo que es suficiente para que se considere este tipo de delitos como de los que merecen prisión preventiva oficiosa.

La propuesta cumple a cabalidad los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad:

-Necesidad.

Los altos indicies de delitos cometidos con arma de fuego, hacen neceasario que se instrumente, desde todos los ámbitos, estrategias de despistolización o desarme de la población. En México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la última década.

-Proporcionalidad.

Para la imposición de la prisión preventiva, es de esencial importancia tener en cuenta el criterio de proporcionalidad, lo que quiere decir que debe analizarse si el

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad, lo cual ocurre dado que como se ha comentado en México se viven situaciones graves de inseguridad en las cuales se involucran el uso de armas y que estas son el instrumento que atemorizan a la población con su mera exposición pública, por lo cual, al ser el medio de comisión de otros delitos, es proporcional que se detenga de manera cautelar, a quienes constantemente atentan contra la paz y la seguridad de la sociedad.

- Razonabilidad.

En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana "impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar".

Es el caso, que la presente iniciativa esta contemplando la reforma a la legislación especializada, para aumentar las penas, en cuanto a las diversas hipótesis de portación ilegal de armas de fuego, por lo cual la prisión oficiosa resultaría una medida proporcional a la posible sanción en caso de resultar culpables.

En este sentido se propone la siguiente reforma:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE	TEXTO PROPUESTA
Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito	Artículo 167. Causas de procedencia ... ...

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.	
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, **portación ilegal de armas de fuego**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.	...
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.	...
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:	Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:
I a la XI...	I a la XI...
	XII. La portación de armas de fuego prevista en los artículos 160 y 162 cuando se relacione con las armas de fuego previstas en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis,

	de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 160 y 162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal; se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; artículo 2 fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Primero.- Se **REFORMAN** los artículos 160 y 162 último párrafo y se **DEROGAN** las fracciones I, III y V del artículo 162 del **Código Penal Federal**, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos **fabricados para el ataque o la defensa con la finalidad de** agredir, se le impondrá prisión de tres a **ocho** años **y de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, así como el** decomiso **de los mismos.**

Artículo 162. Se aplicará de **tres a ocho años de prisión**, **además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el** decomiso:
I. Se deroga
II...
III. Se deroga
IV...
V. Se deroga
...

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar, de acuerdo a las disposiciones de Ley, las armas que requieran para el ejercicio de su cargo.

Segundo.- Se **REFORMAN** los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos**, para quedar como sigue:

Artículo 81. Se sancionará con penas de **tres a ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, **así como el decomiso**, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
...

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura
PRD

Artículo 83. ...

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Bis. ...

I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, **así como el decomiso,** si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y

II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso,** si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Ter. ...

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de **cuatro a siete años** y **de cien a trescientos** días multa, **así como el decomiso**, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quat. ...

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, **así como el decomiso,** si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de **cuatro a siete años** y de **doscientas a quinientas** días multa, **así como el decomiso**, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus. ...

I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

II. Con prisión de **tres a ocho** años y de **doscientas a cuatrocientas** días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión, **así como el decomiso.**
...

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa, **así como el decomiso,** a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Tercero.- Se **REFORMA el artículo** 2, fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-...

...

II.- Acopio, portación y tráfico de armas de fuego, previstos en los artículos 81, 83 (con excepción por lo dispuesto en la fracción I), 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Cuarto.- Se **REFORMA el artículo** 167 párrafo tercero y se adiciona al párrafo sexto, la fracción XII del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, para quedar como sigue:

Artículo 167...

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,

secuestro, trata de personas, **portación ilegal de armas de fuego**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

...

...

...

I a la XI...

XII. La portación de armas de fuego prevista en los artículos 160 y 162 cuando se relacione con las armas de fuego previstas en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

SENADO
Grupo Parlamentario
LXIV Legislatura

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República a los veintinueve días del mes de octubre de 2018.

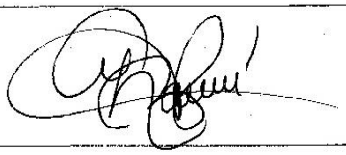
Atentamente,

Claudia Edith Anaya Mota

Eruviel Ávila Villegas

Senadores de la República

ASUNTO:	FECHA:
INIC. SEN. ANAYA MOTA, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	31 OCT 2018

NOMBRE	FIRMA
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez	
María Guadalupe Murguía Gutiérrez	
Verónica N. Camino F.	
Ismael García Cabeza de Vaca.	

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Anaya Mota. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Murguía se suma a esta iniciativa; también la Senadora Indira Rosales, Alejandra Reynoso, Verónica Camino Farjat, Josefina Vázquez Mota y el Senador García Cabeza de Vaca.

Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de tráfico de totoaba.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del grupo parlamentario del PVEM)

La Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros Senadores:

En México tenemos el privilegio de albergar una gran diversidad de mamíferos, de aves, de reptiles y de anfibios. Además de las 37 áreas silvestres que existen en el mundo, tres están en nuestro país, parte de esta riqueza se encuentra en el Golfo de California, conocido también como el acuario del planeta, porque en éste viven más de 800 especies de especies; 580 de aves marinas; y 35 mamíferos marinos. Uno de esos mamíferos marinos se encuentra hoy en grave peligro de extinción, la vaquita marina.

En 1997 se creó el Comité Internacional Para la Recuperación de la Vaquita, el CIRVA, con el objetivo de desarrollar un plan de recuperación de la especie.

Por las últimas dos décadas el CIRVA ha monitoreado y reportado la impactante y constante disminución de vaquitas en la zona.

En 2012, la población de vaquita se había reducido alrededor de 200 ejemplares.

Entre 2011 y 2015 la población de vaquita disminuyó en aproximadamente un 80 por ciento.

Hoy quedan menos de 30 vaquitas y la especie está al borde de la extinción.

El CIRVA pronosticó que de no eliminarse por completo la pesca ilegal de totoaba, la vaquita podría extinguirse muy pronto.

La vaquita marina ha sido una víctima colateral del tráfico clandestino de otras especies habitantes del Golfo de California. La totoaba es captura con fines de tráfico, posesión, transportación, acopio, introducción y extracción del país.

El buche de totoaba es utilizado en la gastronomía de china ya que se le atribuyen propiedades afrodisiacas y curativas.

El buche llegó a cotizarse en casi 150 pesos el kilogramo; sin embargo, existen datos que indican que el kilogramo del mismo puede alcanzar los 60 mil dólares en los mercados negros de China.

Como respuesta a este escenario, la administración anterior puso en marcha la Estrategia Integral de Recuperación de la Vaquita Marina. Dicha estrategia preveía cuatro componentes: la ampliación del polígono de protección, la compensación económica a pescadores, la inspección y vigilancia y la promoción de nuevas artes de pesca, también se acordó la aplicación del programa de atención integral al alto Golfo de California con la participación de ocho dependencias federales con el objetivo de prevenir las actividades pesqueras ilícitas, preservar el ecosistema marino y el área natural protegida, combatir el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción y prevenir la presencia de grupos de la delincuencia organizada.

En atención y seguimiento de estos esfuerzos, en febrero de ese año la Procuraduría General de la República abrió en el Puerto de San Felipe, Baja California, una unidad de atención inmediata con personal ministerial, policial y administrativo para intervenir de forma inmediata en la atención y seguimiento de las investigaciones de los delitos contra el medio ambiente.

Además, con el objeto de promover la investigación de las redes internacionales involucradas en el tráfico de las partes de totoaba, en 2015 y 2017 la Interpol, a solicitud de la Profepa, publicó dos Notificaciones Moradas a la oficina central nacional de México, así como distintos mensajes en los que se detalla el transporte ilegal de maletas con piezas de buches secos de totoaba. A la fecha se encuentra pendiente una publicación de la tercera notificación.

Estos esfuerzos han derivado en la capacitación de más de 3 mil 200 servidores públicos; 228 embarcaciones aseguradas; 52 vehículos asegurados; la recuperación y aseguramiento de más de mil 100 ejemplares o partes de totoaba y la detención de 225 infractores.

A pesar de estos esfuerzos los resultados están lejos de tener el impacto necesario para salvar a la vaquita marina. Uno de los obstáculos más importante para lograrlo ha sido que con la reforma al sistema de justicia penal, las personas que son detenidas llevando a cabo actividades con fines de tráfico, captura, posesión, transportación, acopio, introducción y extracción con buche de totoaba no pueden ser sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ello ha provocado que al poner a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación a los detenidos, estos obtengan su libertad, situación que les permite continuar con actividades ilegales.

Actualmente la fracción IV del artículo 420 del Código de Procedimientos Penales establece que se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días de multas a quien ilícitamente realice cualquier actividad con fines de tráfico o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún Tratado Internacional del que México sea parte.

Sin embargo, dado el enorme valor del buche de totoaba en el mercado negro, los incentivos para continuar con estas prácticas continúan siendo mucho mayores a las sanciones establecidas por la ley.

Por ello, la presente iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal para que se establezca que en los casos previstos en la fracción IV del artículo 420 y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de 3 mil a 6 mil días de multa cuando se trate de algún ejemplar, partes derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Asimismo se propone, a través de la adición de una fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acotar la procedencia de la prisión preventiva oficiosa a los delitos contra el ambiente en los casos a los que se refiere a la especie totoaba macdonaldi como fenómeno criminógeno específico.

Como lo he mencionado, el CIRVA ha manifestado en diferentes ocasiones que de no erradicar la pesca ilegal de totoaba, la vaquita marina quedará extinta, se trataría del cuarto mamífero marino que se extingue en nuestra era. No podemos permitir que esto suceda.

En la administración anterior se hicieron esfuerzos importantes por combatir la pesca ilegal de totoaba.

La SEMAR ha realizado esfuerzos sobrehumanos que no han sido suficientes por el alto nivel de impunidad.

Por ejemplo, en el 2018 se capturó a tres traficantes de totoaba en posesión de más de 500 kilogramos de buche con un valor de mercado de más de 50 millones de dólares. Estos sujetos no pisaron la cárcel y pagaron fianzas menores a 9 mil pesos.

De continuar así, la vaquita marina no tiene esperanza, pero tampoco los miles de pescadores de San Felipe y del Golfo de Santa Clara y la tranquilidad han sido arrebatados por las organizaciones criminales que operan en el alto Golfo de California, es de vital importancia que exista una sanción efectiva que ayude a erradicar la pesca ilegal de totoaba.

Como país megadiverso y como raza humana, tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar a las especies que cohabitan nuestro plantea.

Es cuanto, señora Presidenta.

Iniciativa

SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
P R E S E N T E

La suscrita **Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona la Fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), ha determinado que México es un país megadiverso: a nivel mundial ocupa el quinto lugar en mamíferos, tercero en aves, octavo en réptiles y segundo en anfibios. Además, posee 3 de las 37 áreas silvestres del planeta, 22 zonas de aves endémicas, y con el Golfo de California, considerado el "acuario del planeta". En el Golfo de California se han documentado 875 especies de peces, 580 de aves marinas y 35 de mamíferos marinos (entre ellos la vaquita marina, el cetáceo con la distribución más restringida y amenazada).

Sin embargo, las interacciones de los diferentes ecosistemas con las actividades antropogénicas, como la agricultura, la ganadería, la urbanización, la cacería ilegal y el tráfico ilegal de especies silvestres, han ocasionado la modificación, fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales, teniendo un alto costo en términos de biodiversidad.

El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción y como delito en la legislación ambiental administrativa y penal de México, e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión, entre otras, de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de éstos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que han sufrido algún proceso de transformación.

Se estima que el tráfico ilegal de vida silvestre se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal, después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales.

En los últimos años el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por la disponibilidad de grandes ganancias económicas y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una sofisticada cadena de organización criminal. Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, transformación, así como su transporte, distribución, y venta.

México juega un papel preponderante en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre debido, en primer lugar, a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y, en segundo lugar, a su situación geográfica y fácil comunicación con numerosos países. Una de las especies más amenazadas por este delito en México es la totoaba.

La totoaba es una especie marina que llega a alcanzar dos metros de longitud y un peso superior a los 100 kg, siendo uno de los peces de mayor talla dentro de la familia de los *Sciaenidæ*.

La especie es endémica del Golfo de California, en el que se ubica el área natural protegida denominada "Reserva de la Biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado", al noroeste de la República Mexicana, y a menos de 60 km de la frontera con los Estados Unidos de América.

La totoaba *(totoaba macdonaldi)* es un pez marino grande y longevo, endémico del Golfo de California. Es la especie más grande dentro de las *Sciaenidae*, la familia de peces de las curvinas que incluye la curvina blanca de California y la curvina golfina. La totoaba puede crecer más de dos metros de largo, pesar hasta 100 kilogramos y puede vivir por 25 años.

PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO DE BUCHE DE TOTOABA

A comienzos del siglo XX la pesca de totoaba era la más importante del Golfo. Originalmente se desarrolló en respuesta a la demanda de su vejiga natatoria que se exportaba a China y a las comunidades chinas en California. En Estados Unidos de América también se desarrolló un mercado para totoabas enteras y en 1942 la pesca llegó a ser de más de 2,000 toneladas, declinando a 59 toneladas para 1975, cuando se prohibió su pesca comercial.

En 1977, la especie fue incluida en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus siglas en inglés), el cual prohíbe todo el comercio internacional de la totoaba. En 1979 se agregó a la lista de especies en peligro de extinción de Estados Unidos. México lo incluyó en su lista de especies en peligro de extinción en 1994. Además, la especie fue clasificada como en peligro de extinción por la *International Union for Conservation of Nature* (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN) desde 1996, debido a la sobrepesca, la degradación de su hábitat, la captura incidental y su pesca ilegal.

Actualmente existe un grave problema de actividades con fines de tráfico, captura, posesión transportación, acopio, introducción al país y extracción del buche de totoaba, que inicia en Baja California y Sonora y culmina en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países asiáticos.



Vejiga natatoria dentro de la cavidad de una trucha arcoíris



Buche de totoaba, una vez extraído



Buche de totoaba, una vez extraído y secado

El buche de totoaba es utilizado en la gastronomía de China y Hong Kong, en virtud de que se le atribuyen propiedades altamente afrodisíacas y curativas.

Anteriormente, la extracción del buche llegó a cotizarse hasta 5 dólares la libra, lo que corresponde a casi 150 pesos el kilogramo del mismo. Sin embargo, en la actualidad existen datos que indican que el kilogramo del mismo en el mercado negro puede alcanzar los 15,000 dólares a pie de lancha, y hasta los 60,000 dólares el kilo en los mercados en China. Este valor rebasa el kilogramo de cocaína, cuyo valor alcanzó en 2016, los 30,000 dólares en el mercado en Nueva York, según informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC).[1]

[1] Herramientas para el análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Visible en la siguiente dirección electrónica: https://www.unodc.org/documents/mexico/2016/wildlife/toolkit_2junio.pdf

La demanda de la vejiga natatoria seca o "buche" de la totoaba como ingrediente en la medicina tradicional china ha llevado a apodarla como la ***"cocaína del mar"*** debido a las enormes sumas que genera en el mercado negro. Comúnmente conocidos en el sur de China y Hong Kong como ***"buche de dinero"*** los buches de totoaba son muy buscados por sus supuestos beneficios en el tratamiento de problemas circulatorios y dérmicos.

Para llevar a cabo dichas actividades, los pescadores furtivos usan redes conocidas como totoaberas, cuyo uso se prohibió en el Golfo de California mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1992. No obstante, en la actualidad continúan con esta actividad y pescan incluso en el área natural protegida, donde todas las actividades pesqueras están prohibidas. Las totoabas se capturan en redes agalleras de luz de malla grande ancladas, las cuales son colocadas durante la noche y dejadas a la deriva por varios días o incluso abandonadas aún después de recuperar la captura.

En nuestro país se llevan a cabo operativos de revisión a las embarcaciones, así como a los vehículos terrestres que circulan por los caminos adyacentes, a fin de erradicar las actividades de tráfico, o captura, posesión, transporte, acopio e introducción al país o extracción del mismo de ejemplares, productos y subproductos de totoaba, mediante acciones de inspección y vigilancia en la cadena de tráfico. Para ello, la PROFEPA en coordinación con la SEDENA, la SEMAR y las Policías, llevan a cabo recorridos de vigilancia en el Sector Centro de San Felipe, municipio de Mexicali, Baja California y en el polígono de la reserva de la biósfera y sus inmediaciones.

Al tratarse de una especie en peligro de extinción, según la NOM-059-SEMARNAT-2010, declarada en veda permanente y regulada por el Apéndice I de la CITES, las actividades de capturar al ejemplar vivo, sacrificarlo, poseerlo, transportarlo, transformarlo, extraerlo del país o comercializarlo, ya sea completo o piezas (como el buche), constituyen conductas consideradas como **delitos contra el ambiente** en su modalidad de delitos contra la biodiversidad, que pueden llegar a considerarse como graves y se sanciona con 1 a 9 años de

prisión y con 300 a 3,000 días multa, según lo dispuesto en el art. 420 fracción IV del Código Penal Federal cuyas hipótesis son las siguientes:

> ***Artículo 420.-*** *Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:*
> *I..III*
> *IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o*
> *(...)*

Desde 2015, las investigaciones realizadas por la Environmental Investigation Agency *(EIA por sus siglas en inglés)* acerca de la comercialización de la totoaba, han descubierto un comercio ilegal persistente de sus vejigas natatorias para proveer a los principales mercados asiáticos en el sur de China y Hong Kong. El incremento súbito de este comercio ilegal se produjo hacia el comienzo de la década alcanzando su punto máximo en 2014, momento en que especuladores y grupos delictivos lo impulsaron atraídos por los precios que subían rápidamente.

El reciente auge en el comercio ilegal de la totoaba en China, está relacionado con su parentesco con el *bahaba* (o también conocido como curvina amarilla gigante *(Bahaba taipingenesis)*, considerado como el pez que posee el mejor y más valioso de los buches), cuya sobrepesca ha tenido tal alcance que ha sido clasificado por la IUCN como una especie en peligro crítico de extinción. Como los buches de *bahaba* rara vez llegan al mercado, la totoaba ha reemplazado al *bahaba* como el rey de los buches, provocando un aumento masivo en la pesca ilegal en México durante los últimos años.

La principal amenaza para las totoabas es la pesca ilegal impulsada por las grandes sumas de dinero que se pagan por su vejiga natatoria. Los pescadores en

San Felipe, Baja California, México, informaron haber recibido hasta 8,500 dólares por kilogramo (Kg) en el mercado negro local en el auge del comercio.

DAÑOS COLATERALES DE LA PESCA CLANDESTINA DE TOTOABA

La pesca clandestina de totoaba ha ocasionado diversos daños colaterales, el más representativo se relaciona con la **vaquita marina** *(Phocoena sinus)*, cuya extinción resulta inminente.

Las vaquitas son atrapadas indiscriminadamente y muertas en las redes agalleras ilegales que se usan para pescar clandestinamente la totoaba.

Conocida como "vaquita marina" o marsopa del puerto del Golfo de California, la vaquita tiene el rango geográfico de distribución más pequeño de las especies de cetáceos. Su distribución incluye un área de únicamente alrededor de 4,000 km^2 en la zona más alta al norte del Golfo de California. Considerando que los adultos alcanzan una longitud de alrededor de 1.5 m y un peso de 55 kg, la vaquita es el miembro más pequeño de la familia de las marsopas.

Entre 2011 y 2015, la población de vaquitas disminuyó en aproximadamente un 80% como resultado de la captura incidental en redes totoaberas, utilizadas ilegalmente para capturar totoaba. Quedan menos de 30 vaquitas y la especie está al borde de la extinción.

La impactante disminución de vaquitas ha sido monitoreada durante casi dos décadas por parte del *Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita* (CIRVA), creado en 1997 a solicitud del Gobierno de México para desarrollar un plan de recuperación para la especie. En su primera reunión en 1997, el CIRVA identificó la captura incidental en redes agalleras como la mayor amenaza para la supervivencia de la vaquita.

La mortalidad de vaquita en redes para totoaba ya ha sido documentada: de 128 vaquitas capturadas incidentalmente en redes agalleras entre 1985 y 1992, el 65% se capturó en redes para totoaba.

En 1999, el CIRVA respaldó una estimación de abundancia de 567 vaquitas, de acuerdo con los estudios realizados en 1997. En 2012, la estimación de la población de vaquita se había reducido a alrededor de 200 ejemplares y cuando el CIRVA se reunió por quinta vez, en 2014, emitió la advertencia más alarmante hecha hasta ese momento: "La vaquita está en inminente peligro de extinción", los datos de la monitorización acústica indicaron que quedaban menos de 100 vaquitas, con menos de 25 hembras maduras para la reproducción. Ante este escenario, el CIRVA estimó que, a menos que la pesca que ocasiona la captura incidental se eliminara inmediatamente, la vaquita podría extinguirse este mismo año, 2018.

El informe del CIRVA en 2014 reafirmó que el resurgimiento de una intensa pesquería ilegal de totoaba fue la amenaza más significativa para la vaquita, debido al aumento de la demanda de su vejiga natatoria (denominada localmente como buche) por parte de Hong Kong y China continental.

Como respuesta a las alarmantes conclusiones de la 5ª reunión del CIRVA, el 15 de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha de la **Estrategia Integral de Recuperación de la Vaquita Marina**. Dicha estrategia previó 4 componentes: 1) ampliación del polígono de protección, 2) Compensación Económica, 3) Inspección y Vigilancia y 4) Nuevos artes de pesca.

A partir de entonces, se ha advertido la necesidad de coordinar las capacidades de las dependencias de los tres órdenes de gobierno en acciones de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California (AGC). Por ello, se acordó la aplicación del **Programa de Atención Integral al Alto Golfo de California**[2], con la participación de 8 dependencias federales. Los objetivos del programa son: a) prevenir las actividades pesqueras ilícitas; b) preservar el ecosistema marino y área natural protegida; c) combatir el tráfico ilegal de especies en riesgo; y d) prevenir la presencia de grupos de la delincuencia organizada. Dicho programa se coordina a través del Centro de Operaciones Interinstitucional (COI) constituido por

[2] Programa coordinado por la Secretaría de Marina-Armada de México, a partir del mes de abril de 2015.

representantes operativos de las dependencias. En el COI se acuerdan las acciones de inspección y vigilancia que se aplican para cada una de las líneas de acción del programa.

Además, con el fin de mantener un alto nivel de vigilancia y actividades de monitoreo, especialmente durante la temporada en que ocurre la pesca ilegal de Totoaba, se realizan las acciones siguientes:

- Se mantiene de manera permanente en el AGC la presencia por parte de SEMAR de un buque de Vigilancia Oceánica (OPV) con helicóptero e interceptora embarcada; patrullas interceptoras, embarcaciones tipo Defender, Narwhal y menores; un avión de patrulla aérea, helicóptero en tierra y un Sistema de Vigilancia Aérea no Tripulado; Vehículos todo terreno; personal de Infantería de Marina; inspectores Federales de Pesca, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de la Gendarmería y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

- Se establecen campamentos de vigilancia en la costa, principalmente en la zona donde el CIRVA ha realizado recomendaciones. Se mantiene un despliegue móvil de embarcaciones, vehículos y personal a las zonas donde se mueve la totoaba, sin dejar de mantener un despliegue permanente en el área de refugio de la Vaquita Marina. Se cuenta con un estado de fuerza de más de 500 personas en apoyo al Programa.

A lo largo de dos años y medio, estas acciones permitieron obtener los siguientes resultados:

- Capacitación de más de 3,200 servidores públicos.
- 228 embarcaciones aseguradas.
- 52 vehículos asegurados.
- la recuperación y aseguramiento de más de 1,100 ejemplares o partes de Totoaba y la detención de 225 infractores.

En atención y seguimiento de éstos esfuerzos, en febrero de 2018, la Procuraduría General de la República, aperturó en el Puerto de San Felipe, Baja California, una Unidad de Atención Inmediata (UNAI) con personal ministerial, policial y administrativo, para intervenir de forma inmediata en la atención y seguimiento de la investigación de los casos que respecto del tema delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental en particular, le sean puestos en su conocimiento.

Se debe resaltar que para el fortalecimiento de las acciones operativas encaminadas a detener la extracción ilegal de especies marinas, la PROFEPA y la SEMAR, con base en el Convenio Marco de colaboración suscrito el 21 de julio del 2014, materializaron mediante convenios específicos:

- La adquisición de 13 embarcaciones para patrullaje tipo Defender.
- El empleo de un Sistema de vigilancia y reconocimiento aéreo con vehículos no tripulados.

También, con el objeto de promover la investigación de las redes internacionales involucradas en el tráfico de las partes de Totoaba, durante el periodo 2015-2017, la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL), a solicitud de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha publicado dos notificaciones moradas (de modus operandi) a la Oficina Central Nacional México (OCN-MÉXICO), así como distintos eco mensajes en los que se detalla el transporte ilegal de maletas con piezas de buches secos (vejiga natatoria) del pez Totoaba (*Totoaba macdonaldi*). A la fecha se encuentra pendiente de publicación una tercera notificación morada.

Al inicio de la implementación de las nuevas medidas se llevó a cabo un extenso estudio visual y acústico de la población de la vaquita, del 28 de septiembre al 3 de diciembre de 2015.

La monitorización acústica pasiva indicó que la población de la vaquita disminuyó en promedio un 34% anual desde 2011 hasta 2015, lo cual, comparado con el

7,6% registrado entre 1997 y 2008, reflejó el impacto catastrófico de la pesca ilegal de la totoaba.

En su reunión de junio de 2016, el *Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional* (CBI) respaldó las recomendaciones del CIRVA-7, declarando: "La elección es simple y rigurosa: si no se prohíbe la pesca con redes agalleras en el Alto Golfo de California, la vaquita se extinguirá: la segunda extinción de cetáceos es totalmente prevenible, que el Comité habrá presenciado en los últimos 10 años".

SISTEMA PROCESAL PENAL

La reforma a nuestro sistema procesal penal en el 2008 y la transición a un Código Nacional de Procedimientos Penales, establecieron nuevos parámetros para la determinación de la medida cautelar de **prisión preventiva oficiosa.** Como consecuencia, el catálogo de los delitos que merecen este tipo de medida cautelar se redujo.

En este contexto, dada la naturaleza del propio sistema procesal adoptado, y tomando en consideración principios como uso excepcional, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, y razonabilidad entre otros, los delitos contra el ambiente que antes de la aplicación del sistema procesal penal acusatorio eran considerados como graves, quedaron excluidos del catálogo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la prisión preventiva oficiosa.

A este respecto, resulta relevante subrayar que en el año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se reformó el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente, así como el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en ese momento. Esta reforma incluyó en el catálogo de delitos "graves" (prisión preventiva) diversos delitos contra el ambiente, en particular los señalados en el artículo 420, únicamente cuando se realizaban las conductas previstas en cualquiera de sus cinco fracciones con agravante, es decir, si se realizaban con

fines comerciales o si el delito se cometía dentro de un área natural protegida.

Con la reforma del 2002, se logró disminuir el índice delictivo en esta materia, ya que al considerarse un delito "grave", quien realizaba conductas como la posesión o transportación de vejigas natatorias de especies como la totoaba en cantidades que se consideraran con fines comerciales, o si se afectaba o las conductas se realizaban en un área natural protegida, se hacía acreedor a una medida cautelar de prisión preventiva durante el tiempo de su proceso penal.

Como se mencionó en párrafos anteriores, con la reforma al sistema de justicia procesal penal, los delitos contra el ambiente quedaron fuera del catálogo de prisión preventiva oficiosa que se establece en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo anterior, en la actualidad las personas que son detenidas llevando a cabo actividades con fines de tráfico, captura, posesión transportación, acopio, introducción al país y extracción del mismo con vejigas natatorias de la especie de totoaba, no pueden ser sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello ha provocado que al poner a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación a los detenidos, estos obtengan su libertad, para continuar su proceso o si después del plazo de las 48 horas son llevados a la audiencia de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso, son dejados en libertad por los jueces de control, imponiéndoles medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, lo que permite que en la gran mayoría de las ocasiones continúen realizando actividades ilegales en la misma materia.

La experiencia en casos anteriores demuestra que el hecho de que las personas que han sido detenidas cometiendo probables hechos delictivos con las vejigas natatorias de la especie totoaba obtengan su libertad para continuar con su proceso y la imposición de alguna otra medida cautelar no resulta ser un factor que inhiba las actividades delictivas en la materia, por lo que no cumple con los fines que mandata el proceso penal acusatorio, lo que provoca un enorme descontento social, y la disminución de la efectividad de las acciones llevadas a

cabo por distintos sectores de la sociedad , para lograr la recuperación de la "vaquita marina".

Esta situación hace mitiga el impacto de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, en especial de las instancias de carácter federal, ya que además de causar severas afectaciones al patrimonio natural del país, menoscaba la economía del mismo. Lo anterior dado que los recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos empleados en la prevención del delito ambiental y en específico del tráfico del "Buche de Totoaba" (Vejiga natatoria de la Totoaba Macdonaldi) se encuentran íntimamente relacionados. Todo ello deriva en violaciones graves a los Derechos Humanos, en específico al derecho a un medio ambiente sano previsto en el quinto párrafo del artículo 4 de nuestra Carta Magna, que señala:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. ***El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.***

Para que el Estado Mexicano garantice la impartición de justicia y protección del derecho a un medio ambiente sano, es vital otorgar a los operadores del Sistema de Justicia Penal, las herramientas necesarias a través de legislaciones que contemplen medidas cautelares, penas y sanciones acordes a la afectación y daño causado, el cual no puede ser calculado por simple cuantía monetaria, sino por daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema del Golfo de California.

En ese tenor, resulta necesario incrementar la punibilidad para los tipos penales relacionados con la problemática ya descrita, a efecto de mejorar la procuración e impartición de justicia en materia de responsabilidad penal ambiental y sobre todo, incluir en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa hipótesis de delitos contra el ambiente previstos en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal.

Lo anterior, atendiendo a que la protección del medio ambiente, se inscribe no solo en el marco del derecho positivo mexicano, sino además por principio en instrumentos de carácter internacional y universal, tal como lo son la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y el Protocolo de Kioto.

Así también, la elevación de la pena de prisión, trae como consecuencia que la pena media aritmética se incremente hasta diez años de prisión, lo que dará pauta el Ministerio Público de la Federación a un ejercicio de argumentación en cuanto a la necesidad de cautela, en relación a la prisión preventiva, ya que ante el mero temor de la aplicación de la pena, y considerando la evaluación del riesgo, los riesgos mismos para la consecución de la investigación y los riesgos para las personas, el imputado tiene frente a sí una grave disyuntiva, incumplimiento de obligaciones procesales *versus* la pena.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el 11 de mayo de este año, se publicó en la Gaceta del Semanario del Poder Judicial de la Federación la Tesis Jurisprudencial con número de registro 2016873, bajo el siguiente Rubro "**PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS**", en la que se pronuncia en el sentido de que el listado de delitos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, no debe considerarse como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo y que por lo tanto no extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales en las respectivas legislaciones estatales o la Federación. Asimismo, señala que lo previsto en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República o la Federación, mencionando que, en ese aspecto

de regulación procesal secundaria, atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, puede incurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro.

Ahora bien, tomando en consideración que la hipótesis normativa prevista en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal, prevé conductas con diversas especies citadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010[3] y en la CITES[4], resulta necesario acotar la **prisión preventiva oficiosa** únicamente a la especie *totoaba macdonaldi*, como fenómeno criminógeno que se expone en la presente iniciativa, lo que motiva a que se adicione un último párrafo a este artículo para su aumento de punibilidad y sanción económica.

Con base a lo expuesto y con el propósito de consolidar las acciones que coadyuven a la preservación de la vaquita marina, y a combatir el tráfico ilegal de vida silvestre, se somete a su consideración **la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.**

Para tal efecto se propone adicionar un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona la Fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente:

Código Penal Federal

Texto vigente	Propuesta de modificación
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o	Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o

[3] NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

[4] Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.

recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;	recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;	II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.	II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;	III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o	IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.	V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.	Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. ***En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del***

	artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Texto vigente	Propuesta de modificación
Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos	Artículo 167. Causas de procedencia *(…)* Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: *(…)* ***XII. Contra el ambiente, en los casos a que se refiere el artículo 420 fracción IV, con relación al último párrafo del mismo artículo."*** ***(...)***

cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para	

resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.	

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

PRIMERO. Se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue (se resalta lo añadido):

"Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I…V

…

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

"Artículo 167. Causas de procedencia

(…)

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

(…)

XII. Contra el ambiente, en los casos a que se refiere el artículo 420 fracción IV, con relación al último párrafo del mismo artículo."

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 13 de diciembre de 2018.

ATENTAMENTE

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

21

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Lagunes Soto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

6) 20-12-2018
Cámara de Senadores.
INICIATIVA con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte (PAN).
Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Gaceta Parlamentaria, 20 de diciembre de 2018.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Gaceta Parlamentaria
Jueves 20 de diciembre de 2018 / LXIV/1PPR-73-2376/88706

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente de la Mesa Directiva

Senado de la República

P r e s e n t e

El suscrito **Marco Antonio Gama Basarte**, Senador de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169; 172 y demás del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente **Iniciativa que adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A pesar de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, éste se sigue cometiendo, pues como bien lo señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va de enero a septiembre de este año, se han cometido 8 mil 727 robos a los transportistas, lo que significa un incremento de este delito en 4.10% si lo comparamos contra el mismo periodo del año pasado.

Con motivo de las cifras anteriores, se destaca que en los primeros nueve meses de este año, de los atracos cometidos, 7 mil 328 fueron cometidos con violencia, es decir 87% del total. De ahí, que el índice del robo a transportistas en México continua en números rojos y sigue siendo la mayor preocupación del sector, ya que ha tenido que absorber los costos para reforzar su seguridad.

Ahora bien, a pesar de que ya es un delito federal en el que se señala que a quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión, cuando el objeto del robo sean las mercancías, y de dos a siete años de prisión cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros.

También es cierto, que el robo de autotransporte de carga sigue siendo una actividad rentable para los criminales que operan en grupos de cinco a nueve integrantes armados y se desplazan en dos o tres vehículos; es decir, es una actividad ilícita estudiada y planeada para llevarla a cabo, pues ubican a la posible víctima, esperan a que la carretera tenga poco aforo y cierran el paso a un tráiler con un tractocamión.

En una entrevista a “T21”, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), comentó que “Lamentablemente los costos por inseguridad en todo el sector son incuantificables, el peaje lo podemos cuantificar, el incremento del combustible también, pero el de la inseguridad no, porque es algo constante que nos afecta a todos”.

Así mismo, el SESNSP, que es una oficina de la Secretaría de Gobernación, documentó que sólo en septiembre de este año hubo 942 asaltos a transportistas, o sea, apenas 1% menos que en el mismo mes del año pasado, aunque el número de casos con violencia siguió al alza con 9.7 por ciento.

La forma de operar de estos grupos delictivos es de la siguiente manera: inmediatamente de que someten al conductor, colocan un bloqueador de señal para evitar el rastreo satelital y se llevan la unidad a un predio para enseguida descargar la mercancía: electrodomésticos, alimentos, material de construcción, ropa, zapatos, bebidas, etc.

Pues, según reportes de investigación de la Policía Federal los choferes pueden ser secuestrados por el tiempo que dure el robo o bien lo dejan sobre algún punto de la carretera, y las cifras del tercer trimestre de 2018 indican que el 93% de los asaltos llevan a cabo la privación ilegal de la libertad del conductor.

En el reporte de SesiGuard Suppy Chain Intelligence Center, se establece que el robo al transporte de carga en México continúa en ascenso y el modus operandi de la delincuencia también se ha vuelto más violento. El estudio detalló que la rapiña y el atraco en instalaciones fueron las otras formas en que efectuó el robo con 6 y 1% respectivamente, además de que el 93% de los casos ocurren cuando la unidad está en movimiento, mientras que el 5% son en estacionamientos no seguros y el resto en otras locaciones.

Según la información entre julio, agosto y septiembre de 2018, se cometieron 3 mil 775 robos al transporte de carga, lo que significó un incremento del 5% en comparación con el mismo trimestre de 2017, pero 41% más a diferencia de igual periodo de 2016. De los estados más críticos fueron el Estado de México con mil 60 robos (28% del total) y Puebla con 969 (25%) a estas entidades le siguieron Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León y Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato.

Ahora bien, las carreteras con mayor riesgo fueron la México-Veracruz con 18% de los robos, seguido por la México-Saltillo con el 11%, la Maxipista con el 10%, Circuito Exterior Mexiquense 9%, México Zacatepec y Uruapan-Lázaro Cárdenas con el 6% ambas. En cuanto a los productos robados los alimentos y las bebidas continúan en la preferencia de los delincuentes con el 33% de la carga robada, le siguen los elementos de construcción (10%), bebidas alcohólicas (8%), autopartes (7%), misceláneos (6%) y químicos (5%).

Existen otras estadística delictiva en materia de robo al autotransporte de carga que señalan a San Luis Potosí, con 481; Oaxaca, con 366; Querétaro, con 312; la Ciudad de México, con 303, y Chiapas, con 148, quizás con una estadística más baja se encuentran Chihuahua, con 90 eventos; Guanajuato, con 89; Quintana Roo, con 82; Baja California, con 80; Sonora, con 71; Hidalgo, con 67; Veracruz, 51; Tamaulipas, 35; Coahuila, 27; Durango, 25; Zacatecas, 21; Guerrero, 19, y Sinaloa, 14 robos.

Durante su visita a Jalisco el presidente nacional de CANACAR indicó que se han incrementado los robos al transporte en más del 200%, lo que representa más de tres mil 900 robos y 15 choferes que perdieron la vida a consecuencia de los robos durante el 2018, asimismo señala que se ha focalizado el 93%, Puebla, Veracruz, Estado de México y Michoacán y que el mayor índice de robos hablando de tramos carreteros es el corredor México-Puebla-Veracruz y que ya se extendió a Tlaxcala.

Por otra parte, diversos grupos empresariales hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para garantizar la seguridad del transporte de mercancías, debido a que las pérdidas económicas que provocan los robos ya son alarmantes, desde la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), señalan que como el robo en las carreteras ha afectado a la industria por esas materias primas que ya no llegan a los centros de consumo o por los productos que van de importación y exportación.

Recientemente, se ha detectado un nuevo modus operandi de los grupos delictivos para sustraer mercancías de los vehículos; el cual se desarrolla de la manera siguiente: el transporte es interceptado, fuerzan al operador a seguir una ruta hasta llegar al siguiente centro de reparación de llantas o centro de servicio, una vez estando ahí, los delincuentes envían una imagen alterada sobre un daño en una llanta al centro de monitoreo, con lo cual se cree que se tiene una emergencia, al estar detenido el vehículo por un momento, aprovechan para

desenganchar el remolque y sustraer con ello la mercancía, mientras el tractocamión se mantiene ante el centro de monitoreo como “en reparación”.

Como se podrá notar, el robo al autotransporte no es una conducta aislada, sino que se trata de una actividad delictiva que se lleva a cabo en varias entidades federativas, en donde intervienen grupos delictivos, bien organizados, que dentro de las conductas que llevan a cabo, logran que los bienes robados suelan ser almacenados y distribuidos en diversas áreas urbanas, incluso los propios vehículos de transporte robados los alteran en sus números de identificación y apariencia, y posteriormente los trasladan a otros lugares para su uso y venta.

Dentro de este orden de ideas, ninguna de estas conductas delictivas sería posibles para un grupo delictivo que no está bien organizado y coordinado con otras organizaciones delictivas, pues es sabido que los bienes robados se suelen poner a la venta en lugares informales, sin declarar ningún tipo de impuesto, y a precios más bajos que los fijados por el mercado, lo que viene a constituir una competencia totalmente ilegal y desleal, que daña la cadena productiva, la generación de empleos y la captación fiscal.

Aunado a lo anterior, el sector empresarial ha manifestado la necesidad de que las autoridades hagan algo, pues por una parte se tienen pérdidas humanas como en el caso de los conductores que además de ser secuestrados son privados de la vida, y por la otra las pérdidas económicas que conllevan a mermar las posibilidades de que el sector de transportistas pueda ampliar y renovar su parque vehicular y demás situaciones que tengan.

No obstante, de las reformas al Código Penal Federal publicadas el 21 de febrero del año en curso, en materia de delitos carreteros, los grupos delictivos siguen operando, por lo que, ante la incidencia y el aumento del delito de robo al autotransporte, resulta necesario implementar medidas necesarias que permitan desincentivar dichas conductas. Por ello, propongo reforzar con el régimen de las medidas cautelares previstas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considere el robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, con la finalidad de que se pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Por lo cual, propongo se adicione una fracción más al artículo en mención con la finalidad de que aquellas personas imputadas que sigan manifestando su conducta delictiva, sean sometidas a la prisión preventiva oficiosa y así evitar que sigan poniendo en peligro a todos los miembros de la sociedad.

En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente:

INICIATIVA POR MEDIO DE LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

Único. Se **adiciona** la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

...

...

...

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. a **X. …**

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero**;**

XII. Robo a los servicios de autotransporte federal de carga en caminos o carreteras, previstos en los artículos 381, 376 Ter, 376 Quáter y 381.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Sen. Marco Antonio Gama Basarte

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presenta por la Senadora Verónica Martínez García, del grupo parlamentario del PRI)

Verónica Martínez García
Senadora de la República

Verónica Martínez García, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del artículo 8, numeral 1, fracción I del artículo 163, 164 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII, al artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El transporte federal de carga en México constituye un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, además de un modo de integración nacional, por lo que durante el 2017 se movilizó el 68.6% del total de las cargas mediante el transporte terrestre de carga, el 55.7% en el autotransporte de carga y el 12.9% restante en el transporte ferroviario de carga[1].

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta actividad contribuye con el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional.

El autotransporte en 2017 movilizó 546.6 millones de toneladas, equivalente a 81% de la carga total trasladada en todos los modos de transporte y 81% de la carga movilizada vía terrestre (autotransporte y ferrocarril).[2]

Desafortunadamente, desde hace algunos años las carreteras de gran parte del territorio nacional se han visto amenazadas por la inseguridad pública generada por la delincuencia, quienes aprovechan su organización y la vulnerabilidad de los sujetos pasivos del delito para perpetrar el robo a los servicios de autotransporte federal de

[1] Estadística básica SCT 2017. http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-federal/estadistica/2017/, consultado el 7 de marzo de 2019.
[2] Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga. CANACAR

Verónica Martínez García
Senadora de la República

carga, pasajeros, turismo o transporte privado, hechos que pueden derivar en otros ilícitos como la privación ilegal de la libertad, secuestro u homicidio de las personas que vayan a bordo de las unidades automotoras, o bien, que más allá del robo de unidades y mercancías, éstas sean utilizadas para cometer otros ilícitos, lo cual resulta muy preocupante por la recurrencia de este delito y las pérdidas económicas y humanas que ocasiona.

Al respecto, el robo de las unidades (tracto camiones, autobuses y remolques o cajas), tiene un impacto negativo en la industria del autotransporte, ya que se estima que el 50% de las unidades y de los vehículos que son sustraídos ya no son recuperados, lo que sin duda afecta la competitividad del sector; por su parte el robo de unidades de pasajeros (autobuses) se ha incrementado en un 280% en los últimos 4 años.

Debido a la alta incidencia de este delito, el 21 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros, cuya finalidad es la de elevar las penas que se impondrían a los responsables, así como para darle tratamiento de delito del fuero federal a la conducta, por lo que su tipificación quedó de la siguiente manera:

> ***"Artículo 376 Ter. A quién cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado..."***

Bajo ese contexto, es que podemos observar las siguientes consideraciones en torno a la problemática:

a) El delito de robo al autotransporte de carga afecta seriamente a este sector y a sus usuarios por el incremento de robo de unidades y mercancías. El estudio realizado para la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR),

Verónica Martínez García
Senadora de la República

denominado "Agenda Estratégica ante el Impacto de la Inseguridad en el Sector de Autotransporte de Carga"[3] de mayo de 2018, concluye en lo siguiente:

- ✓ En solo 7 años, el robo al sector del autotransporte de carga paso de 4,959 delitos a 10,230, teniendo un crecimiento del 106%.
- ✓ Los estados de Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, concentran aproximadamente el 75% de los delitos al sector.
- ✓ Los costos incurridos por la inseguridad en 2017 ascendieron a 92,500 millones de pesos, que representan el 0.5 por ciento del PIB Nacional.

b) Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en el periodo de enero a diciembre del 2018 se han reportado un total de 12, 206 robos a autotransportes de carga, de los cuales 10, 371 fueron con violencia y 1, 835 sin violencia.[4] En comparación con los 3,027del mismo periodo de 2012, con un incremento del 209% en 2018.

c) La entonces Procuraduría General de la República, informó que, en materia de delitos carreteros al mes de diciembre de 2018, se generó la siguiente información:

- ✓ Se han presentado 3,244 Carpetas de Investigación en el fuero federal de las cuales el 70% se han presentado con violencia.
- ✓ Se han detenido a 223 imputados de los cuales 85 se encuentran en prisión preventiva, el resto está en libertad por los supuestos establecidos en los artículos 140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

[3] Estudio realizado por Consultores Internacionales S.C. experiencia con futuro.
[4] Elaboración de CANACAR con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para el periodo enero-diciembre 2018.

Verónica Martínez García
Senadora de la República

Desafortunadamente, a pesar de la reforma de 21 de febrero de 2018, la incidencia delictiva ha continuado en aumento como lo demuestra la estadística publicada por diferentes instituciones públicas y privadas.

Según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), al mes de diciembre de 2018, los reportes de vehículos robados al sector asegurado (el 35% de ellos corresponde al autotransporte de carga a nivel nacional) asciende a 11,362 reportes de robo en 2018, lo cual representa un incremento del 13% en comparación con los 10,042 reportes del 2017.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2018 de *SensiGuard Supply Chain Intelligence Center*, los estados de Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, concentran aproximadamente el 75% de los delitos al sector, asimismo, señala que en dicho trimestre se registraron un total de 3,775 incidentes de robo a transporte de carga, lo que implica un incremento del 41% respecto al mismo periodo de 2016 y un incremento del 5% con relación al tercer trimestre de 2017.

El reporte refiere que las carreteras con mayor incidencia fueron la de México-Veracruz con 18% de los robos, seguido por la de México-Saltillo con el 11%, Maxipista con el 10%, Circuito Exterior Mexiquense 9%, México Zacatepec y Uruapan-Lázaro Cárdenas con el 6% ambas. En cuanto a los productos robados, los alimentos y las bebidas continúan en la preferencia de los delincuentes con el 33% de la carga robada, le siguen los elementos de construcción (10%), bebidas alcohólicas (8%), autopartes (7%), misceláneos (6%) y químicos (5%).

Por otro lado, en el robo al transporte de pasajeros, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la incidencia delictiva del fuero común, referente al robo en transporte público colectivo, señala que de enero a noviembre de 2018 se reportaron 12,655 casos de dicho delito, de los cuales 10,755

Verónica Martínez García
Senadora de la República

fueron cometidos con violencia, lo que implica más del 85% de eventos de esta naturaleza.[5]

Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), de enero a noviembre de 2018 se reportaron casi 1000 asaltos en autobuses, lo cual representa un 280% mas que en el 2017; también existe el registro de 10, 000 unidades que en promedio han sido secuestradas en los últimos 4 años.

Afirma la CANAPAT, que el autotransporte de pasaje y turismo, nacional e internacional, es de gran importancia en nuestro país, ya que anualmente moviliza en territorio nacional, a más de 3,750 millones de personas por motivos de negocios, visitas familiares, turismo, o cualquier otra actividad, generando más de 1.3 millones de empleos directos e indirectos, por lo que contribuye al 2.4 % del PIB nacional.[6]

Por lo general el modus operandi del delito de robo al autotransporte federal en cualquiera de sus modalidades comienza en algún kilómetro determinado de una carretera, camino o paradero dentro de una entidad federativa y continua en otro estado en donde se pueden cometer delitos conexos como pueden ser el secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión o en su caso el, homicidio, en tanto que la mercancía robada es llevada al mercado informal.

Por otra parte, el robo al autotransporte federal de pasajeros, al iniciar su recorrido en un estado y terminar en un estado diverso encuentran diversas dificultades administrativas y materiales que imposibilitan la denuncia correspondiente y la debida persecución del delito.

La comisión de este delito se ha perfeccionado y muy frecuentemente es perpetrado por la delincuencia organizada, quienes aprovechando la vulnerabilidad de las

[5] Idem.
[6] Comunicado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) de 18 de febrero de 2019.

Verónica Martínez García
Senadora de la República

unidades automotoras y los operadores que circulan en carreteras, suelen simular falsos retenes de verificación empleando uniformes e identificaciones federales falsos, además de utilizar armas de alto calibre, utilización de tecnología o dispositivos electrónicos, o bien, con todos esos elementos, abordar de manera violenta a dichas unidades, lo cual les facilita apoderarse de las mercancías y/o de las unidades automotoras.

El nuevo sistema de justicia penal y la legislación garantista que lo regula, no han contenido el fenómeno delictivo y de inseguridad pública que afecta a nuestro país desde hace más de una década, circunstancia que ha vulnerado de manera sistemática el Estado de derecho, los derechos humanos y la actividad económica y productiva de los diversos sectores de la industria, generando una atmósfera de temor, incertidumbre y de impunidad ante la reiterada perpetración de los delitos, que se comenten cada vez de forma más violenta.

Al observar la recurrencia y alta incidencia del robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, así como la estructura, organización y formas de comisión del ilícito, es que resulta necesario darle un tratamiento diferente a este delito donde a los responsables se les pueda imponer la prisión preventiva como una forma de evitar su reincidencia o que se sustraigan de la acción de la justicia, lo que genera un constante riesgo para quienes transitan por las carreteras a lo largo de todo el territorio nacional.

Así mismo, la reforma realizada al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero del 2018, elevó las penas para este ilícito, sin embargo, como se advierte de las cifras expuestas, no se ha podido frenar la tendencia del robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado y actualmente se perpetra a través de medios sumamente violentos implementados por grupos delincuenciales organizados.

Verónica Martínez García
Senadora de la República

Recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión, la reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional por la que se incorporan 9 delitos al catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa, entre esos ilícitos se consideró al de *"robo de transporte de carga en todas sus modalidades"*, sin embargo, se excluyó de manera desafortunada al robo del autotransporte de pasajeros, turismo o transporte privado, circunstancia que desde la perspectiva jurídica impedirá que al perpetrarse este delito, pueda imponerse a los detenidos, que eventualmente pudiera haber, la prisión preventiva oficiosa, dando la pauta para la impunidad al quedar libres y poderse sustraer de la acción de la justicia.

En ese contexto, los sectores de personas que se verían afectados de manera preponderante, son los turistas y las de escasos recursos, al ser quienes han optado por sus condiciones específicas la vía terrestre para sus traslados a lo largo de territorio nacional, colocándose en una situación vulnerable y un riesgo inminente durante dichos lapsos, por lo que por esas razones y por las cifras expuestas correspondientes a los índices delictivos existentes en esta modalidad del delito, es que debe ser considerado como uno de los delitos que amerita la prisión preventiva oficiosa en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al igual que en el *"robo de transporte de carga en todas sus modalidades", cuando el delito se perpetra en* autotransporte de pasajeros, turismo o transporte privado, también la afectación ocurre en el patrimonio de las personas, físicas o morales, colocando en riesgo la integridad física e incluso la vida de los operadores, de los pasajeros y de las personas que se trasladan por carretera, además de las afectaciones y perdidas económicas que se generan al sector turístico por las mismas formas violentas, organizadas y sofisticadas que utilizan para cometer este tipo de delitos.

Verónica Martínez García
Senadora de la República

Bajo esa circunstancia, los responsables por la comisión del delito de robo del autotransporte de pasajeros, turismo o transporte privado, seguirían la investigación y el proceso en libertad, salvo que el Juez, a petición del Ministerio Público, determine otorgar la prisión preventiva como una medida cautelar, siempre que se observen alguna de las condiciones señaladas en el primer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de lo contrario no se concederá el otorgamiento de tal medida. Dichas condiciones son las siguientes:

> ***"El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código..."***

Bajo esa lógica, debido a la benevolencia de las disposiciones penales que permite a esos imputados el goce de su libertad mientras se desarrollan las investigaciones y el proceso, podría generar su reincidencia en la perpetración del mismo delito u otras conductas delictivas, lo cual se traduce en una atmósfera de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho, en perjuicio de toda la ciudadanía.

Por lo que, con la idea de contribuir al combate de este delito y a la impunidad generada por el mismo, es que se estima necesario incorporar al catálogo de ilícitos contenidos en el sexto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ***a las conductas descritas en el artículo 376 Ter del Código Penal Federal referidas al robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado***, para que se encuentre atendida la necesidad de que todas las hipótesis previstas en las disposiciones penales respecto de este tipo de delitos, sean de las que ameritan prisión preventiva oficiosa, en aras de preservar el Estado de

Verónica Martínez García
Senadora de la República

derecho de nuestro país, lo que permitirá complementar la reforma al artículo 19 constitucional realizada en días pasados.

Lo anterior no significa reducir la protección de los derechos humanos en las disposiciones penales durante las investigaciones y el proceso penal, en perjuicio de los imputados por el delito de referencia, sino darle mayores elementos al Estado mexicano para proteger los derechos humanos de toda la sociedad mexicana y darle estabilidad a las actividades económicas y productivas, las cuales se han visto amenazadas por una delincuencia cada vez más agresiva y sofisticada, que no nada más se fortalece con el temor, impunidad e incertidumbre que genera, sino también con las ganancias ilícitas obtenidas en el hecho delictuoso y con "el mercado negro" propiciado como consecuencia de ello.

Por ello, como resultado de una ponderación derivada del espíritu de esta propuesta, es que se debe privilegiar la protección de los derechos humanos de la sociedad e impulsar todas las actividades licitas que generen crecimiento y desarrollo económico a lo largo de todo el territorio nacional, aspectos que se han visto mermadas por el contenido de disposiciones legales que desafortunadamente no corresponden a nuestra realidad, ni satisfacen las necesidades de nuestra sociedad.

Por los anteriores argumentos, es que pongo a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto

Único. Se **adiciona** la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Artículo 167. Causas de procedencia

…
…
…
…

Verónica Martínez García
Senadora de la República

…
…

I.* a *XI.

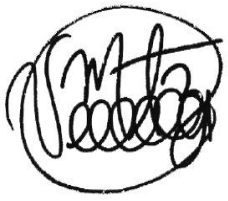
XII. El robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado previstos en los artículos 376 Ter del Código Penal Federal, y sus agravantes previstas en el artículo 377 y en el artículo 381 del mismo ordenamiento legal.
…"

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a 07 de marzo de 2019.

Atentamente



Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armonización del marco legal de la prisión preventiva oficiosa.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD)

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores:

Permítanme ustedes referir, en primer lugar, el ejercicio que el día de ayer en este mismo Senado de la República tuvo lugar y que fue un ejercicio de consenso, de análisis, de resumen de trabajo, de muchas semanas, de todos los grupos parlamentarios, de los grupos de la mayoría, sus aliados y por supuesto también de los grupos que se han incluido en el llamado “bloque de contención”.

Lo importante es que se abonó, de manera sustancial, para el país en la construcción de cuatro leyes que para la seguridad nacional son muy importantes, leyes de alcance de ese tenor.

Vuelvo a reconocer el trabajo de Ricardo Monreal en ese sentido, porque se escuchó a todos los grupos, porque se permitió tener leyes que no solamente resultan producto de un procedimiento legal, material y formalmente, sino también con legitimación y legitimidad, y eso es muy importante.

Precisamente en esta tarea, en la tarea que ha planteado el gobierno federal, de rescatar la seguridad, se abonó ya con la reforma al artículo 19 constitucional. No quiero decir que sea lo óptimo que se tenga que recurrir a la prisión preventiva de manera oficiosa, pero sí quiero decir que, en este momento, ha resultado indispensable; que las cifras que hoy tiene de violencia nuestro país son el resultado clarísimo, si ustedes lo ven, es clarísimo el reflejo a finales de 2015 al ejercicio 2016, una salida masiva de más de 70 mil personas de todas las prisiones, solo en la Ciudad de México cerca de 15 mil.

Reitero, el debate de si debe o no debe proceder la prisión preventiva oficiosa es otro, pero ahora lo que nos ocupa es una tarea de complemento de nuestra función legislativa, una tarea que permitirá armonizar esa reforma al artículo 19 constitucional.

Ya reformado este artículo, ha incluido en el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, entre otros, el de hidrocarburos, el que corresponde a la violencia sexual contra menores, el de robo a casa-habitación, el de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, el delito que se refiere a las armas, esto es de todos los días en todos los lugares del país, detención de personas armadas y salida inmediata, lo que se conoce como “la puerta giratoria”, todos los días.

Bien, tenemos ya la reforma constitucional, pero hay que armonizar, es indispensable armonizar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que, en la redacción que estamos proponiendo, incluya lo que dice la Constitución. Actualmente este artículo 167 no incluye estos delitos, así que es una propuesta tan sencilla como eso, simplemente armonizar el texto constitucional con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una tarea complementaria de la labor que ya se ha hecho por el Congreso, que es armonizar las leyes que corresponden o que derivan de esa misma iniciativa.

Así que esa es la tarea que tenemos hacia adelante, poder lograr esta armonización del artículo 167 para darle fuerza plena a estas tareas que urgen para nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

Iniciativa

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa PRD SENADO LXIV

Ciudad de México, martes, 14 de mayo de 2019

29

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE

El que suscribe **MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA**, Senador de la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , sometemos a la consideración de este Pleno el **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES**, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El doce de abril de 2019, se promulgó la Reforma al Artículo 19 de la Constitución en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para incluir en dicho catálogo actividades delictivas provenientes de organizaciones o estructuras complejas que requieren un tratamiento especial en cuanto a su investigación y persecución. La reforma busca aumentar las capacidades de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, con el fin de combatir a los grupos de delincuencia organizada y las redes de corrupción que existen en el país.

La prisión preventiva se considera la más fuerte de las medidas cautelares, en tanto se establece la privación de la libertad sin que medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia. Dado lo anterior, es necesario que aquellos casos en los que dicha medida puede proceder deben ser específicados de manera clara, más aún en aquellos casos en los que puede ordenarse de oficio.

La Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNODC toma en cuenta lo anterior y propone una redacción que ha sido retomada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.[1]

La reforma al artículo 19 incluyó en el catálogo los delitos contra el transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, normalmente llamado "huachicol", feminicidio, así como los delitos por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, uso de programas sociales con fines electorales, entre otros:

> *"Artículo 19.-... El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia*

[1] Guías Legislativas para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Transnacional y sus Protocolos, pág. 136.

organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud."

La modificación vuelve necesaria la armonización del marco legal aplicable a la prisión preventiva. En 2013 se reformó el artículo 73 constitucional y se facultó al Congreso de la Unión para crear la legislación única en materia procesal penal y de mecanismos alternativos de solución de conflictos. La armonización legislativa de la materia penal para seR concordante con los preceptos constitucionales es uno de los elementos indispensables para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal.[2]

[2] *Proyecto Justicia,* El reto de armonizar la legislación del Sistema de Justicia Penal, 30 de junio de 2016, http://proyectojusticia.org/armonizar-legislacion-sistema-de-justicia/, consultado el 10 de mayo de 2019.

La disposición específica que es necesario modificar es el artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales:

"Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud."

Por tanto, se considera adecuada a siguiente:

PROPUESTA

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 167. Causas de procedencia	**Artículo 167.** Causas de procedencia
...	...
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de	El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso,

personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	**feminicidio**, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos **de uso exclusivo del Ejército**, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

De esta manera, se somete su consideración el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar cómo sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

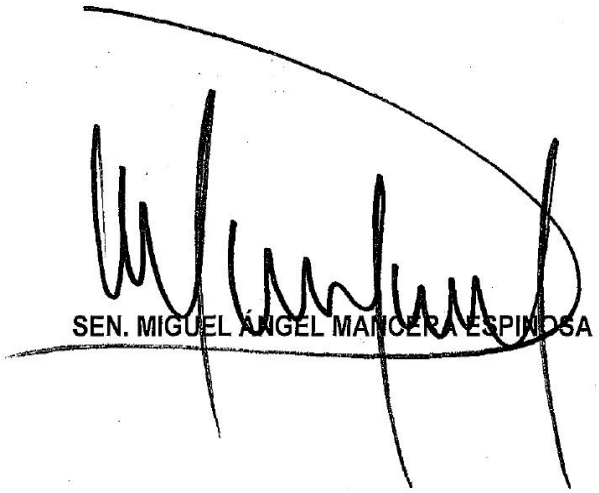
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos **de uso exclusivo del Ejército**, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del la Federación.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

PRD
SENADO
LXIV



7

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Miguel Ángel Mancera. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores.

La Secretaria Senadora Mónica Fernández Balboa: Del Congreso del Estado de Baja California Sur, se recibió un oficio con el que remite proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
XV LEGISLATURA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

005713

CAMARA DE SENADORES
SECRETARIA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

La Paz, B.C.S., a 04 de Junio de 2019

"2019, Año del Normalismo en el Estado de Baja California Sur"
"Conmemorativo del 75 Aniversario de la Benemérita Escuela Normal Urbana Profr. Domingo Carballo Félix"

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
Presidente de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión
PRESENTE..

RECIBIDO

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el día de hoy martes 04 de junio, el Pleno de la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó un Punto de Acuerdo (se anexa copia) consistente entre otros resolutivos en:

PRIMERO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN REMITIR A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19.-

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, **abigeato,** uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - Se derogan todos los ordenamientos que se opongan a la presente reforma.

SEGUNDO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN REMITIR A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167.-
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, **abigeato,** secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS.

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

ATENTAMENTE
Humberto Arce C.
DIP. HUMBERTO ARCE CORDERO
SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO

C.c.p.- Dip. Soledad Saldaña Bañalez.-Para su conocimiento
C.c.p.- Expediente.

187624

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
XV LEGISLATURA

INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL

DIP. HOMERO GONZÁLEZ MEDRANO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

HONORABLE ASAMBLEA

La suscrita Soledad Saldaña Bañalez, Diputada por el Décimo Distrito Electoral e integrante de la Décimo Quinta Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, conforme a las facultades establecidas en los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y 105 de la Ley Reglamentaria de este Poder Legislativo, me permito someter al Pleno de esta Honorable Soberanía **PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE REMITE A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ganadería se define como la actividad económica que consiste en el manejo de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento como alimento o insumo en ciertas actividades industriales. De esta manera el inventario es la población pecuaria para todas las especies que se registran al final de cada año.

Hoy en día el sector ganadero representa uno de los componentes con mayor crecimiento del sector agropecuario a nivel mundial, siendo así la carne de res, el segundo producto ganadero de mayor consumo, superado sólo por la de ave, principalmente pollo.

Desde siempre, la ganadería es una de las actividades más productivas en el país, *se* practica en casi todo el territorio nacional. La producción de carne es la labor más diseminada en el medio rural, pues se realiza, sin excepción, en todas las zonas del país y aun en condiciones ambientales adversas que no permiten la práctica de otras actividades productivas

México es el séptimo productor mundial de proteína animal, esto es muestra del alto potencial de desarrollo que tiene y las ventajas competitivas que presenta el sector.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), da a conocer la actualización del inventario ganadero, lo que permitirá sustentar la toma de decisiones de los agentes que participan en las actividades del subsector y el seguimiento de la política pecuaria nacional. Comprende datos nacionales y por entidad federativa del número de animales de Bovinos para carne y leche, Porcinos, Ovinos, Caprinos, Aves para carne y huevo, Guajolotes, y número de colmenas.

En ese orden de ideas, los datos más recientes del SIAP sobre el valor de la producción pecuaria nacional están actualizados hasta el año 2017. Año en que la producción nacional pecuaria ascendió a más de 423 mil millones de pesos.

Por su parte el inventario nacional ganadero, esta también actualizado al año 2017, existiendo más de 34 millones de cabeza de ganado bovino; más de 17 millones de porcinos; aproximadamente 8.9 millones de ovinos; 8.7 millones de caprinos; más de 566 millones de aves en las que se aprovecha su carne y huevo; 3.6 millones de guajolotes y 1.8 millones de colmenas de abejas con las que se produce miel.

Queremos remarcar la importancia de la ganadería en el desarrollo nacional, su tradición y arraigo en prácticamente todos los estados del país, incluyendo al Estado de Baja California Sur. Lo anterior, para sensibilizar a quienes componen esa Honorable Cámara de Diputados sobre la urgente necesidad de proteger la actividad ganadera nacional del delito del abigeato, que ha repuntado en los últimos años, y que lesiona el patrimonio de los ganaderos del sector social y privado de nuestro país.

En efecto, la incidencia de este delito se ha disparado en las entidades federativas, como lo han denunciados asociaciones nacionales, se habla incluso de un repunte del 150% en los últimos dos años. Migrándose además, del tradicional robo en solitario, a la incorporación de bandas delictivas bien estructuradas que se dedican al robo de ganado ocasionando grandes pérdidas a productores locales de las entidades federativas. El daño patrimonial que más se nota, es en los núcleos ganaderos del sector rural, para quienes el ganado representa todo su patrimonio y fuente de ingresos.

Existe desde luego una cifra oficial recabada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que al año de 2017, se registraron cinco mil 471 casos de robo de ganado a nivel nacional, principalmente en Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua. Esta cifra, no se compara con la cifra negra, esta última por voz del sector ganadero nacional, es mucho mayor a la oficial, ya que corresponde a aquellos ganaderos que no denuncian por miedo o represalias del abigeo *o de las* bandas criminales dedicadas a cometer este ilícito; por desanimo en la procuración e impartición de justicia, al no reflejarse las denuncias que se interponen en persona consignadas ante los jueces y sancionadas penalmente; aunado a que el Abigeato al no estar integrado al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, no existe la convicción del ganadero en ir a denunciar, para que al día siguiente observe y constate que quienes robaron su ganado enfrentan su proceso en libertad, con el riesgo consabido de que pueden tener represalias por parte del abigeo o la banda criminal por haber denunciado la comisión del delito.

En Baja California Sur y seguramente en otras entidades federativas, el abigeato se facilita debido a que la ganadería se desarrolla en amplias extensiones de terreno y en zonas serranas de difícil acceso, que impiden un adecuado control y manejo de semovientes y animales que integran toda la actividad pecuaria. Sin embargo el robo de una o varias unidades de ganado, representan un grave daño al sustento y al patrimonio de las familias de los ganaderos, particularmente de pequeños propietarios, o de aquellos rancheros del medio rural, en el que un animal representa toda su fuente de ingresos.

Por ello, estamos elevando una propuesta para que el delito de Abigeato sea incorporado como un delito que merezca prisión preventiva oficiosa tanto en nuestra Constitución General como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que quien o quienes cometan Abigeato, enfrenten su proceso penal en prisión y no tengan la posibilidad de seguir delinquiendo, fugarse o poner en riesgo la integridad física y patrimonial de los ganaderos que fueron sus víctimas.

Esta reforma al artículo 19 de la Constitución y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se utiliza en el fuero común y federal, responde a una demanda social del sector ganadero nacional, del cual es parte nuestra entidad federativa, respecto de la sensación generalizada de injusticia e impunidad, al ver que los delincuentes están libres por las calles y enfrentando su proceso en libertad.

Como antecedente, el 18 de junio de 2008, comenzó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, un sistema esencialmente garantista.

Producto de la reforma se eliminó la existencia de los delitos graves y se creó una nueva medida cautelar denominada prisión preventiva oficiosa. En el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen aquellos delitos para los cuales aplica la medida.

Recientemente, en el mes de abril de la presente anualidad, se reformo dicho artículo de la Constitución ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los cuales son:

1.- Abuso o violencia sexual contra menores.
2.- Delincuencia organizada.
3.- Homicidio doloso.
4.- Feminicidio.
5.- Violación.
6.- Secuestro.
7.-Trata de personas.
8.- Robo de casa habitación.
9.- Uso de programas sociales con fines electorales.
10.- Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
10.-Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.
11.- Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
12.- Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

13.-Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

14.-Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

15.- Así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

En ese orden de ideas, la libertad personal se entiende como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados.

Sin embargo, constitucionalmente se puede restringir la libertad de una persona, mediante la prisión preventiva cuando se ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad cuando existe riesgo de que la persona a la que se le atribuye su comisión pueda sustraerse de la acción de la justicia; hay posibilidad de que se entorpezca el proceso; pueda darse una reiteración delictiva; o cuando sea factible que se provoquen daños al ofendido y a la sociedad.

Para ello, tal y como se expone en líneas anteriores, el constituyente permanente estableció un catálogo de delitos por los que se debe dictar la prisión preventiva oficiosa con base en las razones y criterios establecidos anteriormente y, sobre todo, para atender las problemáticas que tienen consecuencias sociales de alto impacto.

Es así que, como integrantes del pacto federal, consideramos que el delito de abigeato constituye una problemática que afecta al patrimonio del sector ganadero, y que, como ha quedado asentado, contribuye al desarrollo nacional. Además de ser una actividad que le da de comer a los mexicanos. Por tanto debe ser considerado como un delito que merezca prisión preventiva oficiosa.

De aprobarse esta reforma, se otorgara a la federación y a los estados mayor certidumbre a una actividad primaria fundamental para el desarrollo del país. Porque lo que realmente existe en la actualidad es impunidad y falta de castigo para quienes cometen estos delitos, y para quienes los alcanza la mano de la justicia, enfrentan su proceso en libertad, lo que en muchos casos trae como consecuencia que el imputado regrese al lugar y entorno de los hechos para infringir acoso, amenazas e incluso hasta venganza causando frustración a la víctima, quien se convierte nuevamente en víctima.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su voto aprobatorio para la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN REMITIR A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19.-

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, **abigeato,** uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan todos los ordenamientos que se opongan a la presente reforma.

SEGUNDO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN REMITIR A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167.-

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, **abigeato**, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS.

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO: REMITASE LA PRESENTE PROPOSICION A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA SU CONOCIMIENTO Y EN SU CASO ADHESIÓN AL MISMO.

"Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 4 días del mes de junio del año 2019"

ATENTAMENTE.

DIP. SOLEDAD SALDAÑA BAÑALEZ
PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS.

C.c.p.- Archivo.-

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La iniciativa que reforma el artículo constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Por lo que respecta a la iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

Pasamos al siguiente asunto.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario del Partido Morena)

El suscrito, Dr. **Ricardo Monreal Ávila,** Senador del grupo parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Argumentación

Durante la LXIV Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República ha impulsado diversas reformas constitucionales que atienden la exigencia social de contar con un marco jurídico actual y más justo. Una de las reformas más relevantes que significó un gran paso hacia el verdadero acceso a la justicia, sin duda, es la realizada al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa -publicada el 12 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación-.

A través de esta reforma se adicionaron diversos delitos al catálogo de ilícitos en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa, entre ellos podemos encontrar el feminicidio, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la violencia sexual contra menores, la corrupción, desaparición forzada de personas, el robo al transporte de carga y en materia de hidrocarburos.

Sin embargo, es preciso realizar algunas modificaciones a la legislación penal secundaria en apego al principio de legalidad y con el ánimo de armonizar las normas secundarias con el referido mandato constitucional, en específico es necesario adecuar el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Además, el régimen transitorio de la reforma constitucional señalada mandató al Congreso de la Unión incluir al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las conductas delictivas que fueron añadidas al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, resulta imperativo ajustar aquel dispositivo al aludido texto constitucional.

Por otro lado, es de gran relevancia modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, debido a que el precepto añadido a la constitución -uso de programas sociales con fines electorales- no se considera como delito. Las hipótesis delictivas que se contemplan en la Ley mencionada que se relacionan con programas sociales prevén únicamente las conductas de *condicionar* o bien *amenazar con suspender*, más no refieren a su uso.

Este vació legal permitió que durante los últimos tres sexenios federales no se castigaran las prácticas que permitieron el imperio de la corrupción, pues una de las formas en que ésta se desplegó fue, precisamente, a través del uso discrecional y sistemático de los recursos de los programas sociales para coaccionar al electorado. Otro fenómeno alarmante relacionado con el uso de estos programas con fines electivos era que de manera regular se designaba a quienes los habían administrado como candidatos o bien, como operadores de campañas políticas.

De modo que, para avanzar en el combate efectivo a la corrupción que abarca el uso de los recursos de los programas sociales con fines electorales, es ineludible construir los tipos penales que sancionen tal conducta y en caso de que se actualice pueda ser ordenada la prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior abona al ejercicio genuino del voto activo y pasivo, al igual que a desterrar prácticas que atentan contra la libertad y autenticidad del sufragio, así como al adecuado desarrollo de la función pública electoral.

Por ello, considerar el uso de los programas sociales con fines electorales como delito grave y por ende que constituya una hipótesis en cuya comisión amerite la prisión preventiva oficiosa, es a todas luces proporcional y necesario. Toda vez que supone un acto gravísimo por la naturaleza de dichos programas al significar instrumentos que sirven para acortar la brecha de la desigualdad entre los distintos sectores sociales, de tal forma que, no podemos tomar con ligereza su uso indebido.

Una de las banderas de la cuarta transformación es la erradicación total del fraude electoral, en consecuencia, desde el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República no descansaremos hasta contar con los mecanismos legales adecuados para evitar a toda costa la impunidad de los actos que transgreden el derecho a la democracia.

II. Contenido de la iniciativa

Ley General en Materia de Delitos Electorales

Se propone añadir un artículo que prevé los casos en que podrá ordenarse la prisión preventiva oficiosa.

Se propone añadir dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales y en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa. A continuación se describen:

• Se busca sancionar con prisión de 3 a 8 años y de 300 a 600 días multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

• En el mismo sentido se propone establecer una pena de 4 a 9 años de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Se propone modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de actualizarlo e incluir las conductas delictivas que se añadieron al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin demérito de lo que ha quedado plenamente expuesto en la motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES	
Texto Vigente	Propuesta de modificación
Sin correlativo	**Artículo 6 bis. La prisión preventiva oficiosa sólo podrá ordenarse en los casos de uso de programas sociales con fines electorales que se encuentran previstos en los artículos 7 bis y 11 bis. del presente ordenamiento.**
Sin correlativo	**Artículo 7 bis. Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de a tres a ocho años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.**
Sin correlativo	**Artículo 11 bis. Se impondrán de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.**

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
Texto Vigente	Propuesta de modificación
Artículo 167. … … El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	**Artículo 167. …** … El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, **abuso o violencia sexual contra menores,** secuestro, trata de personas, **robos de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de**

	hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
…	…
…	….
Sin correlativo	**La Ley General en materia de Delitos Electores establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.**
…	…
I. a XI. …	I. a XI. …
Sin correlativo	**XII. Abuso sexual contra menores, previsto en el artículo 261 y violencia sexual contra menores previsto en el artículo 266 en relación con el artículo 266 bis;**
Sin correlativo	**XIII. Feminicidio previsto en el artículo 325;**
Sin correlativo	**XIV. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381;**
Sin correlativo	**XV. Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 y enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, y**
Sin correlativo	**XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto en el artículo 376 Ter.**
…	…

Como ha quedado demostrado, es menester actualizar la legislación secundaria con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en materia penal electoral, pues resulta clave para el combate frontal a la corrupción que la ley reconozca el uso de los programas sociales con fines electorales como delito y se establezcan los supuestos en los que procederá ordenar la prisión preventiva oficiosa.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esa Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se adiciona un artículo 6 bis., un artículo 7 bis. y un artículo 11 bis. a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6 bis. La prisión preventiva oficiosa sólo podrá ordenarse en los casos de uso de programas sociales con fines electorales que se encuentran previstos en los artículos 7 bis y 11 bis. del presente ordenamiento.

Artículo 7 bis. Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de a tres a ocho años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 bis. Se impondrán de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. *Se adiciona una fracción XII, una fracción XIII, una fracción XIV, una fracción XV y una fracción XVI al artículo 167 y se modifica el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:*

Artículo 167. ...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, **abuso o violencia sexual contra menores,** secuestro, trata de personas, **robos de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,** delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

....

La Ley General en materia de Delitos Electores establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

I. a XI. ...

XII. Abuso sexual contra menores, previsto en el artículo 261 y violencia sexual contra menores previsto en el artículo 266 en relación con el artículo 266 bis;

XIII. Feminicidio previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381;

XV. Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 y enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, y

XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto en el artículo 376 Ter.

...

TRANSITORIOS

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 10 de julio de 2019.

Suscribe

Sen. Dr. **Ricardo Monreal Ávila**.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO; ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO; Y AL PÁRRAFO SÉPTIMO SE LE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; ADICIONA EL ARTÍCULO 6 BIS A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

(Presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del grupo parlamentario del PRD)

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Ciudad de México, martes, 13 de agosto de 2019

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA.
PRESENTE

El que suscribe **MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA**, Senador de la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , sometemos a la consideración de este Pleno el **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO, SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEXTO, Y AL PÁRRAFO SÉPTIMO SE LE ADICIONAN LAS FRACCIONES XII, XIII, XIV, XV, XVI Y XVII, AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASI COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6 BIS A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 BIS A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE**

BÚSQUEDA DE PERSONAS; SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 88 DE ESTA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El doce de abril de 2019, se promulgó la Reforma al Artículo 19 de la Constitución en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para incluir en dicho catálogo actividades delictivas provenientes de organizaciones o estructuras complejas que requieren un tratamiento especial en cuanto a su investigación y persecución. La reforma busca aumentar las capacidades de las instituciones procuradoras e impartidoras de justicia, con el fin de combatir a los grupos de delincuencia organizada y las redes de corrupción que existen en el país.

La prisión preventiva se considera la más fuerte de las medidas cautelares, en tanto se establece la privación de la libertad sin que medie una sentencia de autoridad judicial competente en la materia. Dado lo anterior, es necesario que aquellos casos en los que dicha

medida puede proceder deben ser especificados de manera clara, más aún en aquellos casos en los que puede ordenarse de oficio.

Así, partiendo de lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos, señala en su artículo 7.5, en cuanto al derecho a la libertad:

"Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio."

De cuyo tema, al ser objeto de estudio por la Corte Interamericana, ha llegado a adoptar los siguientes criterios, partiendo de los casos objeto de controversia:

Caso Arguelles y otros Vs Argentina, señaló: *"Son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia y que sea proporcional. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse. No*

obstante lo anterior, aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el período de la detención no debe exceder el límite de lo razonable conforme el artículo 7.5 de la Convención."

Asimismo, en el Caso Norin Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chille, al señalar: *"La aplicación de ese principio general a los casos de detención o prisión preventiva surge como efecto combinado de los artículos 7.5 y 8.2. En virtud de ellos, la Corte ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada.* ***En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso.*** *Para que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática. "*

La Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de UNODC toma en cuenta lo anterior y propone una redacción que ha sido retomada en el Código Nacional de Procedimientos Penales.[1]

[1] Guías Legislativas para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Transnacional y sus Protocolos, pág. 136.

La reforma al artículo 19 incluyó en el catálogo los delitos contra el transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, normalmente llamado "huachicol", feminicidio, así como los delitos por hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, uso de programas sociales con fines electorales, entre otros:

"Artículo 19.-... El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud."

La modificación vuelve necesaria la armonización del marco legal aplicable a la prisión preventiva. En 2013 se reformó el artículo 73 constitucional y se facultó al Congreso de la Unión para crear la legislación única en materia procesal penal y de mecanismos alternativos de solución de conflictos. La armonización legislativa de la materia penal para ser concordante con los preceptos constitucionales es uno de los elementos indispensables para el adecuado funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal.[2]

La disposición específica que es necesario modificar es el artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales:

"Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud."

---

[2] *Proyecto Justicia,* El reto de armonizar la legislación del Sistema de Justicia Penal, 30 de junio de 2016, http://proyectojusticia.org/armonizar-legislacion-sistema-de-justicia/, consultado el 10 de mayo de 2019.

En este sentido, la modificación en la ley debe específicar aquellos tipos penales que serán sujetos a prisión preventiva oficiosa, con el fin de que no exista incertidumbre jurídica para la ciudadanía y la medida cautelar no se utilice en casos que no sea proporcional aplicarla.

La propuesta incluye en la nueva redacción los artículos y secciones específicas que se incluyen en cada una de las leyes

Por tanto, se considera adecuada a siguiente:

PROPUESTA

Código Nacional de Procedimientos Penales

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 167. Causas de procedencia ... El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación,	**Artículo 167. Causas de procedencia** ... ... El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los**

el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	**delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea**, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. ... **La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos**

	Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: I. a la XI. ... **XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto y sancionado en los artículos 262, 266, y 266 bis.** **XIII. Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 325.** **XIV. Robo de casa habitación, previsto y sancionado por los artículos 370, 371, 372, 381, y 381 bis.** **XV. Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de**

	funciones, previstos y sancionados en los artículos 220 y 224. XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto y sancionado en los artículos 376 ter, 376 quáter y 381. XVII. Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 390. Para el caso de Trata de personas, se estará a lo previsto en el artículo 7 fracción II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. ...

Ley General en Materia de Delitos Electorales

VIGENTE	PROPUESTA
Sin correlativo	**Artículo 6 bis. El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 9, fracción VIII, cuando la promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, sea a través del uso ilegal de programas sociales; y 11, fracciones II a IV, de esta ley, cuando el condicionamiento sea de programas sociales gubernamentales, o cuando el destino ilegal de fondos, bienes o servicios corresponda a recursos de programas sociales, o cuando el apoyo o servicio sea con recursos de programas sociales.**

Ley General en Materia De Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

VIGENTE	PROPUESTA
Sin correlativo	**Artículo 41 bis. El juez impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa, a los imputados, en los delitos previstos en los artículos 30, 31, 32, 34, 35, 37 y 41, de esta ley.**

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 4. ... Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra.	**Artículo 4. ...** **El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 8, 9 primer párrafo fracciones I, II, III, segundo párrafo inciso d) y cuarto párrafo, 10 párrafo segundo, 11, 12 fracción III, 14, 15 párrafo segundo, 17 a 20, de esta Ley.**

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 88. ...	**Artículo 88....**
Sin correlativo	**El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 83 fracciones II y III, 83 bis, 83 ter fracción III, 83 quat, fracción II, 84, 84 bis, 85 bis, de esta Ley.**

Ley General de Salud

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 480. ...	**Artículo 480....**
Sin correlativo	**El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos**

	previstos en el artículo 475 de esta Ley.

De esta manera, se somete su consideración el siguiente:

Proyecto de Decreto

PRIMERO. Se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea**, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. a la XI. ...

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto y sancionado en los artículos 262, 266, y 266 bis.

XIII. Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 325.

XIV. Robo de casa habitación, previsto y sancionado por los artículos 370, 371, 372, 381, y 381 bis.

XV. Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, previstos y sancionados en los artículos 220 y 224.

XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto y sancionado en los artículos 376 ter, 376 quáter y 381.

XVII. Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 390.

Para el caso de Trata de personas, se estará a lo previsto en el artículo 7 fracción II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

SEGUNDO. Se adiciona el artículo 6 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6 bis. El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 9, fracción VIII, cuando la promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, sea a través del uso ilegal de programas sociales; y 11, fracciones II a IV, de esta ley, cuando el condicionamiento sea de programas sociales gubernamentales, o cuando el destino ilegal de fondos, bienes o servicios corresponda a recursos de programas sociales, o cuando el apoyo o servicio sea con recursos de programas sociales.

TERCERO. Se adiciona el artículo 41 bis a la Ley General en Materia De Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 41 bis. El juez impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa, a los imputados, en los delitos previstos en los artículos 30, 31, 32, 34, 35, 37 y 41, de esta ley.

CUARTO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 8, 9 primer párrafo fracciones I, II, III, segundo párrafo inciso d) y cuarto párrafo, 10 párrafo segundo, 11, 12 fracción III, 14, 15 párrafo segundo, 17 a 20, de esta Ley.

QUINTO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 88....

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 83 fracciones II y III, 83 bis, 83 ter fracción III, 83 quat, fracción II, 84, 84 bis, 85 bis, de esta Ley.

SEXTO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480....

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en el artículo 475 de esta Ley.

Transitorios

ARTÍCULO TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Este decreto será aplicable a todos los casos en lo que se solicite medida cautelar o se debata sobre modificación de medida cautelar, a partir del momento de vigencia del mismo.

SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

PRESIDENCIA DEL SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz:

Tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de medidas cautelares.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

(Presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI)

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.

"Una cosa no es justa por el solo hecho de ser ley, debe de ser ley porque es justa".
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu.

Hace 11 años nos dimos a la tarea de reformar el sistema penal mexicano, construimos en el Congreso la base para dar respuesta al reclamo de millones de compatriotas que pedían justicia. Escribimos esta reforma basados en el artículo 20 de la Constitución, los principios del nuevo sistema penal, los cuales son:

El esclarecimiento de los hechos, la presunción de inocencia, la procuración de justicia, que no quede impune y la reparación del daño.

El sistema basado en la presunción de inocencia tuvo una excepción, está en el artículo 19 constitucional, que aceptamos como Congreso, para prevenir los delitos considerados los más graves, los cuales se hicieron meritorios de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual debería sujetarse a lo establecido en el texto del artículo en comento, que a la letra dice: "el Ministerio Público solo podrá solicitar al Juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por comisión de un delito doloso".

Dicha medida cautelar era para un caso excepcional en el nuevo sistema penal acusatorio, fue construida, en primera instancia, para que las personas a quienes les fuera impuesta no pudieran utilizar el recurso del amparo. La Suprema Corte declaró posteriormente lo contrario, sin embargo, la medida ha seguido siendo utilizada con otros argumentos.

Primero, ha sido vendida como un elemento de combate a la impunidad, ya que el presunto responsable se quedaba en la cárcel a espera de un juicio y con esto cerrábamos la puerta giratoria, en realidad ocultamos debajo del tapete la incapacidad de los policías ministeriales de llevar a cabo una correcta y adecuada investigación.

Lo que está sucediendo es que nosotros necesitamos hacer un cambio, porque además se ha propagado la idea que la prisión preventiva oficiosa evita que los criminales que cuentan con grandes recursos económicos se fuguen. No hay evidencia numérica a este respecto, por lo que además, en cuestión de números, la prisión preventiva oficiosa es un medio para encarcelar a los más pobres, que son quienes no pueden contratar un abogado que les haga un cambio de medida cautelar.

Aun así, lo que hemos estado haciendo es seguir incrementando el artículo 19 constitucional, ir incorporando muchos tipos penales arguyendo su gravedad y no hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre las observaciones de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre los derechos humanos y la prisión preventiva oficiosa.

El acuerdo de la ONU dice que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos habla que la reclusión previa al juicio no debe constituir una práctica general, sino que debe basarse en una determinación individualizada que dichas medidas resulten razonables y necesarias. Es decir, lo que está sucediendo en el artículo 19 es desproporcional y no empata con lo que nos marca la ONU.

La prisión preventiva oficiosa, tal como la estamos usando hoy día, puede ser ley, pero no es justa. Es por ello que la iniciativa pretende adoptar un principio de proporcionalidad, para que se otorgue de forma directa por 90 días, durante los cuales el Ministerio Público deberá acreditar ante el Juez que el acusado puede fugarse, puede perjudicar el desarrollo de la investigación o que las víctimas o los testigos están en riesgo.

Si esto se cumple, el acusado deberá seguir su proceso en prisión. Es decir, lo que se busca con esta reforma es, en esencia, acotar la naturaleza de la prisión preventiva justificada. Si en cambio el Ministerio Público no tiene elementos para justificar la medida del Juez, el Juez de Control deberá sustituir la medida cautelar por alguna otra que no sea la privación de la libertad.

Esta propuesta tiene la intención de modificar el uso de la medida cautelar incorporando el principio de mínima intervención, reduciendo el tiempo de prisión si es que no existe una razón justificada para que las personas se mantengan privadas de la libertad o, en consecuencia, se evite que estén compurgando una pena sin tener juicio o sin tener una sentencia.

Por tanto, se propone la adición del siguiente párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

De imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no podrá exceder de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código. El Ministerio Público podrá solicitar la continuación de la prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Esa sería la propuesta para podernos poner empatados con las recomendaciones de la ONU.

Sería cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

29 OCT 2019

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de medidas cautelares.

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° numeral 1, 169°, 172° y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente, **Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de medidas cautelares,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El 12 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el, "Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.", el cual amplía los delitos que ameritan esta medida cautelar, la cual fue incorporada al texto constitucional en la reforma publicada en el DOF el 18 de junio de 2008; como parte de las reformas constitucionales en materia del Sistema Penal Acusatorio de Carácter Oral, que dio como como secuencia, la incorporación de esta medida cautelar excepcional en el marco jurídico nacional; a continuación se presenta una tabla comparativa de la evolución del párrafo segundo del artículo en comento, de tal forma que se observe con claridad el aumento de los tipos penales que ameritan esta medida.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

Artículo 19 DOF 18/06/2008	Artículo 19 DOF 4/07/2011	Artículo 19 DOF 12/04/2019
Artículo 19. ... El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	**Artículo 19. ...** El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, **trata de personas**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	**Artículo 19. ...** El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos **de abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio,** violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación**, **uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en**

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

Artículo 19 DOF 18/06/2008	Artículo 19 DOF 4/07/2011	Artículo 19 DOF 12/04/2019
		materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea**, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud

Como se observa, las reformas constitucionales en esta materia de 2008 a la fecha, han tenido como intención agregar tipos penales, considerando que la Prisión Preventiva Oficiosa es una medida de protección a las víctimas; en realidad no se ha considerado que la prisión preventiva tenga un efecto positivo en la administración de justicia, sino que a través de mantener en prisión a los probables responsables de una conducta delictiva se puedan reducir los índices de criminalidad asociados a los tipos penales que se agregan.

Antes de discutir su efecto en la seguridad pública, de acuerdo a estadísticas oficiales, se considera pertinente analizar las razones objetivas por las cuales el Juez de Control otorgará esta medida cautelar y bajo que requisitos.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

De la lectura del segundo párrafo del artículo en comento, se lee:

> Artículo 19. ...
>
> El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En primer termino se tiene una acción imperativa, "*sólo podrá solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes...*"; de acuerdo al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (en lo sucesivo CNPP), enumera las medidas cautelares autorizadas por la Ley, las cuales de acuerdo al artículo 153[1] del mismo CNPP, guardan la misma solicitud del Artículo 19 Constitucional, es decir, garantizar los siguientes supuestos:

- asegurar la presencia del imputado en el procedimiento;
- garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo;
- evitar la obstaculización del procedimiento.

Y de acuerdo al último párrafo del artículo 155 del CNPP, se tiene que:

> **Artículo 155. Tipos de medidas cautelares**
>
> ...
>
> Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada,

[1] Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

De donde el artículo 156 del CNPP, establece un parámetro esencial para determinar el tipo de medida cautelar que podrá otorgarse, por el Juez al Ministerio Público a fin de garantizar los supuestos del artículo 153 del CNPP, este parámetro es la "Proporcionalidad", que en los términos del artículo en comento se establece de la siguiente forma:

> **Artículo 156. Proporcionalidad**
>
> El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución.
>
> Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable.
>
> En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado.

Es decir la aplicación de una o varias medidas cautelares responde de forma proporcional, a la "cautela"[2] necesaria para que el juicio se lleve a cabo sin dilaciones, causadas por el sujeto activo del delito; pero es incorrecto pensar que la medida cautelar otorgada es proporcional al delito que se comete en cuanto a su gravedad; es decir que los delitos considerados como "graves", ameritan por si mismos la aplicación de una medida cautelar de mayor impacto sobre los derechos

---

[2] De acuerdo con la Suprema Corte, *"[…] Efectivamente, las medidas cautelares son mecanismos autorizados por la ley para garantizar todo derecho con probabilidad de insatisfacción, mediante la salvaguarda de una situación de hecho,[..]"*. 2012425. I.4o.C.4 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Pág. 2653. MEDIDAS CAUTELARES. CONCEPTO, PRESUPUESTOS, MODALIDADES, EXTENSIÓN, COMPLEJIDAD Y AGILIDAD PROCESAL..

delas personas. Es importante definir a efectos de la exposición de motivos otro término fundamental mencionado en el mismo artículo 156 del CNPP, el de "principio de mínima intervención", que se expresa de la siguiente forma:

> Según el principio de intervención mínima, el Derecho penal debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible.
>
> Siempre que existan otros medios, distintos al Derecho penal, que sean menos lesivos que éste y que logren la preservación de los principios, que en teoría sustentan un Estado de Derecho, éstos serán deseables, pues lo que se busca es el mayor bien social con el menor costo social.[3]

Esto es, que el uso de medidas cautelares debe afectar lo menos posible al gobernado, aún bajo el supuesto de "probable responsable" de la comisión de un delito, obra sobre él la presunción de inocencia como base del Sistema Penal Acusatorio.

Actualmente no se cumplen los principios anteriores que sustentan el sistema legal mexicano, en armonía con los bloques convencionales sobre la protección de los derechos humanos, es decir se incumple con la proporcionalidad de la medida, la presunción de inocencia y la mínima intervención.

Ahora bien, de acuerdo con la información publicada por el portal de la OSC "México Evalúa", no existe una correlación entre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para diversos tipos penales y la disminución de la incidencia delictiva en las entidades, tal como se lee:

> Según la información reportada por el SESNSP en el MES, del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018, la tasa por cien mil habitantes de víctimas por delitos

[3] Sánchez Francisco; J.R.; "El Principio de Intervención Mínima en el Estado Mexicano", Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 2007

del fuero común registradas en las carpetas de investigación aumentó 5% a nivel nacional. Los estados de Quintana Roo (90%), Aguascalientes (51%) y Puebla (46%) presentaron un notorio aumento en sus tasas de víctimas. Los estados con disminuciones importantes fueron Yucatán (58%), Zacatecas (40%) y Sonora (35%).

El MES reporta información relativa a medidas cautelares incluyendo el número de imputados con prisión preventiva oficiosa, con prisión preventiva no oficiosa, con otra medida cautelar y sin alguna medida cautelar. De acuerdo con los datos reportados, la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentó 34% a nivel nacional en el periodo considerado. Los estados con cambios porcentuales más altos fueron Zacatecas (833%), Guanajuato (513%), Durango (395%) y Baja California Sur (354%). Por el contrario, sólo once estados presentaron cambios porcentuales negativos. Los estados con disminuciones notorias en sus tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa fueron Morelos (78%), Nayarit (67%) y Baja California (66%).

El argumento al cual se adscribe la iniciativa discutida en el Senado sugiere que entre más prisión preventiva impuesta habrá una mayor disuasión en el delito y, por tanto, menos víctimas. Para conocer si se cumple esta relación comparamos los cambios porcentuales en las tasas de víctimas e imputados con prisión preventiva oficiosa de un periodo a otro.

Al respecto, se observan disparidades entre las entidades federativas. En 14 estados se cumple la relación de a más imputados con prisión preventiva oficiosa menos víctimas o entre menos imputados con prisión preventiva oficiosa más víctimas. En el resto y la mayoría de las entidades (17 estados) la relación es la contraria. Es decir, a más prisión preventiva oficiosa más víctimas o a menos prisión preventiva oficiosa menos víctimas. El estado de Tabasco tuvo un aumento de 27% en la tasa de víctimas ante ningún cambio en la tasa de imputados con prisión preventiva oficiosa.

> Si bien en nueve entidades ante aumentos en las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa presentaron disminuciones en las tasas de víctimas, en doce entidades sucedió lo contrario. Por ejemplo, en los estados de Guanajuato, Durango y la Ciudad de México las tasas de imputados con prisión preventiva oficiosa aumentaron drásticamente (513%, 395% y 79% respectivamente) mientras que las tasas de víctimas también presentaron aumentos (11%, 20% y 7%) en el mismo periodo. Yucatán es un caso interesante ya que la disminución en la tasa de imputados con prisión preventiva (54%) se acompañó de una reducción de 58% en la tasa de víctimas.[4]

Es decir no existe una real vinculación entre la disminución de la incidencia delictiva y el uso de la prisión preventiva oficiosa como medida de Justicia, en el debate se ha pretendido usar a esta medida cautelar como una medida de Seguridad Pública, para mantener a los "probables responsables" de la comisión de un delito, en prisión, con la expectativa que no reincidan, sin que ello amerite que sean responsables de las conductas por las que los acusa el Ministerio Público; esto a conducido a que él uso de la prisión preventiva sea la única forma con la que cuenta el Estado para intentar revertir un problema de Seguridad Pública, es decir usar la cárcel como una medida de control ante el incremento de la incidencia delictiva, lo cual ha llevado a concluir, que este uso desproporcional de la medida cautelar, sea considerado como una "Pena sin Delito"[5].

De acuerdo al estudio citado en el párrafo anterior, se tienen las siguientes aseveraciones que coinciden con los intereses que persigue la Exposición de Motivos:

---

[4] López, Montserrat y De la Rosa, Carlos; "Prisión preventiva oficiosa: ¿Más cárcel, menos víctimas?", 5 Dic 2018, Portal de México Evalúa, disponible en: https://www.mexicoevalua.org/2018/12/05/prision-preventiva-oficiosa-carcel-menos-victimas/

[5] Ríos Espinoza, C.; "Pena Sin Delito", Percepciones acerca de la finalidad de la Prisión Preventiva en México"., Due Process of Law Foundation 2016.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

La prisión preventiva es una de las antinomias insuperables del sistema de justicia penal. El hecho de que una persona pueda ser privada de su libertad mientras tiene lugar un proceso para determinar su responsabilidad en la comisión de un hecho señalado como delito, ha llevado a algunos expertos a la conclusión de que esta medida constituye siempre una pena anticipada. En el derecho internacional de los derechos humanos y en la manera en que se ha construido la dogmática del derecho procesal penal se mantiene, sin embargo, desde una perspectiva formal, la necesidad de construir normativamente presupuestos que permitan indicar qué medida de prisión preventiva es legítima, siempre que se reúnan ciertas condiciones establecidas para su aplicación.

[...]

El desarrollo contemporáneo del derecho penal en México ha permitido constituir a la prisión preventiva como una medida de prevención, toda vez que lo que se persigue es impedir, de manera expresa, que el imputado cometa más delitos mientras está siendo procesado, de hecho, incluso se ha llegado a conceptualizar a la prisión preventiva como una forma de despresurización y administración de la alarma social que provocan los altos índices de inseguridad y los delitos que generan alarma social.

No obstante, la conformación de la prisión preventiva como medida de prevención conduce a caracterizar al derecho penal como un derecho de defensa social, que se encuentra fuera del marco del Estado Constitucional de Derecho. Más aún, la prisión preventiva es utilizada para preservar la imagen pública de los operadores del sistema, es decir, con criterios claramente políticos, dirigidos a demostrar que existe eficacia en la persecución del delito y que se logran detenciones inmediatas. La prisión preventiva se convierte en indicio de éxito.[6]

---

[6] Ibíd

GRUPO PARLAMENTARIO LXIV LEGISLATURA SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

A la luz del anterior estudio y con la finalidad de enriquecer la premisa que sostiene a la Iniciativa, es conveniente citar a continuación el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a la letra dice:

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Es importante la lectura de numeral 3 que dice, **"[...] La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,[...]"** que es justo lo contrario que sucede en el sistema penal mexicano donde al establecer un tipo penal, se convierte en una regla general y no en una medida de carácter individual que sea proporcional y con mínima intervención.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

De igual forma, es importante la lectura de la Observación General No. 35, sobre el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que extiende la explicación sobre los alcances del artículo en comento, que permite una mejor comprensión de la racionalidad de la prisión preventiva como medida cautelar, integrante del sistema penal y compatible con el bloque convencional de los Derechos Humanos, así se citan a continuación los siguientes numerales de la Observación General No. 35[7]

12. Una detención o reclusión puede estar autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. El concepto de "arbitrariedad" no debe equipararse con el de "contrario a la ley", sino que deberá interpretarse de manera más amplia, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales , además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. Por ejemplo, la reclusión preventiva por la imputación de un delito deberá ser razonable y necesaria en toda circunstancia. Salvo en el caso de sentencias condenatorias impuestas judicialmente por un período determinado, la decisión de mantener a alguien en cualquier forma de reclusión es arbitraria si su justificación no se reevalúa periódicamente

36. Una vez que la persona haya sido llevada ante el juez, este deberá decidir si la persona debe ser puesta en libertad o permanecer en reclusión preventiva, mientras continúa la investigación o está en espera de juicio. Si no existe una base legal para mantener la reclusión, el juez deberá ordenar la puesta en libertad. Si hay motivos para seguir investigando o para juzgar al interesado, el juez deberá decidir si este debe ser puesto en libertad (con o sin condiciones) en espera de otras diligencias porque la reclusión no es necesaria, una cuestión que se trata con más detalle en la segunda oración del párrafo 3 [del artículo 9 del Pacto]. A juicio del Comité, la reclusión

[7] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, CCPR/C/GC/35; 16 de diciembre 2014. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 35, sobre el artículo 9 Libertad y Seguridad Personales.

preventiva no debe implicar una vuelta a la reclusión en dependencias de la policía, sino más bien el ingreso en dependencias distintas bajo una autoridad diferente, donde los riesgos que corren los derechos de la persona recluida pueden ser mitigados con mayor facilidad.

38. La segunda oración del párrafo 3 del artículo 9 dispone que **la reclusión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, sino la excepción**. También especifica que la puesta en libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado, por ejemplo en el acto del juicio o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. Esa oración es de aplicación a las personas en espera de juicio por acusaciones penales, es decir, una vez que han sido imputadas, aunque de la prohibición de la prisión arbitraria enunciada en el párrafo 1 se deriva una prescripción similar antes de la imputación. **La reclusión previa al juicio no debe constituir una práctica general, sino que debe basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria**, habida cuenta de todas las circunstancias, para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito. **La ley debe especificar los factores pertinentes y no debe incluir criterios vagos o excesivamente amplios, como la "seguridad pública". La reclusión previa al juicio no debe ser preceptiva para todas las personas acusadas de un delito concreto, sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Tampoco debe ordenarse por un período en función de la pena que podría corresponder al delito en cuestión, sino de una determinación de la necesidad.** Los tribunales deberán examinar si las alternativas a la reclusión previa al juicio, como la fianza, los brazaletes electrónicos u otras medidas, harían que la reclusión fuera innecesaria en el caso concreto. Si el acusado es extranjero, ese hecho no deberá ser considerado suficiente para determinar la posibilidad de huida del territorio. Una vez se haya hecho una determinación inicial de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse periódicamente para establecer si sigue siendo

razonable y necesaria a la luz de las posibles alternativas. Si el período durante el cual el acusado ha estado recluido alcanza la duración de la pena más grave que podría imponerse por los delitos imputados, el acusado deberá ser puesto en libertad. La reclusión preventiva de menores deberá evitarse en la mayor medida posible.

A la luz de lo anterior se colige lo siguiente:

- **La prisión preventiva oficiosa es una medida arbitraria que incumple los estándares del bloque convencional de derechos humanos que nuestro país ha ratificado.**
- **La imposición de esta medida cautelar contraviene el bloque convencional de derechos humanos, dado que se impone como regla general para los probables responsables de la comisión de un delito; se utiliza como estrategia de seguridad pública y se determina en algunos casos por la media aritmética resultante entre las penas menor y mayor de un delito; lo que ha conducido a que el legislador federal y local, con frecuencia aliente el aumento de penas en los Códigos, con la expectativa del uso de la medida cautelar.**
- **Finalmente, no existe en México, un mecanismo de revisión continuo de medidas cautelares, a pesar de la existencia de las denominadas UMECAS.**

Así la Iniciativa se pronuncia por darle a la autoridad la facultad de revisión de la medida cautelar a fin, de que cada noventa días naturales el Juez de Control deba retirar la prisión preventiva oficiosa, a menos que el Ministerio Público ofrezca los elementos que permitan la continuidad de la medida en cuanto se tengan los elementos **que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad.** Razones sustantivas para la imposición de la medida cautelar no oficiosa.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

Es decir, es necesario que el Ministerio Público tenga la responsabilidad de acreditar que la medida es razonable en cuanto cumple los estándares de proporcionalidad y excepcionalidad y que la afectación es mínima para la persona, presuntamente responsable de la comisión del delito. De lo contrario el Juez podrá sustituir la medida cautelar por una menos lesiva y punitiva contra la seguridad de la persona.

De forma que se presenta el siguiente cuadro comparativo del Proyecto de Decreto.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Dice	Debe Decir
Artículo 167: ... **...**	**Artículo 167: ...** **...**
...	...
Sin Correlativo	**De imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no podrá exceder de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código. El Ministerio Público podrá solicitar la continuación de la prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la**

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

	protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el Proemio que se presenta ante esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Único.- Se **adiciona** el tercer párafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167: ...

...

...

De imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no podrá exceder de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código. El Ministerio Público podrá solicitar la continuación de la prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación; y la protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.

GRUPO PARLAMENTARIO
LXIV LEGISLATURA
SENADO DE LA REPÚBLICA

Claudia Edith Anaya Mota

Senadora de la República

TRANSITORIO.

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Claudia Edith Anaya Mota.

Senadora de la República.

Julio Rementería

Xóchitl Gálvez Ruiz

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Se turna a las Comisiones Unidas...

Senadora Mónica. ¿Me permite, Senadora Claudia Edith? Xóchitl Gálvez. El Senador Madero. El Senador Rementería. El Senador Mancera, para adherirse a la iniciativa. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en cumplimiento de lo que dispone el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

(Dictamen de primera lectura)

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, doce iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones, a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 114, 117, 135 fracciones I y II; 136, 150, 178, 182, 183, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del presente Dictamen.

II. En el apartado **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS"**, se presentan los términos, sentido y alcance de los Proyectos de Decreto.

III. En el apartado **"CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES"**, se expresan los argumentos y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen.

IV. En el apartado relativo al **"TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO"**, se da cuenta del texto del Decreto aprobado por las Comisiones Unidas.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de septiembre de 2018, los Senadores Cruz Pérez Cuellar y Julio Ramón Menchaca Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-832, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó su turno a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

2. El 18 de octubre de 2018, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto

párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armas y armas réplica.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-1893, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dio turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

3. En fecha 25 de octubre de 2018, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, se adiciona una fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se adiciona una fracción al artículo 5 en materia de delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de comunicación, a la Ley de Seguridad Nacional y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vías de Comunicación (sic).

   En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-2290, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura ordenó el turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

4. Con fecha 31 de octubre de 2018, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota y el Senador Eruviel Ávila Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 160 y 162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 del Código Penal Federal, y se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

   En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-2577, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

5. En fecha 13 de diciembre de 2018, la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-5594, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura ordenó el turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

6. Con fecha 20 de diciembre de 2018, el Senador Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-6405, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dio turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

7. El 19 de marzo de 2019, la Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-2P1A.-3060, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

8. En fecha 22 de mayo de 2019, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. CP2R1A.-308, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dio turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

9. En la sesión celebrada el 12 de junio de 2019, se dio cuenta del oficio con el cual el Congreso del Estado de Baja California Sur, remitió el Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. CP2R1A.-1086, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó el turno de la iniciativa de reforma constitucional a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, y la reforma al ordenamiento secundario a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

10. Con fecha 10 de julio de 2019, el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales y se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. CP2R1A.-2025, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dio turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

11. El 14 de agosto de 2019, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos tercero y cuarto, se adiciona el párrafo sexto y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, todos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud.

En esa misma fecha, a través del Oficio No. CP2R1A.-3512, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.

12. Con fecha 29 octubre de 2019, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona (sic) un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En misma fecha, a través del Oficio No. DGPL-1P2A.-5923 la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura dictó turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

13. Mediante oficio CJ/LXIV/0113/2020 de fecha 24 de febrero de 2020, el presidente de la Comisión de Justicia solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República la rectificación de turno de las iniciativas descritas del numeral 1 al 10, con el fin de homologarlas a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda. Dicha petición fue autorizada por la Mesa Directiva del Senado, salvo la iniciativa con Proyecto de Decreto enviado por el Congreso de Baja California Sur, mediante proveído número LXIV/MD/ST/MFB/676/2020 de fecha 27 de febrero de 2020.

14. Finalmente, por oficio CJ/LXIV/0176/2020 de fecha 04 de marzo de 2020, la Comisión de Justicia reiteró a la Mesa Directiva la solicitud de rectificación de turno de la iniciativa con Proyecto de Decreto enviado por el Congreso de Baja California Sur, en lo que respecta a la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuya autorización fue notificada a estas

Dictaminadoras por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva el 06 de marzo del año en curso.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

En el presente apartado se inserta el contenido de las iniciativas consideradas en este Dictamen, señalando en cada caso los argumentos expresados por las y los legisladores iniciantes, así como la propuesta de modificación respectiva.

1. **Iniciativa presentada por los Senadores Cruz Pérez Cuellar y Julio Ramón Menchaca Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsecuentes, así como la fracción XII del actual párrafo séptimo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos y se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.**

La iniciativa propone reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de especificar en cada uno de esos ordenamientos legales los tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa.

De forma puntual, los senadores proponentes exponen los motivos por los cuales consideran que deben contemplarse en la aplicación de esta medida cautelar cuatro conductas delictivas tipificadas en el Código Penal Federal y en las diversas leyes especiales que aborda cada una de ellas a saber, los delitos en materia de

corrupción, robo de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos y en materia electoral.

Señalan los senadores promoventes la necesidad de imponer la prisión preventiva de oficio, dado el incremento que se ha suscitado en este tipo de delitos, así como el daño que causan a la hacienda pública y a la sociedad, para lo cual refieren una serie de datos que reflejan la problemática que actualmente padece nuestro país en las mencionadas materias.

Por lo anterior, plantean queden de la siguiente manera las reformas propuestas:

Artículo Primero. Se adicionan los párrafos séptimo, octavo y noveno, recorriendo en su orden los subsiguientes; así como la fracción XII del actual párrafo séptimo; al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

...

...

...

...

...

...

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa, diversos a los que se refiere el párrafo anterior.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

I. a XI. ...

XII. Hechos de corrupción, previstos en los artículos 214, fracciones III a VI; 215, fracciones VI a IX, XIV, XV y XVI; 217, 219, 220, en relación con el último párrafo; 221, 222, en relación con el párrafo décimo primero; 223, en relación con los párrafos séptimo y octavo y 224 en relación con el párrafo séptimo.

...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra. **Además de los previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los delitos señalados en los artículos 10, incisos a) y b); 11 y 12 de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.**

Artículo Tercero. Se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley. **Los delitos señalados en los artículos 11, fracciones II y III; 14 y 15 de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.**

Artículo Cuarto. Se adiciona un artículo 92 a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

> **Artículo 92.- Los delitos señalados en los artículos 83, fracción III; 83 Bis fracción II, 84 y 86 fracción II, párrafos segundo y tercero, de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.**

2. Iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armas y armas réplica.

La iniciativa tiene por objeto establecer prisión preventiva oficiosa por delitos cometidos con medios violentos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Así, el senador promovente plantea reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para castigar el uso de "armas réplica" en la comisión de delitos, así como de las armas no funcionales, toda vez que simulan armas reales y son empleadas para ocasionar una impresión de amenaza a la vida y a la integridad física, tal y como acontece cuando se emplea un arma de fuego, con el consecuente menoscabo de la libertad y la capacidad de quienes son víctimas de este tipo de conductas.

Al efecto, reseña los casos de países como Canadá, Australia y Estados Unidos en los que se ha prohibido la importación y fabricación de "armas réplica" y se han emitido alertas sobre su utilización. Asimismo, señala la problemática que se presenta en varias entidades de la República y las acciones legales que se han tomado en la Ciudad de México y Jalisco, donde ya se encuentra tipificado este delito.

Consecuentemente, la iniciativa considera que debe establecerse la prisión preventiva oficiosa para quien utilice armas réplica, en donde la victima sufre

violencia moral equiparada, adicionando un cuarto párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto propuesto es el siguiente:

> **Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.**

3. **Iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, se adiciona una fracción al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se adiciona un párrafo en materia de delitos contra las vías ferroviarias y vías generales de comunicación al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vías de Comunicación.**

La iniciativa tiene por objeto establecer que los delitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación serán considerados como delitos graves. Entre lo propuesto destaca:

1) Considerar los actos ilícitos cometidos en contra del transporte ferroviario como una amenaza a la seguridad nacional.

2) Se propone que los delitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación sean parte del catálogo de delitos graves, por medio del aumento de las penas, de manera que los sujetos que lleven a cabo conductas que actualizan el tipo penal, no sean susceptibles de salir bajo fianza.

3) Aumentar las sanciones a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte, interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.

4) Castigar a quienes indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, recibirá una pena de tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 100 UMA.

5) Considerar el delito de robo en las modalidades señaladas en los artículos 371, párrafo tercero y 381 fracciones XVI y XVI, dentro de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Para los fines anteriores, plantea modificar los artículos 5 de la Ley de Seguridad Nacional, 533 de la Ley General de Vías de Comunicación y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para lo cual propone queden de la siguiente manera las reformas:

Ley de Seguridad Nacional:

Artículo 5

Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. a XI.

XII. **Actos ilícitos realizados contra el transporte ferroviario**, y

Ley General de Vías de Comunicación:

Artículo 533

Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, **recibirán una pena de dos a nueve años de prisión y multa de 200 a 1000 unidades de medida y actualización.**

Artículo 534

El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus

desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **recibirá una pena de tres meses a un año de prisión y multa de 200 a 100 (sic) unidades de medida y actualización.**

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

XII. Los previstos en el artículo 381, fracción (sic) XVI y XVII y 371.

4. **Iniciativa presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota y el Senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 160 y 162 último párrafo y se derogan las fracciones I, III y V del artículo 162 (sic) del Código Penal Federal, y se reforman los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84 Bis y 85 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.**

Propone reformar los artículos 160 y 162, así como derogar las fracciones I, III y V del mismo artículo 162 del Código Penal Federal, que se refieren a la portación de armas. En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos considera necesario incorporar de manera explícita el decomiso, en atención a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pretende que la portación de armas sea considerada dentro de las hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sin importar el calibre, dado que resultan igual de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del Ejército. Finalmente, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales es para establecer que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal de armas de fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de

prisión preventiva oficiosa y en consecuencia siga su proceso en detención. Entre lo propuesto destaca:

1) Precisar que quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos fabricados para el ataque o la defensa con la finalidad de agredir, se le impondrá prisión de tres a ocho años, y de quinientas a mil Unidades de Medida de Actualización;

2) Precisar que los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas que requieran para el ejercicio de su encargo;

3) Aumentar las penas de 3 a 8 años de prisión, y de cien a cuatrocientos días de multa, así como el decomiso a quien porte cierto tipo de armas de fuego sin tener la licencia correspondiente;

4) Contemplar el decomiso de las armas como parte de las sanciones;

5) Considerar como delincuencia organizada el acopio, portación y tráfico de armas de fuego previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo; y

6) Señalar que la persona juzgadora, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, y la portación ilegal de armas de fuego."

Para lo cual se enuncian de la siguiente manera las reformas propuestas:

Código Penal Federal:

Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos **fabricados para el ataque o la defensa con la finalidad de** agredir, se le impondrá prisión de tres a **ocho** años **y** de **quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, así como el decomiso de los mismos**.

Artículo 162. Se aplicará de **tres a ocho años de prisión, además de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización, así como el** decomiso:

I. Se deroga

II. ...

III. Se deroga

IV. ...

V. Se deroga

...

Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar, de acuerdo a las disposiciones de Ley, las armas que requieran para el ejercicio de su cargo.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 81. Se sancionará con penas de **tres a ocho** años de prisión y de cien a **cuatrocientos** días multa, **así como el decomiso**, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83. ....

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, **así cuando como el decomiso,** cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Bis. ...

I.- Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, **así como el decomiso**, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b) del artículo 11, de esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y

II.- Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, **así como el decomiso**, si se trata de cualquiera otra de las armas en el artículo 11 de esta Ley.

...

...

Artículo 83 Ter. ...

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II.- Con prisión de **cuatro** a siete años y de **cien a trescientos** días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cincuenta a doscientos días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quat. ...

I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, **así como el decomiso,** si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y

II. Con prisión de **cuatro a siete años** y de **doscientas a quinientas** días multa, **así como el decomiso,** si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo 83 Quintus. ...

I.- Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, **así como el decomiso,** cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores.

II.- Con prisión de **tres a ocho** años y de **doscientas a cuatrocientas** días multa, **así como el decomiso**, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 84 Bis. Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión, **así como el decomiso.**

...

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa, **así como el decomiso**, a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada:

Artículo 2°. - ...

...

II.- Acopio, portación y tráfico de armas de fuego, previstos en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

5. **Iniciativa presentada por la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona la Fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.**

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

La iniciativa tiene por objeto incrementar la punibilidad para el tipo penal relacionado con la problemática que genera la captura ilegal de la totoaba macdonaldi, a efecto de mejorar la procuración e impartición de justicia en materia de responsabilidad penal ambiental y, sobre todo, incluir en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales la hipótesis de delitos contra el ambiente previstos en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal.

Lo anterior, toda vez que la totoaba es una especie en peligro de extinción, endémica del Golfo de California, utilizada para la gastronomía china, en virtud de que se le atribuyen propiedades afrodisíacas y curativas, para lo cual se comercializa su buche, mismo que ha alcanzado 15,000 dólares a pie de lancha, y hasta los 60,000 dólares el kilo en los mercados en China. Este valor rebasa el kilogramo de cocaína, cuyo valor alcanza hasta los 30,000 dólares.

La captura de esta especie ha ocasionado daños colaterales, tales como la posible extinción de la vaquita marina, ya que los pescadores al lanzar las redes para capturar a la totoaba, capturan de manera incidental a las vaquitas marinas.

En nuestro país se llevan a cabo operativos de revisión a las embarcaciones, así como a los vehículos terrestres que circulan por los caminos adyacentes, a fin de erradicar las actividades de tráfico o captura, posesión, transporte, acopio e introducción al país o extracción de ejemplares, productos y subproductos de totoaba, mediante acciones de inspección y vigilancia en la cadena de tráfico. Para ello, la PROFEPA en coordinación con la SEDENA, la SEMAR y las policías, llevan a cabo recorridos de vigilancia en el Sector Centro de San Felipe, municipio de Mexicali, Baja California y en el polígono de la reserva de la biósfera y sus inmediaciones.

La reforma a nuestro sistema procesal penal en el 2008 y la transición a un Código Nacional de Procedimientos Penales, establecieron nuevos parámetros para la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Como consecuencia, el catálogo de los delitos que merecen este tipo de medida cautelar se redujo.

En este contexto, dada la naturaleza del propio sistema procesal adoptado y tomando en consideración principios como uso excepcional, presunción de

inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, entre otros, los delitos contra el ambiente que antes de la aplicación del sistema procesal penal acusatorio eran considerados como graves, quedaron excluidos del catálogo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé la prisión preventiva oficiosa.

A este respecto, subraya que en el año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se reformó el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente, así como el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, vigente en ese momento. Esta reforma incluyó en el catálogo de delitos "graves" (prisión preventiva) diversos delitos contra el ambiente, en particular los señalados en el artículo 420, únicamente cuando se realizaban las conductas previstas en cualquiera de sus cinco fracciones con agravante, es decir, si se realizaban con fines comerciales o si el delito se cometía dentro de un área natural protegida.

Esta situación merma el impacto de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno, en especial de las instancias de carácter federal, ya que además de causar severas afectaciones al patrimonio natural del país, menoscaba la economía de este. Lo anterior dado que los recursos económicos, materiales, tecnológicos y humanos empleados en la prevención del delito ambiental y en específico del tráfico del "Buche de Totoaba" (vejiga natatoria de la Totoaba Macdonaldi) se encuentran íntimamente relacionados.

Reformas propuestas:

Código Penal Federal:

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I... a V...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167. Causas de procedencia

(...)

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

(...)

XII. Contra el ambiente, en los casos a que se refiere el artículo 420 fracción IV, con relación al último párrafo del mismo artículo.

6. Iniciativa presentada por el Senador Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa tiene por objeto aplicar prisión preventiva oficiosa a quienes cometan el delito de robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en caminos o carreteras.

Señala que, a pesar de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de delitos carreteros, este se sigue cometiendo, pues como bien lo señala el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2018 se cometieron 8 mil 727 robos a los transportistas, lo que significa un incremento de este delito en 4.10% si lo comparamos contra el mismo periodo del año anterior.

Con base en las cifras anteriores, destaca el proponente que en los primeros nueve meses del año 2018, de los atracos cometidos, 7 mil 328 fueron cometidos con

violencia, es decir 87% del total. De ahí que el índice del robo a transportistas en México continúa en números rojos y sigue siendo la mayor preocupación del sector, ya que ha tenido que absorber los costos para reforzar su seguridad.

En una entrevista a "T21", el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) comentó que "lamentablemente los costos por inseguridad en todo el sector son incuantificables, el peaje lo podemos cuantificar, el incremento del combustible también, pero el de la inseguridad no, porque es algo constante que nos afecta a todos".

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), documentó que solo en septiembre de 2018 hubo 942 asaltos a transportistas, o sea, apenas 1% menos que en el mismo mes del año pasado, aunque el número de casos con violencia siguió al alza con 9.7 por ciento.

Señala que en el reporte de *SensiGuard Supply Chain Intelligence Center*, se establece que el robo al transporte de carga en México continúa en ascenso y el *modus operandi* de la delincuencia también se ha vuelto más violento. El estudio detalló que la rapiña y el atraco en instalaciones fueron las otras formas en que efectuó el robo con 6 y 1% respectivamente, además de que el 93% de los casos ocurren cuando la unidad está en movimiento, mientras que el 5% son en estacionamientos no seguros y el resto en otras locaciones.

Según la información, entre julio, agosto y septiembre de 2018 se cometieron 3 mil 775 robos al transporte de carga, lo que significó un incremento del 5% en comparación con el mismo trimestre de 2017, pero 41% más a diferencia de igual periodo de 2016. De los estados más críticos fueron el Estado de México con mil 60 robos (28% del total) y Puebla con 969 (25%) a estas entidades le siguieron Michoacán, Tlaxcala, Nuevo León y Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Guanajuato.

Ahora bien, las carreteras con mayor riesgo fueron la México-Veracruz con 18% de los robos, seguido por la México-Saltillo con el 11%, la Maxipista con el 10%, Circuito Exterior Mexiquense 9%, México Zacatepec y Uruapan-Lázaro Cárdenas con el 6% ambas. En cuanto a los productos robados los alimentos y las bebidas continúan en la preferencia de los delincuentes con el 33% de la carga robada, le

siguen los elementos de construcción (10%), bebidas alcohólicas (8%), autopartes (7%), misceláneos (6%) y químicos (5%).

Refiere que otras estadísticas delictivas en materia de robo al autotransporte de carga señalan a San Luis Potosí con 481, Oaxaca con 366, Querétaro con 312, la Ciudad de México con 303 y Chiapas con 148. Quizás con una estadística más baja se encuentran Chihuahua con 90 eventos, Guanajuato con 89, Quintana Roo con 82, Baja California con 80, Sonora con 71, Hidalgo con 67, Veracruz 51, Tamaulipas 35, Coahuila 27, Durango 25, Zacatecas 21, Guerrero 19 y Sinaloa 14 robos.

Durante su visita a Jalisco el presidente nacional de CANACAR indicó que se han incrementado los robos al transporte en más del 200%, lo que representa más de tres mil 900 robos y 15 choferes que perdieron la vida a consecuencia de los robos durante el 2018, asimismo señala que se ha focalizado el 93%, Puebla, Veracruz, Estado de México y Michoacán y que el mayor índice de robos hablando de tramos carreteros es el corredor México-Puebla-Veracruz y que ya se extendió a Tlaxcala.

Por otra parte, diversos grupos empresariales hicieron un llamado enérgico al gobierno federal para garantizar la seguridad del transporte de mercancías, debido a que las pérdidas económicas que provocan los robos ya son alarmantes. Desde la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), señalan que como el robo en las carreteras ha afectado a la industria por esas materias primas que ya no llegan a los centros de consumo o por los productos que van de importación y exportación.

En ese sentido, es por lo que se propone reforzar el régimen de las medidas cautelares previstas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para aquellas personas imputadas que sigan manifestando su conducta delictiva en el robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, con la finalidad de que se pueda aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Para lo cual quedaría de la siguiente manera la reforma propuesta:

Código Nacional de Procedimientos Penales:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.

...

...

...

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. a **X.** ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Robo a los servicios de autotransporte federal de carga en caminos o carreteras, previstos en los artículos 381, 376 Ter, 376 Quáter y 381.

7. **Iniciativa presentada por la Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XII, al artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales.**

Señala la senadora promovente que, debido al incremento del delito de robo al autotransporte de carga y sus afectaciones a este sector y a sus usuarios, propone se consideré la prisión preventiva oficiosa para dicho tipo penal.

Al respecto, refiere que el transporte federal de carga en México constituye un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, además de un modo de integración nacional, por lo que durante el 2017 se movilizó el 68.6% del total de las cargas mediante el transporte terrestre de carga, el 55.7% en el autotransporte de carga y el 12.9% restante en el transporte ferroviario de carga, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, la senadora cita cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), respecto a que esta actividad contribuye con el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional. Añade que, en 2017, el autotransporte movilizó 546.6 millones de toneladas, equivalente a 81% de la carga total trasladada en todos los modos de transporte y 81% de la carga movilizada vía terrestre (autotransporte y ferrocarril), de conformidad con datos brindados por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga en su Agenda Estratégica.

Refiere la senadora iniciante que, desafortunadamente, desde hace algunos años las carreteras de gran parte del territorio nacional se han visto amenazadas por la inseguridad pública generada por la delincuencia, quienes aprovechan la organización y la vulnerabilidad de los sujetos pasivos del delito para perpetrar el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, hechos que pueden derivar en otros ilícitos como la privación ilegal de la libertad, secuestro u homicidio de las personas que vayan a bordo de las unidades automotoras, o bien, que más allá del robo de unidades y mercancías, éstas sean utilizadas para cometer otros ilícitos, lo cual resulta muy preocupante por la recurrencia de este delito y las pérdidas económicas y humanas que ocasiona.

Al respecto, el robo de las unidades (tracto camiones, autobuses y remolques o cajas), tiene un impacto negativo en la industria del autotransporte, ya que se estima que el 50% de las unidades y de los vehículos que son sustraídos ya no son recuperados, lo que sin duda afecta la competitividad del sector. Por su parte, el robo de unidades de pasajeros (autobuses) se ha incrementado en un 280% en los últimos 4 años.

Bajo ese contexto, establece las siguientes consideraciones en torno a la problemática:

a) El delito de robo al autotransporte de carga afecta seriamente a este sector y a sus usuarios por el incremento de robo de unidades y mercancías. El estudio realizado para la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), denominado "Agenda Estratégica ante el Impacto de la Inseguridad en el Sector de Autotransporte de Carga" de mayo de 2018, concluye en lo siguiente:

- ✓ En solo 7 años, el robo al sector del autotransporte de carga paso de 4,959 delitos a 10,230, teniendo un crecimiento del 106%.
- ✓ Los estados de Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, concentran aproximadamente el 75% de los delitos al sector.
- ✓ Los costos incurridos por la inseguridad en 2017 ascendieron a 92,500 millones de pesos, que representan el 0.5 por ciento del PIB Nacional.

b) El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el periodo de enero a diciembre del 2018 se han reportado un total de 12,206 robos a autotransportes de carga, de los cuales 10,371 fueron con violencia y 1,835 sin violencia. En comparación con los 3,027 del mismo periodo de 2012, con un incremento del 209% en 2018.

c) La entonces Procuraduría General de la República informó que, en materia de delitos carreteros al mes de diciembre de 2018, se generó la siguiente información:

- ✓ Se han presentado 3,244 Carpetas de Investigación en el fuero federal de las cuales el 70% se han presentado con violencia.
- ✓ Se han detenido a 223 imputados de los cuales 85 se encuentran en prisión preventiva, el resto está en libertad por los supuestos establecidos en los artículos 140 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Señala que a pesar de la reforma del 21 de febrero de 2018, la incidencia delictiva ha continuado en aumento como lo demuestra la estadística publicada por diferentes instituciones públicas y privadas.

Según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), al mes de diciembre de 2018, los reportes de vehículos robados al sector asegurado (el 35% de ellos corresponde al autotransporte de carga a nivel nacional) asciende a 11,362 reportes de robo en 2018, lo cual representa un incremento del 13% en comparación con los 10,042 reportes del 2017.

De acuerdo con el reporte del tercer trimestre de 2018 de *SensiGuard Supply Chain Intelligence Center*, los estados de Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, concentran aproximadamente el 75% de los delitos al sector. Asimismo, señala que en dicho trimestre se registraron un total de 3,775 incidentes de robo a transporte de carga, lo que implica un incremento del 41% respecto al mismo periodo de 2016 y un incremento del 5% con relación al tercer trimestre de 2017.

El reporte refiere que las carreteras con mayor incidencia fueron la de México-Veracruz con 18% de los robos, seguido por la de México-Saltillo con el 11%, Maxipista con el 10%, Circuito Exterior Mexiquense 9%, México Zacatepec y Uruapan-Lázaro Cárdenas con el 6% ambas. En cuanto a los productos robados, los alimentos y las bebidas continúan en la preferencia de los delincuentes con el 33% de la carga robada, le siguen los elementos de construcción (10%), bebidas alcohólicas (8%), autopartes (7%), misceláneos (6%) y químicos (5%).

Por otro lado, en el robo al transporte de pasajeros, la senadora expone que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que, respecto a la incidencia delictiva del fuero común, referente al robo en transporte público colectivo, de enero a noviembre de 2018 se reportaron 12,655 casos de dicho delito, de los cuales 10,755 fueron cometidos con violencia, lo que implica más del 85% de eventos de esta naturaleza.

Según datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), de enero a noviembre de 2018 se reportaron casi 1000 asaltos en autobuses, lo cual representa un 280% más que en el 2017. También existe el registro de 10, 000 unidades que en promedio han sido secuestradas en los últimos 4 años.

Conforme a datos brindados por la CANAPAT, la senadora afirma que el autotransporte de pasaje y turismo nacional e internacional es de gran importancia en nuestro país, ya que anualmente moviliza en territorio nacional a más de 3,750 millones de personas por motivos de negocios, visitas familiares, turismo o cualquier otra actividad, generando más de 1.3 millones de empleos directos e indirectos, por lo que contribuye al 2.4 % del PIB nacional.

Recientemente se aprobó en el Congreso de la Unión, la reforma al segundo párrafo del artículo 19 constitucional por la que se incorporan 9 delitos al catálogo que

amerita prisión preventiva oficiosa, entre esos ilícitos se consideró al de "robo de transporte de carga en todas sus modalidades". Sin embargo, se excluyó de manera desafortunada al robo del autotransporte de pasajeros, turismo o transporte privado, circunstancia que desde la perspectiva jurídica impedirá que al perpetrarse este delito pueda imponerse a los detenidos, que eventualmente pudiera haber, la prisión preventiva oficiosa, dando la pauta para la impunidad al quedar libres y poderse sustraer de la acción de la justicia.

Señala la legisladora proponente que, al igual que en el "robo de transporte de carga en todas sus modalidades", cuando el delito se perpetra en autotransporte de pasajeros, turismo o transporte privado, también la afectación ocurre en el patrimonio de las personas, físicas o morales, colocando en riesgo la integridad física e incluso la vida de los operadores, de los pasajeros y de las personas que se trasladan por carretera, además de las afectaciones y pérdidas económicas que se generan al sector turístico por las mismas formas violentas, organizadas y sofisticadas que utilizan para cometer este tipo de delitos.

Por lo que, con la idea de contribuir al combate de este delito y a la impunidad generada por el mismo, estima necesario incorporar al catálogo de ilícitos contenidos en el sexto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales a las conductas descritas en el artículo 376 Ter del Código Penal Federal referidas al robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, para que se encuentre atendida la necesidad de que todas las hipótesis previstas en las disposiciones penales respecto de este tipo de delitos, sean de las que ameritan prisión preventiva oficiosa, en aras de preservar el Estado de derecho de nuestro país, lo que permitirá complementar la reforma al artículo 19 constitucional realizada en días pasados.

Para lo cual quedaría de la siguiente manera la reforma propuesta:

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

...

...

...

...

I. a XI.

XII. **El robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado previstos en los artículos 376 Ter del Código Penal Federal, y sus agravantes previstas en el artículo 377 y en el artículo 381 del mismo ordenamiento legal.**

...

8. **Iniciativa presentada por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.**

La iniciativa tiene por objeto ampliar los delitos por los que el juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, a fin de homologarlos con los establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como:

I. Violencia sexual contra menores;
II. Feminicidio;
III. Robo en casa habitación;
IV. Uso de programas sociales con fines electorales;
V. Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones;
VI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades;
VII. Delitos en materia de hidrocarburos;
VIII. Delitos en desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; y
IX. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso del Ejercito.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Para lo cual quedaría de la siguiente manera la reforma propuesta:

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos **de uso exclusivo del Ejército**, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

9. **Oficio del Congreso del Estado de Baja California Sur con el que remite Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.**

Con fecha 4 de junio de 2019, el Pleno de la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó en Sesión Pública Ordinaria un Punto de Acuerdo consistente, entre otros resolutivos, en:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

PRIMERO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN REMITIR A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, **abigeato**, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley

en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación,

SEGUNDO. - Se derogan todos los ordenamientos que se opongan a la presente reforma.

SEGUNDO: EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DEL DERECHO DE INICIATIVA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TIENE A BIEN A LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

DECRETO

SE REFORMA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, **abigeato**, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

TRANSITORIOS.

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en et Diario Oficial de la Federación.

10. Con fecha 10 de julio de 2019, el Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales y reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa tiene por objeto considerar el uso de los programas sociales con fines electorales como delito grave, y por ende que constituya una hipótesis en cuya comisión amerite la prisión preventiva oficiosa. Toda vez que, de acuerdo con el senador, supone un acto gravísimo por la naturaleza de dichos programas al significar instrumentos que sirven para acortar la brecha de la desigualdad entre los distintos sectores sociales, de tal forma que no se puede tomar con ligereza su uso indebido.

Por lo que propone añadir dos nuevos tipos penales relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales y en cuya comisión procede la prisión preventiva oficiosa. A continuación se describen:

- Se busca sancionar con prisión de 3 a 8 años y de 300 a 600 días multa a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
- En el mismo sentido se propone establecer una pena de 4 a 9 años de prisión y de 500 a 1000 días multa al servidor público que durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el

electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición.

Quedando la reforma propuesta de la siguiente manera:

Ley General en Materia de Delitos Electorales:

Artículo 6 bis.

La prisión preventiva oficiosa sólo podrá ordenarse en los casos de uso de programas sociales con fines electorales que se encuentran previstos en los artículos 7 bis y 11 bis del presente ordenamiento.

Artículo 7 bis.

Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de a tres a ocho años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 bis.

Se impondrán de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición. (sic)

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167. ...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, **abuso o violencia sexual contra menores,** secuestro, trata de personas, **robos de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,** delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

...

...

La Ley General en materia de Delitos Electores establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

I. a XI. ...

XII. Abuso sexual contra menores, previsto en el artículo 261 y violencia sexual contra menores previsto en el artículo 266 en relación con el artículo 266 bis;

XIII. Feminicidio previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381;

XV. Ejercicio abusivo de funciones previsto en el artículo 220 y enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, y

XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto en el artículo 376 Ter.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

...

11. Con fecha 14 de agosto de 2019, el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con "Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero y cuarto (sic); adiciona el párrafo sexto y al párrafo séptimo se le adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como se adiciona el artículo 6 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales; se adiciona el artículo 41 Bis a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; se reforma el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; se adiciona un segundo párrafo al artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud; en materia de prisión preventiva oficiosa".

Propone establecer la prisión preventiva oficiosa en los casos en que se cometan delitos de abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La iniciativa tiene por objeto ampliar los delitos por los que el Juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa. Entre lo propuesto, destaca:

1) Establecer que el Juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, uso de

programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos de hidrocarburos, delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, delitos electorales, desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y extorsión;

2) Determinar que las leyes en la materia establecerán los supuestos que ameritarán prisión preventiva oficiosa; y

3) Precisar que se ordenará prisión preventiva oficiosa en el caso de delitos en materia electoral cuando la promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación sea a través del uso ilegal de programas sociales gubernamentales o cuando el destino ilegal de los fondos corresponda a recursos de programas sociales.

Para lo cual quedaría de la siguiente manera la reforma propuesta:

Código Nacional de Procedimientos Penales:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso**

exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

...

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. a la XI. ...

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto y sancionado en los artículos 262, 266, y 266 bis.

XIII. Feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 325.

XIV. Robo de casa habitación, previsto y sancionado por los artículos 370, 371, 372, 381, y 381 bis (sic).

XV. Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, previstos y sancionados en los artículos 220 y 224.

XVI. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, previsto y sancionado en los artículos 376 ter, 376 quáter y 381.

XVII. Extorsión, previsto y sancionado en el artículo 390.

Para el caso de Trata de personas, se estará a lo previsto en el artículo 7 fracción II de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

Ley General en Materia de Delitos Electorales:

Artículo 6 bis.

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 9, fracción VIII, cuando la promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, sea a través del uso ilegal de programas sociales; y 11, fracciones II a IV, de esta ley, cuando el condicionamiento sea de programas sociales gubernamentales, o cuando el destino ilegal de fondos, bienes o servicios corresponda a recursos de programas sociales, o cuando el apoyo o servicio sea con recursos de programas sociales.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas:

Artículo 41 bis.

El juez impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa, a los imputados, en los delitos previstos en los artículos 30, 31, 32, 34, 35, 37 y 41, de esta ley.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos:

Artículo 4 ....

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 8, 9 primer párrafo fracciones I, II, III, segundo párrafo inciso d) y cuarto párrafo, 10 párrafo segundo, II, 12 fracción III, 14, 15 párrafo segundo, 17 a 20, de esta Ley.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:

Artículo 88. ...

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en los artículos 83 fracciones II y III, 83 bis, 83 ter fracción 111, 83 quat, fracción II, 84, 84 bis, 85 bis, de esta Ley.

Ley General de Salud:

Artículo 480. ...

El juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados, en los delitos previstos en el artículo 475 de esta Ley.

12. Con fecha 29 octubre de 2019, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona (sic) un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Propone establecer que de imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no exceda de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También propone que el Ministerio Público pueda solicitar la continuación de la prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud, según propone la Senadora, deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría (sic) o el funcionario que en él delegue esa facultad (sic).

Para tal efecto, propone adicionar un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el siguiente texto normativo:

Artículo 167. ...

...

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

...

De imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no podrá exceder de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código. El Ministerio Público podrá solicitar la continuación de la prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación; y la protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. (sic)

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

PRIMERA.- El 12 de abril de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1]. Dicha reforma tuvo como objeto principal la modificación al segundo párrafo del citado artículo 19 en la porción normativa relativa a la medida de prisión preventiva oficiosa que puede ordenar el juez por la comisión de delitos específicos, previstos en el ordenamiento constitucional.

Como consecuencia de la reforma mencionada, se incorporaron nuevos delitos en los que aplicará de oficio la prisión preventiva, el texto vigente de dicha disposición quedó de la siguiente forma:

> "El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio**, violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al**

[1] Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. DOF: 12/04/2019. Consultado el 9 de octubre de 2019. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/35nGVik.

> **transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares**, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea**, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud".

Como se ve, al nuevo texto constitucional se incorporaron los delitos de feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En el artículo Segundo Transitorio del referido Decreto se estableció la obligación dirigida al Congreso de la Unión para que, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, realice las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos correspondientes, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.

En ese contexto, el cumplimiento al mandato contenido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 12 de abril de 2019, conlleva la realización de reformas legales en las que se establezcan especificamente cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos antes referidos, objeto de la medida de prisión preventiva oficiosa.

Lo anterior, como se expuso en el Apartado de Antecedentes; coincide y derivó en la presentación desde septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, de diversas iniciativas relacionadas con la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, mismas que, al ser turnadas a Comisiones diversas, motivó que la Comisión Coordinadora solicitara en términos del artículo 181 del Reglamento del Senado de la República, la rectificación procedente en atención a su correspondencia más idónea. Este proceso de rectificación concluyó el día 6 de marzo del año en curso, dando inicio al estudio, análisis y acopio de información correspondiente, concluyendo el proyecto de Dictamen para deliberación ante Comisiones Unidas, que se postergó en virtud de suspenderse las actividades en el Senado de la República, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el país.

Es en ese tenor que las Comisiones Unidas emiten el Dictamen de mérito, a fin de analizar las propuestas contenidas en doce iniciativas presentadas ante esta Cámara de Senadores, las cuales fueron relacionadas en el correspondiente capítulo de Antecedentes y detallado su contenido en el apartado respectivo.

Una vez asentado lo anterior, es preciso señalar que estas Comisiones Unidas coinciden en lo general con las iniciativas, al considerar que es de toral importancia dar cumplimiento al mandato constitucional respecto de la obligación del Congreso de la Unión para efectuar las modificaciones normativas necesarias a fin de incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos legales que se involucran, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal y, de esta manera, dar certeza jurídica a los destinatarios de la norma superior para que, tanto los juzgadores como la autoridad persecutora de los delitos y los propios justiciables, conozcan de manera puntual e indubitable el alcance de la reforma constitucional aludida en la legislación secundaria.

SEGUNDA.- Como se sostuvo en el proceso de dictaminación de la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, la prisión preventiva constituye una medida cautelar que, si bien es la más severa de las relacionadas en el artículo 155 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, no es una medida punitiva, pues su finalidad se centra en la preservación del proceso judicial así como la

seguridad de las víctimas y la sociedad, siempre de manera cautelar y no como parte de la pena.

La medida de prisión preventiva ordenada por el juzgador tampoco se considera una medida arbitraria, toda vez que su dictado tiene que darse necesariamente con base en el auto de vinculación a proceso, cuando ya el Ministerio Público ha aportado los elementos de convicción indispensables para acreditar la probable responsabilidad de la persona imputada.

Por lo que hace a la prisión preventiva de oficio, ésta debe aplicarse en aras de la preservación del proceso judicial, considerando aquellas conductas que la ley señala como delitos que afectan bienes jurídicos sensibles de las personas y de la sociedad y que, por ello, el Estado no puede ser indolente en establecer en la legislación medidas más rigurosas para sancionarlas en virtud de la afectación que producen en bienes de gran valor y estima para la sociedad.

Conforme a lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran pertinente exponer en apartado subsecuente, de manera particular, las modificaciones legales que hemos determinado como viables para incorporarlas en el texto de los ordenamientos secundarios respectivos, tomando en cuenta siempre la proporcionalidad de la medida, en función de la conducta delictiva que se considera dañosa en perjuicio de los bienes jurídicos tutelados y las penas de prisión que cada una de ellas conlleva por su comisión, para que únicamente aquellas conductas que lesionan o ponen en riesgo importantes bienes jurídicos, sean contempladas con tal rigor en la aplicación de la medida cautelar.

Lo anterior es así, ya que estas dictaminadoras advertimos que la intención del Poder Reformador de la Constitución se centró precisamente en ampliar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, fundamentalmente para aquellas conductas tipificadas como delito en la ley penal y en otros ordenamientos que importen un perjuicio importante a las víctimas y a la sociedad.

Como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "*el principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho*

a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción".[2]

Asimismo, dicho tribunal internacional ha establecido en sus criterios cinco reglas que deben atenderse en la aplicación del principio de proporcionalidad, a saber:

> *1. Debe existir una relación entre la medida cautelar determinada y el fin que se persigue con ella, de manera que el sacrificio impuesto al reo no sea exagerado o desmedido.*
>
> *2. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o, incluso, más gravosa que la pena que puede esperar el procesado en caso de condena.*
>
> *3. No se debe autorizar la privación cautelar de la libertad en aquellos supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión.*
>
> *4. La prisión preventiva debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida.*
>
> *5. Una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada.*[3]

De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que *"[l]a naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión preventiva, de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, es un elemento que necesariamente debe estar presente en toda política criminal que tome en consideración los estándares del Sistema Interamericano."*[4]

Por lo que estas dictaminadoras consideran importante establecer en la legislación secundaria los delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, a efecto de

---

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 122.

[3] Gómez Pérez, Mara, "La jurisprudencia interamericana sobre prisión preventiva", en Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos: influencia y repercusión en la justicia penal / Sergio García Ramírez, Olga Islas de González Mariscal, Mercedes Peláez Ferrusca, coordinadores. (libro electrónico). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. Consultado el 9 de octubre de 2019. [En línea]. Disponible en: https://bit.ly/2Ozd8gx.

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Aprobado el 30 de diciembre de 2013.

reglamentar la parte final del segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna, tomando en cuenta tales criterios para que el mandato constitucional se cumpla de manera efectiva.

TERCERA.- Estas Comisiones Unidas coinciden con la intención de los proponentes en cuanto a que es indispensable establecer en la ley secundaria, en forma específica y muy clara, los casos en los que la medida de prisión preventiva oficiosa resulte procedente dado que, como hemos referido, es la medida más severa que el juzgador puede ordenar para una persona imputada de una conducta que la ley señale como delito, por lo cual, se debe obrar con el debido cuidado legislativo para no incurrir en exceso, pero sin dejar de lado su establecimiento en los supuestos que la Carta Magna prevé y que la comisión del delito así lo amerite, pues indefectiblemente debe cumplirse con el mandato Constitucional.

Asimismo, las Comisiones Unidas concuerdan con la necesidad de realizar las modificaciones correspondientes a la legislación secundaria con base en el principio de legalidad, así como con la finalidad de armonizar las normas secundarias con el señalado mandato constitucional, por lo que en el proyecto se plantea adecuar el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud, amén del análisis que se realice respecto de diversas propuestas a otras leyes que se relacionan con la regulación de delitos a los que se propone aplicar la prisión preventiva oficiosa.

Estas Comisiones dictaminadoras expresan su preocupación por la alta incidencia de conductas tipificadas como delitos en la ley que guardan relación directa con las previstas en el artículo 19 de la Constitución Federal. Sin duda alguna, nuestro país requiere políticas públicas y acciones legislativas firmes y contundentes, encaminadas a solucionar los graves problemas que le aquejan. Definitivamente la comisión de delitos graves en perjuicio de la población y las instituciones es uno de

ellos y debe atenderse de forma integral, considerando tanto los aspectos que los originan como los que provocan impunidad.

A continuación se describen algunos aspectos relevantes en relación con las conductas delictivas que se adicionaron al artículo 19 de la Constitución Federal, mediante la reforma publicada el 12 de abril de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, así como de otros fenómenos delictivos planteados por las y los legisladores proponentes, con el ánimo de contar con un marco de referencia para la determinación que se adoptará en el apartado respectivo a las modificaciones legales motivo del presente Dictamen.

Feminicidio

Uno de los delitos que agravia más a la sociedad mexicana hoy día es el feminicidio, tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal como la privación de la vida de una mujer por razones de género.

Conforme a dicho artículo, se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; b) a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; c) existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; d) haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; e) exista datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; f) la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, o g) que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y la violencia física en su contra como cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o

algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la muerte violenta de las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia contra la mujer, afecta sin distingo a todas las mujeres, incluyendo indígenas o rurales, sin importar la clase y condición económica y tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual se encuentran las mujeres respecto de los hombres, constituyendo así una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas.[5]

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, define la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Dicha Convención, ratificada por México el 19 de junio de 1998, establece como deber de los Estados Partes el de condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia[6].

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió la violencia contra la mujer (VCM) como: "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada"[7].

---

[5] Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Disponible en: https://bit.ly/2OckS80.

[6] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Disponible en: https://bit.ly/2OXPWb6.

[7] Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, A/RES/48/104, artículo 1. Disponible en: http://bit.ly/31P4ldi.

Es importante destacar que México fue el primer país en donde se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es también el país en el que se ha presentado el mayor número de iniciativas de ley tanto a nivel estatal como federal[8].

Con base en lo establecido por el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género[9], han sido identificadas las siguientes modalidades de feminicidio:

- ✓ **Íntimo**: la muerte de una mujer por un hombre con quien la víctima mantenía una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, concubino, novio o amante y se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer porque ésta rechazó entablar una relación íntima (sentimental o sexual).
- ✓ **No íntimo**: La muerte de una mujer por un hombre desconocido.
- ✓ **Infantil**: La muerte de una niña menor de 14 años por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad o de confianza o de poder.
- ✓ **Familiar**: La muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario.
- ✓ **Por conexión**: La muerte de una mujer que queda en la "línea de fuego" en el mismo lugar que un hombre mata o intenta matar a otra mujer.
- ✓ **Sexual sistémico**: Es la muerte de mujeres que son previamente víctimas de delitos sexuales
  - ✓ **Sexual sistémico organizado**: Cuando los sujetos activos actúan como una red organizada de asesinos sexuales, con un método consciente y planificado en un determinado período de tiempo.
  - ✓ **Sexual sistémico no organizado**: Cuando los sujetos activos matan a las mujeres en un contexto de secuestro, violación y/o tortura que puede ser un caso o varios, pero sin un método o planificación en red.
- ✓ **Por prostitución u ocupaciones estigmatizadas**: Es la muerte de una mujer que ejerce la prostitución u otra ocupación (*stripers*, bailarinas de

[8] Iribarne, Macarena, University of Wollongong, *Feminicidio (En México)*, Eunimia. Revista en Cultura de la Legalidad N° 9, octubre 2015 marzo 2016 pp. 205-223. Consultado el 28 de octubre de 2019. Disponible en http://bit.ly/31STqPK.

[9] ONU Mujeres. *Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)*, pp. 15 y 16. Consultado el 28 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/3aUCpcV.

locales nocturnos, masajistas, etcétera) cometida por uno o varios hombres por motivos de odio y de misoginia que despierta la ocupación de la víctima, dejando en evidencia la estigmatización social que justificaría el delito: "se lo merecía", "no valía nada".

- ✓ **Por trata**: La muerte o el asesinato se produce en una situación de sometimiento y privación de la libertad de la mujer víctima en situación de "trata de personas". Por trata entendemos -tal como lo señala la ONU- la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de la o las mujeres y niñas con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
- ✓ **Por tráfico**: El asesinato de la mujer se produce en una situación de tráfico ilegal de migrantes. Entendemos por tráfico -tal como lo señala la ONU- la facilitación de la entrada ilegal de una mujer en un Estado Parte del cual dicha mujer no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.
- ✓ **Transfóbico**: La víctima del asesinato es una mujer transexual y el o los victimarios la matan por su condición o identidad transexual, por odio o rechazo de la misma.
- ✓ **Lesbofóbico**: La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y el o los victimarios la matan por su orientación o identidad sexual, por el odio o rechazo de la misma.
- ✓ **Racista**: El asesinato cometido contra una mujer por su origen étnico o sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos.
- ✓ **Por mutilación genital femenina**: Cuando la mutilación genital que se practica a una mujer o niña acaba con la vida de ésta.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que del año 2015 al 2019, el delito de feminicidio ha ido en

aumento a nivel nacional, siendo que en 2015 fue de 411, en 2016 fue de 602, en 2017 fue de 741, en 2018 fue de 891 y en 2019 fueron 976 casos de femicidio.[10]

A nivel nacional, de los casi mil feminicidios reportados en 2019 en el país, el estado de Veracruz ocupó el primer lugar a nivel nacional, con 157 delitos de feminicidio, seguido por el Estado de México con 122; Ciudad de México con 68; Nuevo León con 67, y Puebla con 58.

Mientras que los presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres a nivel estatal fueron: Morelos con 3.74, Veracruz con 3.60, Colima 2.83 y Sonora 2.42. Por su parte, en los municipios en 2019, Monterrey registró 19 casos, seguidos por Culiacán con 17, Iztapalapa con 14 y San Luis Potosí con 13[11].

Es de resaltar que el uso ilícito de armas de fuego en contra de las mujeres va en aumento. De enero a agosto de 2015, murieron a tiros 12% de las víctimas de 255 feminicidios por los que se inició una investigación, mientras que, para el mismo periodo de 2019, el número de mujeres asesinadas por estos medios violentos subió a 23% del total de 638 indagatorias iniciadas por ese motivo.

El SESNSP detalló que en los años 2016, 2017 y 2018, las indagatorias iniciadas en el periodo enero-agosto fueron 400, 515 y 559, respectivamente. La proporción de ellas que asienta el uso de armas es de 23, 26.2 y 21.5 por ciento, respectivamente. De las 638 carpetas iniciadas por feminicidio entre enero y agosto de 2019, 459, que representan 72% de ese total, se concentran en 18 estados que tienen activa la Alerta de Violencia de Género. De estas, 125 casos de incidencia son de Veracruz, después Estado de México con 67, y Nuevo León con 46.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, la información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe muestra que al menos 3,287 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2018, y si a dicha cifra se suman los datos de los 9 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, se puede afirmar que el número de feminicidios para el año 2018 fue por lo menos de 3,527 mujeres. Este

[10] Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las mujeres, Información con corte al 31 de diciembre de 2019. Consultado el 12 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2SywSSY.
[11] *Idem.*

órgano ubica a México con 898 feminicidios en números absolutos, con una tasa de 1.4 por cada 100.000 mujeres[12].

Como se ve, la atención al fenómeno delictivo de feminicidio es urgente y precisa de políticas públicas ejecutivas, pero también legislativas, que abonen tanto a su prevención como a su sanción con el rigor que esta conducta merece por la lesión que causa en la víctima directa, su familia y la sociedad misma, por lo cual es imperante que el Estado ejerza su potestad punitiva en contra de quienes son responsables de ejercer violencia extrema en contra de la mujer.

Abuso o violencia sexual contra menores

El Código Penal Federal tipifica en su artículo 260 el delito de abuso sexual y establece que lo comete quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, e impone una pena de prisión de seis a diez años y hasta doscientos días multa.

Por su parte, el artículo 261 tipifica el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, con una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

El artículo 266 de dicho Código, equipara a la violación y sanciona con pena de ocho a treinta años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad, o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

[12] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Consultado el 12 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/37zCe4D.

Por su parte, el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el abuso físico, psicológico o sexual, trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.

Asimismo, el artículo 105 de la ley referida en el párrafo anterior, señala que las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso, los traten con respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los de otras personas.

Sin lugar a duda, estas conductas afectan gravemente la esfera de derechos de los menores de edad. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la violencia sexual contra niños se ejerce a través de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía y puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia.

Asimismo, y cada vez con mayor frecuencia, en los teléfonos móviles e internet se pone a las niñas y los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan internet para buscar relaciones sexuales con ellos a través del engaño. Lamentablemente también hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños.[13]

[13] UNICEF. Protección Infantil contra la violencia, la explotación y el abuso. Disponible en: https://uni.cf/2SDOCg1.

Según el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, tratado internacional que se ocupa del abuso sexual infantil que ocurre en la familia o el hogar, *"la explotación sexual y el abuso sexual de los niños, en particular la pornografía y la prostitución infantil, y todas las formas de abuso sexual infantil, ponen en grave peligro la salud y el desarrollo psicosocial del niño".*[14]

En el Preámbulo de este documento, se hace evidente que este problema ha alcanzado *"dimensiones preocupantes tanto a nivel nacional como internacional, especialmente por lo que respecta al uso cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los propios niños y por los infractores, y que, para prevenir y combatir dicha explotación y abuso, es indispensable la cooperación internacional".*[15]

El 13 de agosto del año 2019, en el Foro realizado en el Senado de la República sobre "Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos", la ONG *Early Institute* apuntó que en México los delitos de abuso sexual continúan en aumento. En el año de 2015 se registraron 11,894 casos mientras que en 2018 se registraron 18,595, lo que implica un crecimiento del 56% en 3 años. Asimismo, agregó que en internet 1 de cada 5 menores son abordados por este medio.[16]

En dicho Foro se informó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que México tiene el primer lugar mundial en el delito de abuso sexual infantil, registrando 5.4 millones de casos por año.[17]

La misma ONG *Early Institute* reconoce en el Diagnóstico sobre la situación del abuso sexual infantil[18] que en nuestro país "no hay una fuente clara centrada en la

[14] Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual. Disponible en: https://bit.ly/2SOvOce.

[15] *Idem.*

[16] Inauguración del Foro "Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos". Consultada el 31 de octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/31e7MJ1 y https://bit.ly/2MIly2u.

[17] México, primer lugar en abuso sexual infantil. Senado de la República. Coordinación de Comunicación social. Boletín No. Número-2136. 24 agosto de 2019. Consultado el 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2WfNJw7.

[18] DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA EN MÉXICO. Documento de Trabajo. Early Institute, A.C. 2019. Disponible en: https://bit.ly/2u5L0tw.

medición del abuso sexual infantil (ASI). Tampoco existen datos sistematizados para generar indicadores sobre este tipo de violencia y delito".

No obstante, dicha organización realiza un análisis sobre datos de egresos hospitalarios de 2015 para conocer las afectaciones relacionadas con maltrato y en particular este tipo de abuso, sin dejar de mencionar que "describen casos extremos, donde la violencia ha llevado a los menores de edad a requerir atención hospitalaria, o en ocasiones, a perder la vida", cuyos principales resultados son los siguientes:

1. *En México no hay una fuente clara centrada en la medición del ASI. Tampoco existen datos sistematizados para generar indicadores sobre este tipo de violencia y delito. En tanto, el presente estudio se enfocó en analizar la información disponible del ASI en ambas dimensiones.*
2. *Se analizaron las cifras de egresos hospitalarios de instituciones de salud pública que se refieren a menores de edad que fueron atendidos por alguna forma de maltrato y, en particular, por ASI. Se tomó como referencia la Clasificación Internacional de Enfermedades para detectar el tipo de diagnóstico inicial o la afección principal correspondiente.*
3. *Durante 2015, se encontró que de los 1,750,790 casos de hospitalizaciones de personas menores de 18 años de edad, 309 egresos estuvieron relacionadas a ASI. De esos casos el 87.7% fueron niñas.*
4. *Tlaxcala y Querétaro fueron los estados que concentraron la mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios relacionados con el ASI.*
5. *En Querétaro la totalidad de los 74 egresos de menores atendidos por abuso sexual en hospitales fueron niñas.*
6. *Las muertes de menores de edad por agresión sexual, maltrato, negligencia y abandono en conjunto, sumaron 22 en 2014, 25 en 2015 y 19 en 2016, siendo el maltrato la causa más común.*

7. *En general, los datos de mortalidad por estas causas reflejan que los integrantes del grupo de edad de 5 años o menos son los más vulnerables.*
8. *En cuanto a suicidios, una forma de violencia autoinfligida, la mayor tasa de suicidios en menores de edad en 2016 se registró en Chihuahua. La importancia de conocer los suicidios en menores de edad radica en que esto puede ser una consecuencia de una situación de maltrato o abuso, según estudios internacionales.*
9. *De manera complementaria, el diagnóstico presenta múltiples datos sobre la incidencia delictiva en México y los niveles de violencia del país, que nos sirven como variables de contexto sobre el ASI.*
10. *Se analizó la incidencia delictiva y datos de victimización en diversas categorías como: delitos sexuales; delitos que afectan la familia; delitos que afectan a la sociedad; delitos que afectan la integridad corporal y delitos que afectan la libertad personal.*
11. *En 2017 se denunciaron 1,817,916 delitos del fuero común. De ese total, las denuncias de los delitos contra la libertad y seguridad sexual representaron un 2%. Debido a este bajo porcentaje, se estima que los delitos sexuales, por su naturaleza, son poco denunciados en México, incluso es difícil captarlos a través de encuestas de victimización.*
12. *Se advierte una omisión grave en la base de datos sobre incidencia de delitos sexuales, ya que no existe referencia a si el delito fue cometido contra un menor o un adulto.*
13. *En México, cada estado tiene su código penal, por lo que frecuentemente una situación que implique abuso sexual puede ser clasificada como violación u otro tipo de delito sexual, lo cual vuelve complejo conocer la incidencia real del abuso sexual desde el punto de vista jurídico penal.*
14. *De 2015 a 2017 el delito sexual más denunciado fue el abuso sexual. Sobre este delito en particular, se registró una tasa de 9.8 por cada 100 mil habitantes en 2015; de 12.2 en 2016 y de 12.8 en 2017.*
15. *En 2017, los estados con las tasas más elevadas de abuso sexual en México fueron Chihuahua (31.3), Baja California (31), Baja California*

Sur (28.6), Jalisco (28.6), Colima (24.6) y Morelos (23), mientras que la nacional fue de 12.8. El diagnóstico plantea la pregunta de si los estados en donde se detecta mayor incidencia del delito de abuso sexual son los que tienen el mayor problema de abuso sexual infantil en particular. Podría suponerse que sí, pero es necesario ahondar en las fuentes para confirmar dicha hipótesis.

16. *El estudio analizó la incidencia de otros delitos que proveen indicadores de contexto de violencia en el ámbito del núcleo familiar y que afectan directamente a la infancia, como fue el caso de los delitos de violencia familiar, violencia de género o incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.*

17. *Al analizar el delito de violencia familiar, se encontró que el estado de Nuevo León registró los niveles más altos de violencia familiar de 2015 a 2017. En 2017, Colima y Chihuahua fueron los estados que le siguieron en orden de magnitud, según sus tasas.*

18. *El diagnóstico también generó las tasas de incidencia de los delitos de feminicidio, homicidios, lesiones, rapto, secuestro y tráfico de menores, considerando que en aquellos estados donde se cometen estos ilícitos existe un entorno más propicio de violencia contra menores de edad, especialmente mujeres*"[19].

Lamentablemente, solo uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil es denunciado, según el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Asimismo, su fundadora y directora, Lizzette Argüello Rocha, estima que "[e]stas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos... Los abusadores sexuales están en el seno de nuestras familias".[20]

[19] *Idem.*

[20] México, primer lugar en abuso sexual infantil. Senado de la República. Coordinación de Comunicación social. Boletín No. Número-2136. 24 agosto de 2019. Consultado el 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/38QFnxM.

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2014 se dieron 5,569 casos de agresión sexual contra menores, específicamente tocamientos, hostigamiento y violación sexual.[21]

En este contexto, fue que el Constituyente Permanente determinó incorporar el abuso y la violencia sexual infantil como conductas merecedoras de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución Federal, dada la gravedad que reviste para este sector vulnerable de la población y para las familias que evidentemente se ven gravemente afectadas por la comisión de estos ilícitos.

Robo a casa habitación

Una calificativa del delito de robo que ha incrementado en nuestro país y que tiene gran repercusión en la seguridad y el patrimonio de las personas, es la del robo a casa habitación.

El artículo 381 Bis del Código Penal Federal establece una sanción de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos.

Juan Pablo Aguirre Quezada, en un estudio realizado para el Instituto Belisario Domínguez, lo refiere como "el acto que comete un presunto delincuente al apoderarse de bienes ajenos al invadir propiedades privadas como casas, terrenos o departamentos."[22] Es un fenómeno delictivo que afecta directamente al patrimonio de las personas y vulnera la percepción de seguridad de las víctimas, además de generar daños psicológicos y posibles agresiones por parte de los delincuentes.

[21] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) 2014. Consultado el 5 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3279hMj.

[22] Aguirre, Juan Pablo. Robo a casa habitación. Pluralidad y consenso. Vol. 6, Núm. 29. Instituto Belisario Domínguez, 2016. Disponible en: https://bit.ly/2wpLYLY.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que el objetivo del robo a casa habitación es el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que estén construidos.[23]

En cuanto al número de robos a casa habitación en los últimos años, se aprecia un aumento de 2015 a 2017, para después tener un descenso en el número de denuncias por este ilícito. No obstante, en el primer bimestre de 2019 se rebasaron los 13 mil casos por este ilícito.

Si bien, en el primer bimestre de 2019 el número de casos denunciados fue de 1,310, de mantenerse esta tendencia en los meses subsecuentes (1,310 casos por seis bimestres), el número de incidentes reportados puede superar los indicadores registrados en el último trienio.

En esta calificativa existe una cifra negra, es decir, no se reportan al Ministerio Público el total de incidentes, en gran medida por el temor a recibir posibles represalias por parte de los malhechores o por el monto de lo hurtado. El robo a casa habitación se relaciona con otros delitos dependiendo de la gravedad del ilícito, como homicidios, lesiones, robo de vehículo, venta de artículos hurtados, portación de armas, entre otros.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que se cometieron 81,998 robos a casa habitación durante 2018. De estos, 75,307 fueron sin violencia y en 6,691 casos hubo violencia.

En cuanto a los promedios anuales, la tasa de robos a casa habitación fue de 65.74 casos por cada 100 mil habitantes a escala nacional durante 2018. En lo que respecta al primer bimestre de 2019, este indicador se situó en 10.46 (SESNSP, 2019).

[23] Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15 del SESNSP. https://bit.ly/2SUPZ8C.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del INEGI[24] a nivel nacional, señala que 24.7 millones de personas de 18 años y más son víctimas de diferentes delitos, entre los que destaca robo en casa habitación.

En cuanto a robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos), esto representa una tasa de 28,269 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2018.

Por su parte, en las entidades federativas a nivel nacional, el SESNSP[25] señaló que en 2015 el robo a casa habitación fue de un 71.84%, en 2016 registró un 68.46%, en 2017 fue de 68.89% y en 2018 fue de 15.59%. De lo anterior se observa que 2015 fue el año en donde más ilícitos de este tipo se cometieron, en comparación con 2018 que fue menor.

En 2015 las entidades federativas que más índice delictivo registraron fueron: Baja California con 373.09%, seguido por Baja California Sur con 323.20% y Quintana Roo con 220.79%, mientras que los estados con más bajo índice del delito en comento fueron Oaxaca con 6.53%, Campeche 13.55% y Sinaloa con 19.33%.

En 2016, Colima registró un 386.69% de índice de robo a casa habitación, Baja California Sur con 364.61% y Baja California registró un 317.93%, mientras que los estados con bajo índice fueron Campeche con 8.68%, Guerrero 14.77% y Nayarit con 17.41%.

En 2017, Baja California Sur registró 355.75%, Baja California con un 258.52%, Aguascalientes con un 251.77% de índice de robo a casa habitación, mientras que los estados con bajo índice de la calificativa de robo en comento fueron Nayarit con 7.25%, Campeche con 11.12% y Guerrero con 12.45%.

---

[24] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Disponible en: https://bit.ly/2SzqSJz.

[25] Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. Disponible en: https://bit.ly/2vHOq62.

En 2018, en Baja California Sur fue de 73%, Aguascalientes con un 61.30% y Baja California con un 53.75 % de índice de robo a casa habitación, mientras que los estados con menor índice fueron Nayarit con 1.55%, Sinaloa con 2.52% y Guerrero con 2.70%.

El robo a casa habitación es la segunda conducta delictiva con mayor número de denuncias, lo que ejemplifica la preocupación social por este ilícito, proporción que supera a delitos cotidianos como robo a transeúnte o fraude. En 2017 este delito afectó a 2,745 personas, mientras que en 2018 a 2,598 personas.[26]

Por lo anterior, es menester realizar todas las acciones tendientes a disminuir la incidencia delictiva de esta calificativa de robo que atenta contra un bien jurídico tutelado: el patrimonio de las personas. A esto se añade que su comisión tiene diversas consecuencias sociales, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias, entre otros[27], aunado a las alarmantes cifras mostradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las referidas repercusiones que tiene frente a otros delitos patrimoniales.

Uso de programas sociales con fines electorales

La definición básica de clientelismo refiere a la acción que denota el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos, aunque el concepto en realidad es mucho más amplio, ya que conlleva relaciones informales de poder.[28] El clientelismo es una cultura política que no cuenta con estructuras estables y visibles, pero sí con ritos, valores y comportamientos concretos reiterados.

El vínculo clientelar es predominantemente vertical, ocurre entre desiguales y el intercambio clientelar es político (decisiones administrativas por votos). Es un

[26] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2019. https://bit.ly/2mOJoQk.

[27] Aguirre, Juan Pablo. Robo a casa habitación. Cuaderno de investigación No. 56. Instituto Belisario Domínguez. 2019. P. 15. Disponible en: https://bit.ly/2yOLVR9.

[28] Ibarra, Hernán. "Mario Caciagli Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada". En 60 cuadernos y debates. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996. Fecha de consulta 4 de noviembre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/33kTV6S.

intercambio extrínseco que beneficia a las partes dado que su situación de desigualdad funcional no afecta al intercambio de ambas partes para alcanzar sus fines.

En las relaciones clientelistas juegan un papel de suma importancia la pobreza, el aislamiento y el analfabetismo. La pobreza y la desigualdad social se convierten en terreno fértil, por su vulnerabilidad, para la *sobrepolitización* de las políticas públicas. "El clientelismo, como un instrumento al servicio de un fin es un medio a depurar para evitar sus disfunciones".[29]

El uso de programas sociales con fines electorales ha sido desde hace varias décadas, un instrumento de recolección de votos con el que se procura el favor del elector a cambio de ofrecerle respuestas a situaciones de crisis o pobreza en la población con recursos públicos. Esto a través de iniciativas enfocadas a mejorar las condiciones de vida del entorno social o a algún sector importante con necesidades aun no satisfechas.

Cuando un partido establece diferencias al considerar unos temas más importantes que otros, el elector ya no se sitúa a la misma distancia respecto de cada partido, sino que se aproximará a aquel que manifieste prioridad en los temas que a él le interesan.

El uso político de los recursos públicos, en particular los dirigidos al desarrollo social, históricamente se han caracterizado por rasgos clientelistas, patrimonialistas y corporativistas.

La utilización de programas sociales con fines electorales tiene una larga y fuerte tradición, misma que se ha modificado con el paso del tiempo con una persistencia de acciones por la compra de votos a cambio de acceder a programas sociales.

Para evitar esta práctica se han elaborado mecanismos de control, principalmente la transparencia en algunos procesos clave (como la selección de beneficiarios), y una política de información y *blindaje electoral* (como la publicación de los registros

[29] Corzo Fernández, Susana. El Clientelismo político como intercambio. Ecuador Debate. Quito, Ecuador, diciembre de 2006, p. 144. Fecha de consulta 4 de noviembre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2oLBNns.

de beneficiarios), al tiempo que establecen la pauta para eliminar la intermediación entre los beneficiarios y el gobierno[30].

En la práctica de utilizar los programas sociales con fines electorales, interceden, además de los partidos políticos y la población a beneficiar, los intermediarios o mediadores entre la comunidad y los ámbitos estatales y federales, éstos son los poderes municipales (presidente, síndico y regidor, agentes y subagentes municipales) que cuentan con la legitimidad para resolver los conflictos al interior de la comunidad, así como personas prominentes que utilizan su influencia para que personas cercanas a ellos accedan a cargos edilicios.

Los programas sociales sin mecanismos de transparencia ni control por parte de la sociedad, han sido históricamente utilizados con fines electorales en nuestro país[31]. En México el programa Oportunidades fue el que, en 2006, más denuncias electorales generó como vía recurrente para incidir en el voto, esto de acuerdo con el informe sobre blindaje electoral de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)[32].

El uso de programas sociales con fines electorales puede interferir en la lógica y el diseño de los mismos, perjudicando su efectividad y el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. Generalmente, estos casos surgen en contextos de institucionalidad débil y sistemas políticos que privilegian la actividad política personalista. *En estos contextos los apoyos políticos a determinados programas pueden llevar a identificarlos con las personas o los sectores que los impulsan, lo que representa un desafío serio para su sostenibilidad más allá de los horizontes electorales*[33].

---

[30] Levy, Santiago y Evelyne Rodríguez, 2004, "El Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa–Programa de Desarrollo Humano Oportunidades", en S. Levy (comp.), *Ensayos sobre desarrollo económico y social de México,* Fondo de Cultura Económica, México, pp.181–379. Fecha de consulta 3 de noviembre de 2019.

[31] Hevis de la Jara, Felipe, "Uso político de programas sociales y nuevos intermediarios institucionales: el Programa Progresa/Oportunidades en el sur de Veracruz", en Desacatos, No. 34, 2010, México. Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2NlharM.

[32] *Idem.*

[33] Cecchini, Simone; Madariaga, Aldo. Programas de transferencias condicionadas, balance de la experiencia reciente en América Latina y el Caribe. CEPAL 2011, No 95, Santiago de Chile. Pp. 158. Fecha de consulta 4 de noviembre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2NOjUNg

El implementar programas sociales sin marcos legales e instituciones claras y específicas, conlleva a una serie de riesgos en términos de su alcance, legitimidad y continuidad. De igual forma, su implementación deficiente puede incidir en el incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, ya que al momento en que un programa deja de funcionar, existe la posibilidad de que las personas beneficiarias queden en situaciones aún peores de lo que estaban previo a la implementación del programa.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó en 2007 en la Ciudad de México el seminario "Candados y derechos: protección de programas sociales y construcción de ciudadanía"[34]. Entre sus principales conclusiones destaca que cuando se trata de recursos públicos en periodo preelectoral o electoral nunca son suficientes las medidas de precaución, pues la tentación de manipular el gasto con fines políticos se recrudece de cara a los comicios.

Las esferas de protección (candados) restringen y regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, incluyendo la protección de los programas sociales. Las esferas de candados contemplan una serie de medidas adicionales como la prevención, un ejemplo de ello es el Programa de Blindaje Electoral.

La normatividad vigente para México puede clasificarse en tres grandes ordenamientos jurídicos: el presupuestal —Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto de Egresos de la Federación—, el de transparencia — Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública —, y el social —Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y Ley General de Desarrollo Social—, ésta última destaca por su incidencia en la protección de los programas sociales, ya que norma con mayor precisión la gestión de los programas destinados al desarrollo social, en particular con la incorporación de las reglas de operación.

El PNUD denomina "áreas programáticas vulnerables" aquellas *lagunas* jurídicas que pueden ser aprovechadas para la manipulación política de los programas sociales en y fuera de los contextos electorales, áreas propicias para la

[34]Gómez-Álvarez, D. Candados y contrapesos: la protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América Latina.2009. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO. Fecha de consulta, 5 de noviembre de 2019. Disponible en: http://bit.ly/2CfitSL.

discrecionalidad y en consecuencia el uso político de los programas públicos y sociales. La utilización de candados en los eslabones más débiles de la cadena del gasto social es necesario, pero insuficiente y hasta cierto punto contraproducente pues el riesgo de burocratizar los procesos es alto.

"Si los mecanismos de control no tienen alguna manera para hacerse coercitivos, carecen de sentido. Es necesario que al establecer un sistema de rendición de cuentas los titulares del derecho (o las instancias encargadas de la fiscalización) tengan la posibilidad de participar en el dictado de una sentencia y que esta sea coercitiva, para así poder imponer el cumplimiento del derecho".[35]

Una de las mayores estrategias para contrarrestar la manipulación política de los programas sociales es la fiscalización intraestatal. Los mecanismos de transparencia y acceso a la información dan pie a una mejor rendición de cuentas respecto a los programas sociales.

Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 4 de abril de 2019,[36] el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fijó los criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en el proceso local extraordinario de Puebla.

En dicha resolución, se señala la necesidad de "difundir y reforzar una serie de mecanismos para contribuir a evitar violaciones a los principios de equidad e imparcialidad; el uso indebido de recursos públicos, así como a la utilización de programas sociales y de sus recursos con la finalidad de inducir o coaccionar a los

[35] *Ibidem*. P. 25.

[36] Diario Oficial de la Federación, Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante la cual se ejerce la facultad de atracción y se fijan los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en el proceso local extraordinario de Puebla. 04/04/2019. Disponible en: http://bit.ly/2NMUfV8.

ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político, coalición o candidatura en particular".[37]

En ese contexto, la protección de los programas sociales es un aspecto clave para que las demandas sociales puedan ser procesadas de forma democrática, sin desviación ni condicionamiento político de ningún tipo.

Enriquecimiento ilícito

El artículo 224 del Código Penal Federal, establece que existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, entre los que se contemplan también los bienes que reciba o de los que dispongan el cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

El sujeto activo del delito es cualquier persona que, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito, de donde se justifica que esta conducta sea sancionada en materia penal precisamente por el hecho de que el servidor público haga mal uso de los recursos que tiene a su cargo en ejercicio de la función pública.

Conforme al artículo 108 de la Constitución Federal se consideran "servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones".[38]

---

[37] *Ídem.*

[38] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 108. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en: https://bit.ly/2uSRXyy.

El fundamento constitucional de este delito lo encontramos en la fracción II del artículo 109, que faculta a la legislación secundaria para determinar los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Mandata que las leyes penales sancionen con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

El INEGI señala que en el 2017 fueron denunciados 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales por presuntos actos de corrupción relacionados con el ejercicio de sus funciones. Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.[39]

La Secretaría de la Función Pública destaca en su informe de labores 2018 – 2019, que se presentaron 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93% de efectividad de cumplimento, 20 por enriquecimiento ilícito, 1 por daño en propiedad ajena, 4 por convenios relacionados con la estafa maestra, 5 por convenios celebrados con instituciones públicas educativas, 1 de presidencia, 1 casa blanca, 1 denuncia Ayotzinapa.[40]

Robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades

Otro delito que lamentablemente refleja una considerable incidencia en nuestro país es el relacionado con el robo a transporte de carga, pasajeros y turismo en todas

[39] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "Estadísticas a propósito del día internacional contra la corrupción (9 de diciembre de 2018)". Disponible en: https://bit.ly/2QBVNVG

[40] Secretaría de la Función Pública, Primer Informe de Labores 2018-2019. Disponible en: https://bit.ly/2P1nDIJ.

sus modalidades, el cual fue tipificado como de fuero federal mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de febrero de 2018.

El artículo 376 Ter del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, cuando el objeto del robo sea las mercancías. Así como de 2 a 7 años de prisión, cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, con independencia del valor de lo robado.

Por su parte, el artículo 381 del referido Código impone una pena de 2 a 7 años de prisión, además de las previstas en el artículo 376 Ter, cuando el delito se cometa en caminos o carreteras y cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio.

Este delito "requiere para su comprobación que el activo o activos se apoderen de mercancías u objetos que se transporten en vehículos que circulen por carreteras o caminos; y, además, exige que esos vehículos sean de carga, esto es, camiones que por sus dimensiones permitan llevar objetos pesados, o bien, productos que requieren de refrigeración constante o de carga especializada que exige un manejo diferente."[41]

Ante la relevancia económica de este sector y el incremento del delito de robo a transporte de carga, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), presentó en 2018 la "Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga"[42]. Este documento refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el trasporte de carga contribuye con el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional.

[41] ROBO DE MERCANCÍAS O BIENES EN VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR CARRETERAS O CAMINOS. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO SE REQUIERE QUE EL APODERAMIENTO SE REALICE EN TRANSPORTE DE CARGA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Tomo XIX, febrero de 2004. Pág. 1138. Novena Época. Tesis Aislada.

[42] Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, "Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector del autotransporte de carga 2018". Disponible en: https://bit.ly/2UXCLuv.

Este sector genera seis millones de empleos directos e indirectos. El intercambio comercial a través del autotransporte de carga ascendió en 2017 a 458,720 millones de dólares, lo que representó el 55.27% del comercio total del país.

En la referida Agenda se señala que el robo al sector del autotransporte de carga se disparó de 5,435 delitos en 2015, hasta 10,230 robos en 2017. Un crecimiento del 88% en dos años. Mientras que los estados que concentran el 75% del delito de robo a autotransporte de carga son Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que, durante el primer cuatrimestre del 2019, la incidencia delictiva del robo a autotransporte de carga ha aumentado 6% a nivel nacional respecto al mismo periodo del año 2018. De esa forma, durante el primer cuatrimestre 2018 se suscitaron 3 mil 899 delitos de ese tipo, mientras que, durante el mismo periodo, pero de 2019, aumentó a 4,134.[43]

En cuanto a los robos con violencia en los autotransportes de carga, la SESNSP reveló que durante el primer cuatrimestre de 2018 se contabilizaron 3 mil 199 casos perpetuados con actos violentos y, en el mismo periodo de 2019, se llevaron a cabo 3 mil 652 actos con el mismo método agresivo, lo que quiere decir que hubo un aumento del 14%.

En septiembre del 2019, el presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) dio a conocer que la incidencia de robos al autotransporte de carga aumentó. Señaló que tan solo en el segundo trimestre de 2019 se reportaron 4 mil 219 casos de robos, lo que significó un alza de 1% contra el mismo periodo del año 2018. Si se compara con el mismo periodo del año 2017, el crecimiento fue de 30%, siendo el Estado de México la entidad federativa con mayor incidencia reportada de este delito.[44]

[43] CANACAR, "¡No más violencia y agresiones contra nuestros conductores!". Disponible en: https://bit.ly/3cVru4x.

[44] Aumentó robo al transporte de carga, denuncia Concamin. El Universal, 24/09/2019. Disponible en: https://bit.ly/2mIWQWm.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) recordó que este delito se incrementó de 2013 a 2017 en un 480 por ciento y de enero a noviembre de 2018 se registraron 3 mil 775 robos a nivel nacional.[45]

En ese contexto, es preciso que el Estado realice las acciones ejecutivas y legislativas tendentes a disminuir la incidencia de esta conducta que la ley señala como delito, en aras de proteger el patrimonio y la seguridad de las personas físicas y morales que desarrollan sus actividades y desplazan mercancías o bienes por medio del transporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en cualquiera de sus modalidades

Delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en su artículo 8 establece que esta conducta delictiva implica la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin ningún derecho y sin el consentimiento de los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos, además de que se aproveche de mala fe, de estos energéticos.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República detalló que en el año 2012, el número de tomas apócrifas llegó a mil 749, las cuales afectaron a refinerías, terminales de almacenamiento, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, lo que generó pérdidas por más de 3 mil 290 millones de pesos. Además, señaló que en 2014 se detectaron 4 mil 127 tomas clandestinas, lo que equivalió a un 57% más que en comparación de 2013. Asimismo, se estimó que cada dos horas la delincuencia perfora los ductos de PEMEX para robar combustibles.[46]

Por su parte, la Comisión de Hacienda del Senado de la República, expuso que en 2015 se localizaron 5,252 tomas clandestinas, para el 2016 fueron encontradas

[45] El robo a transporte de carga aumenta en México y asesinan a choferes. Televisa News, 23/11/2018. Disponible en: https://bit.ly/2rdJ3Gs.

[45] Senado de la República, "El robo de hidrocarburos se ha convertido en un reto para la seguridad nacional, advierte IBD", 17 de agosto de 2015, Boletín. Disponible en: https://bit.ly/33eyo0r.

6,873 tomas clandestinas, y hasta julio de 2017 se localizaron 5,417 tomas clandestinas.[47]

Conforme al Reporte de tomas clandestinas en 2018 presentado por PEMEX, en las entidades federativas fueron un total de 12,581 durante enero a octubre de 2018. De esa manera, lo estados en donde se incurrió en este delito fueron: Puebla con 1,815, Hidalgo con 1,726, Guanajuato con 1,547 y Veracruz con 1,338.[48] Mientras que en 2017 los estados con mayor índice de tomas clandestinas, de enero a diciembre, fueron: Guanajuato con 1,852, Puebla con 1443, Tamaulipas con 1100 e Hidalgo con 1064.[49]

El Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señaló en abril de 2019 que este ilícito daña la economía nacional y pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Asimismo, informó que de noviembre de 2018 a abril de 2019 disminuyó 95 por ciento y explicó que el robo de combustibles pasó de 81 mil barriles diarios en noviembre de 2018 a 4 mil en abril de 2019, por lo que la estrategia empleada por el Ejecutivo Federal para la persecución de este delito es efectiva y ha generado un ahorro para PEMEX de 12 mil millones de pesos.[50]

Desaparición forzada

En cuanto al delito de desaparición forzada, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[51] establece que la desaparición forzada es "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del

[47] Minuta en materia de combate al robo de Hidrocarburos 2018, Senado de la República. Disponible en: https://bit.ly/2IEGBlc.

[48] PEMEX, Reporte de tomas clandestinas en 2018. Disponible en: https://bit.ly/2ua7l9q.

[49] PEMEX, Tomas clandestinas 2017. Disponible en: https://bit.ly/39ENC0A.

[50] PEMEX, Disminuye 95 por ciento el robo de combustible en México e incrementa producción de crudo. Disponible en: https://bit.ly/2vDr0Po.

[51] Ratificada por México el 18 de marzo de 2008. Entrada en vigor para México el 23 de diciembre de 2010 y Publicada en el DOF el 22 de junio de 2011.

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley."[52]

La desaparición forzada infunde terror a través de la incertidumbre, recalca el sentimiento de inseguridad afectando a la sociedad en su conjunto.

Las desapariciones forzadas tienen diferentes puntos de origen, entre ellos el acoso a las y los defensores de los derechos humanos, actos de hostigamiento, maltrato o intimidación hacia las personas testigos de desapariciones, familiares de las personas desaparecidas y las y los abogados responsables de dar seguimiento a los casos de desaparición forzada.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006 y ratificada por México en marzo de 2008, consagra en su artículo 24 los derechos de las víctimas de una desaparición forzada, entre los que destaca el derecho a la verdad y los diferentes componentes del derecho a la reparación.[53]

El artículo 24.3 de este instrumento establece que "cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos." Del mismo modo, en los artículos 18.2 y 24.7 se establece que los familiares u otras personas que buscan a los desaparecidos y tratan de esclarecer su suerte deben tener garantías que protejan estas actividades.

México también es parte de otros dos instrumentos internacionales, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas[54] y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[55].

---

[52] Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en México, Derechos Humanos, Desaparición Forzada, 16 de diciembre de 2016. Disponible en: https://bit.ly/3025eZX.

[53] LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO: UNA MIRADA DESDE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS. Rainer Huhle miembro del comité contra la desaparición forzada 2011-2019. Una coedición de la ONU-DH México y la CNDH. 2a. Edición, junio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2nQjDwr.

[54] Ratificada por México el 9 de abril de 2002.

[55] Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas aprobada el 18 de diciembre de 1992.

El entonces Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, Jan Jarab, mencionó que en México, a junio de 2018, había más de 35.000 casos de desapariciones registradas y "nadie sabe" qué porcentaje de ellas son obra de las autoridades.[56]

México enfrenta una situación complicada debido al incremento de la violencia, principalmente relacionada con el crimen organizado. Esta violencia continúa a pesar de las detenciones de piezas importantes del crimen organizado, el significativo decomiso de armas y droga o el seguimiento de la ruta del dinero.

La desaparición forzada no presenta un perfil claro de las víctimas, ya que éstas pueden pertenecer a diferentes grupos vulnerables, incluyendo a mujeres, migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos y/o periodistas.

Conforme a la entonces Procuraduría General de la República, en el año 2014 y 2015, se iniciaron 127 averiguaciones previas por desaparición forzada en el ámbito federal. Por su parte, el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el total de personas desaparecidas y no localizadas en México fue de 30 mil 499 casos, de los cuales 29 mil 485 correspondían al fuero común y 1,014 registros al fuero federal.[57]

Según lo expresado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, a enero de 2019 se contabilizó 40 mil 180 personas sin localizar. Los estados que tienen este delito con mayor frecuencia son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla, en conjunto estas entidades acumulan 23 mil casos. Además, la Comisión señaló que este delito se complica cuando se extravían los cadáveres o se entregan de manera equivocada a los familiares. Los estados han extraviado un total de 1,500 cadáveres, de esta cifra, Jalisco es el que tiene mayor número.[58]

[56] BBC News, "En México hay más de 35.000 desapariciones y "nadie sabe" cuántas fueron cometidas por las autoridades, denuncia el representante de la ONU para los Derechos Humanos", 08 de junio de 2018. Disponible en: https://bbc.in/2C3sPrM.

[57] Excelsior, "Desaparición forzada en México", Raúl Contreras Bustamante, Corolario, 02 de diciembre de 2017. Disponible en: https://bit.ly/2BhNzZj.

[58] Milenio, "Hay 40 mil desaparecidos y casi 37 mil sin identificar", Daniel Venegas, 18/01/2019. Disponible en: https://bit.ly/2IQG9ki.

En el Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas[59] de enero de 2020, se señala que el número de personas desaparecidas hasta el 31 de diciembre de 2019 fue de 61,637. De esta cifra 74% son hombres, 25.69% son mujeres y 0.31% de sexo indeterminado. El 53% de las personas desaparecidas se encuentran en el rango de edad entre 15 y 35 años[60]. Del total de desapariciones, se registraron 5,184 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019.

Frases como "*vivos se los llevaron, vivos los queremos*", "*¿Dónde están?*", "*Hasta encontrarlos*", "*Los desaparecidos nos faltan todos*"; se han convertido en importantes consignas de lucha. La desaparición forzada, constituye un crimen de lesa humanidad.

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

En el 2001, Kofi Annan, entonces Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, mencionó en su discurso que "*[e]l número de muertos de las armas pequeñas eclipsa el de todos los demás sistemas de armas, y en la mayoría de los años excede en gran medida el costo de las bombas atómicas que devastaron Hiroshima y Nagasaki. En términos de la carnicería que causan, las armas pequeñas, de hecho, podrían describirse como 'armas de destrucción masiva.*"[61]

De acuerdo con los artículos 7° y 8° de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de

[59] Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas. SEGOB/CNBP. 06 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/31NZx9u.

[60] Segob. "Presenta Gobernación informe de fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas". 06 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/39pxVu4

[61] Annan, Kofi. "Freedom from Fear: Small Arms". *Informe del Secretario General a la Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas*; A / 54/2000, pág. 52. Nueva York, 2000: Asamblea General de las Naciones Unidas. 27 de marzo. Consultado el 29 de enero de 2020, Disponible en: http://bit.ly/3aTsKnO.

Armas y no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley.

Las armas y las municiones contienen su propia historia. Las marcas que, combinadas con sus características físicas, brindan información importante sobre su fabricante, antigüedad y origen, también brindan información útil para proporcionar indicios vitales sobre las fuentes y trasiegos de las mismas, dependiendo en dónde se encuentren.

La propiedad de armas de fuego varía en los diferentes Estados, algunos permiten la propiedad de diferentes tipos de armas de fuego a civiles, estas mismas armas, en otros Estados sólo están permitidas para uso militar. Es importante señalar que la palabra civil se relaciona a la persona que posee el arma, quien no pertenece al sector castrense, y el uso de dicha palabra no tiene que ver con un atributo de la personalidad jurídica, en este caso, su estado civil.

La violencia generalizada, la desigualdad e impunidad, así como el rápido crecimiento de las ciudades con urbanización descontrolada. El fácil acceso a las armas, su precio bajo en el mercado negro, el contrabando y el crimen organizado, son situaciones que favorecen la posesión de armas de fuego en manos de civiles.

Las armas de fuego son utilizadas para matar hasta mil personas diariamente, millones más resultan heridas o sus vidas se ven perjudicadas como consecuencia de la afectación en el desarrollo y/o economía del país.[62]

De acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Armas Pequeña (*Small Arms Survey*), en 2017 había en el mundo más de mil millones de armas de fuego. La mayoría de éstas, es decir 857 millones (85%) se encontraban en manos de civiles, mientras que 133 millones (13%) se ubicaron en arsenales militares y 23 millones

[62] Declaración de Ginebra 2008, "Dimensiones de la violencia armada". *Carga global de violencia armada*, Ginebra: Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y el desarrollo. 12 de septiembre. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2tzeWy3

(2%) fueron registradas como propiedad de las agencias responsables de la aplicación de la ley.[63]

De los 857 millones que se encontraban en manos de civiles, aproximadamente 100 millones fueron registradas, lo que representa el 12 por ciento del total mundial. A nivel nacional, las tasas de propiedad son de aproximadamente 120.5 armas de fuego por cada 10 residentes de Estados Unidos y menos de un arma de fuego por cada 100 residentes en países como Indonesia, Japón, Malawi y varios Estados Insulares del Pacífico.[64]

En el siguiente cuadro se presenta el total de armas de fuego legales e ilícitas poseídas por civiles en los países y territorios con mayor número de éstas.

		Turquía	13,200,000	Arabia Saudita	5,500,000
India	71,100,000	France	12,700,000	Sudáfrica	5,400,000
China	49,700,000	Canadá	12,700,000	Colombia	5,000,000
Pakistán	43,900,000	Tailandia	10,300,000	Ucrania	4,400,000
Federación Rusia	17,600,000	Italia	8,600,000	Afganistán	4,300,000
Brasil	17,500,000	Iraq	7,600,000	Egipto	3,900,000
México	16,800,000	Nigeria	6,200,000	Filipinas	3,800,000
Alemania	15,800,000	Venezuela	5,900,000		
Yemen	14,900,000	Irán	5,900,000		

*Fuente: *Small Arms Survey* (2018).

[63] Small Arms Survey, "Small Arms Survey reveals: More than one billion firearms in the world". News. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/370HAFR

[64] Aaron Karp. Small Arms Survey, "Estimating Global Civilian HELD Firearms Numbers", junio 2018. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/373wXIN

Estudios recientes sugieren que la reserva mundial ha aumentado en la última década, principalmente a las tenencias de civiles. Los factores que tienden a impulsar los niveles de propiedad por civiles de armas de fuego incluyen el aumento en el suministro de éstas, su producción y demanda e ingresos de la población, aunque existen algunas excepciones donde la propiedad pública de armas va en declive como en Japón.

De acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo[65], el número de víctimas de la violencia armada sigue en aumento. La mayoría de las muertes por violencia armada han ocurrido en países no afectados por conflictos armados. Señala también que el impacto económico de la violencia armada es considerable; sin embargo, los efectos negativos que conlleva van más allá de los costos humanos y económicos, pues provoca desplazamientos forzados, la disminución del capital social y constituye un obstáculo para la inversión. Del mismo modo, promueve la corrupción y fomenta la impunidad.

La violencia con armas de fuego está relacionada con los delitos cometidos a través de redes criminales internacionales, como el tráfico de personas, drogas y armas. Anualmente se fabrican a nivel mundial alrededor de 8 millones de armas de fuego, si a esto se le suman de 10 a 15 mil rondas de municiones, representa suficientes balas para disparar a cada persona en el mundo, no una, sino dos veces.[66]

El 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), que regula el comercio internacional de armas convencionales, desde pequeñas hasta tanques de batalla, aviones de combate y buques de guerra. El tratado busca fomentar la paz y la seguridad al poner fin a los flujos de armas desestabilizadoras en las regiones en conflicto, así como evitar que los infractores de los derechos humanos y del derecho de la guerra reciban armas.

Otro instrumento de las Naciones Unidas es el Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones,

[65] La Declaración de Ginebra sobre la violencia armada y el desarrollo, una iniciativa diplomática destinada a abordar las interrelaciones entre la violencia armada y el desarrollo.

[66] Amaya Beltrán, Andrea. El tráfico de armas de Estados Unidos a México: un problema sin pronta solución, disponible en: https://bit.ly/2xu2jGq.

legalmente vinculante para los Estados firmantes y el Programa de Acción de las Naciones Unidas para las armas pequeñas, que establece un marco normativo para el control de armas pequeñas y cubre un amplio espectro de áreas temáticas y actividades.

En la Agenda 2030, el Objetivo 16 señala lo siguiente:

Objetivo/indicador	
16.1	Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. *Al respecto, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) apoya el establecimiento de sistemas de justicia penal eficaces, justos y humanos*
16.4	De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los archivos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.
16.4.1	Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes (en dólares corrientes de los Estados Unidos)
16.4.2	Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente, de conformidad con los instrumentos internacionales

A nivel regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), un protocolo multilateral que es jurídicamente vinculante y del cual la OEA es depositario.

En América Latina las armas de fuego representan un alto porcentaje en los homicidios, los primeros 15 lugares de muertes violentas cometidas por armas de fuego corresponden a esta región.

Es importante añadir que la mayor parte de los países tienen políticas restrictivas sobre la tenencia de armas de fuego y pocas son las legislaciones que las categorizan como permisivas[67]. Aquí algunos ejemplos:

Australia[68]

En 1996, en Port Arthur fueron asesinadas 35 personas, hecho que dio pie al endurecimiento sobre el control de las armas de fuego y la prohibición de diversos tipos de armamento. En 2012, Australia promulgó leyes restringiendo la tenencia de armas, entre las que se incluyó que los civiles mayores de 18 años tienen derecho a poseer armas de fuego siempre y cuando establezcan una razón genuina para poseerla, por ejemplo, pertenencia al club de armas, caza, tiro al blanco, recolección de armas de fuego, control de plagas y usos ocupacionales estrechos. Según la ley, la protección personal no es una razón genuina.

La regulación de armas de fuego en Australia se categoriza como restrictiva, la cual es establecida por las autoridades locales del Estado y Territorio. A los civiles no se les permite poseer armas de fuego automáticas y semiautomáticas, escopetas de acción automática y de acción de bombeo, pistolas con un calibre superior a 0,38

[67] Alpers, Philip y Marcus Wilson. (2013). *Impacto global de la violencia armada: armas de fuego, salud pública y seguridad.* Sydney School of Public Health, Universidad de Sydney. GunPolicy.org, 14 de Agosto. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/37DAIzr.

[68] Australia – Datos sobre Armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2S5DCaF.

pulgadas con solo excepciones limitadas, pistolas semiautomáticas con una longitud de cañón de menos de 120 mm y revólveres con un cañón de menos de 100 mm.

Japón[69]

Por otro lado, la legislación en Japón prohíbe toda tenencia de armas, las muertes a balazos han sido implícitamente eliminadas. En este país la Ley redactada en 1958 parte de que "ninguna persona poseerá un arma o armas de fuego", es decir, se infiere que nadie debe de tener armas y de este principio se empiezan a trabajar las excepciones respecto a quien sí puede portarlas.

La legislación de control de armas de fuego en Japón incluye la Ley de Control de Armas de Fuego y Espadas, la Ley de Fabricación de Artillería, la Ley de Control de Explosivos, la Ley de Aduanas y la Ley de Divisas y Comercio Exterior.

Las y los solicitantes de licencias de armas de fuego deben demostrar una legítima razón para poseerlas, por ejemplo, caza o tiro al blanco (con un permiso especial). La licencia debe de ser renovada cada tres años.

La edad mínima para tener un arma de fuego es de 18 años y para adquirirla, la persona debe someterse a una verificación de registros penales, de enfermedades mentales y de adicciones. La pena máxima por portación ilegal de armas de fuego es de 15 años.

China[70]

En este país la ley mantiene un fuerte control respecto a la posesión de armas de fuego. En términos generales, los civiles tienen prohibido adquirir, poseer o transferir un arma de fuego o municiones.

[69] Japón- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2GXHkwK.

[70] China- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/39cXHBK.

La legislación sobre el control de armas de fuego incluye la Ley sobre el Control de Armas de Fuego de 1996, la Regulación de Armas de Fuego y los Órganos de Seguridad Pública.

Las licencias de armas de fuego se encuentran estrictamente restringidas a la caza, el tiro deportivo y control de animales. Las y los solicitantes de una licencia de armas de fuego debe someterse a una verificación de registros penales, de enfermedades mentales y de violencia doméstica. La pena por posesión ilegal de armas de fuego es un máximo de dos años de prisión.

Reino Unido[71]

El gobierno británico aprobó el *Firearms Act* 1997, ley que regula de manera estricta la posesión privada de armas de fuego. Además, la legislación sobre el control de armas de fuego incluye: la Ley de armas de fuego 1968, la Ley de control de exportaciones de 2002, la Orden de 2008 sobre el control de las exportaciones, la Ley (defensa) de importación, exportación y poderes de aduanas de 1939, la importación de productos (control) de 1954, la Directiva del Consejo Europeo de 18 de junio de 1991 sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, la Regulación de la Unión Europa de armas de fuego de 2012, la Posición Común sobre el control de corretaje de armas de 2003 y el Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles, de 1 de julio de 1969.

Los civiles no tienen permitido tener armas de fuego automáticas y semiautomáticas, armas cortas y munición perforante y solo los propietarios de armas con licencia pueden legalmente adquirir, poseer o transferir un arma de fuego o municiones.

La edad mínima requerida para la tenencia de armas de fuego es: 14 años para obtener una licencia, 17 años para la compra (en general) o 21 años para la compra de escopetas. A las y los solicitantes de una licencia se les realiza una verificación de registros penales, de enfermedades mentales y de adicciones. La licencia por

[71] Reino Unido- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2yWVI6g.

posesión de arma debe de ser renovada cada 5 años. La pena máxima por posesión ilegal de armas de fuego es 5 a 10 años de prisión, dependiendo del tipo de arma.

El número de armas de fuego varía según las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido. En Irlanda del Norte, por ejemplo, la legislación es más suave y el número de posesión de armas es más alto. En Escocia, por su parte, en 2012 se promulgaron leyes respecto a las restricciones para la portación de armas, lo que redujo en un 50% la mortandad por armas de fuego.

Alemania[72]

La Ley Federal de Armas de 1972 rige la posesión de éstas, manteniendo una política de dos niveles con relación a la propiedad de armas de fuego. La regulación se clasifica como restrictiva.

La legislación sobre el control de armas de fuego incluye la Ley orgánica (Ley de control de armas de guerra), la Ley de armas de 2002, Directiva del Consejo de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas, la Regulación de la Unión Europa de armas de fuego de 2012, la Posición Común sobre el control de corretaje de armas de 2003 y el Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles de 1 de julio de 1969. Las autoridades encargadas de regular las armas de fuego son el Ministerio Federal del Interior y la Comisión Europea.

Solo las personas propietarias de armas con licencia pueden legalmente adquirir, poseer o transferir un arma de fuego o municiones. La edad mínima requerida para la tenencia de armas de fuego es 18 años. Al igual que en los países anteriores, el o la solicitante de una licencia de armas de fuego debe someterse a una verificación de registros penales, de enfermedades mentales y de adicciones.

La pena máxima por posesión ilegal de armas de fuego es 10 años de prisión. Se estima que existen alrededor de 25 millones de armas en manos de civiles alemanes.

[72] Alemania-Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/39fcxri.

Rusia[73]

La legislación en Rusia es también bastante estricta, el número total de armas en este país se cifra alrededor de 12 millones. Para poder obtener un arma de fuego es necesario contar con una licencia expedida por los órganos del Ministerio del Interior, tomar un curso de seis horas y media sobre el manejo de armas de fuego en forma segura y acreditar unas pruebas federales sobre normas de seguridad.

La legislación sobre el control de armas de fuego incluye la Ley federal de armas de 1996, el Código Criminal de la Federación de Rusia y el Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de fuego portátiles del 1 de julio de 1969.

Las entidades responsables para la regulación de armas son el Ministerio del Interior, el Ministerio de Industria y Comercio, el Servicio Federal de contratos de defensa, el Presidente, el Gobierno o el Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica.

Para poseer una licencia de portación de arma de fuego, las personas solicitantes deben demostrar una legítima razón para poseerla, por ejemplo: caza, tiro al blanco, colección, protección personal, seguridad. Ésta puede obtenerse después de los 18 años. La pena máxima por posesión ilegal de armas de fuego es 8 años de prisión y una multa.

Brasil[74]

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en inglés) Brasil es el país con mayor cantidad de muertes por armas de fuego en el mundo. En 2010 se registraron 19.3 muertes por cada 100,000

[73] Rusia- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/388ANvk.

[74] Brasil- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/377dbgi.

habitantes. Se estima que el número total de armas en este país oscila entre los 14 y 17 millones, de las cuales más de la mitad no se encuentran registradas[75].

La legislación sobre el control de armas de fuego comprende la Ley de armas de fuego N° 10 826 de 2003, y su reglamento N° 5 123, el Decreto N°3 665 de 2000, la Ley Ministerial N° 7 de 2006, la Ley Ministerial N°16 de 2004, la Constitución y el Código Penal de Brasil.

Todas las armas deben de estar reguladas por el Ministerio de Justicia y la Policía Federal a través del Sistema Nacional de Armas (SINARM) y el Comando de las Fuerzas Armadas de Brasil, así como figurar en el registro estatal. Pueden ser adquiridas por personas mayores a los 25 años. La licencia se expide previa verificación de registros penales, de enfermedades mentales y de empleo, y debe de ser renovada cada tres años.

La pena máxima por posesión ilegal de armas de fuego es de dos a cuatro años de prisión y una multa.

Estados Unidos[76]

En Estados Unidos la regulación de armas de fuego está clasificada como permisiva. El derecho a la posesión de armas de fuego se encuentra determinado por la propia Constitución. La Segunda Enmienda protege el derecho de las y los ciudadanos a portar armas.

La legislación sobre el control de armas de fuego incluye la Ley nacional de armas de fuego de 1934, la Ley de control de armas de 1968 modificada y la Ley Brady para la Prevención de la Violencia por Arma de 1993 (solamente legislación federal, cada estado y territorio en los EE.UU. dicta su propia ley sobre armas de fuego).

Las personas con calidad de civiles, es decir, quienes no forman parte de la milicia, no tienen permitido tener metralletas, escopetas de cañones recortados y fusiles, silenciadores de armas y la munición perforante, sin la inscripción correspondiente.

---

[75] *Ídem.*

[76] Estados Unidos- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/38a3CaA.

La adquisición de armas por parte de civiles es de las más altas a nivel mundial. El acceso a éstas es mucho más fácil, ya que en varios estados es posible comprarlas sin registro ni permiso de las autoridades, lo que lo ha convertido en el país en donde se han presentado mayor número de incidentes violentos por la portación de armas de fuego.

El informe de la UNDOC de 2007 señala que en Estados Unidos había 270 millones de armas en manos de la población. En el 2010, la tasa de muertes por armas de fuego fue de 3,2 por cada 100,000 habitantes, es decir, 9,960 homicidios de este tipo. La Unidad de Control del Crimen del FBI señala que en el 2011 ese índice fue de 2,8 por cada 100,000 habitantes.

Los últimos días de diciembre de 2019, el Congreso de Estados Unidos destinó 25 millones en dólares federales para financiar la investigación sobre violencia armada. De acuerdo con los datos recopilados por *Gun Violence Archive*, al menos 15,292 personas fueron asesinadas por armas de fuego, lo que representa un aumento aproximado del 3% con respecto al 2018.

El número de lesiones causadas por armas de fuego aumentó el 5% con respecto al año anterior (26,613). Las víctimas asesinadas o heridas en tiroteos de niños y adolescentes aumentaron. En 2019 hubo 3,771 víctimas menores de 18 años, en 2018 fueron 3,359 y en el 2017 3,991[77].

En 2019 el número de comerciantes de armas de fuego autorizados fue de 129,615. Portar abiertamente armas de fuego en público está permitido con o sin autorización dependiendo de la jurisdicción.

A menos que se permita de manera específica, las armas de fuego civiles están prohibidas en edificios federales, escuelas y parques nacionales. Al examinar la correlación entre portar armas y la tasa de mortalidad por éstas, se observa la conveniencia de considerar la adopción de medidas para su regulación precisa.

[77] Estas cifras excluyen los suicidios. "Muertes por arma aumentaron en 2019", Nass Daniel, The Trace, 21 de enero de 2020. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2SoP0xp.

México[78]

Los delitos cometidos por medio de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea van en incremento día a día. El flujo de municiones y armas de fuego ilegales hacia nuestro país se origina en Estados Unidos, más de 213 mil armas entran a México cada año por medio del mercado negro. [79]

El total estimado de armas de fuego de particulares tanto lícitas como ilícitas en 2017 fue de 1,680,900. La tasa estimada de posesión civil de armas de fuego (tanto lícitas como ilícitas) por cada 100 habitantes en 2017 fue de 12,90.

La incidencia delictiva con armas de fuego, publicada en el portal de datos abiertos, señala que en la Ciudad de México existe un incremento de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. En el primer trimestre de 2016 se cometieron 110 homicidios por armas de fuego, en el mismo periodo de 2017 fueron 170. El primer trimestre de 2018 se registraron 215 casos y en ese lapso de 2019 se matricularon 289.[80]

En el primer trimestre de 2016, el registro de los casos por lesiones con armas de fuego fue de 330, cifra que se incrementó un 48% en el mismo periodo de 2019, es decir, fueron registrados 485 casos.

El robo a conductores y pasajeros de automóviles, cometido mayormente con armas de fuego pasó de 291 casos en el primer trimestre de 2016 a 1,009 casos. En el mismo periodo de 2019 el aumento fue de casi 250%.[81]

La información difundida se desglosó de los siguientes datos consolidados por año.

---

[78] México- Datos sobre armas, figuras y leyes. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2S5ZN0H.

[79] Holst Maximilian (2019, junio) "La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego" México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Policy Brief. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ZZ83ST.

[80] Animal Político. Ángel, Arturo, 8 de mayo de 2019, "Delitos graves con armas de fuego se disparan hasta 250 % en alcaldías de CDMX". Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: http://bit.ly/2SpA1TR.

[81] *Idem.*

Año/Delito	Portación de arma prohibida[82]	Portación de Arma de Fuego[83]	Lesiones dolosas por arma de fuego[84]	Homicidio por arma de fuego[85]	Homicidio culposo por arma de fuego[86]	Disparo de arma de fuego[87]	Robo a pasajero/conductor de vehículo con violencia[88]
2016	215	106	1,580	579	38	77	1,313
2017	222	161	2,176	798	52	79	2,185
2018	260	168	2,175	941	63	99	3,218
2019	164	221	895	571	9	63	2,121
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), especificó que de los 18.9 millones de delitos presenciales de 2018, en el 32.2% de ellos los delincuentes portaban arma de fuego. También señaló que la comisión de delitos de armas de fuego en 2018 fue la más alta desde 2014.

En cuanto a los estados de la república en los cuales se cometen delitos con armas de fuego o blanca, se destaca que ocupa el primer lugar el Estado de México con 67%, le sigue la Ciudad de México con 56.5%, Tabasco con 53.1%, Puebla con 45%, Sinaloa con 39.5%, Nuevo León 38.8%, Baja California 38.2%, Quintana Roo 37.9%, Tamaulipas 36.9% y, por último, Chiapas con el 36.4%.[89]

Durante el primer semestre del año 2019, se contabilizaron 7 mil 381 averiguaciones previas y carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, la posesión o portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin que hayan sido registradas

[82] Portal de datos abiertos, Carpetas de Investigación de la PGJ de la Ciudad de México. Delito: "Portación de armas prohibidas". Disponible en: http://bit.ly/3bweVw2.
[83] *Ibidem*. Delito: "Portación de arma de fuego". Disponible en: http://bit.ly/2UGVDht.
[84] *Ibidem*. Delito: "Lesiones dolosas por arma de fuego". Disponible en: http://bit.ly/31HNQkR.
[85] *Ibidem*. Delito: "Homicidios por arma de fuego". Disponible en: http://bit.ly/2SfAdX3.
[86] *Ibidem*. Delito: "Homicidio culposo por arma de fuego". Disponible en: https://bit.ly/3cX8xhM.
[87] *Ibidem*. Delito: "Disparo por arma de fuego". Disponible en: http://bit.ly/3bu6RMc.
[88] *Ibidem*. Delito: "Robo a pasajero/Conductor de vehículo con violencia". Disponible en: http://bit.ly/2SfBRbb.
[89] INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Consultado el 29 de enero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2U79M5k.

previamente en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al realizar un comparativo con el mismo periodo del año anterior se puede observar que las investigaciones por violaciones a la referida ley aumentaron en un 4.4%, ya que entre enero y junio de 2018 se registraron 7,071. Lo anterior, con base en las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.[90]

Algunas noticias que refieren datos relevantes declarados por las diversas autoridades mexicanas

El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (AFT), señala que por año ingresan a México 200 mil armas de fuego. No obstante, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, indicó que las fuerzas federales mexicanas lograron asegurar 193 mil 413 armas, estas provienen, en la última década, en un 70% de Estados Unidos y el resto de otros países como España, Italia y Austria.

El titular de la SEDENA señaló que los principales puntos donde el tráfico de armas se da con mayor frecuencia en ambas fronteras, como San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

Con base en la información de la ATF, hasta agosto de 2019 se han registrado 133 mil 753 licencias para la venta de armas de fuego, de las cuales 22 mil 689 se otorgaron en cuatro estados fronterizos con nuestro país: California, Arizona, Nuevo México y Texas.[91]

Por último, el mismo Secretario agregó que en los últimos 10 años, secretarías o fiscalías reportaron 12 mil 573 armas de forma ilegal y que del 2009 al 2019 ingresaron 2 millones de armas por tráfico ilegal desde el extranjero a México.[92]

---

[90] El Economista "Se elevan carpetas por posesión de armas exclusivas del Ejército", en Cámara de Diputados, Síntesis Informativa, viernes 26 de julio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/38D13hk.

[91] Excelsior, "Entraron 2 millones de armas ilegales al país: Secretaría de la Defensa Nacional", Isabel González, 14/08/2019. Disponible en: https://bit.ly/33AxD1u.

[92] El Sol de México, "Se han adquirido más de 2 millones de armas ilegalmente: Sedena", Gabriela Jiménez, 13/08/2019. Disponible en: https://bit.ly/2VR9Y9C.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), indicó que entre el 2007 y hasta febrero del año pasado, se intentó ingresar por alguna de las 49 aduanas establecidas en el territorio nacional alrededor de 70,000 cartuchos y cargadores para armas de fuego, además de unas 700 armas.[93]

La entonces Procuraduría General de la República señaló que en 2017, uno de cada siete delitos por los cuales se inició una investigación fue por presencia de armamento de alto poder ilegal. Sin lugar a duda, esta es una clara violación a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De esa manera, los casos registrados durante ese año equivalen a una tasa de 11.1 casos por cada cien mil habitantes, un incremento del 10% de este ilícito, en comparación de 2016, en el que la tasa fue de 10.1 casos.[94]

El uso ilícito de armas de fuego en contra de las mujeres va en aumento. De enero a agosto 2015 murieron a tiros 12% de las víctimas de 255 feminicidios por los que se inició una investigación. Mientras que para el mismo periodo de 2019, el número de mujeres asesinadas a tiros subió a 23% del total de 638 indagatorias iniciadas por ese motivo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detalló que, en los años 2016, 2017 y 2018, las indagatorias iniciadas en el periodo enero-agosto fueron 400, 515 y 559, respectivamente. La proporción de ellas que asienta el uso de armas es de 23, 26.2 y 21.5%, respectivamente.

A principios del año 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que en el ámbito federal, los delitos más frecuentes están relacionados con la portación de armas de fuego, contra la salud y el robo de hidrocarburos, que juntos representan más del 83.6% del total en las causas penales judicializadas a nivel federal, con especial incidencia en los estados de Puebla, Guanajuato, Baja California y Chihuahua.[95]

---

[93] El Economista, "Tráfico de armas supera cifras de aseguramientos. Héctor Molina y Jorge Monroy, 24/07/2019. Disponible en: https://bit.ly/2ptu25x.

[94] Animal Político. "Delitos de posesión de armas y explosivos suben en el último año; bajan los decomisos de droga", Arturo Ángel, 08/03/2018. Disponible en: https://bit.ly/2Hk4dsp.

[95] Consejo de la Judicatura Federal, Informe Anual de Labores 2018, p. 19. Disponible en: https://bit.ly/2W8zaKR. Informado por La Jornada, "Robo de hidrocarburos, entre los delitos más frecuentes

Delitos cometidos con armas réplica, falsas o de juguete

El uso de armas réplica se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente por los delincuentes para intimidar a las víctimas y así cometer robos (principalmente), entre otros delitos, esto en aprovechamiento de la facilidad con que pueden adquirirse este tipo de instrumentos y por ser igual de efectivos para amagar a sus víctimas, dada la dificultad que representa para una persona en una situación de temor identificar la diferencia con un arma de fuego real.

De acuerdo con información publicada en medios periodísticos, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de enero a abril de 2019 se contabilizaron 427 detenciones por la comisión de delitos con armas réplica; en el primer trimestre del año en el año 2018 se registraron mil 757 detenciones, mientras que en 2017 se registraron 713, lo que representa un aumento de 146%.[96]

En varias entidades de la República se encuentra tipificado como un tipo de violencia la utilización de armas réplica que tengan la apariencia de un arma de fuego, como juguetes o cualquier otro instrumento que se asemeje a una arma real, con el que es posible intimidad y amagar a la víctima del delito, como se observa en la siguiente tabla.

Baja California[97]
Artículo 227 Ter. Robo con violencia. Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de tres a seis años de prisión. Hay violencia física o moral, pudiendo recaer la primera sobre las personas o las cosas. Si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. ...

CJF", César Arellano García. 06 feb 2019. Consultado el 3 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2Oxuml g.

[96] Diario Puntual. "Incrementa 146 por ciento detenidos por asaltar con armas "patito" en la CdMx". Por Redacción. 28 de abril de 2019. Consultado el 10 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2U2nhna.

[97] Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Congreso de Baja California. Disponible en: https://bit.ly/2u7orVt.

Se equipará a la violencia moral, cuando la víctima haya sido intimidada, mediante la utilización de juguetes u otros objetos que tengan apariencia, forma o configuración de armas de fuego, de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido. Artículo 245. Extorsión. Comete el delito de extorsión y se le aplicará de cinco a quince años de prisión y multa hasta quinientos días, el que sin derecho y mediante violencia física o intimidación, obligue a otro a dar, hacer, no hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro, para sí o para otro, o causar un perjuicio patrimonial. Artículo 246. Agravantes. Las penas previstas en el artículo anterior se agravarán conforme a las siguientes disposiciones: I. y II... III. Además de las penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán de dos a cuatro años de prisión cuando en la comisión del delito intervengan una o más personas armadas o con la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

[redacted][98]
Artículo 13 (Prisión preventiva oficiosa, y factores de riesgo que indican imponer prisión preventiva) A. (Prisión preventiva oficiosa) I. a VI. ... VII. Los delitos cometidos con armas. Se consideran delitos cometidos con armas los que, para lesionar o intimidar, el sujeto activo emplea alguna de las armas comprendidas en el artículo 336 de este código o en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

[98] Leyes estatales vigentes. Congreso de Coahuila. Disponible en: https://bit.ly/39FP5nq.

De igual manera, cuando utilice cualquier instrumento que sin ser arma de fuego, dispara proyectiles con la capacidad de lesionar al sujeto pasivo. Artículo 283 (Modalidades agravantes del robo) Se aumentarán en una mitad el mínimo y el máximo de las penas previstas en el artículo 279 de este código, según la cuantía del robo de que se trate, cuando aquél se cometa: I. a XIV. ... XV. (Intimidación sin armas y arma de fuego simulada) Mediante intimidación sin armas o con un instrumento que parezca un arma de fuego.

[redacted][99]
ARTÍCULO 225. Las penas previstas en los artículos anteriores, se incrementarán con prisión de dos a ocho años, cuando el robo se cometa: I ... II. Por una o más personas armadas; portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia similar que produzca en la victima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. Se equipará a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

[redacted][100]
Artículo 236. El delito de robo se considera calificado, cuando:

[99] Compendio de normatividad vigente. Congreso de la Ciudad de México. Disponible en: https://bit.ly/2P2VDo9.
[100] Legislación estatal. Congreso de Jalisco. Disponible en: https://bit.ly/37Ci4Hj.

I. a VI...
VII. Los responsables lleven armas, sin que en el caso hagan uso de ellas, aun cuando las mismas no funcionen o estén descargadas o aseguradas, o cuando utilicen objetos que por sus características tengan la apariencia de ser armas auténticas;

[redacted][101]
Artículo 234. Agravantes específicas. Las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán hasta en un tercio, cuando el robo se comela: I. Con violencia física o moral, o cuando se ejerza violencia para darse a la fuga o defender lo robado, o II. Por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. Se equipará a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

[redacted][102]
ARTÍCULO 371.- Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por el delito de robo se agregarán de seis a doce años de prisión y multa de doscientas a mil cuotas. La violencia a las personas se distingue en física y moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona. Hay violencia moral cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente o inminente, capaz de intimidarlo.

[101] Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499. Congreso de Guerrero. Disponible en: https://bit.ly/37zkKW4.
[102] Congreso de Nuevo León. Código. Disponible en: https://bit.ly/320OpX0.

La pena señalada en el primer párrafo será aplicada a quien, para cometer el delito de robo utilice instrumentos que, sin ser armas auténticas, parezcan, reúnan o simulen las características de estas.

[redacted]
Artículo 142.- Robo Calificado. El Robo será Calificado cuando: I. Se cometa con medios violentos como armas o instrumentos que por su forma y características simulen serlo, o uso de violencia física o moral, suficiente en contra de la víctima o sobre otra persona que la acompañe, o cuando se ejerza aquélla para proporcionarse la fuga o mantenerse con lo apropiado;

[redacted]
Artículo 227 Ter. Robo con violencia. Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por el robo simple, se agregarán de tres a seis años de prisión. Hay violencia física o moral, pudiendo recaer la primera sobre las personas o las cosas. Si la violencia en las personas constituyere otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación. Si hay violencia en las cosas y produce daños, éstos quedarán subsumidos en el delito de robo calificado. La violencia a las personas se distingue de física o moral. Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona o a las cosas. Hay violencia moral cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla. Se equipara a la violencia moral, cuando la víctima haya sido intimidada, mediante la utilización de juguetes u otros objetos que tengan apariencia, forma o configuración de armas de fuego, de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

[103] Consulta las Leyes de Aguascalientes. Congreso de Aguascalientes. Disponible en: https://bit.ly/37z0u7c.
[104] Congreso de Baja California Sur. Trabajos Legislativos. Disponible en: https://bit.ly/37AKGAT.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

[redacted][105]
Artículo 275.- Para la imposición de la sanción, el robo se tendrá por ejecutado con violencia: I.-Cuando el sujeto activo emplee la violencia después de consumado el robo para proporcionarse la fuga o defender lo robado. II.-Cuando el delito se ejecute por dos o más personas. III.-Cuando el delito de robo se ejecute de noche. IV.-Cuando el sujeto activo se encuentre armado. En estos casos, cuando el sujeto activo sólo simule estar armado o emplee armas falsas, de juguete o desabastecidas o de aquellas que arrojen proyectiles mediante cualquier mecanismo y tengan la apariencia de armas de fuego, el delito de robo se entenderá realizado con violencia si el sujeto pasivo no se encontraba en condiciones de apreciar la simulación o de salir de su error.

[redacted][106]
CAPITULO II DISPARO DE ARMA DE FUEGO Y ATAQUE PELIGROSO Artículo 253.- Comete este delito quien: I. y II... III. El que haga uso de armas de municiones, ballestas o cualquier objeto que dispare o proyecte objetos, con el propósito de causar daño o atacar a alguna persona. Al responsable se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de sesenta a cien días multa. La misma pena se aplicará al que amenace o intimide a una persona haciendo uso de armas falsas, de juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico, y cause temor efectivo e inminente en la víctima u ofendido.

[105] Código Penal para el Estado de Chiapas. Congreso de Chiapas. Disponible en: https://bit.ly/322D6O4.
[106] Legislación Vigente del Estado de México. Congreso del Estado de México. Disponible en: https://bit.ly/3275grs.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

[redacted][107]

ARTÍCULO *146.- Al que por cualquier medio ilícito ejerza coacción sobre una persona para dar, hacer o dejar de hacer algo, se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión y multa de ochocientas a mil Unidades de Medida y Actualización, sin perjuicio de la sanción aplicable para los demás delitos que resulten.

Para efectos de este artículo también se considerará coacción moral cuando se utilicen juguetes con apariencia de armas de fuego u otros instrumentos que solo puedan ser utilizados para agredir.

[redacted][108]

Artículo 218. Modalidades agravadas.

Se aplicarán de diez a veinte años de prisión, trabajo obligatorio por el mismo tiempo y de dos mil a diez mil pesos de multa o su equivalente en UMAS o salarios mínimos, cuando el robo:

I. ...

II. Se cometa con violencia física o moral en las personas, utilizando armas blancas o de fuego u otros objetos de apariencia similar que produzcan coacción en el ánimo del pasivo;

[redacted][109]

ARTÍCULO 218. Será calificado el robo cuando:

I. Se ejecute con violencia física o moral en las personas.

Para los efectos de esta fracción se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona.

[107] Código Penal para el Estado de Morelos. Congreso de Morelos. Disponible en: https://bit.ly/2HvcgNg.
[108] Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Congreso de Oaxaca. Disponible en: https://bit.ly/38Blo6T.
[109] Congreso de San Luis Potosí. Disponible en: https://bit.ly/3cZe2ws.

Hay violencia moral cuando el o los ladrones amagan o amenazan a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarla. Se equipará a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquéllas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.

Tamaulipas[110]
ARTÍCULO 168.- Son armas prohibidas: I. a IV. ... V.- Las armas réplica que, sin ser armas auténticas, parezcan, reúnan o simulen las características de éstas;

Transporte ferroviario y vías generales de comunicación

Según informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,[111] la red ferroviaria de nuestro país se integra por 26,914 kilómetros de vías, de los cuales 20,885 son vías principales, en su mayoría concesionadas. El sistema ferroviario es operado por ocho concesionarios y moviliza 13% de la carga total transportada en el país. Casi la mitad de los bienes transportados por este medio son productos industriales (46%), le siguen los productos agrícolas (26%) y los minerales (13%). La red ferroviaria se conecta en 8 puntos con la de los Estados Unidos, y con 11 de los principales puertos del país.

De acuerdo con la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública[112], la participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado en los últimos 16 años. El 55.4% de la carga total transportada por este medio (67.5 mil toneladas) se focaliza en 10 productos, entre los cuales, el maíz, cemento, contenedores y laminados de fierro y

[110] Congreso de Tamaulipas. Legislación vigente, Códigos. Disponible en: https://bit.ly/2vJN0by.

[111] SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Informe de Labores 2018-2019. Disponible en: https://bit.ly/2SCz4Zg

[112] CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII LEGISLATURA. Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública. González José de Jesús EL TRANSPORTE FERROVIARIO EN MÉXICO. Carpeta informativa. Junio de 2018.

el acero ocupan los primeros lugares en productos agrícolas e industriales transportados por este medio.

De acuerdo con información de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario,[113] la participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado en los últimos años, movilizando durante el año 2017 126.9 millones de toneladas netas.

Del total de carga movilizada en el sistema ferroviario mexicano, un 63.2% es destinada al comercio exterior (77.1 mil toneladas), del cual 59.3 mil toneladas corresponden a carga de importación y 17.8 mil a exportaciones. De igual forma, el transporte de hidrocarburos se ha incrementado en los últimos 10 años.

El volumen de carga de comercio exterior se divide en 59.3 millones de toneladas de carga de importación y 17.8 millones de toneladas de carga de exportación.

En 2017, ciertos productos y sectores incrementaron su participación en la carga ferroviaria. Dentro de los más sobresalientes se encuentran los minerales con un crecimiento de 19%; en segundo lugar, los productos animales con 15.1%; en tercer lugar, los productos derivados del petróleo con 6.1%. Los inorgánicos quedaron en cuarto lugar con 5.2%.

Por otra parte, el ferrocarril, a través de las modalidades interurbano y suburbano mantiene una participación importante en el movimiento de pasajeros. Durante 2017 se transportaron por ferrocarril 56,714,825 de pasajeros, concentrando la modalidad de interurbano el 0.5%, mientras el suburbano representó el 99.5% del total de pasajeros transportados.

Recientemente, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario declaró que "en los últimos ocho o 10 años, el ferrocarril empezó a ganarle terreno al autotransporte; sin embargo, vemos con preocupación que ahora esa dinámica está estancada",[114] esto es, el 25% de participación que tiene el ferrocarril en el transporte terrestre ha estado estancado.

---

[113] Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Sistema Ferroviario Mexicano. Consultado el 10 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/38HtUkY.

[114] Forbes. "El tren no avanza". Zacarías Ramírez Tamayo. 18 diciembre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2JKjCW3.

En lo que se refiere a materia de seguridad pública, según el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano del Tercer Trimestre 2019[115], durante el segundo trimestre de ese año, ocurrieron un total de 2,840 eventos, de los cuales 1,064 (37.46%) corresponden a actos de robo y 1,776 (62.54%) a actos de vandalismo. En comparación, en el segundo trimestre de 2019 se observó una disminución de 19.48% en el número de sucesos de seguridad pública. Los datos anteriores representan un aumento de 8.35% respecto de casos de robos y un decremento de 30.22% en el rubro de vandalismo.

Por lo que hace al robo a tren, se presentó un incremento marginal de 25.69% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, el robo a vía tuvo un notable decremento de 40.31% en los mismos periodos, debido principalmente a una disminución sustancial (109 eventos equivalente a 70.78%) en el robo a componentes de vía.

Dentro de la categoría de robo a tren, el tipo de evento con una mayor participación es el de robo a producto/carga, el cual concentró el 85.71% de todos los casos de robo a tren, representando un incremento del 12.88% respecto al segundo trimestre. Los estados que más contribuyeron a este rubro durante el tercer trimestre de 2019 fueron Tlaxcala (152 eventos – 19.49%), Jalisco (101 eventos – 12.95%) y Sonora (71 eventos – 9.10%). Tan sólo los tres estados anteriores, en conjunto, representan el 41.54% del total de robos a producto/carga. En el informe de referencia destaca que el 76.79% de los robos a producto/carga ocurren en vías principales.

El subgrupo de mercancías con mayor número de incidencias de robos durante el periodo actual es el de granos, semillas y sus derivados, con un total de 26.97% de las incidencias. En segundo lugar, se encuentran las autopartes, las cuales representan el 24.94% del total de incidencias. El robo de trenes de consumo contribuye con otro 14.68% del total. Todos los demás grupos tienen una aportación menor al 10% a los casos de robo a producto/carga.

[115] Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, "Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, 3er trimestre de 2019", SCT, México, 2019.

En cuanto al robo a vía, el informe trimestral señala que esta categoría alcanza en este periodo su valor más bajo en épocas recientes del Sistema Ferroviario Mexicano, con un total de 154 incidencias, lo que corresponde con un decremento del 40.31% respecto al segundo trimestre. El reporte refiere que dicha disminución se explica gracias a la disminución de 44.13% respecto al trimestre anterior en el rubro de robo a componentes de vía, el cual pasó de 247 a 138 eventos en el actual periodo y que, además, representa el 89.61% del total de robos a vía.

En el caso de los actos vandálicos, se muestra que existió un decremento en el número de eventos de vandalismo de 30.22% entre el segundo y tercer trimestre de 2019, al pasar de 2,545 a 1,776 eventos en el periodo mencionado. La razón principal de esta disminución es que se redujeron 38.92% los eventos de cierre de angulares (al pasar de 1200 a 733 eventos) y 30.47% los eventos de vandalismo a material rodante (al pasar de 1106 a 769 eventos) entre el segundo y tercer trimestre de 2019. Al realizar una comparación con el tercer trimestre de 2018, se tiene un decremento del 31.06% en el número de eventos.

Dentro de la categoría de vandalismo a tren, los casos de vandalismo a cierre de angulares (733 eventos) y a material rodante (769 eventos), constituyen en conjunto el 90.81% del total de casos reportados durante el tercer trimestre de 2019, teniendo como resultado neto un decremento en el número de eventos de vandalismo al tren.

Los estados con mayor incidencia de vandalismo a material rodante en el tercer trimestre de 2019 son Tamaulipas (225 eventos – 29.26%), Querétaro (130 eventos – 16.91%) y San Luis Potosí (109 eventos – 14.17%). Dichos estados, en conjunto, representan el 60.34% del total de vandalismo a material rodante. En este rubro la mayoría de los eventos (700 eventos – 91.03%) se presentan en las vías auxiliares.

Los estados que presentan mayor incidencia en el cierre de angulares fueron Sonora (298 eventos – 40.65%), Tlaxcala (168 eventos – 22.92%), Puebla (50 eventos – 6.82%) y Coahuila (43 eventos – 5.87%). En el acumulado, estas entidades sumaron el 76.26% de todas las incidencias reportadas durante el trimestre actual. También resalta el informe que el 84.04% de actos vandálicos de este tipo ocurren en vías principales.

Por su parte, la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la entonces Procuraduría General de la República, en su Informe de Labores 2017 -2018, reportó que, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, las 32 delegaciones estatales registraron 181 delitos en vías de comunicación y correspondencia.[116]

CUARTA.- Tal y como se expresó en el punto considerativo SEGUNDO de este Dictamen, es ahora pertinente desarrollar en cada caso el contenido de las reformas que habrán de realizarse a cada uno de los cuerpos legales que se involucran en el cumplimiento del mandato constitucional, tomando en cuenta los planteamientos realizados por las y los legisladores promoventes de las iniciativas que se han referido en el apartado respectivo, con las modificaciones que las comisiones dictaminadoras han considerado necesarias, en aras de una mayor certeza jurídica en el establecimiento de los delitos que ameritan la aplicación oficiosa de la medida de prisión preventiva.

Así, en este apartado se toman en cuenta las propuestas de reforma expuestas en las iniciativas de las Senadoras y Senadores Cruz Pérez Cuellar, Julio Ramón Menchaca Salazar, Miguel Ángel Mancera Espinoza, Ricardo Monreal Ávila, Claudia Edith Anaya Mota, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Marco Antonio Gama Basarte, Verónica Martínez García, además de analizar la propuesta del Congreso del Estado de Baja California; con las menciones específicas de aquellos planteamientos que no se adoptan precisamente en los términos planteados y por ello se modifican, así como de aquellos respecto de los que no se considera su viabilidad.

Al efecto, se llevará a cabo un método de análisis por legislación que se plantea reformar en cada una de las iniciativas, en las que se incorporarán las modificaciones que resulten conducentes, sin demérito de la mención del legislador o legisladora que la propuso, pues la intención es abordar cada cuerpo normativo

[116] Procuraduría General de la República, 6º Informe de Labores 2017-2018, 1 de septiembre de 2018. Disponible en: https://bit.ly/3bMPFle.

correspondiente al tema que le atañe. Dicho lo anterior, se procede a realizar en los términos siguientes.

Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Este artículo es de toral importancia para los propósitos del presente Dictamen, toda vez que en él se consigna prácticamente la regulación secundaria del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, al desarrollar tanto los supuestos por los que el Ministerio Público Federal puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva de manera justificada, como aquellos delitos por los que el juez debe ordenar dicha medida de manera oficiosa, que es precisamente el tópico que nos ocupa.

En ese tenor, se proponen las siguientes reformas al artículo 167:

a) En primer lugar, tenemos la modificación al párrafo tercero, en el que se plantea incorporar la relación expresa de los nuevos delitos previstos en el artículo 19 constitucional, los cuales derivan de la reforma del mes de abril de 2019, cuya regulación en la ley secundaria es materia del presente Dictamen, ya que aún no se encuentran contemplados en este párrafo.

Esto es, el texto señalado del párrafo tercero vigente establece el mandato para el juez de control de ordenar la prisión preventiva de oficio en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. A estos deben sumarse las conductas delictivas adicionadas al artículo 19 constitucional con motivo de la referida reforma.

Por lo cual se propone el texto siguiente:

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de ***abuso o violencia sexual contra menores,*** *delincuencia organizada, homicidio doloso,* ***feminicidio,*** *violación, secuestro, trata de personas,* ***robo de casa***

habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, *delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,* ***delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,*** *así como* ***los*** *delitos graves que determine la ley* ***en*** *contra* ***de*** *la seguridad de la* ***nación,*** *el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.*

b) En cuanto a la propuesta de incorporar en el artículo 167 la equiparación de los delitos cometidos con armas réplica a los perpetrados con medios violentos como armas de fuego, estas Comisiones Unidas concuerdan con dicho planteamiento toda vez que, como se ha señalado en consideraciones anteriores, las denominadas "armas réplicas" son empleadas en la actualidad como instrumentos que provocan a las víctimas una sensación de amenaza a la vida y a la integridad física, tal como lo provoca un arma de fuego real.

Es preciso aclarar que no se habla aquí de considerar la medida cautelar de prisión preventiva para quien porte un arma de juguete o cualquier otra que aparente o se confunda con un arma de fuego, sino que la intención es considerar, de forma equiparada, a los delitos que se cometan utilizando "armas réplica" para amagar o intimidar a la víctima, con aquellos que se realizan a través de medios violentos como un arma de fuego, en virtud de que la violencia moral y psicológica que se ejerce sobre la víctima, provoca el mismo temor de ser lesionado o privado de la vida, como si se tratara de un arma de fuego.

José Manuel Heredia González señala en su estudio sobre Disuasión y lesiones en los delitos armados en México que "[h]ay pocas investigaciones, sin embargo, que analicen el efecto previo al uso de las armas, es decir su capacidad disuasoria y, por lo tanto, una reducción posible del daño. Aunque un arma de fuego es mucho más letal que una punzocortante, su capacidad disuasiva es mucho mayor y, por esto, menos utilizada: *porque causa más daño, se la usa menos*. Este fenómeno disuasorio explica por qué

recurrentemente se utilizan réplicas de armas de fuego durante los delitos, como en el caso de la Ciudad de México, donde se calcula que la mitad de los asaltos se cometen con armas de juguete".[117]

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la utilización de este tipo de instrumentos indudablemente provoca en las víctimas el miedo a ser lastimado al resentir la agresión del sujeto activo que porta el arma de juguete, sin que le sea posible en ese momento distinguir que se trata de un arma falsa, por lo que sus efectos son los mismos, tal y como se advierte de los criterios siguientes.

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA CUANDO EL ACTIVO LOGRA INTIMIDAR AL OFENDIDO EMPLEANDO UNA PISTOLA QUE A LA POSTRE RESULTÓ SER UN OBJETO PLÁSTICO DE JUGUETE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El último párrafo del artículo 371 del Código Penal para el Estado de Nuevo León dispone que hay violencia moral en el robo "... cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarlo.". **De manera que si en autos se probó que al momento de verificarse el delito, el acusado amagó con una pistola al ofendido, pues lo encañonó, y a la postre resultó pericialmente que dicho artefacto era de material plástico, o sea, de juguete, es indudable que su utilización cumplió la finalidad pretendida por el activo, que era lograr vencer la resistencia de aquél y, con ello, garantizar el éxito del atraco, dado que al momento de la consumación del flagelo obviamente el pasivo no estaba en condiciones de saber esa particularidad del arma y sí, por el contrario, es conocido por el común de las personas el poder lesivo que genera una pistola de ser accionada; por tanto, es innegable que en esos instantes, ante el temor de un mal grave, presente e inminente, el ofendido resultó intimidado, por lo que se acredita la calificativa en cita.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 91/2008. 12 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María Luisa Martínez Delgadillo. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

[117] Heredia González, José Manuel. (2018). Disuasión y lesiones en los delitos armados en México. Estudios sociológicos, 36 (107), 361-391. https://bit.ly/3fSV380

Amparo directo 94/2008. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Felisa Díaz Ordaz Vera. Secretario: Raúl Fernández Castillo.

Amparo directo 240/2008. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: José Roberto Cantú Treviño. Secretario: Omar René Gutiérrez Arredondo.

Amparo directo 9/2009. 20 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Felisa Díaz Ordaz Vera. Secretario: Raúl Fernández Castillo.

Amparo directo 117/2009. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María Luisa Martínez Delgadillo. Secretaria: María Mercedes Magaña Valencia.[118]

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA AUN EN EL SUPUESTO DE QUE EL ARMA DE FUEGO UTILIZADA POR EL INCULPADO HUBIESE SIDO DE JUGUETE Y NO HAYA APUNTADO CON ELLA A LA VÍCTIMA DEL DELITO (LEGISLACIÓN PENAL DE SONORA). La violencia moral en el delito de robo prevista en la fracción I del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora se actualiza cuando el sujeto activo amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarlo, utilizando un medio idóneo o suficiente para hacerlo, razón por la cual, en la referida agravante no sólo debe atenderse al elemento eventualmente utilizado, sino también a la actitud intimidatoria que asume el agente; de lo anterior se sigue que aun en el supuesto de que el arma de fuego utilizada por el inculpado hubiese sido de juguete y no haya sido dirigida a dañar directamente la integridad física de las personas, en virtud de que no apuntó con ella a la víctima, resulta inconcuso que con tal actuar se actualiza la referida calificativa, toda vez que con el solo hecho de que hubiese sido mostrada por el sujeto activo bajo el falso supuesto de que era real, tal mecanismo o artificio, por sí solo, resulta suficiente para infundir en el pasivo el temor de ser lesionado, por constituir un amago, amenaza o intimidación y por afectar la capacidad de oposición o resistencia del violentado.

[118] ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA CUANDO EL ACTIVO LOGRA INTIMIDAR AL OFENDIDO EMPLEANDO UNA PISTOLA QUE A LA POSTRE RESULTÓ SER UN OBJETO PLÁSTICO DE JUGUETE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Tesis de Jurisprudencia IV.2o.P. J/3. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010. Página: 1865

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo directo 258/2008. 1o. de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González.

De igual forma, el siguiente criterio es orientador respecto a los efectos que provoca en la víctima el empleo de armas de juguete o cualquiera que tenga la apariencia de un arma de fuego, como un tipo de violencia moral.

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. AL CONSTITUIR ÉSTA LA FORMA DE COMISIÓN DEL DELITO Y TENER COMO FIN AMEDRENTAR A LA VÍCTIMA Y VENCER SU RESISTENCIA AL DESAPODERAMIENTO, SI NO SE LOGRA INTIMIDARLA, NO SE ACREDITA TAL CALIFICATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a la tesis 1a. CXCI/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, página 604, de rubro: "ROBO CON VIOLENCIA MORAL. EL ARTÍCULO 225, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL QUE LO PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL EN SU VERTIENTE DE MANDATO DE TAXATIVIDAD.", en relación con el artículo 225, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, **la violencia moral desvía la voluntad de la víctima, al propiciar que pierda la capacidad de resistir u oponerse a la acción violenta; luego, al constituir aquélla la forma de comisión en el delito de robo y tener como fin amedrentar a la víctima y vencer su resistencia al desapoderamiento,** si tal amago no logra intimidarla, porque ante la actitud violenta del autor o autores del ilícito, se opuso a que le robaran, incluso se defendió y golpeó al sujeto activo, logrando que el medio empleado no cumpliera con la finalidad del agresor, no se acredita la calificativa aludida.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 126/2014. 11 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Fermín Rivera Quintana. Secretaria: María Nelly Vázquez Rivera. Esta

tesis se publicó el viernes 12 de septiembre de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación.[119]

Entonces, es relevante disuadir la utilización de este tipo de instrumentos en la comisión de delitos en contra del patrimonio y la integridad de las personas, pues de no actuar con celeridad y firmeza en este ámbito, la facilidad con que se consiguen este tipo de instrumentos incrementa el índice de delitos cometidos con estos medios.

Sin dejar de mencionar que en una buena cantidad de legislaciones estatales ya se contempla como un tipo de violencia moral la utilización de armas de juguete para amagar e intimidar a las víctimas en la comisión de delitos, tal y como se asentó con anterioridad en el apartado respectivo a este tema.

En tal virtud, se plantea la adición de un párrafo cuarto, en el que se acepta incorporar la equiparación a los delitos cometidos con medios violentos, con aquellos en los que se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos, funcionales o no.

Se propone la ubicación de dicha adición como párrafo cuarto, en virtud de que en el párrafo tercero precedente es donde se señalan los delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que al prever la equiparación de los delitos cometidos con objetos que tengan la apariencia de aquellos, por técnica legislativa, ha de situarse seguidamente a dicha disposición para contribuir a la congruencia normativa.

c) Enseguida, se considera necesario que el artículo 167 en comento se reforme, con la finalidad de incorporar la remisión precisa a las legislaciones secundarias que regulan las materias relativas a las conductas delictivas que se adicionaron al artículo 19 constitucional, toda vez que las disposiciones especiales sobre tales conductas se encuentran establecidas en dichos

[119] ROBO CON VIOLENCIA MORAL. AL CONSTITUIR ÉSTA LA FORMA DE COMISIÓN DEL DELITO Y TENER COMO FIN AMEDRENTAR A LA VÍCTIMA Y VENCER SU RESISTENCIA AL DESAPODERAMIENTO, SI NO SE LOGRA INTIMIDARLA, NO SE ACREDITA TAL CALIFICATIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Tesis Aislada I.7o.P.26 P (10a.). Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III. Página: 2591

ordenamientos, por lo que en armonía con el texto vigente del artículo de mérito, que en sus actuales párrafos cuarto y quinto remiten a las leyes generales y federales especiales, es procedente el reenvío a las nuevas leyes que regulan los delitos adicionados en materia de prisión preventiva oficiosa.

En el mismo contexto, se plantea reformar los actuales párrafos cuarto y quinto, fusionándolos para mayor claridad y quedar como **párrafo quinto**, consistente en la incorporación de **las leyes generales en materia de delitos electorales, desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como de las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada**, las cuales en conjunto, **establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa, precisando con la frase "de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", para delimitar con claridad que estas leyes sólo podrán regular la prisión preventiva oficiosa en aquellos supuestos expresos por el texto constitucional**.

Consecuentemente, se procederá a especificar en apartados posteriores del presente Dictamen, cada una de las normas incorporadas con las conductas respectivas.

d) A continuación, se plantea adicionar las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del párrafo sexto, con la finalidad de establecer los artículos del Código Penal Federal que tipifican conductas consideradas como delitos que, en armonía con el vigente artículo 19 constitucional, habrán de ameritar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.

Cabe señalar que se adiciona **la fracción XII al párrafo sexto del artículo 167, para agregar el abuso o violencia sexual contra menores.** En ese sentido, es importante destacar que el **artículo 261** del Código Penal Federal exclusivamente prevé el delito cometido contra las personas menores de quince años y, por tanto, quedarían desprotegidos aquellos adolescentes entre quince años y la mayoría de edad, razón por la cual resulta menester establecer también la remisión al **artículo 260**, a fin de brindarles protección

a las personas cuyas edades oscilan entre los quince años y la mayoría de edad.

También es de mencionar que, **en cuanto al robo a casa habitación, la fracción XIV adicionada, contempla el supuesto previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal.** Asimismo, se prevé que **las nuevas fracciones XV, XVI y XVII, establezcan, respectivamente, los delitos de ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades.**

En consecuencia, las conductas que se contemplan en las fracciones adicionadas al artículo 167, son los siguientes: **abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; feminicidio previsto en el artículo 325; robo a casa habitación previsto en el artículo 381 Bis; ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo y el robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII, todos del Código Penal Federal.**

e) En virtud de la reforma a la Ley General de Salud que se detalla en el apartado respectivo a dicha ley, se advierte que la fracción XI que contempla el artículo 196 Bis del Código Penal Federal, fue derogado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996[120], por lo que **se plantea eliminar la referencia a dicho artículo por no estar ya vigente.**

f) En observancia de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 17 Constitucional que prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, estas Comisiones dictaminadoras prevén la

[120] DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley de Vías Generales de Comunicación; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. DOF: 07/11/1996.

necesidad de reformar el párrafo octavo y adicionar dos párrafos noveno y décimo, respectivamente, para que exista la posibilidad de **sustituir la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.**

Asimismo, en los párrafos adicionados, se propone establecer que, **si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.**

Finalmente, que **en los casos en los que la víctima u ofendido y el imputado deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que la persona imputada se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.**

Lo anterior atiende a la importancia de conservar la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios cuando ello sea procedente, como una forma de solución alterna al procedimiento y siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, siendo el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato la única posibilidad para no dar pauta a la evasión de la persona imputada.

Ahora bien, en este punto, las Comisiones dictaminadoras consideran conveniente referir algunas propuestas de modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que no se consideran viables en el sentido que fueron planteadas.

1) Respecto a las propuestas de incorporar el delito de portación de armas de fuego previsto en el artículo 160, contra el ambiente en los casos a que se refiere el artículo 420 fracción IV, robo a transporte de pasajeros y turismo a

que se refiere el artículo 376 Ter y abigeato previsto en el artículo 381 Ter, todos del Código Penal Federal, como conductas que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, no se consideran viables, dado que el artículo 19 de la Constitución General de la República no considera en su catálogo a los delitos mencionados, como se explica más adelante.

2) Por lo que hace a la portación de armas de fuego en el tercer párrafo del artículo 167, es de señalar que el dispositivo constitucional se refiere únicamente a delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como aquellos delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, por lo que la sola portación ilegal de armas de fuego no fue considerada por el Constituyente Permanente, sino estrictamente cuando se actualiza alguno de los supuestos antes referidos.

3) En cuanto a la adición de una fracción en la que se establezca la portación de armas de fuego prevista en los artículos 160 y 162 cuando se relacione con las armas de fuego previstas en los artículos 81, 83, 83 Bis, 83 Ter, 84, 84 Bis, 85 y 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se atiende precisamente en esta ley especial de la materia, en la que se determinan como objeto de prisión preventiva oficiosa dichas conductas delictivas.

Por ello, no se considera necesario realizar la modificación al artículo 167, toda vez que los artículos 160 y 162 refieren al tipo básico de portación de armas prohibidas por la ley y, los diversos previstos en la ley en materia de armas de fuego y explosivos, constituyen tipos complementados que merecen su particular tratamiento, según lo establecido en el artículo 19 constitucional, como se explicará en el apartado respectivo a la mencionada ley.

4) Respecto a la adición de una fracción que contemple los delitos contra el ambiente, en los casos a que se refiere el artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal, con relación al último párrafo del mismo artículo, se considera que, aún y cuando dicha conducta ya se encuentra prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y que por esa vía se le puede aplicar la prisión preventiva oficiosa, no se contempla este delito contra el medio ambiente, como tal, en el catálogo estipulado en el artículo 19

constitucional, por lo cual no es procedente adicionarlo en el artículo 167, por carecer precisamente de la base Constitucional.

Misma suerte se sigue respecto del delito de robo a transporte de pasajeros y turismo y el de abigeato, pues dichas conductas delictivas no se contemplan en el texto del párrafo segundo del artículo 19 Constitucional, por lo que no es viable su incorporación en una nueva fracción ni en el tercer párrafo del artículo 167.

No es óbice a lo anterior el criterio sustentado en la Tesis Aislada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, aducido en la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que se cita a continuación.

> PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS. Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que **no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales que las respectivas legislaciones estatales o la Federación, siguiendo lo dispuesto constitucionalmente, consideren como de prisión preventiva justificada** y que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 mencionado, pues la prisión preventiva no está limitada a usarse únicamente en esos delitos; **como ocurre –por ejemplo– con todos aquellos otros casos en que el Ministerio Público lo justifique**, aun cuando el delito, en principio, no se prevea en ese catálogo, **pero concurran razones para justificar también esa medida cautelar** (por la naturaleza del delito y de la pena; comportamiento intraprocesal del imputado; o riesgos legalmente considerables respecto a la víctima o sociedad), sin que ello implique contrariar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

ya que su artículo 19 no establece limitativamente que sólo en los delitos ahí previstos podría hablarse de prisión preventiva, pues dicho precepto no está dirigido a limitar la facultad legislativa de las entidades de la República, o la Federación, en ese aspecto de regulación procesal secundaria que atañe a la gravedad y condiciones de política criminal que, en cada caso, pueden concurrir de manera justificada y circunstancialmente diferenciada en los diversos Estados de un País Federal como el nuestro, aunado a la existencia legal, se insiste, de todas las variantes que el propio sistema prevé para decidir y revisar lo relativo a las medidas cautelares.[121]

*El resaltado es propio.

De lo anterior destaca el siguiente texto de la tesis: "*Si bien es cierto que el precepto constitucional mencionado hace un listado de delitos respecto de los cuales debe ordenarse forzosamente la prisión preventiva oficiosa, también lo es que ello no debe considerarse exclusivamente como un aspecto estrictamente limitativo, sino potencialmente ejemplificativo o enunciativo, es decir, que no se extingue la posibilidad de reconocer otros delitos o supuestos procesales*", **se refiere a la posibilidad de que las legislaturas de los estados o la Federación, consideren como de prisión preventiva justificada** conductas que no estén textualmente en el listado inicial a que se refiere el artículo 19 constitucional.

Como es sabido, el artículo 19 en comento **contempla** en la parte inicial del segundo párrafo **la medida cautelar de prisión preventiva justificada**, la cual puede solicitarse al juez por el Ministerio Público cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo

[121] SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 13/2018. 9 de febrero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela. Esta tesis se publicó el viernes 11 de mayo de 2018 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En la siguiente parte del segundo párrafo del artículo 19 en cita, se **establece la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa**, la cual puede ordenar el juez en los casos que el Constituyente Permanente consideró incluir como conductas que ameritan la aplicación de dicha medida privativa de libertad.

Por lo tanto, debe entenderse que el sentido sustentado en el criterio antes transcrito, obedece a la posibilidad de que las legislaturas estatales y el Congreso de la Unión **no se encuentran limitados por el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, para considerar en otros la aplicación de la medida de prisión preventiva justificada**, pues darle un alcance diferente como el que se pretende, tornaría ocioso el texto constitucional, al dejar completamente abierta a la regulación secundaria la posibilidad de **ampliar las conductas delictivas como de prisión preventiva oficiosa y no justificada**, aún y cuando no estén contemplados en la Carta Magna.

5) Respecto a la propuesta de adición de un tercer párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de medidas cautelares que plantea la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, con el objeto de incluir:

- Una prohibición para que la prisión preventiva oficiosa exceda de noventa días naturales, por ende, de ser el caso, la autoridad judicial deberá sustituirla por otra medida cautelar de las previstas en el artículo 155 del mismo ordenamiento legal.
- La facultad del Ministerio Público para solicitar la continuación (sic) de la prisión preventiva, siempre que presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o los testigos.
- Dicha solicitud deberá contar con la autorización de la persona titular de la Procuraduría (sic) o en quien delegue tal facultad.

Las Comisiones Unidas consideramos que no resulta factible por las siguientes razones:

Si bien coincidimos con la Senadora proponente en cuanto a que la aplicación de la medida cautelar de mérito debe ser excepcional y no generalizada, motivo por el cual en el artículo 19 constitucional, el constituyente permanente distinguió, por una parte, la medida cautelar de prisión preventiva que el Ministerio Público puede solicitar de forma justificada al juzgador respecto de cualquier delito y, por otra, la medida que de oficio ha de dictar la persona juzgadora, de manera excepcional únicamente, respecto de un catálogo limitado de conductas lesivas.

No obstante, se considera pertinente efectuar en lo conducente un análisis de la regularidad constitucional de la propuesta, toda vez que la Carta Magna contiene disposiciones en esta materia, que no deben soslayarse en virtud de la supremacía de que está revestido el texto fundamental.

Al efecto, el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros aspectos, los derechos de toda persona imputada, determinando expresamente que: "***La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años***, *salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.*"

Como se advierte, la Constitución ya prevé un término máximo de duración de la medida cautelar que nos ocupa, el cual contempla cuatro parámetros, a saber:

1. Que la prisión preventiva no debe exceder el tiempo máximo de pena del delito imputado.
2. Que en ningún caso puede exceder del tiempo de dos años.
3. Que, transcurrido ese tiempo, el imputado será puesto en libertad.
4. Que en sustitución es factible imponer otras medidas cautelares.

Es así como la legislación secundaria en materia penal forzosamente debe atender a dichos parámetros, so pena de contravenir el dispositivo constitucional, dado que en tanto éste mantenga su vigencia ha de ser acatado en toda su extensión.

En consecuencia, al existir tales disposiciones vigentes de carácter constitucional, resulta inadecuado establecer como máximo el plazo de noventa días hábiles propuestos por la legisladora, en la legislación secundaria.

Tomando lo anterior de base, es evidente que en los códigos sustantivos penales, tanto del fuero común como del orden federal, existen tipos penales cuya sanción máxima excede los noventa días que se pretende imponer en la propuesta que se analiza, por lo que en una primer valoración, de acceder al planteamiento, la imposición de la medida cautelar en cuestión no podría aplicarse por un término mayor en esas conductas delictivas, aún y cuando la Constitución lo autoriza.

Asimismo, se estaría limitando el texto constitucional respecto del máximo de dos años permitido para sostener la prisión preventiva, pues la norma secundaria crearía una antinomia que necesariamente el juzgador tendría que resolver en acatamiento a la Constitución Federal.

No es óbice a lo anterior el hecho de que la iniciativa plantee que el Ministerio Público puede solicitar la continuación de la medida, pues en todo caso lo tendría que hacer en una temporalidad que no es la que mandata la Constitución, sino en un término diferente, por lo que de cualquier forma se estaría contraponiendo la norma secundaria a la constitucional.

En concordancia con lo anterior, el artículo 19 Constitucional establece los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, mismo que, al igual que el citado artículo 20, no la limita al plazo propuesto, ni condiciona de manera alguna la necesidad de revisar tal medida cautelar cada noventa días naturales.

Aunado a lo anterior, la propuesta conlleva una inconsistencia ya que, contrario al texto constitucional, que prevé solamente que el máximo no se puede prorrogar sino cuando ello se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, ahora el máximo improrrogable se podría extender por solicitud del

Ministerio Público, quien además tendría que acreditar elementos probatorios de situaciones que obedecen a la prisión preventiva justificada, no a la que se impone de oficio.

Es decir, de acceder a la adición pretendida, ahora tendríamos como resultado que el máximo de la medida cautelar de prisión preventiva se pudiese extender más allá del máximo que permitiría la propia iniciativa (no se dice hasta cuánto más), a petición del Ministerio Público y no a solicitud y en beneficio del imputado, lo cual implica contravenir de nuevo la Constitución en esta materia.

Por otra parte, es incuestionable que la fracción IX del artículo 20 constitucional no contiene un mínimo de tiempo que forzosamente deba aplicarse la prisión preventiva, sino que su texto permite que dicha medida restrictiva de la libertad pueda levantarse en cualquier momento, es decir, la persona juzgadora, atendiendo a diversos factores que admite la propia legislación secundaria, válidamente puede decretar el retiro de la medida y la libertad del imputado con tiempo menor inclusive a los noventa días, sin que ello contravenga la disposición constitucional.

Al respecto, existe disposición expresa en la norma adjetiva penal sobre la revisión de las medidas cautelares, a saber, el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos penales que establece:

> ***"Artículo 161. Revisión de la medida***
>
> *Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia."*

Por tanto, tampoco es necesario adicionar un párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para regular tal figura. Lo anterior se consolida en el proyecto de decreto que plantea el presente dictamen, en el que se establece una adición al propio artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisamente en el párrafo que autoriza al juez para no

imponer la prisión preventiva oficiosa y sustituirla por otra medida cautelar, cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.

Finalmente, no pasa desapercibido que también el artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal es congruente con las anteriores disposiciones, al permitir la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, con el objeto de que la persona imputada esté en posibilidad de participar en el Mecanismo Alternativo, remitiendo para efectos de la revisión de la medida, al supra invocado artículo 161. Por todo lo expuesto, es que no resulta procedente la inclusión de la propuesta de la Senadora en los términos señalados.

De acuerdo con lo expuesto, estas Comisiones Unidas proponen reformar y adicionar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos siguientes:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la	**Artículo 167. Causas de procedencia** ...

comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.	
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva.	...
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores,** delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio,** violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,** delitos cometidos con medios violentos como armas y

	explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como **los** delitos graves que determine la ley **en** contra **de** la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
SIN CORRELATIVO	**Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.**
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el	Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada,** establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa **de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** ...

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Código Penal Federal de la manera siguiente:	
I. a X. ...	I. a X. ...
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.	XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;
SIN CORRELATIVO	**XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;**
SIN CORRELATIVO	**XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;**
SIN CORRELATIVO	**XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;**
SIN CORRELATIVO	**XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;**
SIN CORRELATIVO	**XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y**

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

SIN CORRELATIVO	**XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.**
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera:	...
I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados;	**I. a III.** ...
II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y	
III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente	

cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.	
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad.	El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad **o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.** La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la **Fiscalía** o **de la persona funcionaria en la cual** delegue esa facultad.
SIN CORRELATIVO	**Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.**
SIN CORRELATIVO	**En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen**

	participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Ahora bien, toda vez que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales remite a diversas legislaciones especiales que establecen los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, derivado de la reforma constitucional al segundo párrafo del artículo 19, estas Comisiones Unidas plantean, con base en las iniciativas en estudio, reformas y adiciones a las siguientes leyes con la finalidad de particularizar en ellas cada conducta delictiva y así dar certeza jurídica respecto de su aplicación.

1. Ley General en Materia de Delitos Electorales

Se plantea adicionar un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Lo anterior, a efecto de establecer en dicho dispositivo la procedencia de la prisión preventiva oficiosa respecto de los **delitos que guardan relación con el uso de programas sociales con fines electorales, previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 11, fracción II y 20 fracción II, lo cual es congruente con el mencionado artículo 19 de la Constitución Federal.**

Así, se incluyen las conductas consistentes en: amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.

De igual forma, se contemplan las conductas consistentes en condicionar el cumplimiento de programas sociales a la emisión del sufragio en favor de una o un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de una o un precandidato, candidato, partido o coalición.

También, a quien destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de una o un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Finalmente, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular: condicione el cumplimiento de programas gubernamentales, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

Es preciso señalar que **las conductas delictivas se contemplan únicamente cuando la contraprestación sea condicionada al acceso de los recursos brindados por programas sociales, para satisfacer fines electorales**, ello en virtud de que el artículo 19 de la Constitución Federal, en materia de delitos electorales, dispone únicamente la posibilidad de que el juez ordene de oficio la medida de prisión preventiva en estos casos, por lo cual, no es factible extender la medida a otras conductas que se señalan en los artículos 7, 9, 11 y 20 de la ley de la materia, al no estar determinadas en el referido artículo 19 de la Constitución General.

Por otra parte, **se coincide con la propuesta de adición de los artículos 7 Bis y 11 Bis**, en los que se plantea tipificar los delitos de presión al electorado, uso de bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados específicamente con programas de naturaleza social, toda vez que la ley de la materia no contempla este tipo especial, sino que prevé aquellos que tienen que ver con el condicionamiento de programas gubernamentales y obra pública, que también deben ser considerados en la aplicación de la medida cautelar por la relación que guardan con el mandato del 19 Constitucional.

En ese tenor, estas Comisiones Unidas proponen las siguientes adiciones a la legislación penal electoral, con una penalidad similar para los artículos que se

incorporan, sin que pase desapercibido para las dictaminadoras que en el caso del artículo 11 Bis, se debe añadir una coma en el listado de referencia, conformado por: distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición, como a continuación se señala:

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos previstos en esta Ley.	**Artículo 6.** ...
SIN CORRELATIVO	**La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.**
SIN CORRELATIVO	**Artículo 7 bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse**

	de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.
SIN CORRELATIVO	**Artículo 11 bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.**

2. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Estas Comisiones Unidas, coinciden con las diversas propuestas para establecer de forma específica en esta ley especial las conductas delictivas que deben ser merecedoras de la medida de prisión preventiva oficiosa, conductas que afectan a miles de familias mexicanas, quienes han sufrido la desaparición forzada de uno de sus integrantes y aspiran a que el Estado les garantice el derecho a la verdad y a la reparación.

Derivado de la remisión que efectúa el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se plantea adicionar un párrafo segundo al artículo 14 de la legislación en materia de desaparición forzada de personas, **a fin de establecer que en los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de dicho ordenamiento, el juez ordenará la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa** a las y los imputados.

Cabe señalar que las conductas que esta ley tipifica como delitos en los artículos en comento se refieren a las conductas más gravosas, como el caso de aquellas que se refieren al servidor público o el particular que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad; o que oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma.

Asimismo, a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia y a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.

También se incorporan los delitos consistentes en la privación de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero y a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición cometida por particulares durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

De esta forma, las Comisiones dictaminadoras consideramos que la precisión de los delitos en materia de desaparición forzada de personas contribuye no solo a la certeza jurídica que se obtiene al regular el texto constitucional, sino a su vez ayuda a combatir una conducta delictiva que ha generado una situación de numerosas desapariciones suscitadas por años en gran parte del territorio nacional.

Por lo anterior, se presentan a continuación la propuesta de reforma:

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 14. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se	**Artículo 14.** ...

impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza.	
SIN CORRELATIVO	**El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.**

3. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

Se plantea la adición de un párrafo tercero al artículo 4 de este ordenamiento secundario, a efecto de **contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa para los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.**

Al igual que en los casos anteriores, después de una revisión acuciosa de los tipos penales en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, establecidos de manera genérica en el artículo 19 de la Constitución Federal, se considera pertinente la medida respecto de los siguientes delitos:

- Sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- Aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- A quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- A quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Las conductas anteriores, cuando apliquen las sanciones previstas en los incisos b) al d) del párrafo segundo del artículo 9, cuyas penas van desde un mínimo de seis años hasta un máximo de diecisiete años.

- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas previstas en los artículos 8 y 9, cuando se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar, propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o se utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

- Al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

- Al que sustraiga sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ellos con arreglo a la ley, bienes muebles afectos y característicos para la operación de la industria petrolera, cuando es sancionada con prisión de 8 a 17 años.

- Al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente y a quien sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley, sustraiga, altere, modifique o destruya dichos marcadores.

- Al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes y a quien con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito objeto de la ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

Finalmente, se incluyen las conductas delictivas previstas en las fracciones II y III del artículo 17 y los artículos 18 y 19 de la ley que contemplan penas de prisión que van desde los 10 hasta los 25 años, con la posibilidad de aumentar hasta en una mitad la sanción, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en la Ley.

El motivo de **exceptuar la fracción I del artículo 17**, relativo a la alteración de los sistemas de medición, radica en que dicha conducta puede ser resultado de un error humano o mecánico. Además, en lo que toca al control administrativo, es importante considerar que, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las autoridades responsables de regular y vigilar tanto la calidad de los petrolíferos, como la medición de los instrumentos, son la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaria de Economía (a través de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría del Consumidor), para lo cual, en apego a dichas disposiciones, emitieron dos instrumentos normativos que regulan los temas en comento:

- La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

- La Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Dichos instrumentos normativos determinan cómo se evalúa el cumplimiento y, de manera puntual establecen quién se encarga de su vigilancia. Atendiendo a dichos ordenamientos, es notorio que, en términos técnicos, un instrumento de medición puede ser alterado por muchos motivos, sin que ello implique dolo o fines de lucro indebido, por lo que es desproporcionado que ello implique un delito.

Es el caso, por ejemplo, del empresario o empresaria de una gasolinera que adquiere un Dispensario del Fabricante o Distribuidor, que en el momento cumple con la normatividad y legislación vigente; sin embargo, al ser emitida una disposición en la que se establezca la obligación de instalar sistemas de interconexión con tal dispensario, significa una alteración al instrumento de medición, pero no necesariamente la comisión de un delito o la búsqueda de la obtención de un lucro indebido.

Esto es evidente al observar que, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige la instalación de Controles Volumétricos que van conectados directamente al dispensario, provocando con ello una alteración al instrumento de medición. Otro ejemplo, es que, en el caso de las Estaciones de Servicio del Valle de México, la autoridad ecológica, exige la instalación de sistemas de Recuperación de Vapores FASII, situación que altera consecuentemente el instrumento de medición.

En ese sentido, estas dictaminadoras expresan su preocupación por lo que implicaría aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en estos casos, debido a la posible generación de incertidumbre jurídica para los concesionarios de estaciones de servicio, quienes por errores técnicos y sin ánimo de lucro, pueden ver el desarrollo de su vida y patrimonio amenazados. No obstante, se estima necesario un control para el correcto funcionamiento de los mencionados sistemas

que, a su vez, repercute directamente en beneficio o perjuicio de los consumidores, lo cual motiva la existencia de sanciones en caso de incurrir en una conducta de carácter doloso o con fines de lucro.

Sin embargo, sostenemos que el encarcelamiento por oficio de personas que hayan incurrido en sanciones administrativas, genera costos financieros y administrativos a la administración pública, sin olvidar el riesgo en el que se pone a las o los imputados al insertarlos en centros penitenciarios.

Dicho lo anterior, estas Comisiones proceden a señalar la propuesta de adición conforme al siguiente cuadro:

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 4.- El Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por querella de parte ofendida o del órgano regulador.	**Artículo 4.-** ...
Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra.	...
SIN CORRELATIVO	**La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos**

	b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

4. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

La propuesta de reforma de las Comisiones Unidas a esta ley, conforme a los planteamientos realizados en las diversas iniciativas mencionadas con anterioridad, está referida a los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, **previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III, 83 Quat, fracción II, 84 y 85 Bis, fracción III**, como se explica a continuación.

El texto vigente del párrafo segundo del artículo 19 constitucional realiza una clara referencia a delitos cuya comisión involucra este tipo de armamento y no así las armas que no tienen tal carácter, es decir, el Constituyente Permanente estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el tipo penal de arma exclusiva de las fuerzas armadas y no al tipo básico de posesión de armas sin la licencia respectiva, por lo que, en aras de la armonía que debe guardar la legislación secundaria con la Constitución General de la República, se consideran solamente tales conductas tipificadas como delitos.

Cabe señalar que, en el caso de la **fracción III del artículo 85 Bis**, si bien estas dictaminadoras advierten que dispone una sanción de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa a quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado tanto a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales, como al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es necesaria su incorporación en el listado de tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa **únicamente para el caso de disposición indebida de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea**, por lo que la propuesta de estas Comisiones Unidas, relativa a la correspondiente adición en el artículo 92, se especifica en esos términos.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tipo penal de portación de armas de fuego exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea protege el bien

jurídico consistente en la paz y seguridad pública de la población, no el derecho exclusivo de las fuerzas armadas para poseer este tipo de armamento.

PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO POR ESE ILÍCITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ES LA SEGURIDAD PÚBLICA Y NO EL DERECHO PREFERENTE DE SU USO POR LAS FUERZAS ARMADAS. Si se toma en consideración que el bien jurídico protegido constituye la base sobre la cual se construye la hipótesis delictiva, por lo que no puede existir algún tipo penal sin la pretensión de salvaguardar un determinado bien jurídico, entendiéndose por éste todo interés vital del individuo o de la colectividad protegido por la ley penal, resulta inconcuso que en el delito previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el bien jurídicamente tutelado no es el derecho de exclusividad de esas armas, sino la seguridad pública. Ello es así, porque del proceso legislativo que le dio origen, **se advierte que se trata de una conducta tipificada que encuadra dentro de los llamados delitos de peligro, inspirados en medidas de política criminal** para sancionar acciones que acusan temibilidad; por tanto, si con la comisión de ese ilícito se pone en riesgo la seguridad pública, ésta constituye el bien jurídico tutelado en esa hipótesis delictiva; que además, justifica el trato diferencial que se establece para regular y sancionar la portación de armas de diversos calibres. Por otro lado, la circunstancia de que el ilícito en cuestión esté contemplado en la citada ley especial y no en el capítulo relativo a los delitos que atentan en contra de la seguridad pública, contenido en el Código Penal Federal, no significa que éste no sea el bien tutelado por tal ilícito, sino que ante la necesidad de adecuar una ley federal que armonizara la garantía consagrada en el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el imperativo del Estado de controlar de manera efectiva y unitariamente todo lo relacionado con las armas de fuego, se determinó expedir dicha ley, **pues al reglamentar**

todas las actividades relacionadas con éstas se coadyuvaría al logro de la seguridad pública, estableciendo las condiciones y los requisitos para autorizar la portación de armas, con la finalidad de garantizar la tranquilidad en el país, a efecto de evitar, en lo posible, los hechos de sangre y el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y a los derechos de los demás, así como proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad; debiendo añadir que la ley penal no está constituida exclusivamente por el código de la materia, sino también por el derecho penal especial, bajo cuya denominación se comprenden todas las conductas típicas existentes en leyes administrativas federales que contemplan, en un apartado de su contenido, el capítulo represivo en el que señalan conductas delictuosas, sancionables generalmente con penas de prisión y multa.[122]

*El resaltado es propio

El 23 de enero de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 201/2018, determinó que establecer como delito la conducta de portar un arma de fuego fuera del domicilio sin contar con la licencia expedida por la autoridad encargada del control de armamento, no trasgrede el principio de mínima intervención del Estado, "[e]llo, porque responde a la tutela no solamente de los bienes jurídicos, consistentes en la paz y seguridad pública que se ven afectados con la mera portación del instrumento bélico, ante la zozobra que genera en el conglomerado social, la presencia de personas armadas ajenas a las instituciones de seguridad pública o a las fuerzas armadas nacionales, policiacas; sino además, pretende evitar la puesta en peligro y potencial afectación

[122] Tesis Aislada: 2a. XLIV/2001. Novena Época. Núm. de Registro: 189636. Instancia: Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001. Amparo en revisión 1129/2000. 30 de marzo de 2001.

de otros bienes jurídicos de gran valía como es la vida y/o la integridad física de las personas[123]".

El artículo 8º de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la ley, ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en dicha Ley.

Del anterior precepto se desprende un supuesto para la configuración del delito en estudio, el cual se integra por dos conductas necesarias para la actualización de cada tipo penal considerado en la ley, es decir, tanto los tipos básicos como los compuestos y agravados que el legislador secundario tuvo a bien sancionar con diversas penalidades, parten justamente de esas conductas.

Así, en primer lugar, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prohíbe la posesión y portación de las armas señaladas en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, esto es, la posesión "genérica" de armas prohibidas por la ley, referida a las señaladas en el artículo 251 del Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 160 del Código Penal Federal y en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que constituyen tipos básicos en relación con este delito.

En segundo término, la parte final del referido artículo 8, instituye una prohibición **respecto de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea**, lo cual representa una conducta distinta a la del supuesto señalado en la primera parte del dispositivo legal en cuestión que, para los efectos del presente Dictamen, constituye precisamente el supuesto previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal en materia de prisión preventiva oficiosa.

De tal forma que el delito de portación de armas reservadas para las fuerzas armadas, constituye un delito complementado al de portación de armas de fuego

[123] SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONSTITUCIONAL TIPO PENAL DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA: PRIMERA SALA. Comunicado de Prensa No. 007/2019. Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Consultado el 10 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2SC4Iq4.

sin licencia, previsto en el artículo 81 de la referida legislación, toda vez que el primero de estos no representa un tipo penal independiente, "sino que se constituye por el básico o fundamental, es decir, la portación de un arma de fuego, **más el complemento, consistente en la calidad de reservada para el uso de las fuerzas armadas del país**".[124]

Consecuentemente, para este tipo penal complementado se requiere acreditar: 1) la existencia del arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 2) Que el arma de fuego sea objeto de portación por parte del sujeto activo, sin que este pertenezca a alguna de las instituciones armadas del país; y 3) La conducta se lleve a cabo en contravención a las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.[125]

Por lo tanto, no basta la sola portación de arma prohibida por la ley para contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 Constitucional, sino que es menester se actualicen los demás elementos del tipo para que el delito se considere de los contemplados en la Norma Fundamental.

Por su parte, los artículos 9, 10, 10 Bis y 11 de la señalada legislación en materia de armas de fuego y explosivos establecen, en forma precisa, el tipo de armas que pueden poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones establecidas por la ley, sus características específicas, aquellas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para posesión en el domicilio y portar con licencia; los cartuchos correspondientes a las armas que pueden poseerse o portarse, limitadas a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de la ley, por cada arma

---

[124] PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SI EL ACTIVO EN UN MISMO ACTO PORTA TANTO DE LAS RESERVADAS PARA USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA COMO DE LAS QUE REQUIEREN LICENCIA SIN CONTAR CON ELLA, NO SE CONFIGURA UN CONCURSO REAL DE DELITOS, SINO LA AGRAVANTE PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 81, PÁRRAFO SEGUNDO Y 83, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. Tesis: III.2o.P.31 P (10a.). Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2. Pag. 1521. Tesis Aislada.
PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA NACIONALES. LA NO INTEGRACIÓN DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DE ESTE TIPO COMPLEMENTADO GENERA LA TRASLACIÓN AL TIPO PENAL BÁSICO Y NO ASÍ LA ATIPICIDAD. Tesis de jurisprudencia 1a./J. 91/2004. Primera Sala. Enero de 2005. Tomo XXI, página 272.

[125] Aguilar López, Miguel. *El delito y la responsabilidad penal. Teoría, jurisprudencia y práctica*. Ciudad de México, 2018. Editorial Porrúa. Pág. 194.

manifestada en el Registro Federal de Armas, así como las armas y municiones para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Conforme a lo anterior, si bien se comparte la preocupación expresada en la iniciativa de ley de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, en cuanto a la problemática que genera la portación, acopio e importación de las armas señaladas en los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, la portación ilegal de armas de fuego como tipo básico, no se encuentra incluida en el artículo 19 Constitucional, no obstante que se relacione con diversos delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que ello se establece de manera particular para cada delito en dicha legislación, por lo que no se considera viable establecer el supuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se analizó en el apartado correspondiente a dicho artículo.

Sin embargo, como se expresó con antelación, estas dictaminadoras coinciden con la incorporación de los diversos artículos que plantea la propuesta de la Senadora para la procedencia de la medida de prisión preventiva oficiosa, respecto de la ley en materia de armas de fuego y explosivos, excepción hecha del artículo 81, que remite a las armas que pueden portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por la Ley (Artículo 9); así como a las que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, (Artículo 10), que escapan del supuesto constitucional.

Al efecto, se procede a analizar los diversos planteamientos realizados por la Senadora Anaya Mota ya que, no obstante que no se refieren necesariamente a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sí contemplan modificaciones a las penas de prisión sobre delitos que serán merecedores de la medida cautelar, lo cual de suyo implica mayor gravedad, así como el establecimiento del decomiso para estos tipos penales.

Sobre este último aspecto (el decomiso), la legisladora promovente plantea establecerlo de manera expresa para los tipos penales previstos en los artículos 81, 83, fracciones I, II y III; 83 Bis, fracciones I y II, 83 Ter, fracciones I, II y III; 83 Quat, fracciones I y II; 83 Quintus fracciones I y II, 84 Bis y 85, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El decomiso, según lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados como instrumento para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que, por sus características, representan un peligro para la sociedad[126].

Así, el decomiso se refiere a la pérdida definitiva de la propiedad respecto de los bienes empleados para la comisión de una conducta que la ley señala como delito, en favor del Estado y determinada en sentencia por tribunal competente.

Tal y como lo refiere la propia iniciativa de ley, el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que **la sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos o efectos del delito o su restitución, cuando fuere procedente**; lo cual es posible también respecto de las personas jurídicas, según lo establece la fracción II del artículo 422 del citado código adjetivo.

De igual manera, el artículo 40 del Código Penal Federal establece que el órgano jurisdiccional, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, **podrá decretar el decomiso de bienes que sean instrumentos, objetos o productos del delito**, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de las disposiciones aplicables, o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio.

Inclusive, el artículo 91 del señalado código sustantivo en materia penal federal, dispone que no obstante que la muerte del imputado extingue la acción penal, así como las sanciones que se le hubieren impuesto, **no es procedente tratándose de la reparación del daño, las providencias precautorias, el aseguramiento ni sobre el de decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito,** así como los bienes cuyo valor equivalga a dicho producto de conformidad con lo previsto en el artículo 40 antes citado.

En ese sentido, al estar prevista tanto en el Código Penal Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de esta condena de decomiso

[126] CONFISCACION Y DECOMISO. SUS DIFERENCIAS BÁSICAS. Tesis Aislada Constitucional P. LXXIV/96. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Mayo de 1996. Semanario Judicial de la Federación, Tomo III. Página 55.

de los instrumentos del delito en la sentencia que se emita en el procedimiento penal es, sin duda, obligatoria para el juzgador respecto de las conductas que la ley señale como delito, siendo relevante en aquellos de mayor impacto en la sociedad y que generan mayores dividendos para las organizaciones criminales, como lo es el tráfico ilícito de armas.

Consecuentemente, no se considera necesario establecer dicha disposición para cada una de las conductas delictivas señaladas en las leyes especiales, como el caso que nos ocupa de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, respecto de los tipos penales señalados con antelación, pues aún y cuando no se contemple expresamente esa previsión en el texto de cada uno de ellos, el juzgador tendrá que proceder conforme a las normas sustantivas y adjetivas expresadas en supra líneas.

En otro rubro, la Senadora Claudia Edith Anaya plantea el incremento de las penalidades establecidas actualmente para los tipos penales previstos en los artículos 81, 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus fracción II, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Al efecto, la iniciativa en análisis refiere que existe evidencia en cuanto a que una ley prohibitiva con las armas de fuego contribuye a la reducción de la incidencia de homicidios, por lo cual plantea modificar la pena de prisión, incrementando mínimos y máximos, de modo tal que la media aritmética sea mayor a cinco años, y así conseguir que los beneficios a los que pueda acceder el sentenciado por este tipo de conductas delictivas se reduzcan.

En primer lugar, la consecuencia de incrementar la penalidad para los tipos penales cuya modificación se propone en la iniciativa de mérito, es que serían calificados como graves para los efectos de la detención por caso urgente, señalada en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues, entre otros supuestos que permiten la aplicación de dicha medida por parte del Ministerio Público, se encuentran aquellos delitos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión, lo cual sería posible de admitirse la reforma en comento.

Asimismo, conforme al artículo 192 del referido código nacional adjetivo, los delitos en cuestión no serían ya objeto de solicitud de la suspensión condicional del proceso, por parte de la persona imputada o del Ministerio Público, en virtud de que uno de los supuestos de procedencia hace referencia a que el auto de vinculación

a proceso de la o el imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años.

De igual forma, el Ministerio Público no podrá solicitar en los delitos planteados, la reducción de hasta una mitad de la pena mínima de prisión que le correspondiere al delito por el cual se acusa, toda vez que, conforme al artículo 202 del referido código nacional adjetivo en materia penal, es requisito que el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado sea sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 105 del Código Penal Federal, la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, por lo que el término para que proceda esta figura respecto de los delitos que se plantean en la propuesta se vería incrementado en la misma proporción que su media aritmética.

Los artículos cuya penalidad se plantea modificar, establecen lo siguiente:

> **Artículo 81.-** Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
>
> En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.
>
> **Artículo 83 Ter. -** Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:
>
> ...
>
> **I.** ...
>
> **II.** Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y
>
> **III.** ...

Artículo 83 Quat. - Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

...

I. ...

II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus. - Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará:

...

I. ...

II. Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Los tipos penales en cuestión tutelan el bien jurídico de la seguridad pública y se clasifican como de peligro, dado que carecen de un resultado material para su consumación, lo que les otorga una naturaleza autónoma respecto de otros tipos penales, es decir, basta que exista el arma de fuego o los cartuchos, que estén al alcance o la disposición del sujeto activo y que la conducta se lleve a cabo sin el permiso correspondiente, del tipo o en la cantidad que prohíbe la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Atendiendo a lo anterior, estas comisiones consideran pertinentes las propuestas de la senadora iniciante, ya que las conductas que la ley especial en materia de armas de fuego y explosivos establece para cada caso que se plantea, no obstante que gozan de una naturaleza delictiva clasificada como de peligro y no de daño, el peligro que representan se considera efectivo y directo para la seguridad y la paz pública, en virtud de lo cual son de suyo graves para la sociedad e inciden directamente en delitos que atentan contra bienes jurídicos de gran valor como la vida, la integridad y el patrimonio de las personas por lo que, salvo excepción que

se mencionará especificamente, se considera viable el incremento proporcional que se propone en los casos que a continuación se mencionan.

El delito previsto en el artículo 81, relativo a la portación de arma comprendida en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin tener expedida la licencia respectiva, se conviene en incrementar a una pena de prisión de 3 a 8 años, en lugar de 2 a 7 años que dispone el artículo vigente, así como el incremento de 100 a 400 días multa.

En la fracción II del artículo 83 Ter, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de la ley, se modifica la pena de prisión actual de 1 a 7 años para establecer en su lugar un mínimo de 4 años y dejar el máximo sin modificación en los términos vigentes.

Para la fracción II del artículo 83 Quat, respecto de las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de la ley, se incrementa la penalidad actual de 2 a 6 años de prisión, en 4 a 7 años, así como de 100 a 300 días multa en lugar de los 25 a 100 que dispone el tipo penal.

Respecto al artículo 83 Quintus, fracción II, se incrementa la pena de 2 a 5 años de prisión para establecerla en un mínimo de 4 y un máximo de 8 años, a la vez de incrementar la sanción actual de 100 a 200 días multa, para fijarla en 200 a 400 días multa. En ese sentido, estas Dictaminadoras proceden a proponer las siguientes reformas:

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.	**Artículo 81.-** Se sancionará con penas de **tres** a **ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.	...
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: **I.** ... **II.-** Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y **III.** Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.	**Artículo 83 Ter.-** ... **I.** ... **II.-** Con prisión de **cuatro** a siete años y de **cien** a **trescientos** días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y **III.** ...
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: **I.** Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y	**Artículo 83 Quat.-** ... **I.** ...

II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.	**II.** Con prisión de **cuatro a siete** años y de **cien** a **trescientos** días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.
Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: **I.** ... **II.-** Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.	**Artículo 83 Quintus.-** ... **I.** ... **II.-** Con prisión de **cuatro a ocho** años y de **doscientos** a **cuatrocientos** días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.
SIN CORRELATIVO	**Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.**

5. Código Penal Federal

a) Respecto a este ordenamiento, se analiza en primer lugar la propuesta de **modificación** de la Senadora Claudia Edith Anaya Mota **al artículo 160, primer**

párrafo, del Código Penal Federal, la cual tiene el propósito de establecer una redacción que sea más precisa, en cuanto a otorgar certeza jurídica al tipo penal que tiene por objeto prohibir la portación, fabricación, importación y acopio de instrumentos con la intención de agredir, a efecto de que el texto legal atienda a la intencionalidad que tiene la conducta desplegada por el sujeto activo del ilícito y no al uso que el arma respectiva pudiera o no tener; así como la propuesta de aumento de penalidad.

El texto vigente del primer párrafo del artículo 160 en cuestión, reza como sigue:

> Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.

Sobre dicho texto, la iniciativa de reforma expone la preocupación de que la redacción actual es ambigua y subjetiva, toda vez que la simple portación de armas no actualiza por sí misma una conducta delictiva, sino que debe acreditarse que su portación se da con la intención de agredir, tal y como refiere el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se cita.

> PORTACIÓN DE ARMA PROHIBIDA. PARA VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO DEBE ATENDERSE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y A LOS HECHOS QUE REVELEN LA FINALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DEL INSTRUMENTO QUE SE PORTE (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE QUERÉTARO y MORELOS). En estricto acatamiento al principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los artículos 219 y 245 de los Códigos Penales para los Estados de Querétaro y Morelos, respectivamente, al prever, entre otros, el delito de portación de arma prohibida, contienen los mismos elementos del tipo penal en tanto que ambos sancionan "a quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan

> aplicación en actividades laborales o recreativas". Así, la descripción típica exige un elemento subjetivo específico consistente en que la conducta se realice "sin un fin lícito"; **de ahí que para determinar cuándo un instrumento sólo puede utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir, a la intención de usarlo para agredir.** En ese tenor, se concluye que para verificar la configuración del delito de portación de arma prohibida debe atenderse a los hechos y a las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión que revelen la finalidad del sujeto activo, **independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del mencionado instrumento.** Lo anterior es así, porque cuando el tipo penal señala que los instrumentos no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, **se refiere a la forma en que se utilizan y no a la materialidad y al objetivo con que fueron creados, pues independientemente de sus características y de que hayan sido hechos para una actividad laboral o recreativa, pueden portarse con la finalidad de utilizarlos para agredir, por lo que resulta relevante la aplicación que el sujeto activo del delito les dé,** lo cual ha de desprenderse de las circunstancias y de los hechos que rodean la conducta desplegada.[127]

Del criterio anterior, se desprende que el tipo penal de portación de arma prohibida, previsto en las legislaciones de Querétaro y Morelos, similar al texto vigente del artículo 160 del Código Penal Federal, consistente en la portación, fabricación, importación y acopio de instrumentos, exige para su acreditación un elemento subjetivo (que se realice sin un fin lícito) y no respecto a la naturaleza funcional y objetiva de los instrumentos, por lo que, para determinar cuándo un instrumento sólo puede utilizarse para agredir, el juzgador debe atender a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir, a la intención de usarlo para agredir.

De igual forma, en la iniciativa se sostiene que el tipo penal debe atender al concepto de arma, tal y como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia, *en coincidencia con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como el instrumento fabricado para el ataque o la defensa, mencionando que esto no corresponde exclusivamente a las de fuego.*

[127] Primera Sala, tesis 1a./J. 21/2008. Contradicción de tesis 106/2007. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008.

En esas condiciones, la iniciativa en análisis considera que *la descripción vigente del tipo penal contenida en el artículo 160, es subjetiva y ambigua, y adolece de los elementos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que para la actualización del delito se deba acreditar "la intención de agredir", para que la simple portación de las armas no sea un delito por sí misma y se garantice la presunción de inocencia.*

En consecuencia, plantea la siguiente redacción al artículo 160 del Código Penal Federal:

> Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie instrumentos **fabricados para el ataque o la defensa con la finalidad de agredir**, se le impondrá prisión de tres a **ocho** años **y** de **quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización, así como el** decomiso **de los mismos**.

En principio se considera que, de aceptar la redacción propuesta en la iniciativa de referencia en la parte relativa a que los instrumentos sean fabricados para el ataque o la defensa, se dejaría sin sanción a quien realice alguna de las conductas tipificadas en el artículo 160 mediante un instrumento que no haya sido fabricado para la defensa o el ataque, pero que sí pueda ser utilizado para esos fines, según la intención del sujeto activo que la porta, tal como sucede con un cuchillo que se fabrica con fines culinarios, pero que evidentemente puede ser empleado para atacar.

Es decir, la expresión "fabricados para el ataque o la defensa", acota el campo de sanción a los instrumentos que tengan esa finalidad al ser producidos, y pone de nuevo la preeminencia en la naturaleza objetiva del instrumento dejando de lado la portación, fabricación, importación y acopio de instrumentos que sí pueden ser usados para el ataque o la defensa, pero no fueron fabricados con esa finalidad, como los denominados "cúter", los cuales, si bien no tienen la naturaleza de un arma por no haberse producido para ese efecto, la intención de agredir del sujeto activo, los ubica en ese supuesto. Lo anterior sin demérito de admitir que el tipo penal vigente incurre en una deficiencia similar al referirse a aquellos objetos que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas.

Al efecto, es orientador el criterio que se reproduce a continuación.

ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, RELATIVA A CUANDO LA VIOLENCIA EN EL DELITO SE EJERZA VALIÉNDOSE DE UN ARMA, SE ACTUALIZA CUANDO EL INCULPADO UTILIZA UN "CÚTER" PARA EJECUTARLO. La agravante prevista en los citados fracción y artículo, relativa a cuando la violencia en el delito de robo se ejerza valiéndose de armas, se actualiza cuando el inculpado utiliza un "cúter" para ejecutarlo. Se afirma lo anterior, en razón de que **si bien es verdad que dicho instrumento, atendiendo a su naturaleza, no es considerado como un arma, también lo es que cuando se emplea con la verdadera intención de causar un daño, sí puede tener dicho carácter por su finalidad, pues debido a las características propias del objeto, bien puede provocar una lesión externa o interna o, incluso, la muerte; de ahí que dicho utensilio tiene la función de una verdadera arma**, en términos del artículo 119 del invocado Código Penal, el cual prevé que los instrumentos que comúnmente pueden ser utilizados para agredir son: navajas, verduguillos, puñales, dagas o cualquier otro objeto punzocortante, entre los que se encuentra, el denominado "cúter".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 155/2015. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Angélica Ramos Vaca. Esta tesis se publicó el viernes 06 de noviembre de 2015 en el Semanario Judicial de la Federación[128].

*El resaltado es propio

Asimismo, de asumir la redacción planteada, se produce una reiteración entre la conducta sancionada consistente en "fabrique", con la característica esencial del instrumento del delito "fabricado". Es decir, de conceder la modificación solicitada

[128] ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, RELATIVA A CUANDO LA VIOLENCIA EN EL DELITO SE EJERZA VALIÉNDOSE DE UN ARMA, SE ACTUALIZA CUANDO EL INCULPADO UTILIZA UN "CÚTER" PARA EJECUTARLO. Tesis Aislada. Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Noviembre de 2015. Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Tomo IV Materia(s): Penal. Tesis: III. 2o. P.86 P (10a.). Página: 3648

en esta parte del tipo penal, estaríamos hablando de una sanción a quien **fabrique instrumentos fabricados para el ataque o la defensa**, lo cual nos llevaría a hacer inaplicable la disposición penal respecto de dicha conducta.

Aunado a lo anterior, la modificación consistente en sustituir el texto "sin un fin lícito" por "la finalidad de agredir", se considera que acota el ámbito de sanción del tipo penal, toda vez que no necesariamente el acopio, la importación o la fabricación de armas prohibidas por la ley tendrá como finalidad agredir, sino que puede tener algún otro motivo, como el tráfico ilícito de los instrumentos.

Es decir, es posible que en la realización de las conductas señaladas no se persiga directamente el fin de agredir, ya que este fin guarda mayor relación con la intención del activo al portar el arma, independientemente de que también en la fabricación o el acopio se pueda tener dicha intención.

Por otra parte, la propuesta de referir el decomiso a "los mismos" instrumentos empleados en el ilícito, no se considera conducente en virtud de que, de conformidad con los artículos 24 y 40 del Código Penal Federal así como el criterio de la Suprema Corte de Justicia citado con antelación,[129] el decomiso no solo comprende los objetos que han sido utilizados como instrumento para la comisión del delito, sino también los que han resultado como producto de éste o bien los que, por sus características, representan un peligro para la sociedad.

Entonces, de aceptar la modificación planteada, se limitaría el decomiso precisamente a los instrumentos empleados para la comisión de la conducta que la ley señala como delito, dejando excluida la posibilidad de proceder en contra, por ejemplo, de los frutos obtenidos por el ilícito.

Finalmente, el planteamiento de aumentar la pena de prisión a tres años la menor, y aumentando a ocho años el máximo de la pena por este delito, se considera que excede la proporción de las penas propuestas a la gravedad del delito, toda vez que esta conducta es considerada como de peligro abstracto cuyo resultado es de naturaleza formal.

---

[129] CONFISCACION Y DECOMISO. SUS DIFERENCIAS BASICAS. Tesis Aislada Constitucional P. LXXIV/96. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Mayo de 1996. Semanario Judicial de la Federación, Tomo III. Página 55.

En primer término, la modificación llevaría a establecer el máximo actual como mínimo, lo cual de suyo no atiende a una proporción en el establecimiento de este nuevo mínimo y, considerando que la máxima se propone elevar a ocho años de prisión, la media aritmética por este delito pasaría de un año siete meses a cinco años cinco meses, lo cual constituye un incremento significativo en más de tres veces la media aritmética actual.

En segundo lugar, se estaría dando mayor sanción a un delito de peligro abstracto que a delitos de daño, como el de lesiones que ponen en peligro la vida, por ejemplo, previsto en el artículo 293 del propio Código Penal Federal, que tiene una pena de tres a seis años de prisión. Es decir, en el delito establecido en el artículo 160 se requiere solamente la intención de agredir, pero en el delito de lesiones dicha agresión ya trascendió al plano material, poniendo en riesgo la vida de la víctima, por lo cual, no se considera conveniente tasar con mayor severidad una conducta que si bien pone en riesgo la integridad de una persona, aún no ha materializado dicho peligro.

Consecuentemente, estas Comisiones Unidas, tomando en cuenta la incidencia que se manifiesta en la comisión del delito de portación de arma prohibida por la ley, que debe atenderse sin lugar a dudas por este órgano legislativo en el ámbito de su competencia, plantean el incremento de la penalidad mínima de tres meses a un año y la máxima de tres a seis años, así como establecer la posibilidad de que se imponga tanto la pena de prisión como la sanción pecuniaria, cambiando la conjunción disyuntiva a copulativa e incrementando su monto expresado ahora en Unidades de Medida y Actualización.

En ese contexto, estas Comisiones Unidas consideran realizar modificaciones a la propuesta en cuestión, con el propósito de ajustar el tipo penal tomando en cuenta el criterio aducido en la Contradicción de Tesis 106/2007, en cuanto a que *para determinar cuándo un instrumento sólo puede utilizarse para agredir, debe atenderse a la finalidad ilícita de quien lo porta, es decir,* ***a la intención de usarlo para agredir, independientemente de la naturaleza objetiva y funcional del mencionado instrumento.***

Por lo anterior se plantea la siguiente redacción:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, **venda** o acopie sin un fin lícito **o con la intención de agredir**, instrumentos que sólo puedan ser utilizados para **el ataque o la defensa**, ~~que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas~~, se le impondrá prisión de **uno a seis** años **y** de **quinientas** a **mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el** decomiso.

b) La Senadora Claudia Anaya Mota plantea la derogación de las **fracciones I y III del artículo 162 del Código Penal Federal** "toda vez que, no necesariamente las armas contenidas en el artículo 160 *per se* son prohibidas, y la simple portación, importación, fabricación o venta de las mismas, no puede ser objeto de sanción penal, como ya se ha expuesto".

Las fracciones en comento rezan como sigue:

Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:

I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o las regale o trafique con ellas;

...

III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;

Estas Comisiones Unidas concuerdan con la pretensión de la Senadora proponente, pues de conformidad con los argumentos expresados, en relación con el tipo penal establecido en el artículo 160, donde se arribó a la conclusión de que la sanción de la conducta delictiva debe atender fundamentalmente a la intención del sujeto activo y no a la naturaleza misma de los instrumentos que pueden emplearse para agredir.

Esto es, la modificación propuesta al referido artículo 160 tiene que ver con dar certeza respecto del objetivo del tipo penal, que es castigar una conducta que tiene una finalidad ilícita y no la simple portación de un determinado instrumento que sirve para el ataque o la defensa.

Así, se considera que tiene razón la iniciativa planteada con la finalidad de derogar las fracciones I y III del artículo 162, en virtud de que su contenido hace alusión a la

simple portación, fabricación, venta, tráfico o inclusive regalo de las armas a que se refiere el artículo 160 del código adjetivo penal, sin tomar en cuenta la intención de quien las porte o efectúe alguna otra de las conductas señaladas.

En esas condiciones, las fracciones I y III en mención sancionan conductas que por sí mismas no son delictivas, pues conforme a los criterios que se han hecho valer, tanto en la iniciativa de mérito como en el presente Dictamen, el elemento determinante de la ilicitud no descansa en la naturaleza objetiva del instrumento, sino en la intencionalidad del sujeto activo, por lo cual es pertinente su derogación.

c) En diversa iniciativa presentada por la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se plantea adicionar un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal a fin de incrementar la punibilidad relativa al delito en contra del medio ambiente cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi, contemplando un mínimo de cinco años hasta un máximo de quince.

Atendiendo a la gravedad que reviste para el medio ambiente de nuestro país la captura de una especie en peligro de extinción y declarada en veda permanente como la totoaba macdonaldi, así como la magnitud que reviste el daño que se genera de manera colateral a la existencia de ejemplares de vaquita marina, también en peligro de extinción, es que se coincide con la finalidad de esa iniciativa de modificación al citado artículo 420.

En efecto, de conformidad con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie se encuentra clasificada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 e incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Según dicha dependencia, este pez es bastante valorado en el mercado asiático por su vejiga natatoria, dado que se le atribuyen propiedades curativas. Lamentablemente en el proceso de captura con redes, también queda atrapada la

vaquita marina, especie que, de igual forma, se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010[130].

Ante ello, es conducente implementar acciones legislativas encaminadas a una mayor protección de estas especies pues, de lo contrario, se permite que la conducta delictiva incremente su incidencia en perjuicio de los valores jurídicamente tutelados por la norma.

En consecuencia, se plantean las siguientes modificaciones al Código Penal Federal.

CÓDIGO PENAL FEDERAL	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.	**Artículo 160.-** A quien porte, fabrique, importe, **venda** o acopie sin un fin lícito **o con la intención de agredir**, instrumentos que puedan ser utilizados para **el ataque o la defensa**, se le impondrá prisión de **uno a seis** años **y** de **quinientas** a **mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el** decomiso.
Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.	…
Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de	…

[130] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. "La totoaba, especie en peligro de extinción, víctima del tráfico ilegal". Consultado el 10 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/38jMT4D.

aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos.	
Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:	**Artículo 162.-** Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:
I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o las regale o trafique con ellas;	**I.- Se deroga.**
II.- Al que ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario;	**II.-** ...
III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;	**III.- Se deroga.**
IV.- Al que, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hiciere acopio de armas, y	**IV.-** y **V.-** ...
V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161.	
En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas.	...
Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.	...
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente	**Artículo 420.-** ...

de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:	
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;	**I.** ...
II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda;	**II.** ...
II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.	**II Bis.** ...
III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;	**III.** ...
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o	**IV.** ...

subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o	
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.	**V.** ...
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.	...
SIN CORRELATIVO	**En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.**

6. Ley General de Salud

El Senador Miguel Ángel Mancera plantea reformar el artículo 480 de la Ley General de Salud, a efecto de establecer que el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados en los delitos previstos en el artículo 475 de dicho ordenamiento en materia de salud.

Como plantea el legislador, la modificación del texto constitucional vuelve necesaria la armonización del marco legal, por lo que se procede a realizar las consideraciones atinentes a su viabilidad.

En el artículo 475 de la Ley General de Salud se contemplan las conductas delictivas siguientes.

- A quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla que contiene la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal.

- Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de éstos.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

- Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el capítulo de la ley.
- Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o;
- La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos.

Las anteriores conductas se enmarcan en el capítulo relativo a "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo", en el que se entiende por "Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia."

Por su parte, la tabla a que se refiere el párrafo primero del artículo 475, se encuentra detallada en el artículo 479 de la propia ley en materia de salud, en la que se contemplan las siguientes sustancias y cantidades mínimas para considerar que su posesión es para consumo personal.

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato		
Narcótico	Dosis máxima de consumo personal e inmediato	
Opio	2 gr.	
Diacetilmorfina o Heroína	50 mg.	
Cannabis Sativa, Indica o Mariguana	5 gr.	
Cocaína	500 mg.	
Lisergida (LSD)	0.015 mg.	
MDA, Metilendioxianfetamina	Polvo, granulado o cristal	Tabletas o cápsulas
	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
MDMA, dl-34-metilendioxi-n-dimetilfenilctilamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.
Metanfetamina	40 mg.	Una unidad con peso no mayor a 200 mg.

Debe destacarse que las conductas punibles a que se refiere el artículo 475, tienen que ver con la cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla que contiene la relación de narcóticos y la orientación de dosis

máximas de consumo personal toda vez que, de acuerdo con el artículo 474 de la misma ley, dichas conductas son de competencia de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, y las conductas relacionadas con cantidades iguales o mayores a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las establecidas en la tabla, serán de competencia federal.

Además, las conductas delictivas relacionadas con cantidades iguales o superiores a las señaladas en la tabla en cuestión tienen un tratamiento diverso en cuanto a su sanción, según las disposiciones contenidas en el Capítulo I "De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos", del Código Penal Federal, particularmente en sus artículos 193, 194, 195 y 196 de dicho Código.

En específico, el artículo 193 dispone que, para efectos del citado capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

Por su parte, el artículo 195 establece que en caso de que el inculpado posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas, se presume que la posesión tiene como objeto cometer alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal.

El artículo 194, en su fracción I, impone prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que produzca, transporte, trafique, comercie, suministre, aun gratuitamente, o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;

El artículo 196 establece una serie de agravantes respecto de los tipos penales contenidos en el artículo 194:

> Artículo 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por los delitos previstos en el artículo 194 serán aumentadas en una mitad, cuando:

I.- Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud o por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo. En este caso, se impondrá, a dichos servidores públicos, además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el servicio público, hasta por cinco años, o destitución, e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las situaciones mencionadas se le impondrá, además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, para desempeñar cargo o comisión públicos en su caso;

II.- La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente;

III.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de esos delitos;

IV.- Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan;

V.- La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esa situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;

VI.- El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los previstos en el artículo 194, aprovechando el ascendiente familiar o moral o la autoridad o jerarquía que tenga sobre ella; y

VII.- Se trate del propietario poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare o para realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere su realización por terceros. En este caso, además se clausurará en definitiva el establecimiento.

Como se ve, los anteriores dispositivos legales prevén conductas similares a las establecidas en el artículo 475 de la Ley General de Salud y, dichos artículos se encuentran contemplados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como acreedores de la medida de prisión preventiva oficiosa, excepción hecha de los artículos 193 y 195.

No obstante, se advierte, como se refirió con anterioridad, que las conductas a que se refiere el artículo 475 de la Ley General de Salud tienen que ver con cantidades inferiores a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las establecidas en la tabla prevista en el artículo 479 de dicha ley, mientras que los artículos del Código Penal Federal mencionados guardan relación con cantidades iguales o mayores a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las establecidas en la citada tabla.

De ahí que se concluye que las conductas establecidas en el artículo 475 de la Ley General de Salud, que la iniciativa en análisis pretende ameriten la aplicación de la medida de prisión preventiva de oficio, son de suyo diversas a las establecidas en los artículos 193 al 196 del Código Penal Federal, de las cuales los artículos 194 y 195 ya se encuentran incluidas en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

No obstante, es de advertir que aun cuando los artículos 194 y 196 contemplan figuras delictivas que revisten una mayor gravedad a las del artículo 475 por las cantidades que contemplan, no debe soslayarse el perjuicio que causa a las víctimas las conductas delictivas que encuadran en los supuestos del segundo párrafo del artículo 475 y las previstas en las fracciones I a III del párrafo tercero de dicho dispositivo, que por esa razón constituyen agravantes del tipo básico previsto en el párrafo primero de dicho artículo.

En esas condiciones, estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta de reforma al artículo 480 de la Ley General de Salud, modificada, a efecto de establecer la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa únicamente respecto de las agravantes previstas en el párrafo segundo y en las fracciones I, II y III del tercer párrafo del artículo 475 de dicha ley.

No escapa al conocimiento de estas Comisiones, que las agravantes referidas en el párrafo anterior tienen su símil en las fracciones I a V del artículo 196 del Código Penal Federal, que a su vez constituyen agravantes de las penas que resulten

aplicables por los delitos previstos en el artículo 194, pero en cantidad igual o superior a la que resulte de multiplicar por mil las ahí referidas.

En consecuencia, se considera que la aplicación de la medida cautelar debe extenderse a las conductas delictivas establecidas como agravantes en el artículo 196 del Código Penal Federal, toda vez que no se encuentra contemplada para esos efectos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se refiere a los mismos supuestos del artículo 475 de la Ley General de Salud, pero, como ya se dijo, en relación a cantidades de narcóticos mayores; por lo cual, al haberse aceptado la inclusión del artículo 475 para efectos de la medida cautelar de oficio, debe asumirse también para las conductas precisadas en el artículo 196, lo que se asentará en el apartado respectivo.

Por lo anterior y tomando en consideración la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE"[131], estas Comisiones Dictaminadoras proponen la siguiente adición:

LEY GENERAL DE SALUD	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 480.- Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino	**Artículo 480.-** ...

[131] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE, Tesis: 1a./J. 32/2011, Jurisprudencia (Constitucional), Novena Época, Primera Sala Tomo XXXIII, Abril de 2011, Pág. 228.

y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.	
SIN CORRELATIVO	**El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.**

7. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

En diversa iniciativa presentada por la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, se plantea la reforma al artículo 2o. párrafo primero, fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de adicionar las conductas delictivas previstas en los artículos 81, 83, 83 Ter, 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de que se aplique la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen dichas conductas, según lo expone la propia iniciativa.

Los artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos mencionados establecen textualmente lo siguiente:

> Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.

Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.
Cuando tres o más personas, integrantes de un grupo, porten armas de las comprendidas en la fracción III del presente artículo, la pena correspondiente a cada una de ellas se aumentará al doble

Artículo 83 Ter. - Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará:

I. Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley;

II.- Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

Artículo 84 Bis. - Al que introduzca al territorio nacional en forma clandestina armas de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le impondrá de tres a diez años de prisión.

Al residente en el extranjero que por primera ocasión introduzca una sola arma de las referidas en el párrafo anterior, únicamente se le impondrá sanción administrativa de doscientos días multa y se le recogerá el arma previa expedición del recibo correspondiente. Cuando a la persona a quien se le haya recogido el arma salga del país, se le devolverá el arma previa entrega del recibo correspondiente.

Artículo 85.- Se impondrá de dos a diez años de prisión y de veinte a quinientos días multa a los comerciantes en armas, municiones y explosivos, que los adquieran sin comprobar la procedencia legal de los mismos.

Artículo 85 Bis. - Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa:

I. A quienes fabriquen o exporten armas, municiones, cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente;

II. A los comerciantes en armas que sin permiso transmitan la propiedad de los objetos a que se refiere la fracción I, y

III. A quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales o al Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Estas Comisiones Unidas consideran viable la adición de los artículos 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda vez que dichas disposiciones prevén conductas que pueden constituir la finalidad de una organización criminal, pues tienen que ver con la introducción al territorio nacional, comercialización, fabricación y exportación de armas, municiones y explosivos sin contar con los permisos respectivos.

Si bien no en todos los casos se refieren a las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, conforme a la realidad que vive nuestro país, es pertinente que se incluyan, pues cada vez más son objeto de la actividad de los grupos criminales y tales conductas admiten la organización de hecho de tres o más personas para cometerlas, precisamente como una finalidad y no como un medio de la organización delictiva. Es decir, que las conductas tipificadas en los artículos señalados si constituyen actividades que en forma permanente o reiterada puede realizar una organización delincuencial como propósito o fin de su actuar en forma conjunta.

Asimismo, las penas de prisión previstas para estos delitos rebasan en sus máximos los cuatro años de prisión que, de acuerdo con el artículo 2, inciso b) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, contempla *"las conductas que constituyan un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave*[132]*"*.

Respecto de los delitos a que se refieren los artículos 81, 83 y 83 Ter, no se considera viable su adición al artículo 2º de la ley en materia de combate a la delincuencia organizada, en virtud de que las conductas delictivas tipificadas en éstos se refieren a portación y posesión de armas de fuego que, aún y cuando son conductas realizadas por los grupos delincuenciales, no constituyen por sí mismas la finalidad de las organizaciones criminales, sino que son empleadas como un medio para cometer los delitos que sí son materia de delincuencia organizada.

[132] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Organización de las Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Nueva York 2004. Anexo 1. Pág. 5

Es decir, estas conductas delictivas no constituyen *per se* una finalidad de las organizaciones delictivas, o sea, no se organizan ni establecen una jerarquía para portar o poseer armas, sino que dichas conductas son solo el medio de que se valen para cometer otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas o el secuestro, por ejemplo.

Al respecto, es ilustrador lo dicho en el Compendio de casos de delincuencia organizada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:

> **"B. ARMAS DE FUEGO**
>
> [...]
>
> 233. En otro caso, BRA 2, que no ha concluido aún con un fallo definitivo, se descubrió **un mercado ilícito amplio y bien establecido de armas de fuego, municiones y componentes** y se confiscaron más de 300 armas de fuego. Los traficantes eran profesionales, tales como propietarios de clubes de tiro, o aficionados, como tiradores deportivos y coleccionistas; la mayoría de ellos contaba con una autorización regular para llevar a cabo sus actividades profesionales o aficionadas relacionadas con las armas; los clientes de su tráfico no eran grupos delictivos organizados. **El componente de "Delincuencia organizada" del caso, de probarse, estaría dado por la organización de las personas involucradas, todas ellas participando de manera repetida en el comercio ilícito con varios roles: una red de personas que el experto define como "grupo delictivo"** (quadrilla).
>
> 234. Un tercer enlace entre armas de fuego y Delincuencia organizada, es que **los delitos de Delincuencia organizada se cometen a menudo mediante el uso de armas de fuego, o las armas de fuego se encuentran e incautan como resultado de investigaciones sobre delitos relacionados con el Delincuencia organizada y su posesión ilícita puede convertirse en objeto de una imputación.** Casos de este

tipo son SER 1, **donde el delito principal investigado era el tráfico de drogas, y ROM 1, donde los investigadores descubrieron 22 armas de fuego en posesión de los traficantes.** De manera notable, la presentación de estos últimos casos **no indica ningún uso directo de las armas de fuego para, durante, o en relación con la comisión de los delitos investigados, de manera que puede asumirse de manera legítima que los delincuentes acostumbraban a poseer armas para el propósito genérico de la defensa, ataque o intimidación violenta**".[133]

De igual forma, es de destacar que el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que, cuando tres o más personas **se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos** siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.

El artículo 4º de dicha legislación, en sus fracciones I y II, agrava las penalidades para quien **tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada.**

El artículo 35 Bis, en el marco de la cooperación para la persecución de la delincuencia organizada, señala que la información que suministre el colaborador deberá estar sustentada en datos o medios de prueba para la procedencia de los beneficios a que se refiere este precepto y que, para tal efecto, se tomará en cuenta la **jerarquía y número de los miembros** de la delincuencia organizada detenidos. Similar referencia se encuentra en el artículo 36.

Conforme a lo anterior, es posible concluir que los delitos que deben ser materia de la ley contra la delincuencia organizada deben tener las características anteriores.

---

[133] Compendio de casos de delincuencia organizada. Recopilación comentada de casos y experiencias adquiridas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Nueva York 2012. Pp. 111 y 112. Disponible en: https://bit.ly/2vnYKk4.

Es decir, que los miembros de los grupos delincuenciales se organicen de hecho, reiterada o permanentemente, con la finalidad de cometer dichos delitos, y al efecto establecen una estructura organizativa.

Por ende, se considera que las conductas delictivas establecidas en los artículos 81, 83 y 83 Ter, no constituyen la finalidad para la que se constituyen las organizaciones delincuenciales, sino un medio para conseguir sus fines criminales, esto es, no se estructura la organización y jerarquía con el fin de portar un arma, sino que la portación de esta es útil para la realización del delito que la organización delictiva tiene como objetivo realizar en forma permanente.

Por lo que hace al segundo párrafo del artículo 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no se considera incluirlo en el diverso artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia, toda vez que la conducta ahí descrita solamente es acreedora de una sanción administrativa, por lo que no alcanza el parámetro de gravedad a que se refiere la Convención de Palermo.

En las relatadas condiciones, se plantea reformar la fracción II del artículo 2o., de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como se describe a continuación.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: **I.** ...	**Artículo 2o.-** ... **I.** ...

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;	**II.** Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis, 84, **84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis**, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. a **X.** ...	**III.** a **X.** ...
...	...

8. Ley de Seguridad Nacional

Respecto a esta Legislación, existe la propuesta de reforma por parte del Senador Miguel Ángel Mancera, a fin de adicionar una fracción XII al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, para establecer como un supuesto de amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos realizados contra el transporte ferroviario, ello en virtud de la importancia para el desarrollo del país que tiene este tipo de transporte y las graves afectaciones que en los últimos años ha sufrido este medio de transporte, según refiere en su iniciativa.

La Ley de la materia establece en su artículo 3 que se entiende por seguridad nacional aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

El Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es un sistema de investigación que contribuye a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, auxilia a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno. Dicho Centro deduce que la seguridad nacional es "[l]a condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población, para que ésta pueda desarrollar plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional, mediante la implementación de estrategias de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del proyecto nacional[134]."

El mismo Centro Nacional señala que el objetivo de la seguridad nacional consiste en "preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano en sus vertientes de seguridad interior y defensa exterior"[135].

Cristian Castañón Contreras, con el objetivo de enmarcar el desarrollo de un concepto de seguridad nacional de carácter multidimensional, que atiende a una política integral de Estado, lejos de las concepciones rígidas tradicionales, cita la definición de seguridad nacional contenido en el Código de Términos Militares, de la siguiente forma: "Es la condición de paz, libertad y justicia social y económica, que procura el Estado mexicano, dentro de un marco de derecho, aplicando el poder

[134] Centro Nacional de Inteligencia. ¿Qué es la Seguridad Nacional? Consultado el 10 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2We5Sdl.
[135] *Ídem.*

nacional para alcanzar y mantener los objetivos nacionales; garantizando la integridad, soberanía e independencia.[136]"

Por su parte, Rafael Chávez Castillo la define como las "acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano (sic), la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional[137]."

Las distintas acepciones de seguridad nacional descritas con antelación proporcionan una referencia respecto de los elementos que integran este concepto, las cuales, no obstante que admiten cada vez más aspectos relacionados con el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, dan importancia central a la estabilidad, permanencia e integridad del Estado mexicano y sus instituciones, así como a la protección de la soberanía e independencia nacional.

Como se asentó con anterioridad, en la propia Ley de Seguridad Nacional se contemplan como acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, las que conllevan a la protección de la nación mexicana, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, de la unidad de las partes integrantes de la Federación así como la defensa legítima del Estado mexicano y la preservación de la democracia.

En ese contexto, estas Comisiones Unidas coinciden con la importancia que reviste el transporte ferroviario para el desarrollo económico del país pues, como se ha referido en apartados anteriores[138], un gran volumen de mercancías se traslada por este medio, lo cual impulsa el comercio nacional e internacional.

Sin embargo, se considera que la propuesta de adicionar una fracción al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de establecer como una amenaza los actos ilícitos en contra del transporte ferroviario, no es conducente en función de

[136] Castaño, Cristian. Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas. Fundamentos para un modelo de seguridad en México. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados LXII Legislatura. México, 2015. Pág. 34.
[137] Chávez, Rafael. Diccionario Práctico de Derecho. Editorial Porrúa. México, 2015. Pág. 241
[138] *Vid.* Pp. 89 y 90.

las características especiales que tienen los supuestos establecidos en las doce fracciones del artículo 5, las cuales guardan estrecha relación con las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, señaladas en el artículo 3 de la misma ley.

Esto es, aun cuando se reconoce la importancia del transporte ferroviario para el desarrollo económico del país, con un 25% de participación en el transporte terrestre, no se considera pertinente adoptarlo en los términos propuestos por el legislador iniciante, ya que este tipo de transporte no tienen una connotación tal que permita que los actos ilícitos en contra del transporte ferroviario, puedan ser tomados como una amenaza a la seguridad nacional y se activen con ello los mecanismos de coordinación extraordinarios de las instancias de seguridad nacional.

La realidad refleja que muchos de los actos en contra del transporte de ferrocarril tienen que ver con aspectos de seguridad pública más que de seguridad nacional, así como los relativos a manifestaciones sociales que se expresan en bloqueos de las vías del ferrocarril y que son materia de política interior. Aspectos que efectivamente merecen una atención de las instituciones de seguridad y de gobierno para su resolución.

Al efecto, es pertinente efectuar una confrontación de los actos ilícitos a que se refiere la iniciativa, con las amenazas relativas a los "actos en contra de la seguridad de la aviación" y a los "actos ilícitos en contra de la navegación marítima", previstas en las fracciones VI y IX del artículo 5 de la referida ley en materia de seguridad nacional, toda vez que estas últimas tienen una construcción normativa similar a la que se propone en la iniciativa, pero su alcance es diferente.

En principio, respecto de la aviación existen dos vertientes en las que se ejerce esta actividad, una por el Estado para el resguardo de la soberanía nacional y el espacio aéreo, que involucra aspectos de orden militar y de inteligencia y, otra, la que se realiza por la aviación civil, que tiene que ver con la actividad económica, y el transporte de pasajeros, entre otras.

La aviación militar tiene como objetivos salvaguardar el espacio aéreo nacional; participar activamente en la lucha permanente contra el narcotráfico, combate a incendios forestales y misiones de apoyo con el transporte de víveres, medicinas,

evacuación de heridos y damnificados en la aplicación del Plan DN-III-E, así como coadyuvar en forma solidaria durante la ejecución de misiones de ayuda humanitaria en otros países ante desastres naturales.

La aviación civil conlleva una actividad permanente de conexión con gran número de países, de tal forma que los aeropuertos, sobre todo los internacionales, se han convertido en un medio de acceso al país. Esta característica, además de la importancia que reviste el resguardo del espacio aéreo relacionado con la soberanía nacional, así como la preservación de la actividad comercial, refleja la trascendencia que tiene la seguridad de la aviación.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "el objetivo primario del Estado Mexicano, con respecto a la seguridad de la aviación civil es garantizar la seguridad y protección de los pasajeros, las tripulaciones, el personal de tierra, el público en general, las aeronaves y las instalaciones y servicios de los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil contra actos de interferencia ilícita perpetrados en tierra o en vuelo[139]".

Respecto a la navegación marítima, según Kitack Lim, Secretario General de la Organización Marítima Internacional, "la vía marítima, al ser el medio más eficaz para transportar mercancías, desde el punto de vista de los costos, y más eficiente desde el punto de vista del combustible: constituye el eje principal del comercio mundial. El transporte marítimo es, por lo tanto, un componente fundamental de cualquier programa de crecimiento económico y futuro sostenible[140]".

Las principales actividades que se relacionan con el mar son la pesca, la investigación oceanográfica, el turismo náutico, el comercio marítimo, la exploración y la producción petrolera, que contribuyen a "alcanzar un mayor crecimiento económico y generar riqueza con los efectos positivos que representa: derrama económica, generación de empleos e identificación de nuevos mercados y socios

[139] Secretaría de Comunicaciones y Transportes. OBJETIVO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (AVSEC). Disponible en: https://bit.ly/2SxQSVP.

[140] Conferencia Magistral. Panorama actual de la OMI, prospectiva y desafíos en el orbe. Señor Kitack Lim Secretario General de la Organización Marítima Internacional. Citado en Autoridad Marítima Nacional. Una perspectiva global. Secretaría de Marina-Armada de México. Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. México 2017. Pág. 11.

comerciales; pero, principalmente, la percepción real de estabilidad como nación en crecimiento constante[141]".

La seguridad marítima involucra "la protección de la vida humana en el mar; la libertad y seguridad de navegación; el comercio y transporte marítimo; la industria naviera y otras industrias marítimas; la seguridad de los buques bajo pabellón español (sic); los puertos e infraestructuras marítimas; los recursos del medio marino; el medio ambiente marino; y el patrimonio arqueológico subacuático[142]".

Como se observa de los textos anteriores, la seguridad de la aviación y la marítima comprenden una serie de elementos y acciones que tienen que ver tanto con la soberanía nacional como con diversas actividades fundamentales para el desarrollo eficiente del país, lo cual justifica su incorporación en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

No se demerita con ello la relevancia que tiene el transporte ferroviario para el desarrollo económico del país y su contribución al bienestar de la sociedad, ello es incuestionable, sin embargo, los supuestos normativos que se incorporen en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional deben enmarcar la protección de la soberanía, la independencia, la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y evitar dar dicha categoría de amenaza a la seguridad nacional, a la afectación de actividades que, no obstante son de gran importancia, no gozan de esas particularidades y deben ser atendidos mediante acciones de política y seguridad pública, no con los mecanismos extraordinarios de coordinación, inteligencia e información que prevé la ley en materia de seguridad nacional.

9. Ley de Vías Generales de Comunicación

El Senador Miguel Ángel Mancera propone en la misma iniciativa analizada en el punto anterior, la modificación a los artículos 533 y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, los cuales establecen lo siguiente:

---

[141] *Ibidem*. Autoridad Marítima Nacional. Una perspectiva global. Secretaría de Marina-Armada de México. Pág. 5

[142] Naucher Global. "La seguridad marítima, clave para la seguridad nacional". Información Marítima Fiable y Profesional. 22 de enero de 2019. Consultado el 11 de febrero de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2UX8ax8.

> Artículo 533.- Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal.
>
> Si el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de éste.
>
> Artículo 534.- El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, incurrirá en multa de veinticinco a doscientos pesos.

En cuanto al primero de los artículos transcritos, establece pena privativa de libertad de tres meses a siete años y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente, a los que dañen (sic) las vías generales de comunicación o los medios de transporte; el Senador plantea incrementar tanto la pena de prisión, de dos a nueve años, como la multa para quedar en doscientos a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Lo anterior basado en la importancia que revisten las vías generales de comunicación para el bienestar y el desarrollo de las personas, por lo que considera el asalto a vías generales de comunicación como una actividad que provoca severas afectaciones para la sociedad y por ende, requiere de una decidida intervención del Estado que desincentive su realización, en este caso, aumentando la gravedad de la sanción de tal forma que la media aritmética exceda los cinco años, con las consecuencias que la normatividad penal prevé para este tipo de delitos.

Estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta del Senador, a efecto de reformar el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación mediante el

incremento de las sanciones previstas en dicho artículo, tal y como lo plantea la iniciativa de mérito, pues la conducta sin duda alguna conlleva implícito el dolo en su realización y ocasiona afectaciones a las vías generales de comunicación, las que deben ser protegidas por la norma con penas más severas a las que se encuentran vigentes.

No pasa desapercibido que el artículo en comento se refiere a una pluralidad de personas como sujetos activos del delito al dirigir el tipo penal a "los que dañen", "perjudiquen", "destruyan" las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o "interrumpan" la construcción de dichas vías, o "interrumpan" o "deterioren" los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.

Como se ve, la construcción del tipo en comento no contempla la comisión de la conducta delictiva por una sola persona, pues se refiere a una pluralidad de sujetos, lo cual no se considera correcto ya que la conducta prevista en este artículo puede ser realizada por un sujeto activo solamente. En tal virtud, estas comisiones dictaminadoras plantean reformar el artículo 533 con el fin de adecuar esta situación.

Respecto al artículo 534, se advierte la conducta contemplada no implica una intencionalidad en su comisión, solo una acción imprudente que, en forma indebida, pero sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación, lleve a cabo alguna de las acciones descritas en este artículo, por lo que, si bien se ocasiona el daño previsto, no existe la intención de causarlo.

En atención a lo anterior, se considera que tal conducta no debe ser sancionada con pena privativa de libertad, pues ello constituye una sanción desproporcionada al actuar culposo del sujeto activo, como el maltrato de los árboles del derecho de vía, o bien, arrojar un obstáculo sin querer provocar un perjuicio a las vías de comunicación, por lo que en la óptica de las que dictaminan debe permanecer la sanción pecuniaria por dicho actuar.

Sin embargo, dado que el daño a las vías se produce aun sin intención, se coincide con la propuesta de la iniciativa a efecto de incrementar el monto de la multa, que actualmente es de mínimo de veinticinco hasta un máximo de doscientos pesos, para quedar con un límite inferior de doscientas y un tope de quinientas veces el

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en lugar de las mil propuestas, pues se considera desproporcionado incrementar la cantidad vigente de doscientos pesos hasta un monto de $86,880 pesos, dado el valor actual de la UMA.

En consecuencia, la propuesta de reforma a los artículos 533 y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, se plantea de la siguiente forma:

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE LAS COMISIONES
Artículo 533.- Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal.	**Artículo 533.- A quien dañe, perjudique** o **destruya** las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o **interrumpa** la construcción de dichas vías, o total o parcialmente **interrumpa** o **deteriore** los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, **se le sancionará con pena de dos a nueve años** y multa de **doscientas** a **mil** veces el **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.**
Si el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de éste.	...

Artículo 534.- El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, incurrirá en multa de veinticinco a doscientos pesos.	**Artículo 534.- Al** que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **se le impondrá** multa de **doscientas** a **quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.**

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Con base en el análisis de las iniciativas materia de este Dictamen, habida cuenta de las consideraciones vertidas y conforme a los fundamentos legales invocados, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en el diseño del texto del Decreto que se plantea en el presente Dictamen, de conformidad con el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero. - Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y se adicionan el párrafo cuarto, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores,** delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio,** violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,** delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como **los** delitos graves que determine la ley **en** contra **de** la seguridad de la **nación,** el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada,** establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa **de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

...

I. a X. ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a III. ...

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad **o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de**

alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la **Fiscalía** o **de la persona funcionaria en la cual** delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 bis y 11 bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse

de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero. - Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto. - Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Quinto. - Se reforman los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y se adiciona un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de **tres** a **ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83 Ter.- ...

I. ...

II.- Con prisión de **cuatro** a siete años y de **cien** a **trescientos** días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. ...

Artículo 83 Quat.- ...

I. ...

II. Con prisión de **cuatro** a **siete** años y de **cien a trescientos** días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de **cuatro** a **ocho** años y de **doscientos a cuatrocientos** días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Sexto. - Se reforma el artículo 160, primer párrafo; se adiciona un párrafo tercero al artículo 420, y se derogan las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, **venda** o acopie sin un fin lícito **o con la intención de agredir,** instrumentos que puedan ser utilizados para **el ataque o la defensa**, se le impondrá prisión de **uno** a **seis** años **y** de **quinientas** a **mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el** decomiso.

...

...

Artículo 162.- ...

I.- Se deroga.

II.- ...

III.- Se deroga.

IV.- y **V.- ...**

...

...

Artículo 420.- ...

I. ...

II. ...

II Bis. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Artículo Séptimo. - Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480.- ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo. - Se reforma el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis, 84, **84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis,** de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a **X.** ...

...

Artículo Noveno. - Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533.- A quien dañe, **perjudique** o **destruya** las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o **interrumpa** la construcción de dichas vías, o total o parcialmente **interrumpa** o **deteriore** los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, **se le sancionará con**

pena de dos a nueve años y multa de **doscientas a mil** veces el **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito**.

...

Artículo 534.- Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **se le impondrá** multa de **doscientas** a **quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.**

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

TERCERO. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

CUARTO. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

QUINTO. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 27 de julio de 2020.

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y publicado en el monitor de sus escaños, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura.

29-07-2020
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 56 votos en pro, 25 en contra y 7 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 29 de julio de 2020.
Discusión y votación 29 de julio de 2020.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Extraordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 29 de Julio de 2020

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Hace unos momentos se le dio primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, en cumplimiento de lo que dispone el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

(La primera lectura se encuentra en este mismo Diario)

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se lea únicamente el texto normativo y régimen transitorio del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Sí, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se lea únicamente el texto normativo y régimen transitorio del proyecto de Decreto. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, solicito a la Secretaría dé lectura únicamente al texto normativo y régimen transitorio.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy lectura, señora Presidenta.

Con base en el análisis de las iniciativas materia de este dictamen, habida cuenta de las consideraciones vertidas y conforme a los fundamentos legales invocados, las y los integrantes de las comisiones unidas coincidimos en el texto del Decreto que se plantea en el presente dictamen de conformidad con el siguiente.

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y, en su caso, derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Del Código Penal Federal.

De la Ley General de Salud.

De la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Artículo primero. - Se reforma el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto que se fusionan para quedar como párrafo quinto y los párrafos sextos, fracción IX y VIII, y se adiciona el párrafo cuarto.

Las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, el párrafo sexto.

Así como los párrafos noveno y décimo del Código Nacional de Procedimientos Penales para queda como sigue.

Artículo 667.- Causas de Procedencia.

El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios dolosos, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos y uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo a la personalidad y de la salud.

Para los efectos de este artículo también se considerarán cometidos como con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no, y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de persona, delitos electorales y desaparición forzadas de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los

delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del uno al décimo se mantiene.

Décimo Primero. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198 parte primera del párrafo tercero.

Décimo Segundo. Abuso, violencia sexual contra menores previstos en los artículos 261 en relación con el 260.

Décimo Tercero. Feminicidio previsto en el artículo 325.

Décimo Cuarto. Robo a casa habitación previsto en el artículo 381 Bis.

Décimo Quinto. Ejercicio abusivo en funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220 en relación con su cuarto párrafo.

Décimo Sexto. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224 en relación con su séptimo párrafo. Y

Décimo Séptimo. Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

De la I a la III fracción se mantiene.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso de desarrollo de la investigación, la protección de víctima y de los testigos, o de la comunidad, o bien cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alternativa del procedimiento.

La solicitud deberá contar con la actualización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiera sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada desean participar en un mecanismo alternativo de solución de controversias y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, él o la juez de control podrá derivar el asunto al órgano especializado en la materia para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6, así como los artículos 7 Bis y 11 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para quedar como sigue.

Artículo 6.- La persona juzgadora ordenará a la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero, 7 bis, 11, fracción II, 11 Bis y 20 fracción II de esta ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de 300 a 600 días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de 500 a 1000 días multas y prisión de cuatro a nueve años a la servidora o servidor público que durante el proceso electoral use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distintos servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue.

Artículo 14. El juez o la jueza ordenarán la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta ley.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo tercero al artículo cuarto de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para quedar como sigue.

Artículo 4. La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8, 9, primer párrafo, fracciones I, II y III en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo diez, párrafo segundo, incisos a) y b), 11, 12, fracción III, 14 y 15 párrafo segundo, 17, fracciones II y III, 18 y 19 de esta ley.

Artículo 5. Se reforman los artículos 81, primer párrafo, 83 Ter, fracción II, 83 Quáter, fracción II, 83 Quintus, fracción II y se adiciona un artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para quedar como sigue:

Artículo 81. Se sancionará con penas de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multas a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley, sin tener expedida la licencia correspondiente.

Artículo 83 Ter, fracción II. con prisión de 4 a 7 años y de 100 a 300 días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quáter, fracción II. Con prisión de 4 a 7 años y de 100 a 300 días multa si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos y del artículo 11 de esta ley.

Artículo 83 Quintus, fracción II. Con prisión de 4 a 8 años y 200 a 400 días multa cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92. Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III, 83 Bis, 83 Ter, fracciones I y II, 83 Quáter, fracción II, 84 y 85 Bis fracción III de esta ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo 6. Se reforma el artículo 160, primer párrafo, se adiciona un párrafo tercero al artículo 420 y se derogan las fracciones I y III del artículo 162 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa se le impondrá prisión de 1 a 6 a seis años y de 500 a mil veces el valor diario en la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.

Artículo 162, fracción I y II se derogan, artículo 420, se mantienen las fracciones de la I a la V y en los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá la pena de 5 a 15 años de prisión y el equivalente de 3 mil a 6 mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes derivados, productos o subproductos de la especie, totoaba macdonaldi.

Artículo 7. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 480. El juez o la jueza, ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta ley.

Artículo 8. Se reforma el artículo 2, fracción II de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2, fracción II. Acopio y tráfico de armas previsto en los artículos 83 Bis, 84, 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Artículo 9. Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley Federal de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue:

Artículo 533. A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación o los medios de transporte o interrumpa la construcción de dichas vías o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se les sancionará con una pena de 2 a 9 años y multa de 200 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

Artículo 534. Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue de aguas, tale o de maltrato

a los árboles del derecho de vías, se le impondrá multa de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Tercero. Los procedimientos penales que estén substanciando la entrada en vigor del presente decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos, a las personas, a las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente decreto con anterioridad a su entrada en vigor, le serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, en el momento en el que la misma haya quedado firme.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente decreto, será conforme a los dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. Se concede el uso de la palabra al Senador Julio Ramón Menchaca Salazar… la moción, Senadora, entra cuando se pone a discusión el dictamen.

Se concede el uso de la palabra a la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, para presentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Muchas gracias. Con permiso de la Mesa Directiva. Estimadas compañeras y compañeros. A nuestro pueblo de México.

No castigar los delitos es un delito en sí mismo, nuestro país se desangra hasta la muerte por la cantidad de delitos graves que hemos paso por alto, es hora de ponerle un torniquete a esta herida que sangra a diario por la impunidad.

El dictamen con proyecto de Decreto elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, se realizó con motivo de 12 iniciativas presentadas por las siguientes Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, así como del Congreso de Baja California Sur, y que tienen por objeto reformar y adicionar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformar, adicionar y, en su caso, derogar disposiciones contenidas en ordenamientos secundarios en materia de prisión preventiva oficiosa y otros tópicos.

Nombraré a quienes han sido los Senadores y Senadoras representantes de estas iniciativas.

Senador Cruz Pérez Cuéllar y Senador Julio Menchaca, por el grupo parlamentario del Partido de Movimiento Regeneración Nacional.

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante del grupo parlamentario del PRD.

Senadora Claudia Edith Anaya Mota y Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del PRI.

Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del grupo parlamentario del PVEM.

Senador Marco Antonio Gama Basarte, del grupo parlamentario del PAN.

Senadora Verónica Martínez García, integrante del grupo parlamentario del PRI.

Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena.

El dictamen con proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas tiene por objeto, entre otros, primero, reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el fin de realizar las adecuaciones necesarias para incluir las hipótesis delictivas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa incorporándose a dicho artículo los delitos de feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

De igual forma, se pretende agregar la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes, de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento, aún y cuando dicha medida cautelar ya hubiese sido impuesta.

Segundo. Adicionar un segundo párrafo al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de establecer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos que guardan relación con el uso de programas sociales con fines electorales previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; onceavo, fracción II; y vigésimo segundo, fracción II de esa ley.

Adicionar los artículos 7 Bis y 11 Bis de la mencionada ley a efecto de tipificar los delitos que tengan por objeto presionar al electorado para votar por un candidato o para participar en eventos proselitistas, así como a quien durante el proceso electoral haga uso de recursos públicos con la finalidad de incidir en el electorado para posicionar a un candidato a ocupar un cargo de representación popular.

Tercero. Adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, a fin de establecer que en los delitos relacionados con la desaparición forzada de personas, previstos en los artículos 27, 28 y 31 de dicho ordenamiento, el Juez ordenará la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa, así como los delitos de desaparición cometida por particulares y los delitos vinculados con la desaparición de personas previstos en los artículos 35, 37, 34 y 41 de la misma ley.

Cuatro. Adicionar un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a efecto de contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos previstos en el artículo 8, 9, primer párrafo y fracciones I, II y III en relación con el segundo párrafo, inciso b) al d) y al cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11, 12, fracción III; 14, 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19 de la citada ley.

Cinco. Reformar el primer párrafo del artículo 81 y la fracción II de los artículos 83 Ter, 83 Quáter y 83 Quintus de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a efecto de aumentar las penas a quien sin el permiso correspondiente porte un arma de fuego de las comprendidas en los artículos 9, 10 y 11 de esa ley, así como adicionar el artículo 92 de la misma para establecer que los delitos de portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y acopio de armas previsto en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 84 Quáter, fracción II; 84 y 85 Bis, fracción III de esa ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Seis. Reformar el artículo 160 al Código Penal Federal con el propósito de establecer una redacción más precisa otorgando certeza jurídica al tipo penal que tiene por objeto prohibir la portación, fabricación, importación y acopio de instrumentos con la intención de agredir, a efecto de que el texto legal atienda a la internacionalidad que tiene la conducta desplegada por el sujeto activo del ilícito y no al uso que el arma respectiva pudiera o no tener, así como derogar las fracciones I y II del artículo 162.

Séptimo. Adicionar un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, a efecto de establecer que el Juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva en el caso de los delitos previstos en el párrafo segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de dicho ordenamiento, los cuales tienen por objeto la comercialización o suministro de narcóticos a menores de edad o la utilización de los mismos para cometer el ilícito.

Ocho. Reformar la fracción II del artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con el propósito de que se aplique la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen los ilícitos previstos en los artículos 84 Bis, párrafo primero; 85 y 85 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionados con el comercio ilegal de armas, municiones y explosivos, así como la introducción ilegal a territorio nacional de armas que no están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

Finalmente, el noveno.

Renovar los artículos 533 y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a efecto de incrementar las penas a quienes afecten las vías generales de comunicación o medios de transporte.

Senadoras y Senadores, llegó el momento que esta generación de hombres y mujeres, representada por todas las fuerzas políticas de México, pongamos el torniquete a esta herida que sangra de corrupción, de impunidad,

sobre todo en nuestro sistema de investigación y de justicia. Es una fortuna que lo podamos hacer de frente a la Nación.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Rivera Rivera.

Vamos a pasar a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Posteriormente, entraríamos con la moción suspensiva y daríamos paso a la discusión en lo general.

Para los posicionamientos, tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Sin duda es un tema que ha generado y va a seguir generando debate, el de la prisión preventiva oficiosa. Es un tema que encuentra puntos a favor, puntos en contra, puntos en donde se establecen formas, modalidades, limitantes, restricciones y por supuesto diversas definiciones a nivel mundial, y México no es la excepción. México ha tomado la línea de la prisión preventiva como medida cautelar y obviamente de manera excepcional, así es como lo marca el artículo 19 constitucional.

Pero hoy el tema no es hablar de la prisión preventiva, si debiera existir o no debiera existir la prisión preventiva, esa es una cuestión distinta. Hoy lo que estamos haciendo con este dictamen es dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la reforma al artículo 19 constitucional, que entró en vigor precisamente el 12 de abril de 2019.

Y es que el hecho que se siga demorando esta regulación ha generado ya que existan diferencias de criterios en la interpretación y la diferencia de criterios lo que genera es precisamente lo que aquí se ha dicho y lo que todo mundo ha expuesto cuando se habla de la necesidad de combatir el delito, es decir, que no se genere impunidad.

Así tenemos un criterio que se sostuvo por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, en donde se especificó que esta reforma, a partir del 12 de abril del 2019, era aplicable a partir de la entrada en vigor al día siguiente de su publicación, tal cual. Sin embargo, otro Tribunal Colegiado, el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito, dijo que no, que no era así, que su exigibilidad y aplicabilidad estaba condicionada a que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones necesarias al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Entonces, los delitos, como pueden ser la portación de armas sin licencia, de las reservadas para el Ejército o el abuso sexual de menores o cualquiera de los que se discutieron en su momento, hay tribunales que dicen que no puede ser aplicada la prisión preventiva oficiosa dado que no se ha cumplido con esa regulación del artículo 167.

Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con esta tarea, porque lo que sucedió es que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que resolvió esta diferencia de criterios, y sostuvo, pues, que se tiene que legislar y que mientras tanto no se legisle se estaría vulnerando la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige la medida cautelar.

Así es que se vuelve una condición indispensable el cumplir con esta disposición transitoria del artículo segundo, que es precisamente lo que se está haciendo con este dictamen, cumplir con lo que establece el artículo segundo transitorio, señalar cuáles son los delitos, porque es muy diferente hablar de la familia de los delitos, es decir, los delitos de portación de arma, a precisar qué tipo penal es al que se refiere en específico el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es diferente hablar de la familia del delito a hablar específicamente del delito al que se alude para efectos de la prisión preventiva oficiosa, por eso es que se tenía que regular con toda precisión, porque en materia penal no puede haber interpretación, se tiene que cumplir con un principio de exacta aplicación de la ley y solamente se puede cumplir atendiendo precisamente a esta obligación.

Es por eso que en el cumplimiento de nuestra obligación legislativa tenemos que resolver esto que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y que está generando que aproximadamente de cada 10 detenciones que pudieran ser de prisión preventiva oficiosa, se estén resolviendo cuando menos siete improcedentes debido a que resulta inaplicable por imprecisión y por inexacta aplicación de la ley en materia penal, por estos criterios.

Entonces, pues tenemos que cumplir con esta tarea necesariamente, para que se vuelva aplicable la reforma al artículo 19, como lo establecimos nosotros en el propio artículo segundo transitorio.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Mancera Espinosa.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del grupo parlamentario del PT.

El Senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Ánimo, Senadoras, Senadores, ya vamos por 11 horas de sesión, ya casi terminamos. Con su permiso, señora Presidenta.

Senadoras y Senadores, se acaba la impunidad en este país, ahora sí *"el que la hace la paga"* y, lo más importante, la paga de inmediato.

Nuestro país atraviesa una grave crisis de seguridad, sin precedente alguno, producto de una guerra legitimadora declarada por un Presidente que llegó de manera espuria.

Con el triunfo electoral de la cuarta transformación en la Presidencia de la República, así como su consolidación con la mayoría absoluta en ambas cámaras en el Congreso de la Unión, se toma la decisión de cambiar el paradigma de seguridad pública en México.

Por ello, el 14 de abril del 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 19 constitucional, con el objetivo de incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a una serie de actos criminales que atentan contra el patrimonio, la vida y la libertad de las y los mexicanos.

El dictamen que habremos de discutir y, en su caso, aprobar tiene por objeto armonizar la citada reforma a la Constitución con la legislación segundaria.

En consecuencia, la Comisión Dictaminadora propone reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el juez de control dicte la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Delito en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Delitos de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

Cada uno de estos delitos lacera fuertemente al tejido social, actividad económica del progreso del país y vulnera una cuantiosa cantidad de recursos humanos que el Estado mexicano está obligado a respetar, garantizar, proteger y promover.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo celebramos que se establezcan mecanismos procesales garantistas, para que la persona imputada que cometió un delito que amerita prisión preventiva oficiosa pueda acceder a un acuerdo reparatorio, en sustitución de la medida cautelar.

Asimismo, se contempla que la o el presunto delincuente pueda acceder a mecanismos alternativos de solución de controversias.

Por otra parte, se reforma la legislación sustantiva en diversas materias en su dimensión penal. De esta manera se reforma el artículo sexto de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para imponer prisión de cuatro a nueve años a personas que cometan delitos electorales, en especial que compren el voto o utilicen recursos públicos para incidir en la intención del mismo.

Con esta reforma expulsamos, de nuestro sistema político, aquellas prácticas corruptas, endémicas del periodo neoliberal.

Asimismo, se armoniza el delito de desaparición forzada de personas, este delito ha destrozado familias y comunidades enteras, como es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por otro lado, se determinan los mecanismos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa en la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Cabe recordar que el Presidente Andrés López Obrador encabeza, desde el inicio de su sexenio, una lucha frontal contra el huachicol, el cual ha generado pérdidas millonarias a Pemex y que fue solapado por las administraciones anteriores.

Para combatir al crimen organizado, se propone reformar el artículo 83 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para incrementar la penalidad por portar armas de fuego de uso del Ejército.

En el Partido del Trabajo estamos plenamente comprometidos con la lucha que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la clase política corrupta del viejo régimen y contra el crimen organizado, la cual ha comenzado a rendir frutos y por ello hemos de votar a favor del presente dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Lucero Olivas.

Tiene la palabra el Senador Juan Zepeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Senador Juan Zepeda: Gracias, señora Presidenta.

El 6 de diciembre del año 2018, en este recinto se dio un debate muy álgido, un debate de profundo contenido de definiciones, un debate que puso en su lugar a quienes hemos estado, de toda la vida, en las fuerzas progresistas y que no concebimos, de ninguna manera, que la prisión preventiva oficiosa sea el camino para resolver los graves problemas de inseguridad que vive nuestro país.

Solo unos cuantos, esa noche, nos pronunciamos en contra de que se fuera en contra del espíritu del artículo 19 que consagra la presunción de inocencia de todo ciudadano.

Movimiento Ciudadano, en congruencia con ese voto del 6 de diciembre de 2018 y consecuente con lo que hemos pensado que hoy se está errando la estrategia para disminuir la demanda justa de la ciudadanía, que es la inseguridad, nos venimos a pronunciar aquí en esta tribuna en contra de lo que hoy se pretende en ampliar nuevamente los catálogos de delitos que se pueden perseguir con prisión preventiva oficiosa.

De ninguna manera podemos nosotros avalar que se siga con una estrategia errada.

Con esto nosotros queremos ser propositivos, a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero si empezamos a contar desde que se dio la discusión hasta la fecha, en nuestro país se han cometido 70 mil 108 homicidios, estoy hablando del 6 de diciembre del 2018 a este día que estamos aquí nuevamente con la discusión; mil 516 feminicidios, 35 mil 741 abusos sexuales, 120 mil 553 robos a casa habitación, 17 mil 568 episodios de robo a transporte de carga y público.

Y con estos datos del mismo sistema del Secretariado de Seguridad Pública de nuestro país, del gobierno federal, les demostramos que su estrategia está equivocada y que esta decisión de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no resuelve el problema que padecen los mexicanos.

Por supuesto que estamos a favor de encontrar una estrategia y una política que resuelva ese grave problema.

Pero miren ustedes el doble discurso. En la discusión de diciembre del 2018 aquí se cansaron de decir que el delito de corrupción merecía prisión preventiva oficiosa y después de nueve meses de andar huyendo por todo el mundo, se capturó a Emilio Lozoya, viene al país y la prisión preventiva oficiosa brilla por su ausencia, su prisión preventiva oficiosa es un hospital de lujo con artimañas y subterfugios de una posible enfermedad, cuando en España no registraron ningún tipo de padecimiento y llegan y dicen es que trae desnutrición o trae problemas gastrointestinales.

Ojalá así trataran a todos los detenidos mexicanos que llegan a los penales.

Ese es el doble discurso y estamos contra eso, porque eso no es lo que votó la ciudadanía, las fuerzas progresistas.

Y si este proyecto de gobierno se dice de izquierda, con esto le están fallando a quienes votaron por ustedes.

Eso no lo impulsa la izquierda, por supuesto que no.

Hoy recibimos una carta de un colectivo de organizaciones defensoras de los derechos humanos y establecen claramente que quienes más se ven afectadas por esta nueva política son las mujeres, donde hoy una de cada dos mujeres que está en prisión no tiene certeza jurídica de cuándo va a ser condenada, absuelta o liberada.

A esos grupos los estamos vulnerando, por eso nuevamente Movimiento Ciudadano está en esta tribuna para decirles que no, que ese no es el camino.

A cambio, Movimiento Ciudadano les propone un Parlamento Abierto donde podamos convocar a los especialistas, a los expertos, a las organizaciones defensoras de derechos humanos a que revisemos todo el andamiaje para acabar con esto; a penalistas, a especialistas, a profesores, que revisemos todo nuestro Código de Procedimientos Penales, pero también nuestro sistema penitenciario.

Con esto que ustedes nos están proponiendo es mandar a la universidad del delito a los jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos mexicanos.

Hoy tenemos, sí, en efecto, una crisis de salud que no se generó en nuestro país, por supuesto que no, vino de afuera.

Sí es una pandemia; sí, somos responsables aquí de darle solución a los mexicanos que hoy no tienen cómo llevar sustento a su familia.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
SALOMÓN JARA CRUZ

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Concluya, Senador.

El Senador Juan Zepeda: Por eso proponemos nosotros que, si ya tenemos una pandemia o una crisis de salud, que se transformó en una crisis económica, nos alertemos, porque lo que viene de manera inmediata es una crisis en materia de seguridad.

Estos números se van a ahondar y tenemos que prever eso. Nosotros promovemos el ingreso vital para los mexicanos. Son temas que ahí sí nos convocamos y ahí tengan nuestros votos a favor para que le resolvamos a los mexicanos.

Hoy aquí hemos votado prácticamente todo a favor con ustedes, donde coincidimos, y ustedes lo saben, estamos a favor de lo que aquí se presenta, y que es loable y que va a beneficiar a los mexicanos.

Esto que hoy nos presentan, esto jamás lo apoyaremos; seremos consecuentes, porque esto no es lo que votó la gente.

Gracias.

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senador Juan Zepeda.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para fijar su posicionamiento por cinco minutos.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas noches, compañeras y compañeros.

Si bien es cierto que nos encontramos aquí para dar cumplimiento a una petición de la Corte de desconcentrar a una familia de delitos que dejamos concentrada en el artículo 19 constitucional, lo cierto es que prácticamente vaciamos la familia completa.

Hay que hacer una reflexión de lo que estamos haciendo aquí.

Hace 12 años coincidimos en la necesidad de reformar nuestro sistema de justicia para atender los reclamos de las víctimas del delito y que desafortunadamente hoy siguen con el mismo reclamo de aquel tiempo: justicia, justicia, justicia.

Y es que lo logrado en aquel entonces tiene rasgos de bipolaridad que precisamente pueden ser el error de acceso a la justicia que hoy estamos padeciendo.

Creamos un modelo de justicia acusatorio y adversarial donde la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario; aun así, siendo inocentes hasta comprobar responsabilidad, en esa reforma de 2008 dejamos presente la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa por considerar que existen delitos graves que merecen un tratamiento especial, pero por nuestro dictamen de hoy es evidente que hemos confundido el término de delito grave con la necesidad de cautela.

Más aún, se ha promocionado la prisión preventiva oficiosa como una medida de seguridad pública para prevenir el aumento de la comisión de los delitos y la reincidencia, lo cual es falso, la realidad tiene otros datos.

El homicidio doloso, que fue una de las principales razones por la que se incorporó la figura de prisión preventiva oficiosa, no ha disminuido; por el contrario, de enero de este año hasta el día de ayer se contabilizaban 55 mil

homicidios dolosos, por lo que es evidente el fracaso para contener la incidencia en la comisión del delito con esta medida.

De acuerdo a estadísticas recopiladas por México Evalúa, no hay una evidencia que sustente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que tenga un efecto en la reducción de los delitos.

Sucede igual con la ampliación de las penas, recientemente, en la Cámara de Diputados aumentaron la pena del feminicidio a 65 años.

En los datos del mes de junio, el mes más violento contra las mujeres desde que se tenga registro, contempla 99 carpetas abiertas por este delito; es decir, aunque actualmente tiene penas de las más altas y está incorporado en los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el feminicidio sigue en aumento.

Parece que no hemos entendido entonces que nos equivocamos, que no hemos entendido que falta poner atención en el fortalecimiento de las policías de investigación y los primeros respondientes; no hemos entendido que falta capacitación para los ministerios públicos y la necesidad de que se les asignen sólo la cantidad de asuntos reales que pueden desahogar; no hemos entendido que nos enfrentamos a un problema de impunidad y no a un problema de penas. Y no entender, no reconocer, significa seguir haciendo peor las cosas.

Vamos para peor, de 2008 a la fecha tenemos más de 30 tipos penales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, algunos que no tienen ninguna necesidad real de llevarse en prisión. Por ejemplo, los delitos electorales, basta una medida cautelar para evitar la fuga, porque no se pone en peligro a ninguna víctima. Igual en los daños a las vías de comunicación. Así, el catálogo de prisión preventiva oficiosa crece y crece sin necesidad y sin sentido.

Les doy otro dato, un dato para reflexionar en la Legislatura de la paridad de género: Una de cada dos mujeres que están hoy en la cárcel no tiene sentencia, es decir, están sujetas a una medida cautelar de prisión preventiva; tenemos a las mujeres en la cárcel sin haberles comprobado delito.

Finalmente, la prisión preventiva oficiosa afecta primero a los pobres y destruye el futuro de los jóvenes. En los datos recabados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, publicada por el Inegi, nos dice que el 72 por ciento de la población carcelaria tiene como máximo nivel de estudios la educación básica; el 32 por ciento de ellos son población entre 19 y 29 años; el 35 por ciento de ellos entre 30 y 39 años; es decir, población joven.

De éstos, el 97 por ciento afirma haber tenido un empleo lícito alguna vez en su vida, pero el 80 por ciento refiere trabajos cuya remuneración es menor a tres salarios mínimos; es decir, son gente pobre.

La prisión preventiva oficiosa condena a los pobres. Si estos datos no nos conducen a la reflexión sobre la imposición de estas medidas cautelares a personas que incluso técnicamente son inocentes, puesto que la autoridad no ha demostrado en un juicio su culpabilidad, desde nuestra perspectiva quiere decir que hemos renunciado a escuchar a la sociedad y, con ello, hemos renunciado a la construcción de cualquier tipo de diálogo.

Los nuevos consensos no sólo tienen que darse al interior de este recinto, sino con todos los actores sociales que reclaman justicia, una justicia duradera, construida con base en el respeto de los derechos humanos y que no vea a la cárcel como un recurso de seguridad pública. Estamos a tiempo de reorientar el rumbo y reconstruir perspectiva, erradicando la impunidad que se conforma en el transcurso del proceso penal.

No traicionemos la visión que nos llevó a transformar nuestro sistema de justicia por la simple necesidad de simular resultados. Esta reforma abona a que el sistema judicial acusatorio y adversarial se aparte de su espíritu original y se cometan más violaciones a los derechos humanos de los procesados.

Yo por eso les invito a votar en contra, a que reorientemos, a que reflexiones y tomemos otro rumbo, un rumbo más humanista.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senadora Claudia Edith Anaya Mota.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del grupo parlamentario del PAN, para fijar posicionamiento.

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román: Con el permiso de la Presidencia.

Desde que se aprobó en este Congreso de la Unión la reforma al artículo 19 constitucional que amplió de manera sustantiva el Catálogo de Delitos respecto de los que opera la llamada prisión preventiva oficiosa, hubo compañeras y compañeros que advirtieron del peligro que para una auténtica justicia implicaba el asunto.

Por esa razón, algunos de ellos, y creo que vale la pena mencionarlos: Josefina Vázquez Mota, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez, Damián Zepeda y Gustavo Madero, votaron en contra de la reforma constitucional.

En mi caso, al igual que muchos otros, la mayoría incluso de las Senadoras y Senadores de mi grupo parlamentario, nuestro voto fue a favor de dicha modificación, lo hicimos dando un voto de confianza, creyendo que esta ampliación podría ser una herramienta para combatir la impunidad, pensando en que la ampliación del Catálogo de Delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa combatiría la llamada puerta giratoria que permite que muchos delincuentes tarden más en entrar en la cárcel que en salir de ella y, sobre todo, pensando en la cruda realidad que atraviesa nuestro país y, en particular, cada uno de los estados que representamos.

En 2019, a nivel nacional, se registraron 945 feminicidios y 81 mil 893 robos a casa habitación, además de un alarmante incremento en los casos de desaparición forzada. Y estos son algunos delitos por los cuales se aumentó este Catálogo.

Mi estado Veracruz se convirtió en el primer lugar nacional en feminicidios y se registraron 2 mil 595 casos de robo a casa habitación.

Estos delitos lastiman profundamente la vida y la integridad de las y los mexicanos y, sin duda, esta reforma parecía una oportunidad para combatir la crisis de violencia e inseguridad en la que está sumergido nuestro país; sin embargo, estas reformas secundarias que estamos discutiendo el día de hoy se están extralimitando absolutamente al espíritu que hubo en el momento de la aprobación de esta reforma constitucional.

En aquel momento, y vale la pena también mencionarlo, estábamos en una etapa en la que se rediseñaba la propia Procuraduría General de la República y estábamos en la transición a la Fiscalía General de la República, confiábamos en que todos estos cambios implicarían, entre otras cosas, que no se volviera a dar uso político a esa institución. Lamentablemente esa confianza ha sido traicionada y no hemos visto mejoría alguna al respecto.

Reconozco que mis compañeras y compañeros que en aquel entonces advirtieron de los riesgos de esta acción estaban en lo correcto, advirtieron que la prisión preventiva oficiosa trastocaba el sistema de derechos humanos que hemos reconocido, tanto el marco jurídico nacional como el del orden internacional.

Por esta razón, en el propio régimen transitorio del Decreto del 12 de abril del 2019, se señaló expresamente que la continuidad de la prisión preventiva oficiosa se evaluaría en un plazo de 5 años, a efecto de determinar o no su eliminación de nuestro marco jurídico.

De este tamaño es la conciencia que existió en ese momento, incluso, entre quienes votamos a favor de dicha figura, pues sabíamos que podíamos revestir una serie de riesgos para la vigencia de los derechos fundamentales y atentar contra los principios del nuevo sistema de justicia penal de nuestro país, como es el propio principio de presunción de inocencia.

Y, es que resulta contradictorio en esta administración que hace un año te pidan votar como herramienta en la ampliación de delitos del artículo 19 y que hace dos meses hayamos estado votando aquí para votar la Ley de Amnistía, entonces no entendemos justamente cuál es la vía o cuál es el sentido que tiene esta administración al respecto de la aplicación de justicia.

Nos resulta sumamente contradictorio.

Nos ha quedado más que claro en Acción Nacional, el riesgo de firmar cheques en blanco es igualmente inadmisible que con estas leyes secundarias quieran crear dos nuevos tipos finales en materia de delitos electorales, que absolutamente nada tienen que ver con la disposición constitucional y que además resultan repetitivos en la propia Ley Electoral. Todo ello, con la única finalidad de servir como herramienta electoral para este gobierno.

Esto puede llevar a que un régimen autoritario utilice este tipo de instrumentos legales para oprimir, amenazar, intimidar, desprestigiar o difamar a cualquiera que considere parte de la oposición política o de los adversarios del partido oficial, debilitando de manera muy preocupante nuestra democracia.

Lo que estamos señalando no es cosa extraña en nuestro país, como tampoco lo ha sido históricamente en muchos otros países, en los que la democracia no se ha consolidado plenamente. Sabemos que el aparato de justicia ha sido utilizado de manera sesgada para perseguir y acabar políticamente a la oposición.

Sin embargo, por un momento, creímos que el cambio de régimen podría implicar transformar esta realidad y confiamos en su momento el entregarle al nuevo gobierno instrumentos como lo es este catálogo empleado, como lo es la extinción de dominio o, incluso, la Guardia Nacional en aquel momento.

Estamos por iniciar un proceso electoral que es de los más importantes en la historia y el uso faccioso de las instituciones debe ser erradicado de raíz si queremos consolidar una democracia efectiva. Precisamente por ello, también pedimos, desde el inicio de la legislatura, que construyéramos una Fiscalía verdaderamente autónoma, pero no sucedió así, hubo algún avance, sin duda, pero quedaron en el tintero muchos aspectos que propusimos para ese efecto y que no fueron aceptados.

Ahora vemos por qué, porque no se quería que la Fiscalía fuese realmente autónoma, ya parecía desde ese momento un abuso en el sistema de justicia.

Y, todo indica también que aquel plazo de cinco años que nos dimos en el régimen transitorio está resultando excesivo, no hacen falta cinco años para evaluar la continuidad de la medida, han bastado unos cuantos meses para evidenciar que esa figura legal no está hoy en buenas manos, está quedando claro que en manos del actual gobierno se hará mal uso de ella, y de hecho, ya está sucediendo.

Por estas razones, compañeras y compañeros Senadores, un importante número de Senadores del Partido Acción Nacional, habremos de votar en contra de este proyecto, con la esperanza de que podamos detener su aprobación, para que en un futuro, cuando en su caso se haya demostrado que el gobierno está verdaderamente corrigiendo el rumbo, que está utilizando a las instituciones con responsabilidad y para lo que son y no para socavar la democracia, entonces y sólo entonces podríamos revisar la pertinencia de su aprobación.

Es cuanto.

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senadora Indira de Jesús Rosales.

Se concede el uso de la palabra al Senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario del Partido Morena, para fijar su posicionamiento.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Estamos aquí en esta reunión extraordinaria para cumplir asignaturas pendientes en la que se dé respuesta puntual a viejas, añejas demandas de carácter social.

Por ello, a nombre del grupo parlamentario mayoritario del Senado de la República, al que vengo a representar en este posicionamiento, al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, los invitamos a las Senadoras y Senadores a apoyar este dictamen debidamente sustentado por las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, que tiene que ver con la reforma legal en materia de prisión preventiva oficiosa que contiene dicho dictamen, cuya materia se eleva a esa exigencia genuina de la gran mayoría de los mexicanos, de dar plena respuesta al reclamo de justicia, de procuración y de impartición de justicia por los estragos que ha venido causando el grave fenómeno del aumento de la inseguridad, de la violencia criminal y de la delincuencia organizada, así como de la impunidad, cuya herencia es de las administraciones pasadas que no podemos ni debemos ignorar.

Sin duda que hay razones para aprobar este dictamen.

El artículo 19 de nuestra Constitución Política se advierte de manera precisa los casos en los que procede la prisión preventiva oficiosa, estableciendo que el Juez la ordenará para los casos excepcionales que expresa dicho precepto.

Para entender la inclusión de esta figura hay que trasladarse al procedimiento legislativo que culminó con la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, conocida como la reforma penal en que se modificó de manera relevante, trascendental el sistema procesal penal de nuestro país pasando de un sistema mixto a un sistema de Corte acusatorio y oral.

De esta manera, y como parte de dicha reforma penal, el artículo 19 constitucional fue modificado con el objeto de regular concretamente lo relativo al sistema de prisión preventiva oficiosa como parte del Sistema Penal Acusatorio, ello acorde con el principio de presunción de inocencia, habiéndose estimado conveniente establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia.

En consecuencia, en el dictamen de la Cámara de origen se destacó categóricamente en cuanto a la prisión preventiva oficiosa.

Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva se acordó establecer estos principios: la aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de afectación y de molestia que procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso de protección de las víctimas.

Cuando se creó el Sistema de Delitos Graves para la Procedencia de la Libertad Provisional bajo Caución se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales, no obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha comenzado el resto del ordenamiento, hoy por hoy existe también desde entonces un abuso en la prisión preventiva, ya que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación.

Con la finalidad de superar este estado de cosas se impuso entonces que la propia Constitución fuera la que determinara aquellos casos excepcionales para los que bastaría acreditar el supuesto material, para que en principio proceda la prisión preventiva.

Hay que dejar claro, entonces, que el Constituyente Permanente no solo precisó dichos casos excepcionales, sino además dejó claro que la necesidad de cautela siempre deberá ser evaluada tanto por el Ministerio Público y justificada por él ante el Juez, con la posibilidad que tanto el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una audiencia.

Como bien se sabe, el propósito a cumplir con esta reforma constitucional y el establecimiento preciso de tales delitos como casos de excepción, respecto de en los que procede la prisión preventiva oficiosa, fue la de evitar los excesos cometidos hasta ese momento con la prisión preventiva, ya que si se hace un reenvío a la ley inevitablemente se debilita el principio de la supremacía constitucional.

De todo lo anterior, antes expresado y considerando el diseño que la prisión preventiva se basa en el principio de subsidiariedad y excepcionalidad, acorde con el principio de presunción de inocencia, se puede concluir que el dictamen sometido a nuestra consideración sí es viable y se encuentra plenamente sustentado en nuestra ley fundamental, toda vez que se apega y respeta los principios de excepcional de la aplicación de la prisión preventiva y de la presunción de inocencia.

Tal como se evaluó en su momento por el Constituyente Permanente, que consideró que fuera la propia Constitución la que determinara aquellos casos excepcionales para los que bastaría acreditar el supuesto material, para que en principio proceda la prisión preventiva.

Compañeras y compañeros Senadores, estos cambios legales que de manera extraordinaria vamos a votar son parte fundamental de este proceso de cambio y de transformación republicana de ansia, de procuración y de una auténtica impartición de justicia que acabe con la corrupción y con la impunidad que se ha venido arrastrando y que fue heredada a la nueva administración y a la sociedad general en su conjunto.

El combate a la delincuencia y al crimen, en aras del derecho a la impartición de justicia y de la defensa de los derechos fundamentales ciudadanos, es una…

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Concluya, Senador.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Es una bandera que el grupo parlamentario de Morena no dejaremos de izar para seguir legislando y fortaleciendo nuestro sistema democrático y de aspiración de justicia.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Muchas gracias, Senador Cristóbal Arias Solís.

Tal como lo mencionó al principio de la sesión el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, presentó una moción suspensiva, la cual cumple con los requisitos establecidos en el numeral tres del artículo 105 del Reglamento del Senado.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el Senador Álvarez Icaza Longoria, por tres minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señor Presidente, aunque una moción tiene más tiempo y me apego al Reglamento del Senado para ese fin.

A nombre de la Senadora Kempis, del Senador Madero, el Senador Fuentes, el Senador Bermúdez, el Senador Rementería, la Senadora Hernández, el Senador Zepeda, la Senadora Anaya y el mío propio, someto a consideración de este Pleno la siguiente moción suspensiva, que tiene por objeto suspender la discusión y devolver a Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, a efecto que sea reconsiderado el dictamen en el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos que son motivo de la discusión actual.

Esto, debido a que tales ordenamientos incorporan la discusión de la prisión preventiva oficiosa y que no corresponde a lo establecido en el marco constitucional debido a que trasciende preceptos, viola los derechos humanos, en particular la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho personal a la libertad; es contradictorio a lo establecido en los tratados internacionales de los que México forma parte y, sobre todo, no hubo un proceso de discusión abierto de expertos y especialistas, así como víctimas, detenciones y sus derechos como lo requieren los estándares del Protocolo del Parlamento Abierto aprobado por este Senado.

Para esos efectos me permito pedirle, señor Presidente, que se incorpore al Diario de Debates este comunicado de prensa que presentaron ayer cerca de 30 organizaciones y más de 100 personas expertos, entre otras cosas, dicen: *"El dictamen sobre prisión preventiva oficiosa del Senado, afecta principalmente a las mujeres".* Como ya se mencionó, una de cada dos mujeres en prisión no tiene sentencia. De enero a junio del 2020 el número de mujeres en prisión sin sentencia para datos del fuero común aumentó casi 17 por ciento; de enero a junio del 2020, el número de mujeres en prisión sin sentencia para delitos del fuero federal aumentó más del 10 por ciento y la ampliación de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa que se aprobará mañana, porque esto lo presentaron el día martes, permitirá que las mujeres sean encarceladas sin que se demuestre su culpabilidad.

Dicen: *"Pedimos al Senado Mexicano que no realice una votación apresurada".* Entre las organizaciones que firman está Impunidad Cero, Data Cívica, México Evalúa, Legalidad por México, México Unido Contra la Delincuencia, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mujeres y Punto, Causa en Común, Gire, Grupo de Información de Protección Elegida y otros más.

Estas organizaciones y muchas más están haciendo un llamado importante al Senado para que discutamos de fondo lo que esto significa.

Y lo que ha pasado, compañeros, es que esto pone en evidencia, efectivamente, la reforma al 19 fue un error y que también la mal llamada reforma a la amnistía es un error. Los datos así lo soportan.

Miren, ¿cuáles son las consideraciones para esta solicitud de moción, además de lo que hemos mencionado? Como se mencionó, el 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación respecto al catálogo de delitos nuevos para la prisión preventiva, ahí se hacía referencia al uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, robo de transporte de carga, abuso o violencia social contra menores, robo a casa habitación, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímica, feminicidio, delitos en materia a prisión forzada y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Compañeros, lo que pasó ese día fue un "congal punitivo", aquí se dio rienda suelta y para construir el consenso fueron aprobandos los delitos que una y otra bancada quería, pero es un grave error repetir el error que se hizo en las administraciones pasadas. Suponer que por aumentar la pena se acaba la impunidad, es un error. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el trabajo de la Fiscalía, no recortarle el presupuesto; lo que se tiene que hacer es dotar de agentes del ministerio público recursos para investigar. Creer que porque se aumenta la pena se disminuye el delito, es el error grave que se cometió en los años anteriores, es falso, es un error, es una equivocación grave que nos ha costado mucho.

Miren ustedes, lo que ha venido sucediendo incluso, es que hemos recibido llamadas de atención sobre el particular de distintas entidades, que no voy a desarrollar, pero sí me parece solo unas dos ideas que quiero, para terminar la fundamentación de esta solicitud de moción suspensiva.

El Sistema Procesal Penal asumido desde cualquier sociedad democrática, debe responder a dignificar a las personas y a los derechos inherentes. Eso no está pasando en esta reforma. Y debe ser de carácter excepcional, como dijo la Corte Interamericana.

¿Qué es lo que está pasando supuestamente con el carácter excepcional?

Como ya se dijo, al mes de junio de 2020 se encontraban 210 mil, poco más, termino, señor Presidente, personas privadas de libertad; 41 por ciento de estas personas no tienen sentencia. Compañeros, cuatro de cada 10 personas privadas de libertad en México no tienen sentencia, de manera que claramente aquí se manifiesta que fue un error esta reforma.

Y por eso les pedimos que se reconsidere, que se regrese a Comisiones y que tengamos una discusión de fondo, estructural; que pausemos, porque, si no, vamos a seguir cometiendo el error de lo que ustedes han llamado como los gobiernos neoliberales.

Por su atención, muchísimas gracias.

Moción suspensiva

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Consulto a la Asamblea si existe algún impugnador de la moción presentada.

Debido a que no hay quien impugne la moción, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a debate la moción presentada.

La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Sí, señor Presidente. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si admite a debate la moción presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, señora Secretaria.

Desechada la moción, continuamos con el trámite del proyecto de Decreto. Han concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios. A continuación, vamos a la discusión en lo general.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Damián Zepeda Vidales, del grupo parlamentario del PAN, por cinco minutos, para hablar en contra.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor Presidente; con el permiso de la Asamblea.

Estamos a 30 de julio de 2020, son las 2:10 de la mañana, más de 13 horas de estar viendo asuntos, ha existido disposición para hacer nombramientos de embajadores, de órganos de conciliación, reformas ahora para darle cárcel a la gente sin juicio, lamentablemente; en un periodo anterior, reformas secundarias a un tratado que no eran indispensables, y lo que no ha existido es voluntad para lo único que es urgente y es prioritario, que es apoyar a los mexicanos.

Desde el pasado 24 de marzo en esta tribuna, aquí donde estamos, hace ya más de cuatro meses propusimos por primera ocasión otorgar un ingreso básico universal a todos los trabajadores, sean informales o formales, para apoyarlos por la crisis del Coronavirus, tres mil 207 pesos apoyados directo a los ciudadanos.

¿Qué ha pasado desde entonces?, cuando una y otra vez, desgraciadamente, lo lamento mucho, pero es la verdad y hay que decir las cosas como son, el grupo mayoritario de Morena le ha dicho no a esta propuesta.

De entonces a la fecha, hoy tenemos el dato brutal, Coneval lo afirma con datos de Inegi, 69 millones de mexicanos no tienen los ingresos suficientes para una canasta alimentaria.

Déjenme hacer una pausa y volverlo a decir, por si no se entiende la dimensión, a 69 millones de mexicanos no les alcanza para una canasta alimentaria.

¿Y qué hace el Senado de la República? Nada en absoluto, nada.

15 millones de mexicanos han perdido el empleo a causa del Covid.

¿Y qué hace el Senado de la República, la mayoría de Morena? Nada.

10 millones de mexicanos, según Coneval, van a pasar a pobreza extrema.

¿Y qué hace el Senado de la república? Nada.

500 mil empresas están en riesgo de quebrar.

150 mil tienditas, porque luego dicen que son los grandes empresarios, 150 mil tienditas cerradas por la crisis.

¡Ya basta!

Ya es momento de atender esto.

Lo debimos de haber atendido desde el día uno en marzo, pero hoy estamos aquí y una vez más exigimos que se apruebe el Ingreso Básico Universal ya.

No hay pretexto que valga.

Se dice: “es que el gobierno ya los está apoyando a los mexicanos”.

7 de cada 100 empresas, micro, pequeñas y medianas empresas dicen haber recibido un apoyo, 7 de cada100, el 7 por ciento. Por eso están quebrando.

“Oye, es que Adultos Mayores”. Perfecto, que se les apoye, votamos a favor, pero esos no son los que ahorita están sufriendo porque ya tenían el ingreso.

Qué bueno que se les dé.

Se necesita apoyar también a los más de 50 millones de trabajadores que están impactados hoy.

Oye las becas pre primaria, primaria, secundaria, prepa, qué bueno que se los den, nosotros votamos a favor, pero además de eso está un problema grandísimo y sí, sí tiene relevancia, porque es increíble que estemos aquí para aumentar delitos en los cuales con la sola acusación del fiscal o la Fiscalía te meten a la cárcel sin probarte tu culpabilidad, pero no tengamos el tiempo a las 2:00 de la mañana, tercera ocasión, creo, segunda ocasión que nos reunimos en periodo extraordinario, después de cuatro meses que la gente no tiene qué comer y no hay manera de convencerlos de votar el Ingreso Básico Universal.

Yo, nosotros, venimos a hacer un llamado y lo vamos a hacer cada vez que haya sesión, hasta lograr que se apruebe.

Todos los grupos parlamentarios han presentado ya propuestas con distintas visiones, pero enfocadas a lograr un apoyo a los mexicanos. Es momento de pasar del dicho al hecho y votar un beneficio para México.

No entiendo, no puedo entender y nunca vamos a entender cómo sí hay tiempo para otras cosas, y no hay tiempo y disposición para apoyar a México.

Y dicen que no hay dinero, nada más les recuerdo, 6 billones de pesos, 6 millones de millones es el presupuesto federal a nivel anual, más de mil millones, o sea, más de un millón de millones lo tiene a disposición el gobierno federal. Además, un millón de millones de deuda y mucho espacio para poder apoyar, es momento de hacerlo ya.

Dicho eso, en este tema, una vez más no queda más que decir, es increíble que pensemos que violándole los derechos humanos a los mexicanos vamos a resolver el problema de seguridad.

El 95 por ciento de los delitos, compañeros, con respeto les digo, no llegan a un juez, cómo creen que dándole prisión preventiva oficiosa sin una valoración por la sola acusación del Ministerio Público va a resolver el problema de inseguridad.

Que el juez decida, basado en la peligrosidad del reo, basado en la reincidencia, basado en el riesgo, si se merece una medida cautelar menor o meterlo a prisión, pero no es posible que estén dispuestos a mandar dos años a prisión a una persona que no le han probado su culpabilidad; no es correcto; no es lo justo.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Zepeda Vidales.

Tiene la palabra el Senador Salomón Jara, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Salomón Jara Cruz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Senadores.

La aprobación del dictamen que se encuentra a nuestra consideración representa la culminación del procedimiento formal establecido en el artículo segundo transitorio del Decreto aprobado el año pasado por el que se reformó el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, como aquí lo han comentado.

Como todas y todos recordarán, ahí establecimos la obligación del Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones necesarias al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a los demás ordenamientos pertinentes, a efecto de incluir las nuevas hipótesis normativas.

De igual manera, con esta reforma se cumplirá a cabalidad con el criterio establecido el pasado 6 de junio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a resolver una contradicción de tesis, determinó que si bien la reforma al párrafo segundo del artículo 229 de la Constitución entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Es decir, el 13 de abril del 2019, su exigibilidad y aplicabilidad estaba condicionada a que el Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones al Código Nacional de Procedimientos penales.

Lo anterior, a efecto de precisar en su texto los delitos respecto de los que, conforme a su disposición constitucional reformada, sería procedente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y a fin de respetar los principios de no retroactividad y de exacta aplicación de la Ley Penal, contenidos en el artículo 14 de la propia Constitución.

Por lo anterior mi voto será a favor, no sin antes adelantar que debemos retomar y profundizar el análisis sobre el funcionamiento integral de nuestro sistema de justicia penal.

Desde mi muy particular punto de vista, hay muchas cosas qué corregir y perfeccionar, el nuevo modelo debe evolucionar y perfeccionarse.

Sin embargo, creo que es oportuno y necesario advertir que desde ahora frente a las voces que claman por volver al pasado, la respuesta debe ser siempre hacia adelante, las fiscalías todas deben esforzarse más para cumplir con sus responsabilidades y romper las dinámicas que impiden terminar con la injusticia y la impunidad.

Hoy este Senado le da un valioso instrumento para luchar contra los delincuentes que ofenden a la sociedad mexicana.

La prisión preventiva oficiosa es un mal necesario frente a la tragedia de violencia e inseguridad que nos heredaron los gobiernos anteriores.

Ante una realidad como la nuestra, esta figura coadyuva a disminuir los altos índices de impunidad, lo cual es una exigencia y una demanda prioritaria de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

La reflexión que aquí se nos propone es correcta, ojalá que cuando ellos estuvieron en el gobierno, hubieran tomado las medidas necesarias para evitar que llegáramos a donde hoy nos encontramos.

La crisis de inseguridad, violencia, impunidad, ese gran legado que ustedes nos dejaron, el PRI y el PAN, por eso hoy necesitamos hacer uso de todas las herramientas que nos proporciona el derecho penal, no se trata de un cheque en blanco, las fiscalías siguen estando obligadas a mejorar su trabajo, lo que no podemos permitir es que la delincuencia siga operando y que los enormes rezagos y deficiencias institucionales sigan siendo una salida segura para quienes violentan el Estado de derecho.

Espero que esto ayude, y que de manera paralela desarrollen al máximo sus capacidades para investigar y lograr una mayor eficiencia en las vinculaciones a proceso sin la necesidad de dar un paso hacia atrás.

Muchas gracias por su atención a todas y a todos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Jara Cruz.

Para hablar en contra, tiene la palabra la Senadora Claudia Ruiz Massieu.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:

No tengo duda que este Senado tiene un compromiso inequívoco con el combate a la impunidad y con lograr que quien delinque sea juzgado conforme a derecho y salde su deuda con la sociedad.

Ese compromiso nos une, pero debemos reconocer que el tema de la prisión preventiva oficiosa nos divide entre grupos parlamentarios y aún al interior de ellos.

En este tema no hay consenso, no lo hubo en la reforma constitucional de 2019 y no lo habrá hoy porque mientras unos ven en este tema el fortalecimiento de la procuración de justicia, otros vemos el debilitamiento de los derechos fundamentales.

El tema es profundo porque se plantea a partir de un falso dilema entre dos valores que no son mutuamente excluyentes, la seguridad, por un lado, y la protección de los derechos humanos por el otro.

Como si alcanzara el primero demandara renunciar al segundo, como si en los países democráticos y con un Estado de derecho sólido pudiera haber seguridad sin respetar los derechos humanos.

Hay que decirlo. El segundo párrafo del artículo 19 constitucional ya contenía en 2008 una afectación al principio de presunción de inocencia, y la modificación que se hizo el año pasado sólo la empeoró.

No voy a repetir ese debate, pero no puedo dejar de retomar el problema que significa enunciar ciertas conductas delictivas para que de manera automática se aplique la prisión preventiva como medida cautelar, pues sin razonar a la luz de los hechos y de las circunstancias, si esa determinación extrema procede o no para la protección de la víctima o de la sociedad se vulnera ese derecho fundamental a la libertad.

Con esta reforma convertimos una medida de por sí cuestionable y que sólo aplicada entonces a delitos que lesionan gravemente la dignidad de la persona y a la sociedad, en una salida fácil para atender la frustración legítima de la ciudadanía ante la insuficiencia e ineficacia de las policías, de las procuradurías, de los tribunales para garantizar la seguridad y la justicia en los tres órdenes de gobierno.

Por otro lado, la reforma de 2019 incorporó no una serie de delitos sino un conjunto de familias de delitos que hoy nos pretenden llevar a realizar modificaciones, que implica modificaciones a decenas de tipos penales.

Con este dictamen se establece prisión preventiva oficiosa lo mismo a un presunto secuestrador que a, por ejemplo, las personas que en un derrame de combustible ante la perforación de un ducto de Pemex presuntamente se apoderan de algunos litros de gasolina.

Esto llevará a que estas modificaciones legales atenten contra un principio al que no deberíamos renunciar tan fácilmente, el de no restringir la libertad de una persona más que en casos donde sea absolutamente necesario.

Ustedes dirán que esta argumentación corresponde en realidad a una reforma constitucional que ya fue consumada y que hoy solamente se trata de reglamentarla. Yo discrepo, el problema de la impunidad en la comisión de los delitos no se va a solucionar con la ampliación de los tipos penales que implican la prisión preventiva de oficio para las o los indiciados.

Enumero las razones por las que votaré en contra.

En la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 se establecieron tres principios para la construcción y la interpretación del orden jurídico nacional.

Primero. La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos a un rango jerárquico igual al de las normas constitucionales, cuyas restricciones solo podrían establecerse en la propia Constitución.

Segundo. La progresividad de los derechos humanos, es decir, el deber de no retroceder, sino de ampliar y expandir. Su reconocimiento también es un principio constitucional.

Tercero. La interpretación de la norma en la que se favorezca de manera más amplia la protección de las personas, el principio pro-persona, como un principio constitucional también.

Por ello, estas modificaciones adolecen de los siguientes vicios.

Primero. Es regresivo de nuestros compromisos con la comunidad internacional la ampliación del Catálogo de Delitos que conllevan a la prisión preventiva oficiosa.

Segundo. Es contrario a la progresiva expansión del reconocimiento de los derechos humanos aumentar este Catálogo de Delitos para que se dicte de oficio la prisión preventiva.

La reforma constitucional fue inconvencional y estas modificaciones que se planea votar también van a ser inconvencionales.

Tercero. Se vulnera aún más la presunción de inocencia pues, aunque no es ese el propósito, comparecer en juicio estando privado de la libertad sí establece prejuicios en contra del imputado.

Les doy un ejemplo de lo absurdo de lo que se planea votar. Antes de la reforma del año pasado, por un robo al transporte de carga el Ministerio Público tenía que razonar por qué esta persona imputada debía ser sujeto de prisión preventiva y el Juez tenía que considerar las condiciones del caso.

Ahora se va a tratar igual a quien sustrae de un tren descarrilado la carga de perecederos para su propio consumo que a una banda de delincuentes que en la noche, con poncha llantas, con violencia y con armas de fuego, roba la carga total de un tráiler para comercializarla.

Esas son las condiciones, a todas luces distintas, que se debieran valorar, pero que a partir de esta reforma no van a ser valoradas.

Compañeras y compañeros, claro que nos preocupa la situación de inseguridad que priva en el país, claro que nos preocupa el huachicoleo, que nos preocupa el robo a casa-habitación, que nos preocupa el uso irregular de los programas sociales, nadie en este Senado ni en el país está satisfecho con esta realidad ni con la incompetencia e insuficiencia del sistema de procuración de justicia y de seguridad, pero esos problemas no los vamos a resolver ni violentando los derechos humanos ni metiendo a la cárcel a los pescadores de Totoaba.

Además, como pasa con la idea que elevar las penas disuade la comisión de los delitos, establecer la prisión preventiva oficiosa para cada vez más delitos tampoco tendrá un efecto disuasivo.

Si no nos gusta el sistema, debatámoslo de fondo y estructuralmente. Si no nos gusta el sistema invirtamos en capacitar policías investigadores, ministerios públicos. Si no nos gusta el sistema no tenemos que ampliar el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa para cambiar la realidad.

No podemos avanzar en materia de justicia y derechos humanos si seguimos haciendo más de lo mismo, y este dictamen es definitivamente más de lo mismo, pero un poquito peor.

Reconozcamos que las libertades y la seguridad no son valores opuestos, concluyo, señora Presidenta, sino que se complementan y se fortalecen mutuamente.

Sin libertad no hay seguridad y sin seguridad no hay libertad, son valores que conviven y deben convivir en equilibrio, con este dictamen no lo hace.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ruiz Massieu.

Comentarles que regresó Fabiola a seguir apoyándonos en la limpieza del presídium.

Gracias.

Tiene la palabra la Senadora Freyda Marybel Villegas Canché, del grupo parlamentario del Partido Morena para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Freyda Marybel Villegas Canché: Gracias, señora Presidenta.

En el grupo parlamentario de Morena queremos agradecer y reconocer la participación activa de la coordinación de las Comisiones Unidas, que fueron parte fundamental para la elaboración de la presente y trascendente reforma.

Ante un México cansado de la violencia durante los sexenios anteriores, nosotros no podíamos dejar las cosas de la misma forma y fue por ello que impulsamos la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, publicada el pasado 12 de abril del 2019 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, para poder cambiar realmente el paradigma y la estrategia, es necesario, en apego al principio de legalidad y para lograr una armonización con el precepto constitucional, actualizar nuestros marcos jurídicos que permitan hacer nuevas instituciones de seguridad pública, eficientes, capaces de contener a los criminales y llevarlos a la justicia.

Es por ello que la finalidad de este dictamen es incorporar los delitos nuevos que se incluyen en la reforma constitucional en comento, para que puedan aplicarse las leyes secundarias de la prisión preventiva, delitos como abuso sexual o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de sus funciones, robo de transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea.

Este vació legal permitió que durante los últimos tres sexenios federales no se castigaran las prácticas que consintieron el imperio de la corrupción, pues una de las formas en que se desplegó fue precisamente a través del uso discrecional y sistemático de los programas sociales para coaccionar al electorado.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales es otro fenómeno alarmante que hoy se estará regulando. De modo que para avanzar en el combate efectivo a la corrupción que abarca el uso de los recursos de los programas sociales con fines electorales, es ineludible construir los tipos penales que sancionen tal conducta y, en caso de que se actualice, pueda ser ordenada la prisión preventiva oficiosa.

También el delito de enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público no pueda acreditar de manera legítima el aumento de su patrimonio o su legítima procedencia.

En ese sentido también procederá la prisión preventiva.

Desde nuestro movimiento no nos cansaremos hasta desterrar las malas prácticas que atentan contra la libertad y autenticidad del sufragio, así como el adecuado desarrollo de la función pública electoral.

Por esa sencilla razón, el objeto de estas reformas es preservar la seguridad pública en el territorio nacional y combatir el crimen organizado, así como las conductas que laceran a la sociedad.

Compañeras y compañeros, que nos quede claro que hoy tenemos una doble responsabilidad, por un lado, dar certeza a la armonización constitucional, y, por otro, aprobar estas reformas que permitan la implementación de estos mecanismos que darán versatilidad y movilidad en el actuar de los juzgadores, quienes a su vez contarán con el poder de ejercer una acción preventiva inmediata para evitar que evadan la justicia quienes cometan estos ilícitos, tales como el abuso de menores, el huachicol, portación de armas de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, recordémosles a ustedes que estos cambios que se están proponiendo tienen como objeto sancionar a los criminales y de preservar la estabilidad del derecho en México y la paz de los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Villegas Canché.

Tiene la palabra la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señora Presidenta.

Decía un maestro de la Facultad de Ingeniería en el primer semestre que: *"los que no dan resultados, dan pretextos".* Y hoy he escuchado todo tipo de pretextos, se la han pasado culpando al pasado.

Tenían perfectamente claro el país que tomaban y asumieron la responsabilidad e hicieron compromisos.

Y hablan del pasado como si aquí no hubiera personajes que militaron en el PRI y fueron funcionarios del PRI, como si aquí no hubiera personajes que estuvieron en el PAN, en el PRD.

Creo que es momento de que asuman su responsabilidad y se den cuenta en qué país estamos sentados.

Les dejaron un país con un número de muertos, pues lo han empeorado; les dejaron un país con un número de feminicidios, hoy hay 12 por ciento más de feminicidios.

La confusión que tenemos con la prisión preventiva oficiosa es pensar que por el hecho de que un delincuente entre a la cárcel es castigado. Eso es absolutamente falso, simplemente ese delincuente va a estar en la cárcel, el fiscal va a dormir el sueño de los justos, no va a conseguir pruebas y ese delincuente va a salir a la calle a seguir delinquiendo y quizá hasta con maestría en delincuencia.

Este gobierno tiene a sus delincuentes favoritos, uno es Ovidio Guzmán, a ese no se le toca ni con el pétalo de una rosa, a ese se le libera, a ese se le atiende a su mamá a domicilio.

Y hoy tenemos uno nuevo, Emilio Lozoya. Tuvieron la oportunidad de demostrar que realmente son diferentes, de demostrar que realmente en este país se va a acabar la impunidad.

Es increíble que este personaje diga que fue intimidado, presionado, influenciado e instrumentado. ¡Ay güey!, perdón, tomó 10 millones de dólares y se compró una casota en Lomas de Bezares.

Y no contento con eso, tomó otros tres millones de dólares para comprarse otra casota en Ixtapa Zihuatanejo, de esas casas fifí que ofenden a los mexicanos.

El señor no va a pisar la cárcel.

¿Qué ejemplo le están dando a los jóvenes de este país? "Mira, tú ve, róbate la lana y después vas y dices que alguien te presionó".

Me llama la atención la manera en que este gobierno usa la justicia con fines de venganza.

Yo aquí dije que se tenía que investigar la "estafa maestra". Ahí está Rosario Robles, que también podía haber tenido su juicio en libertad y a ella sí le aplicaron la cárcel por venganza, porque seguramente algo les sabía de su pasado y no quieren que salga.

Entonces yo no les acabo de creer que realmente lo que buscan con la prisión preventiva oficiosa es acabar con la delincuencia. Yo quiero anticipar que aquí más de un candidato va a acabar preso antes de ser candidato, porque le van a inventar algún delito.

Van a ver, cuando no lo puedan bajar por la buena, lo van a bajar por la mala.

Y es lo que va a hacer el espectáculo de Emilio Lozoya, porque además Emilio Lozoya de estar en la cárcel pues está bien que diga quiénes fueron sus socios en este mega negocio.

Está bien que este señor devuelva el dinero que se robó. Creo que los mexicanos están hartos de ver la impunidad.

Y da coraje ver cómo este señor se ha reído de los mexicanos. Se le mandó por él en avión privado.

Se le trajo al mejor hospital de este país. Yo creo que eso es con lo que realmente tenemos que acabar.

Entonces, eso de que quieren la prisión preventiva oficiosa para castigar a los delincuentes yo no les creo nada porque ya tuvieron una oportunidad y no lo hicieron.

Y está el caso de Michel Berenice.

Michel Berenice fue a la Fiscalía de Delitos Sexuales a denunciar que fue violada por un hombre en Iztapalapa. La Fiscalía no hizo absolutamente nada.

Y a los pocos días fueron asesinada su madre y Michel. O sea, ni siquiera tenemos la sensibilidad de investigar los delitos, mucho menos vamos a tener la sensibilidad de probar y castigar a los delincuentes.

Simplemente la puerta giratoria va a dejar de existir y esa puerta giratoria la gente va a entrar, va a estar un rato, pero va a acabar saliendo porque no estamos modificando lo de fondo.

Lo de fondo es hacer verdaderas investigaciones que a cualquier delincuente lo lleven a enfrentar la justicia, con el actual Sistema Penal Acusatorio se podría lograr siempre y cuando las fiscalías hicieran su trabajo y le demostraran al juez que ese delincuente requiere de prisión preventiva; no sería reformar, el juez si tiene elementos y si sabe que esa persona es peligrosa, le puede otorgar la prisión preventiva, no ponerlo en papel y hacerlo para todos porque las cárceles de México van a estar llenas de pobres y los ricos, como Lozoya, van a ir a su casa de Ixtapa a disfrutar de su fortuna.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Gálvez Ruiz.

Para hablar a favor del dictamen, tiene la palabra el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

El Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Muy buenas madrugadas a todos, voy a intentar a las tres de la mañana argumentar lo mejor posible mi postura a favor de la constitución de estos nueve delitos graves, los cuales voté a favor en diciembre del 18, y que referendo mi posición.

El año 2019 fue el año más violento en la historia de México, los números así lo acreditan, absolutamente nadie lo puede poner en materia de duda. Y en este año 2020 las cosas van para peor.

La estrategia de seguridad en México es un evidente fracaso, el Presidente, los gobernadores, casi todos, los alcaldes, casi todos, no están cumpliendo con su misión de ser una autoridad preventiva para que no haya comisión de delitos en este país. De los países de la OCDE, México es el país donde más delitos se comete y todas las autoridades del Poder Ejecutivo lamentablemente en sus políticas de prevención han dejado demasiado qué desear.

Ahora tenemos que ser sinceros también, el Sistema Penal Acusatorio no fue la solución que todo mundo esperaba, los delitos también se han visto incrementados muy sustancialmente y a pasos agigantados de que entra en vigor este sistema penal, para idiosincrasias, para culturas que obviamente, que aplican culturas y tiene éxito culturas, que obviamente para nada son las mexicanas.

Y tan sólo, les presento una pequeña tabla que, con mucho gusto les puedo compartir, en los países del mundo, donde existen modelos penales agresivos, fuertes, con la consideración de muchos delitos graves, muchos de ellos consideran hasta la pena de muerte, tienen hasta 20, 25, hasta 30 veces menos delitos que México.

Japón, Argelia, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Corea del Sur, China, entre muchos otros, ya quisiéramos tener nosotros esos índices de seguridad.

Tenemos que darles a las autoridades encargadas de procurar y de impartir justicia, instrumentos bastante más contundentes, al Presidente de la República, al gobernador del Estado de Nuevo León no le corresponde procurar justicia, la Fiscalía General de la República, en teoría es autónoma, la Fiscalía del Estado de Nuevo León, en teoría es autónoma, el Poder Judicial de la Federación debe ser autónomo, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en teoría debe ser autónomo, y en estos dos órganos en donde radica la procuración y la impartición de justicia, y son estos dos órganos los que harían valer según la jurisdicción del delito, sea un delito federal de estos 9, o sea, un delito local de estos 9, quienes tienen que meter a los criminales en prisión.

Por aquí la narrativa es muy sencilla, hay delitos y hay crímenes cuando hay criminales, y en México hay demasiados, y si con estos instrumentos bien aplicados vamos a lograr, como deberíamos de hacerlo, que, en pronto, que, en breve, miles y miles de criminales vayan a prisión, así tengamos que construir rápidamente muchas más prisiones, hay que hacerlo, porque hay más gente inocente que se ven todos los días vulnerados en sus derechos.

Y cuando hablamos de derechos, lamentablemente nos llevamos el tema, el tema siempre de los derechos humanos, cuando hablamos de criminales, pero qué acaso los criminales, que son muchos, no tenían la obligación de respetar los derechos de una mujer antes de cometer un feminicidio, qué no tenían la obligación de respetar los sagrados derechos de un niño antes de cometer abuso sexual, qué no tenían ellos la humana, profunda, cristiana obligación de no matar, de no secuestrar, una vez que hicieron esto, ¿qué derechos se les van a ver restringidos? Pues cuando menos y muy cuando menos, lo que deben de perder es su libertad.

Es muy importante mencionar que de estos delitos que se van a catalogar, que se consideran como delitos graves y que se van a afinar en esta legislación, hay delitos del fuero común, y en ningún caso alguien puede poner en tela de duda que el abuso sexual, que el feminicidio, que el constante y abrumoso robo a casa habitación hoy en día no representan un delito grave para los mexicanos, aquí somos representantes populares y si alguien tiene duda de los argumentos que aquí se están vertiendo a favor de esto, pues que les pregunten a sus electores, que vayan y le pregunten a la gente para ver qué opinan de que no tengamos la capacidad y con la dureza que el Estado requiere, meter a tantos criminales a la cárcel.

Concluyo mencionando algo que entiendo atemoriza a muchos, entiendo a muchos compañeros míos que algunos de ellos han cambiado su posición desde que se votó la reforma constitucional a la fecha.

Se presume que el gobierno federal, el Presidente de la República, va a hacer un mal uso de estas instituciones para en el proceso electoral meternos a algunos a la cárcel, primero lo que hay que hacer es portarnos bien.

Ya voy a acabar.

Y, segundo, un presidente totalitario, un presidente autoritario, un presidente que no entiende de razones y mucho menos de derecho, no ocupa todos estos para meter a inocentes a la cárcel.

Muchos funcionarios públicos en otros momentos en la historia de México han parado en la cárcel siendo inocentes, sin que el Presidente de la República en turno tuviera a la mano este tipo de recursos.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Fuentes Solís.

Tiene la palabra, para hablar en contra del dictamen, la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Gracias. Muy buenos días, ya son las dos de la mañana con 52 minutos. Con su venia, señora Presidenta de la Mesa Directiva.

La demanda, la mayor demanda de los mexicanos hoy por hoy es el tema de la seguridad y la impartición de justicia.

En ese sentido, en 2018 y 2019 el Congreso aprobó una reforma constitucional al artículo 19, sí, para aplicar la prisión preventiva oficiosa en la comisión de una lista de nuevos delitos no considerados hasta ese momento como graves, tales como el feminicidio, robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, entre otros más.

En su momento, nuestro grupo parlamentario señaló que, si bien estas medidas ayudan a inhibir los delitos, no resuelve el problema de fondo, ya que el principal problema de inseguridad radica en la falta de funcionamiento eficaz del Sistema de Impartición de Justicia en la falta de aplicación de las leyes, en la falta de sentencias condenatorias en contra de quienes cometan estos delitos.

Lamentablemente, esta falta de confianza de la sociedad se debe al grado de impunidad en que se encuentran las instituciones encargadas de la impartición de justicia de las procuradurías y fiscalías de los poderes judiciales, estatales y federales.

Por supuesto que en Acción Nacional estamos a favor de fortalecer la estrategia para recobrar precisamente la seguridad en el país, pero no podemos respaldar acciones paliativas de un gobierno que no escucha propuestas para enriquecer y no demuestra voluntad para rectificar.

De nada sirve agravar los delitos si cuando se denuncia un delito el aparato de persecución no está funcionando para lograr precisamente esa detención de los responsables, su consignación y persecución.

De nada sirve agravar los delitos si quienes los cometen nunca tendrán una sentencia condenatoria, por eso nosotros sostenemos que esta reforma no es una reforma estructural para resolver el problema de la inseguridad, debemos ir más allá, hace falta una verdadera reforma integral al Sistema de Impartición de Justicia.

Lo que hemos venido diciendo a lo largo de este tema es que quienes hemos manifestado en contra de la misma es que esto es violatorio precisamente al principio de presunción de inocencia.

He escuchado aquí también voces que dicen que con esto se va a acabar la impunidad.

En verdad no creo que se acabe la impunidad, no lo creo, por el contrario, creo que habrá persecución política en el caso, por ejemplo, de algún candidato por el tema de los delitos electorales, algún candidato que se considere o se presuma que ha hecho uso de los recursos públicos y evidentemente este sea detenido.

No estamos diciendo que estamos a favor de que se haga, evidentemente que se castigue, pero no con prisión preventiva oficiosa.

Lo que va a ocasionar es que personas que estén en prisión mientras se investiga y haya una sentencia, ya sea condenatoria o en un sentido que también sea absuelta, va en contra de la misma naturaleza del Sistema Penal Acusatorio en su reforma de hace unos años.

Es por ello que nosotros y una servidora, habló en lo particular, y algunos Senadores de Acción Nacional estaremos votando en contra de esta propuesta, porque consideramos totalmente violatoria al principio de presunción de inocencia.

Se ha dicho acá, si lo que se quiere es fortalecer al sistema de justicia penal del Estado mexicano, hagámoslo, pero hagamos reformas de fondo, estructurales al sistema penitenciario. Dotemos a las fiscalías de recursos, necesitamos policías investigadores fuertes, preparados. Necesitamos peritos, etcétera. Se necesitan muchas cosas precisamente para poder fortalecer a este sistema penal acusatorio.

Por estas razones mi voto será en contra, porque no estamos legislando sobre lo que verdaderamente resuelve hoy la demanda de los mexicanos y de las mexicanas, como los problemas económicos que hoy enfrenta nuestra sociedad derivado de la emergencia económica a consecuencia del Covid.

La crisis sanitaria y económica actuales demandan acciones contundentes al Estado mexicano, acciones que estén a la altura de las difíciles circunstancias que hoy estamos atravesando.

Lo he dicho de manera reiterada en todos los foros y espacios públicos en los que he tenido oportunidad y por supuesto también en esta tribuna en el Senado de la República, debemos abordar el tema de la emergencia económica, debemos crear y otorgarle al Estado mexicano la herramienta jurídica para enfrentar con rapidez y eficiencia ante cualquier otra emergencia económica como la que hoy estamos viviendo.

Los datos están ahí, Senadoras y Senadores, las MiPymes generan el 72 por ciento de los empleos en México y estamos hablando no de las grandes empresas ni de los fifís del Estado mexicano, estamos hablando de los dueños que tienen una lavandería, de las fondas de comida rápida, estamos hablando de aquél que tenga su despacho contable o su restaurante, estamos hablando de seis millones de establecimientos que había y que daban 35 millones de empleos en este país.

Hoy, de esos seis millones de establecimientos, son el 95 por ciento microempresas, estamos hablando de aquellos negocios que tienen de uno a 10 trabajadores. A eso es a lo que nos debe llamar este Senado de la República, a crear una Ley de Emergencia Económica.

Quiero decirles, Senadoras y Senadores de Morena, que ya hay una iniciativa presentada por Acción Nacional y la ponemos en la mesa para discusión de todas las fracciones parlamentarias, que se discuta, que se analice, para eso es el Parlamento, para eso es aquí el análisis.

Vengamos a tratar los asuntos –y termino, señora Presidenta– que requieren los mexicanos: salud, recuperación económica. Hoy se está cayendo a pedazos la economía de México y por eso los Senadores del PAN hemos presentado esta iniciativa, que, por supuesto la ponemos a disposición para poder hacer las reformas que se necesitan, para aprobar el Ingreso Básico Universal, tres mil 207 pesos mensuales para las mexicanas y mexicanos que tienen empleos formales e informales.

Y, termino, la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, ¿para cuándo, Senadoras y Senadores?

Se dijo hace un momento que, en este Senado, al menos por la fracción parlamentaria de Morena, que no tiene prisa por ayudar a México. El PAN sí tenemos prisa para ayudar a los mexicanos. Queremos una Ley de Recuperación Económica ya.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Martínez Simón.

Tiene la palabra la Senadora Lucía Trasviña, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor del dictamen.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

Hoy, en cumplimiento a lo mandatado por el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declaró reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, se incorpora a nuevos delitos, como son: el feminicidio, robo en casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito; el ejercicio abusivo de funciones, el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Por ello es sumamente importante lo que se señala en el mismo dictamen a cargo de la Comisión de Justicia, que afortunadamente la Comisión de Justicia la preside el compañero Senador Julio Menchaca, un compañero destacado como jurista, conocedor del derecho y no solamente conocedor, con decenas de años en la práctica de esta materia tan noble y del conocimiento tan pleno que él tiene. Gracias, Senador, por sus grandes aportaciones.

La medida de prisión preventiva ordenada por el juzgador, tampoco se considera una medida arbitraria, es un dictado que necesariamente se tiene que dar con base al auto de vinculación al proceso, cuando ya el ministerio público ha aportado los elementos de convicción indispensables para acreditar la probable responsabilidad de la persona imputada, recordando que esta medida es de carácter excepcional, ya que la autoridad judicial solo podrá utilizar esta medida cautelar cuando así se amerite con pleno respeto a la libertad personal, como lo menciona claramente el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por ello es muy importante la ampliación de este catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

¿Por qué lo ameritan? Porque son delitos graves, sumamente graves.

¿Por qué no considerar que el feminicidio es un delito grave?

Es gravísimo, miles de mujeres han sido víctimas del feminicidio y miles de familias han sido víctimas de que no ha habido la reparación del daño, el daño moral, el daño económico que se les ha causado.

Por qué no considerar que el delito en materia electoral, cuando se usen los bienes, los programas de beneficio social para ser proselitismo político. Sí es un delito grave, por qué no, preocúpense porque ya no se va a lavar dinero, porque ya no se va a comprar el voto, señores.

Muchos de ustedes llegaron comprando los votos, desparramando dinero lavado del crimen organizado y no nos hacemos pendejos, es la realidad, es la cruda realidad.

Qué lástima y qué pena, porque el enriquecimiento ilícito, dice, se contradicen cuando dicen que Lozoya no va a tener prisión preventiva oficiosa.

Es precisamente lo que estamos buscando, que no huyan de la acción de la justica, que las cárceles ya no estén llenas de pobres, que a la cárcel lleguen los que han saqueado a este país, los que han sido cómplices, los que han robado y, muchos de los de aquí presentes ya deben de estar alistando sus maletas con la suciedad de sus conciencias, de sus acciones, de la pudrición de sus actuaciones.

Y muchos aquí están no porque quieran al pueblo, porque nunca han luchado por el pueblo de México, están aquí para tener el fuero que los proteja, y aun así algunos se han ido, otros no se presentan, argumentan falsamente que Lozoya, Lozoya es un testigo protegido, ya lo hubieran asesinado como asesinó a Colosio Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas debe ir a la cárcel por el Fobaproa y por crímenes que cometió. Hay muchos delitos graves que se han cometido en este país.

Tengo la fortuna de hoy estar en esta tribuna después de esperar tantos años.

He estado cerca de mi pueblo, el pueblo clama justicia y el pueblo quiere en la cárcel a los de cuello blanco.

Y aquí hay muchas y muchos bandidos, ratas, sátrapas, cínicos, sinvergüenzas.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Trasviña Waldenrath.

Tiene la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la señora Presidenta.

La prisión preventiva oficiosa no sirve para la investigación, no sirve para resolver los problemas de inseguridad y tampoco sirve ni ha servido para bajar los índices de delitos en el país, y mucho menos ha servido para hacer fiscalías que realmente sirvan, profesionales y eficientes.

Miren, para lo único que sirve la prisión preventiva de oficio es para condenar la pobreza, porque en un país donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza, nuestras cárceles están llenas de personas pobres, de personas que no tenían un recurso para pagar una fianza, por ejemplo, o para pagar un juicio de amparo.

La prisión preventiva oficiosa no funciona y lo pueden revisar donde quieran, lo pueden revisar con los datos que gusten, en los estudios que gusten, con las instituciones que mejor les parezca.

Ahí está la evidencia que nos ha dado, por ejemplo, México Evalúa o la propia Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

¿Saben por qué se siguen presentando y promoviendo este tipo de medidas? Por el populismo punitivo, por el populismo penal, porque los políticos de siempre se quieren lavar la cara, se quieren lavar las manos y decirle a la gente que están haciendo algo por ellos, cuando en realidad lo que están haciendo es condenar a las personas pobres.

Por eso, Movimiento Ciudadano vamos a votar en contra.

Y miren, quiero aprovechar esta tribuna para hablar de quiénes sí deberían de estar en la cárcel, porque es de verdad una profunda vergüenza que haya libertad condicional para Emilio Lozoya, uno de los responsables del saqueo de Pemex, uno de los responsables de la corrupción de Odebrecht.

En lugar de ir a la cárcel, el señor se va a ir a su casa. ¿Pero en qué país vivimos? Él y todos los responsables de corrupción deberían de enfrentar la justicia y estar en la cárcel.

Es de verdad reprobable lo que está haciendo este gobierno, porque el gobierno está haciendo de la justicia todo un espectáculo, está haciendo un uso político de la justicia.

De verdad, es indignante, es vergonzoso que esto esté pasando en nuestro México.

Miren, mientras que México enfrenta una de las peores pandemias de la humanidad en un siglo, con efectos catastróficos que han provocado que más de 12 millones de personas en nuestro país pierdan empleo, que dos millones de empresas estén en riesgo de cerrar, otras 600 mil al borde de la quiebra, que en los próximos meses tres millones de personas vayan a ir a la pobreza, en este Pleno se niegan a discutir un tema sumamente relevante.

La mayoría de Morena no quiere hablar, por ejemplo, del ingreso vital. ¿Cómo es posible que no quieran hablar de un mecanismo que presentó Movimiento Ciudadano, que puede darle la mano a las personas en esta crisis? Qué quiere decir, que Morena le está dando la espalda a la gente.

Imagínense nada más, le están dando la espalda a la gente que no tiene, por ejemplo, para pagar la luz o para llevarse el alimento a su propia mesa.

Ojalá que entendieran que estas son las verdaderas prioridades de México y que la sociedad mexicana está esperando que ustedes mayoría de Morena realmente trabajen por ellos y vean por ellos en medio de esta pandemia.

Y yo sólo para concluir quiero decir lo que dije ayer.

Como Senadora, como mujer, como habitante de este planeta, hago un llamado a todas las fuerzas políticas de este pleno, hago un llamado al Presidente de la República, un llamado a la iniciativa privada, a los investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil, para que tengamos un trato verde para México.

México necesita un trato verde para salir de esta crisis económica, social y ambiental.

México necesita un trato verde para dejar en el pasado esa maquinaria que se dedica a generar pobreza y desigualdad y que, además, está destruyendo al planeta.

México necesita un trato verde para que luchemos por nuestro futuro, para que luchemos por nuestro derecho a tener un futuro.

México necesita un trato verde para hacer frente a todo lo que estamos viviendo.

El llamado está hecho y ojalá que no perdamos tiempo y que entendamos que nadie se puede quedar atrás, pero por supuesto tenemos que cuidar al planeta que es el que nos está sosteniendo, que no va a haber justicia social si no hay justicia ambiental.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo García.

Tiene la palabra el Senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Julio Ramón Menchaca Salazar: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores, buenos días.

Sin duda los que me antecedieron en la palabra tienen razón en el sentido de que es un tema difícil, complicado, polémico, pero estamos aquí para resolver precisamente y con la facultad que tenemos como Senadoras y como Senadores, estamos atendiendo una disposición que aprobó el Constituyente Permanente, una modificación al artículo 19 constitucional que se quedó trunco porque incluso la Corte nos está diciendo que falta aterrizarlo en leyes secundarias.

Coincido con comentarios que aquí se han vertido, es difícil ponerse de acuerdo, incluso dentro de las propias bancadas y de cara a nuestros electores, pero hay que tomar decisiones y las decisiones, señoras y señores, las tomamos aquí y debemos tomarlas con valentía, atendiendo el reclamo que tenemos de las mexicanas y mexicanos que sufren la inseguridad y que el Estado mexicano debe de tener los elementos suficientes para hacer efectivas las disposiciones legales.

Muchos de ustedes, muchos de nosotros, de nuestras familias, de nuestros conocidos, hemos sufrido de alguna manera algún tipo de los delitos que están considerando como graves: el robo a casa habitación, secuestro, en violaciones.

Y, entonces, es momento de tomar precisamente la responsabilidad que tenemos como Senadores, como Senadoras, para poder, primero, atender una disposición constitucional.

Segundo. Aterrizarlo en leyes secundarias.

Hay quien menciona que dentro del dictamen no forzosamente se veían o se ven cosas que señala el 19 Constitucional, y hay que acordarse de que estamos procesando doce iniciativas y que no podemos ser discrecionales, quitar una parte que entre dentro del 19 y otras que sí y otras que no, tenemos que dictaminar porque es nuestra obligación cada una de las iniciativas.

En ese sentido, alguien mencionó, alguno de los Senadores que me antecedieron mencionaron que hay que tomarnos una pausa. Cuánta pausa quiere el pueblo de México para darle a la Fiscalía, al Sistema de Justicia los elementos para poder contener el crimen que existe en nuestro país generado durante décadas y es tiempo de tomar nosotros las decisiones para inhibirlo y contenerlo.

Esta es nuestra oportunidad, nadie ha dicho, nadie ha dicho, y lo mencionó una Senadora, esta es la panacea, y con esto vamos a resolver todo lo que implica la inseguridad en nuestro país, es un elemento más del Estado mexicano y desde luego que el sistema de justicia penal necesita una gran reforma, el lunes atendimos a gobernadores de distintas entidades federativas, de distintos partidos políticos que nos estaban invitando a hacer una reflexión sobre el Sistema de Justicia Penal, hay que modificarlo, tiene cosas nuevas, desde luego,

pero otras que no han funcionado, se planteó en un mundo ideal que no corresponde a lo que nuestro México vive en estos momentos.

Vamos a trabajar en eso, somos Senadores, presentemos las iniciativas para modificar nuestro sistema de justicia.

Me sorprende mucho la facilidad con que se mencionan hechos que parecieran consumados en un proceso famoso en estos momentos del señor Lozoya, no lo sé, mención al gobierno como si fuera un ente aparte de nosotros, nosotros somos gobierno, somos parte de un poder y nosotros no estamos involucrados en eso, le dimos a la Fiscalía General de la República la posibilidad de ser independiente, y hay un Poder Judicial, nosotros, nosotras hemos nombrado a ministros y a ministras de la Suprema Corte de Justicia y le dimos esa responsabilidad.

Se manejó también que hay un doble discurso y, efectivamente, hay un doble discurso eh, queremos quedar bien con todos y no se puede, es un tema difícil y espinoso y asumimos la responsabilidad y el costo que esto significa, pero no se quiera quedar bien con todo mundo, implica un costo y cuando se maneja el doble discurso de quedar en una parte de organizaciones muy respetables de los derechos humanos, también se canta alegóricamente las muertes que, penosamente, sufren miles de familias en el mundo, muchas familias en nuestro país están sufriendo el dolor de una pérdida, de un familiar, de un amigo, de un vecino y cantamos alabanza al número creciente.

No es responsabilidad de un gobierno, no es responsabilidad de un Presidente de ninguna parte del mundo, es un hecho desafortunado que agobia al mundo y que sería injusto acreditárselo a un gobierno, si se requiere unidad para combatirlo, debe de ser un instrumento político.

Y miren ustedes, quien quisiera tener los elementos, porque tiene los recursos federales para poder hacer campaña política, es el primero que sanciona la utilización incorrecta, indebida de los recursos públicos, pudiéramos nosotros, como gobierno, como Congreso, como parte de un proyecto político, obviar algo que ha sido utilizado en el transcurso del tiempo, pero combatir la corrupción, implica asumir la responsabilidad, hagámosla por México.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Menchaca Salazar.

Una vez terminada la discusión en lo general, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea, que hasta el momento se han registrado las siguientes reservas:

Doce del Senador Damián Zepeda Vidales: 2 propuestas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; una al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; una al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; una al artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; cinco que son en los artículos 81, 81 Ter, 83 Quáter, 83 Quintus y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego; el artículo 480 de la Ley General de Salud y el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La Senadora Indira de Jesús Rosales presenta siete al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al artículo 6, 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; dos al artículo 160 y 162 del Código Penal Federal; y propone la adición de un artículo sexto transitorio.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre presenta dos al artículo 160 del Código Penal Federal y al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del PAN, presenta cuatro: adiciona las fracciones I, II, III y IV al artículo 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño presenta una al artículo 533 de la Ley de Vías de Comunicación.

La Senadora Nadia Navarro presenta tres, dos propuestas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y al artículo 6 y 7 Bis de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, presenta una reserva al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Senadora Sylvana Beltrones, del PRI, propone una reforma para eliminar el párrafo tercero de la fracción V del artículo 420 del Código Penal Federal.

El Senador Noé Castañón Ramírez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone dos para modificar el párrafo tercero del artículo 420 del Código Penal y adicionar un transitorio sexto al Decreto.

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz propone una para modificar la fracción XIV del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Senadora Ruiz Massieu una al artículo décimo transitorio del Decreto.

Y las Senadora Citlalli Hernández Mora dos al artículo 160 del Código Penal Federal y al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

¿Pregunto a la Asamblea si alguien más desea reservar algún artículo del proyecto de Decreto?

Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del dictamen en lo general y de los artículos no reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

Pregunto nuevamente, ¿si algún Senador o Senadora falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

VOTACIÓN

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 56 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto.

Vamos a dar paso a la presentación de las reservas, y tiene la palabra la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI para presentar una reserva al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias. Ánimo, falta poco.

Qué gusto encontrarles en esta clase de populismo penal impartida por los maestros de la simulación, los integrantes de la cuarta transformación, los destructores del Estado y los actores intelectuales y materiales del desmantelamiento de las instituciones, que nos presentan hoy este curioso dictamen para reventar el sistema carcelario y violentar los derechos humanos de los procesados.

La prisión preventiva oficiosa no es necesaria y el problema que tenemos aquí es que no entendemos la situación, venimos a querer explicarla, confundimos más al auditorio y acabamos pensando que lo que estamos haciendo es correcto cuando es incorrecto.

Cuando una persona comete el delito de feminicidio, claro que tiene que ir a la cárcel, pero primero es responsabilidad del ministerio público acreditar que cometió ese delito de feminicidio.

El problema es que queremos meter a la cárcel a la gente, cuando todavía no le comprobamos que cometió ningún delito y como cada vez estamos ampliando más el número de tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces la regla va a ser todos a la cárcel hasta que se demuestre que son inocentes y entonces van saliendo. Eso es lo que estamos haciendo aquí.

Tan no se necesita la prisión preventiva oficiosa, que Rosario Robles no cometió ningún delito que esté en el catálogo de prisión preventiva oficiosa y el juez que la vincula a proceso considera que hay riesgo de fuga, que no se puede llevar a cabo el juicio y dicta la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En el otro caso que se ha mencionado el día de hoy, Emilio Lozoya, sí está vinculado a proceso por delitos del catálogo de prisión preventiva oficiosa y el juez considera que no hay riesgo de fuga, que no hay víctimas y dicta medida cautelar de brazalete y que se vaya para su casa.

Entonces, ¿está funcionando la prisión preventiva oficiosa como la tenemos en la Constitución? Hoy el juez nos dice que no.

¿Es necesario para cuando hay un riesgo? En el caso Robles los jueces nos dijeron que sí.

Entonces, quedémonos con la figura de la prisión preventiva justificada y no metamos en bola toda la gente a la cárcel.

Como ya estamos metidos en esto, yo les vengo a hacer una propuesta sumamente humanista.

¿De qué trata esto? Démosle al ministerio público tres meses, 90 días, para acreditar que la persona a la que va a vincular a proceso tiene que llevar ese proceso en prisión, que está en riesgo la vida de la víctima, que hay riesgo de fuga o que hay aún riesgo de que no se pueda llevar a cabo el proceso.

Si el ministerio público no acredita que existen estos tres elementos que marca la Constitución, esa persona se le tendrá que cambiar por otra de las medidas cautelares. Esa es una reserva humanista. Eso es pensar en justicia. Eso es seguir las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales de derechos humanos.

Ojalá que no sea solo discurso lo que tanto presumen los de la cuarta transformación respecto al debido proceso y respecto al respeto de los derechos humanos.

Ojalá que aprueben esta reforma que estoy planteando, esta reserva.

Las invitamos, los invitamos.

Muy buenas noches.

Propuesta de modificación

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Anaya Mota.

Dado que ha explicado ampliamente la Senadora Anaya, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales recién propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra el Senador Damián Zepeda Vidales para, desde su lugar, presentar sus 12 propuestas de modificación.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Por obviedad de tiempo, simplemente informar que todas tienen que ver con dar marcha atrás a esta reforma.

Considero que es un error grave que daña los derechos humanos de los mexicanos el establecer prisión preventiva oficiosa básicamente a todos los delitos.

Yo escuchaba algún discurso que decía: *"es que había familia de delitos en la Constitución y luego teníamos que diferenciar en la ley secundaria".* La verdad es que no se diferenció nada, simplemente se llevó lo que dice la Constitución a las leyes.

Entonces, cuando una propuesta original era, por ejemplo, que el robo sólo con violencia, con dos personas, fuera cuando procediera la prisión preventiva y con cierta cuantía, se quitó y terminó siendo cualquiera; o sea, si entra a una casa y se roba un lápiz, va a la cárcel hasta por dos años.

La diferencia o la injusticia de la prisión preventiva oficiosa no tiene que ver con que se castigue o no a un delito, esa es la gran confusión, que qué lástima que no hemos logrado convencerlos.

No es culpable la persona, el ministerio público cree que es culpable y mientras ya lo mandaron a la cárcel. Esa es la gran diferencia.

Entonces no entiendo porqué hay que quitarle al juez la posibilidad de valorar si esa persona debe estar en la cárcel o no; o sea, verdaderamente es una injusticia.

Y no, no se deben de preocupar sólo los culpables, el problema es que se debe de preocupar cualquier persona que se le ocurra al Ministerio Público decir que cree que es culpable.

Por eso las propuestas que hemos puesto en la mesa, una de ellas propone que sólo aplique en flagrancia; es decir, si agarran a alguien cometiendo el delito, ahí sí mándalo a la cárcel, pero, si no, no, porque no tienes evidencia suficiente para prejuzgar.

Dicho esto, señora Presidenta, le solicito que en una sola intervención se puedan votar todas, todas van en ese sentido de regresar al estado que estaba y no ampliar la prisión preventiva oficiosa.

Gracias.

Propuestas de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Zepeda.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; a los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter, 83 Quintus y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego; al artículo 480 de la Ley Federal de Salud, y al artículo 533 de la Ley de Vías General de Comunicación, propuestas por el Senador Damián Zepeda.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

A continuación, las reservas de la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, que se trata del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales del artículo 6, 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal; y la propuesta de la adición de un Artículo Sexto Transitorio.

Propuestas de modificación

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Indira de Jesús Rosales San Román.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre que ha presentado dos reservas al artículo 160 del Código Penal Federal, y al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Sonido al escaño de la Senadora Antares, por favor.

La Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Sí, efectivamente, en el artículo 160 me parece que es importante hacer algunas precisiones para que no se exagere en el tipo de sanción para las personas portadoras de este tipo de objetos.

Y en el 533 mi preocupación es que se aumente la penalidad para quien pueda eventualmente manifestarse libremente.

Y, entonces, yo propongo que la pena sea de tres meses a siete años de prisión y que sea de 140 a 710 veces el valor diario de la unidad de medida. Esto en virtud de que puede generarse un abuso en el uso de este tipo de medidas para sancionar la protesta legítima.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuestas de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Alatorre. Le pido a la Secretaría que, dado que la Senadora Antares ha explicado sus reservas, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación al artículo 160 del Código Penal Federal, y 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

A continuación las reservas del Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

Propuestas de modificación

Le pedimos a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las reservas que registró el Senador Martín del Campo para adicionar las fracciones I, II, III y IV al artículo 29 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño registró una reserva.

La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

Propuesta de modificación

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de reserva de modificación al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación de la Senadora Blanca Estela Piña.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

La Senadora Nadia Navarro ha presentado tres reservas, dos propuestas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 6 y 7 Bis de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

Propuestas de modificación

Le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si admiten a discusión las reservas propuestas por la Senadora Navarro.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El dictamen permanece en sus términos.

La Senadora Sylvana Beltrones presentó una propuesta para eliminar el párrafo tercero de la fracción V del artículo 420 del Código Penal Federal.

Propuesta de modificación

Le solicito a la Secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria.

El dictamen permanece en sus términos.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez, nos comenta que retira la propuesta de modificación que adiciona un transitorio sexto al Decreto y que presentaría la propuesta de modificación al 420 del Código Penal Federal.

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Gracias, señora Presidenta.

La propuesta de reserva que presento, relativa al artículo 420, en donde se penaliza el tráfico de algún ejemplar, parte, derivados, productos o subproductos de la especie de totoaba macdonaldi, considero que violenta a la propia Norma Oficial Mexicana expedida por Semarnat, la 169, en donde se estableció el permiso para la explotación en unidades de manejo para la conservación de vida silvestre de esta especie.

Con esa norma, la Secretaría del Medio Ambiente dotó y creó criaderos de totoaba, que comercializan el mismo y que además constituyen un elemento para la preservación de la vida silvestre de esta especie.

Dice la Norma Oficial, que estos criaderos de totoaba contarán con elementos estandarizados para el manejo que permitan reconocer la legal procedencia de los ejemplares, legal procedencia de los ejemplares y su diferenciación con las capturadas de manera silvestre.

Esta reforma olvida ese importante papel que representan las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y criminaliza la explotación de la totoaba para regenerarla a la vida silvestre.

Entonces la propuesta muy en específico sería adicionar un párrafo final que diga que, cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi, que no se demuestre su legal procedencia, es donde aplique la sanción para este delito, para dejar salvaguarda al manejo de las unidades de conservación de vida silvestre y que no se criminalice a quien hace una explotación con fines de conservación.

Es cuanto, señora Presidenta.

Propuesta de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Castañón Ramírez, le pido a la Secretaría que, dado que explicó ampliamente su reserva de modificar el párrafo tercero del artículo 420 del Código Penal Federal el propio Senador Castañón, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del grupo parlamentario del PAN, para proponer la modificación a la fracción XIV del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Gracias, señora Presidenta.

Yo sé que es de madrugada, pero seguramente mucha gente va a pasar largas horas en la cárcel producto de una injusticia, y pareciera que en este Senado nos negamos a escuchar ningún tipo de argumento.

Me da la impresión de que la Fiscalía ya dictó qué sí se puede y qué no se puede, y que esta ley se hizo en la Fiscalía General de la República y no por los Senadores porque se han negado, ni siquiera a escuchar ningún tipo de argumento.

Yo sé que muchos saben que se está haciendo algo mal, pero se niegan a aceptarlo porque sistemáticamente así funciona. Hay un tema realmente preocupante. Ustedes se han cansado de decir que primero los pobres, y fue el eslogan que los llevó a ganar la Presidencia de la República.

No sé si primero los pobres para ser más pobres porque hay más pobres, la verdad, 10 millones más de pobres, Y hay otros países que también tuvieron pandemia y no tienen más pobres porque actuaron, porque cuidaron el empleo, porque los ayudaron, porque dieron apoyos económicos a la gente que está sin empleo.

Pero no hay manera que lo escuchen y hoy tenemos más pobres.

¿Qué va a pasar con las trabajadoras del hogar? Las que trabajan en una casa generalmente son las primeras culpadas cuando desaparece algo, y puede desaparecer un anillo porque la patrona lo dejó quién sabe dónde,

se le fue por el hoyito del lavabo, o el hijo tiene broncas de adicciones y se voló el reloj del patrón, o el chofer se quedó con las llaves de la casa y un día que no estaban los patrones entró.

¿Quién es la que culpan siempre? La trabajadora del hogar. Pues con esta reforma que están haciendo las van a acusar de asalto a casa habitación, ahí se va a tipificar el delito.

Entonces yo la propuesta que les hago es simplemente que agreguemos un párrafo. Senador Menchaca, usted es de un estado sumamente pobre, usted debe de ser el primero, muchas mujeres vienen de Hidalgo a trabajar de trabajadoras del hogar a la Ciudad de México.

Échenle un ojo al censo de cuántas mujeres están en prisión acusadas de robar, y muchas veces de verdad injusta porque, no, seguro fue la muchacha. No, seguro, y, sí, efectivamente, hay un modus operandi de delincuentes que las usan para saquear las cajas fuertes, muchas veces les llaman por teléfono, que la patrona está secuestrada.

Sí conocemos que puede haber o inocencia de la trabajadora del hogar que le creyó al cuate que le habló, o puede haber un contubernio. Bueno, lo que propongo es que en caso de que se trate de una trabajadora del hogar la imputada haya sido sorprendida en flagrancia, nada más, es muy simple, no les quita nada agregar este pequeño párrafo, y va para la Cámara de Diputados y evitamos que muchas mujeres vayan a la cárcel de manera injusta.

Se los pido, de verdad, reflexiónenlo, ojalá lo aprueben. Ojalá, Senador Menchaca, se lo pido encarecidamente a nombre de miles de trabajadoras del hogar que hoy están encarceladas de manera injusta porque es muy fácil acusarlas.

Y si no lo aceptan, pues temo decirles que van a ser primero los pobres, pero en la cárcel, ese va a ser su slogan, primero los pobres en la cárcel.

Gracias.

Propuesta de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Dada la explicación de la promovente, le pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si acepta la propuesta de modificación de la fracción XIV del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. El dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Claudia Ruiz Massieu para presentar una propuesta de modificación al Artículo Primero Transitorio del Decreto.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, señora Presidenta.

Senadoras y Senadores, suficientemente grave ha sido ya la aprobación de este dictamen en lo general como para no detenernos ahora en una preocupación fundamental sobre sus posibles alcances.

Si bien la totalidad de la propuesta en sí misma, como yo lo externé anteriormente, es cuestionable, no podemos perder de vista que muchas veces las consecuencias no deseadas de un acto legislativo se esconden en los detalles que escapan a la vista y en este caso hay detalles que resulta fundamental atender, me refiero al régimen transitorio del dictamen, que en su artículo primero prevé la entrada en vigor del Decreto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta inocente disposición no sería motivo de preocupación si no fuera parte de un dictamen que al reglamentar las disposiciones de la Carta Magna pretende colocarse por encima de éstas. Por ello no podemos permitir que la falta de claridad en su régimen transitorio abra la puerta al uso político de la justicia en las próximas elecciones.

Por tal motivo planteo una reserva, para que en dicho artículo transitorio se reconozca explícitamente…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora, le ruego me permita un momento.

Hay un ruido como de radio o de otra transmisión que está opacando el sonido de la propuesta de la Senadora, del planteamiento de la Senadora.

Les ruego a las personas de seguridad que están en la parte de atrás si pueden cerrar las puertas y si alguien está aquí adentro del Pleno con este ruido, por favor que lo apague o lo silencie, para que se pueda escuchar a la Senadora, por favor.

Gracias.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Gracias, señora Presidenta.

Una reserva para que en dicho artículo transitorio se reconozca explícitamente que la entrada en vigor de la reforma en materia electoral sea posterior a la conclusión de los procesos de 2020-2021.

Estamos a menos de dos meses del inicio de los comicios más grandes y complejos de la historia de México, más de 21 mil cargos en juego, concurre la renovación de la Cámara de Diputados con 32 procesos locales, se renovarán 15 gubernaturas, 30 Congresos Estatales y prácticamente todos los ayuntamientos del país.

Frente a este escenario no debe haber lugar para la incertidumbre, para interpretación, para nada que pueda generar desconfianza. Nuestra ley fundamental es clara, la legislación electoral debe promulgarse 90 días antes que inicie el proceso en que vaya a aplicarse, como también era muy clara la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa que se promulgó el año pasado. Sin embargo, las reformas aprobadas el día de hoy la han decidido pasar por alto y han ampliado inconstitucionalmente sus alcances.

De ahí la necesidad de establecer con toda claridad que ninguna disposición en materia electoral sea aplicable en los próximos comicios. Lejos de discutir en qué condiciones y para cuáles delitos debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa deberíamos, en mi opinión, estar discutiendo cómo limitar su aplicación a casos verdaderamente excepcionales.

Lamento mucho que la fuerza numérica haya superado la fuerza de los argumentos en la aprobación de esta legislación reglamentaria, pero creo que estamos a tiempo de corregir los detalles para evitar que estas reformas tengan consecuencias aún más graves, el Artículo Primero Transitorio es uno de ellos.

Mientras más certidumbre jurídica tengamos más podremos confiar en la ejecución de los procesos electorales, pero sobre todo en los resultados de los mismos. Tengo la seguridad que todas y todos compartimos la convicción que tenemos que garantizar elecciones limpias, confiables, con legalidad y con certeza, y por eso propongo esta reserva al Artículo Primero Transitorio, esperando que la acompañen, aunque no tengo mucha confianza en ello.

Gracias.

Propuesta de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pido a la Secretaría, que, dado que la Senadora Ruiz explicó el contenido de su propuesta de modificación al Artículo Primero Transitorio del Decreto, consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Citlalli Hernández Mora, del grupo parlamentario del Partido Morena para presentar reservas al artículo 160 del Código Penal Federal y al 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La Senadora Citlalli Hernández Mora: Gracias, señora Presidenta.

Trataré de ser muy breve, yo sé que ya todas y todos estamos un poco cansados, son las cuatro de la mañana, pero son dos reservas y trataré de explicarlas brevemente.

Una en cuanto al artículo 160 del Código Penal Federal, porque me parece que la propuesta como se plantea genera un tipo penal muy abierto y los tipos penales abiertos son justamente aquellos cuya conducta antijurídica no se encuentra claramente establecida, lo que puede dar paso a una serie de interpretaciones subjetivas al momento de su aplicación por parte del juez o de la autoridad competente.

Los tipos penales abiertos contravienen el principio de legalidad y taxatividad en materia penal, que exige que todos los tipos penales se encuentren descritos con la mayor precisión posible, de modo que se reduzca al máximo la posibilidad de que el juzgador pueda interpretar la norma penal, sino que sujeto al principio de legalidad observe que la conducta y la sanción son claras para aplicarlas al caso en concreto.

En el vigente Código Penal Federal, la conducta penal hace referencia a la fabricación, importe, venta o acopio de instrumentos, cuya finalidad única es su utilización para ataque o defensa; es decir, la distribución de aquellos instrumentos que tienen una finalidad delictual es sancionada penalmente.

La reforma que estamos discutiendo elimina la palabra “solamente” del tipo penal, lo que hace que la venta de un instrumento que no tenga un fin delictual, por ejemplo, cuchillos domésticos, abrelatas, sacacorchos, bates de béisbol, etcétera podrían ser utilizados como armas contundentes para ataque y defensa, sea sancionada penalmente.

Esta reforma me parece que daría entonces pie para que la sola venta de estos instrumentos sea causa para la aplicación del tipo penal. Por ello la insistencia de mantener el tipo penal de acuerdo al texto vigente, porque permitiría mantener la claridad del tipo penal evitando que se penalice la venta de esos instrumentos, cuyo fin no es el ataque o la resistencia, para de este modo cumplir con esos principios que señalaba de taxatividad y legalidad penal, pero sobre todo porque evita que el juez pueda realizar interpretaciones subjetivas al tipo penal.

Y me permito darle también lectura a la otra reserva, que es al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que también me parece que tiene una interpretación equivocada, ya que para determinación de una sanción penal deben tenerse en cuenta por lo menos tres criterios.

1. Qué tan grave es el hecho punible.

2. La mayor o menor proximidad del sujeto activo con el hecho, si es autor, coautor o cómplice.

3. El cargo que ostenta el infractor. Por ejemplo, si es servidor público.

Estos elementos permiten, como legisladoras y legisladores, graduar la sanción del tipo penal a la gravedad del hecho punible y al bien jurídico protegido. En la medida en que el bien jurídico protegido sea más o menos relevante, la sanción penal es más o menos grave. Por ejemplo, la vida, la libertad son bienes jurídicos de alta protección. Por ello, el asesinato, el secuestro, por ejemplo, tienen penas altas.

Por lo tanto, me parece que al momento de establecer una sanción penal tendríamos que valorar el bien jurídico, es decir, el derecho que se protege con la sanción penal. En este caso no específico, el tipo penal protege el patrimonio del Estado, que son los servicios públicos, entiéndase carreteras, y si bien su destrucción afecta al erario nacional, el bien jurídico patrimonial tiene una protección media baja respecto de otros derechos constitucionales, como, por ejemplo, el derecho la protesta social.

Y hay que decirlo, el cierre de vías, en determinada circunstancia, puede convertirse en una medida de hecho de una protesta social. Este cierre de vías ya se encuentra como tipo penal en la Ley de Vías de Comunicación, pero con una menor sanción. Si le aumentamos una sanción penal de tres a siete años, como es la propuesta, lo que privilegiamos, a mi juicio, es el patrimonio del Estado frente al derecho de protesta social.

Este ejercicio, me parece de análisis, es el que debe primar al momento de decidir si se incrementa o no la pena. Me explico: La propuesta de reforma plantea un incremento de la sanción penal a quien dañe, destruya o cierre vías generales de comunicación con una pena de dos a siete años, cuando actualmente se prevé de tres meses a siete años.

Ello implica una valoración mayor al patrimonio estatal, que a la protesta social o a la misma libertad del individuo.

En esta reserva presento, además de respetar la actual pena, que se añada en el artículo la posibilidad de que el juez, para los casos menores, aquellos donde el daño a las vías generales de comunicación no fuesen

considerables, pueda establecer 400 horas de trabajo comunitario, además de la multa, en coherencia con un sistema penal garantista donde la prisión es la última alternativa que debería de tener el Estado.

Asimismo, promueve el establecimiento de sanciones alternativas a la prisión, con lo que el derecho penal cumple su rol reparativo a la sociedad y al Estado. El Senador promovente de esta propuesta, el Senador Mancera, en la justificación de la reforma sostiene que es necesario tomar medidas drásticas para impedir el daño o cierre de vías para evitar estos casos.

Sin embargo, insisto y me parece que el Estado no puede resolver los conflictos de la sociedad con sanciones penales más altas, mucho menos con este bien jurídico protegido en ejercicios de ponderación con otros derechos, puede requerir una medida o baja protección.

En ese contexto y en concreto lo que propongo es mantener la sanción penal del artículo 533, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en referencia a la pena de privación de la libertad, para permitir que el juez tenga un amplio margen de decisión de la pena y se actualice la sanción pecuniaria en cuanto a la forma de cuantificación, que actualmente es en referente a la unidad de medida de actualización, con lo que también se armonizaría la norma antes mencionada a los criterios vigentes.

Son las dos reservas que presento y agradezco su atención a plenas horas de la madrugada, pero creo que ya estamos prontos a terminar.

Gracias, señora Presidenta.

Propuesta de modificación

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Hernández Mora.

Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la Senadora Citlalli Hernández al artículo 160 del Código Penal Federal y al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

En virtud de que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal en términos del dictamen de las siguientes disposiciones:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167. De la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los artículos 6, 7 Bis y 11 Bis. De la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los artículos 14 y 29. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, el artículo cuarto. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter, 83 Quintus y 92. Del Código Penal Federal los artículos 160, 162 y 420. De la Ley General de Salud, el artículo 408. De la Ley de Vías Generales de Comunicación, el artículo 533, y el Artículo Transitorio Primero del proyecto de Decreto.

La Secretaria Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Pregunto, nuevamente, ¿si alguna Senadora o Senador falta de emitir su voto? Sigue abierto el tablero.

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 53 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, quedan aprobados, en términos del dictamen, del Código Penal de Procedimientos Penales, el artículo 167, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los artículos 6, 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los artículos 14 y

29, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, el artículo 4. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los artículos 81, 81 Ter, 83 Ter, 83 Quáter, 83 Quintus y 92, del Código Penal Federal, los artículos 160, 162 y420. De la Ley General de Salud, el artículo 480, de la Ley General de Vías Generales de Comunicación, el artículo 533 y el artículo Transitorio Primero del proyecto de Decreto.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y, en su caso, derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la delincuencia organizada. Y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.**

02-09-2020
Cámara de Diputados.
MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General en materia de Delitos Electorales, General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, y Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes General de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Vías Generales de Comunicación.
Se turnó a la Comisión de Justicia.
Diario de los Debates, 2 de septiembre de 2020.

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, Y FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ASÍ COMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD, FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

Diario de los Debates

Ciudad de México, miércoles 2 de septiembre de 2020

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene **proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes General en materia de Delitos Electorales, General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, y Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como del Código Penal Federal, y de las Leyes General de Salud, Federal contra la Delincuencia Organizada, y de Vías Generales de Comunicación**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.— Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIV-II-2PE-050

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS

DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, Y FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, ASÍ COMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y DE LAS LEYES GENERAL DE SALUD, FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, Y DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero. Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y se adicionan el párrafo cuarto, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, - petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

I. a **X.**...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a **III.** ...

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha- forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6....

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; para quedar como sigue:

4. ...

...

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

Artículo Quinto. Se reforman los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y se adiciona un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81. Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83 Ter....

I. ...

II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III....

Artículo 83 Quat. ...

I. ...

II. Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus....

I. ...

II. Con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92. Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo Sexto. Se reforma el artículo 160, primer párrafo; se adiciona un párrafo tercero al artículo 420, y se derogan las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160. A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa, se le impondrá prisión de uno a seis años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.

...

...

Artículo 162. ...

I. Se deroga.

II....

III. Se deroga.

IV. y **V.**...

...

...

Artículo 420....

I....

II....

II Bis....

III....

IV....

V....

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Artículo Séptimo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480....

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva .de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo. Se reforma el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis, 84, 84_ Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a X. ...

...

Artículo Noveno. Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533. A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

...

Artículo 534. Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, se le impondrá multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de julio de 2020.— Senadora Mónica Fernández Balboa (rúbrica), presidenta; senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidenta Diputada Dulce María Sauri Riancho	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año III	Ciudad de México, martes 6 de octubre de 2020	Sesión 14 Anexo VII

S U M A R I O

DICTÁMENES DE LEY O DECRETO DE PUBLICIDAD

Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **4**

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la "Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación", remitida por el Senado de la República el 29 de julio de 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXV, y 3; así como 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados y para los efectos del apartado A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes de esta

Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se detallan:

I. En el primer apartado, denominado **"ANTECEDENTES"**, se da cuenta del trámite dado a la Minuta materia del presente Dictamen; desde la fecha en que fueron presentadas la iniciativas que la integran hasta su turno a esta Comisión para su análisis, estudio y dictaminación.

II. En el segundo apartado, denominado **"CONTENIDO DE LA MINUTA"**, se sintetizan los argumentos presentados por la Colegisladora para la aprobación de la propuesta bajo estudio, así como su motivación y alcances.

III. En el tercer apartado, denominado **"CONSIDERACIONES"**, se realiza un análisis de la constitucionalidad, convencionalidad y procedencia legal de la propuesta; se estudian los argumentos planteados y se expresan los razonamientos y argumentos de la Comisión que sustentan el sentido y alcance del dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. En Sesión Extraordinaria de fecha 27 de julio de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

2. Con fecha 2 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores con el que remite el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

La Minuta de mérito considera las siguientes iniciativas, estudiadas y dictaminadas en comisiones del Senado de la República:

a) De los Senadores Cruz Pérez Cuellar y Julio Ramón Menchaca Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentada el 27 de septiembre de 2018, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos.

b) Del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentadas el 18 de octubre de 2018, el 25 de octubre de 2018, el 22 de mayo de 2019, el 14 de agosto de 2019, turnadas en las mismas fechas a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

c) De la Senadora Claudia Edith Anaya Mota y el Senador Eruviel Ávila Villegas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 31 de octubre de 2018, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

d) De la Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada el 13

de diciembre de 2018, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

e) Del Senador Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 20 de diciembre de 2018, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

f) De la Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 19 de marzo de 2019, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

g) Del Congreso del Estado de Baja California Sur, presentada el 12 de junio de 2019, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

h) Del Senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentada el 10 de julio de 2019, turnada en la misma fecha a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

3. Con fecha 2 de septiembre de 2020, mediante oficio no. D.G.P.L.64-II-7-2072 y bajo el número de expediente 8453, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta de mérito, para su análisis y dictamen, a esta Comisión de Justicia.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

PRIMERO. Reforma Constitucional.

El 12 de abril de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma tuvo como objeto la modificación al segundo párrafo del citado artículo en la porción normativa relativa a la medida de

prisión preventiva oficiosa. Por ello, se incorporaron nuevos delitos en los que aplicará de oficio la prisión preventiva, quedando el texto de la siguiente forma:

> "El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud".

Al nuevo texto constitucional se incorporaron los delitos de feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

En el artículo Segundo Transitorio del referido Decreto se estableció la obligación para que el Congreso en un lapso de 90 días posteriores a la publicación en el DOF, realice las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y demás ordenamientos correspondientes, así como las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Esto conlleva a la realización de reformas legales en las que se establezcan específicamente cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo citado del CNPP, así como a las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos antes referidos, objeto de la medida de prisión preventiva oficiosa.

Es importante destacar que las Comisiones Unidas coincidieron en lo general con las iniciativas, al considerar que es de toral importancia dar cumplimiento al mandato

constitucional a fin de incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos legales que se involucran, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal y, de esta manera, dar certeza jurídica a los destinatarios de la norma superior.

SEGUNDO. Viabilidad de la armonización.

La colegisladora establece que, como se sostuvo en la dictaminación de la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, la prisión preventiva constituye una medida cautelar que, si bien es la más severa de las relacionadas en el artículo 155 del propio Código, no es una medida punitiva, ya que es una norma meramente cautelar y no como parte de la pena. La medida de prisión preventiva ordenada tampoco se considera una medida arbitraria, toda vez que su dictado tiene que darse con base en el auto de vinculación a proceso, cuando ya el Ministerio Público ha aportado los elementos de convicción indispensables.

Por lo que hace a la prisión preventiva de oficio, ésta debe aplicarse en aras de la preservación del proceso judicial, considerando aquellas conductas que la ley señala cómo delitos que afectan bienes jurídicos sensibles de las personas y de la sociedad. Las comisiones de dictamen consideraron pertinente exponer en apartado subsecuente, de manera particular, las modificaciones legales que hemos determinado como viables para incorporarlas en el texto respectivo, tomando en cuenta siempre la proporcionalidad de la medida, en función de la conducta delictiva que se considera dañosa en perjuicio de los bienes jurídicos tutelados y las penas de prisión, para que únicamente aquellas conductas que lesionan o ponen en riesgo importante bienes jurídicos, sean contempladas en la aplicación de la medida cautelar.

TERCERO. Hipótesis Delictivas.

Las comisiones de dictamen señalan coincidir con la intención de los proponentes en cuanto a que es indispensable establecer en la ley secundaria, en forma específica y muy clara, los casos en los que la medida de prisión preventiva oficiosa resulte procedente, pero si es importante precisar que se debe obrar con el debido cuidado legislativo para no incurrir en exceso ni dejar de lado su establecimiento en los supuestos que la Carta Magna prevé.

Asimismo, concordaron con la necesidad de realizar las modificaciones correspondientes con base en el principio de legalidad, así como con la finalidad de armonizar las normas con el señalado mandato constitucional, por lo que en el proyecto se plantea adecuar el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la Ley General de Salud, amén del análisis que se realice respecto de diversas propuestas a otras leyes que se relacionan con la regulación de delitos a los que se propone aplicar la prisión preventiva oficiosa.

A continuación se describen algunos aspectos relevantes en relación con las conductas delictivas que se adicionaron al artículo 19 de la Constitución Federal, así como de otros fenómenos delictivos planteados por las y los legisladores proponentes, con el ánimo de contar con un marco de referencia para la determinación que se adoptó en el apartado respectivo a las modificaciones legales motivo del Dictamen.

Feminicidio.

Uno de los delitos que agravia más hoy día es el feminicidio, tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal como la privación de la vida de una mujer por razones de género.

Conforme a dicho artículo, se considera que existen razones de género cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; b) a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; c) existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; d) haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; e) exista datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; f) la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la

privación de la vida, o g) que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y la violencia física en su contra. De acuerdo con la (CONAVIM), la muerte violenta de las mujeres por razones de género es la forma más extrema de violencia contra la mujer, afecta sin distingo a todas las mujeres, incluyendo indígenas o rurales, sin importar la clase y condición económica y tiene su origen en la desigualdad de género.

Es importante destacar que México fue el primer país en donde se propuso la tipificación del delito de feminicidio y es también el país en el que se ha presentado el mayor número de iniciativas de ley tanto a nivel estatal como federal. Cifras del SESNSP refieren que del año 2015 al 2019, el delito de feminicidio ha ido en aumento a nivel nacional, siendo que en 2015 fue de 411, en 2016 fue de 602, en 2017 fue de 741, en 2018 fue de 891 y en 2019 fueron 976 casos. Es de resaltar que el uso ilícito de armas de fuego en contra de las mujeres va en aumento.

De enero a agosto de 2015, murieron a tiros 12% de las víctimas de 255 feminicidios por los que se inició una investigación, mientras que, para el mismo periodo de 2019, el número de mujeres asesinadas por estos medios violentos subió a 23% del total de 638 indagatorias iniciadas por ese motivo.

Abuso o violencia sexual contra menores.

El Código Penal Federal tipifica en su artículo 260 el delito de abuso sexual y establece que lo comete quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, e impone una pena de prisión de seis a diez años y hasta doscientos días multa. El artículo 261 tipifica el delito de abuso sexual en contra de una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.

El artículo 266 de dicho Código, equipara a la violación y sanciona con pena de ocho a treinta años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad, o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

Por su parte, el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el abuso físico, psicológico o sexual.

De acuerdo con la UNICEF, la violencia sexual contra niños se ejerce a través de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía y puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia.

La ONG Early Institute apuntó que en México los delitos de abuso sexual continúan en aumento. En el año de 2015 se registraron 11,894 casos mientras que en 2018 se registraron 18,595, lo que implica un crecimiento del 56% en 3 años. Agregó que en internet 1 de cada 5 menores son abordados por este medio. La OCDE señaló que México tiene el primer lugar mundial en el delito de abuso sexual infantil, registrando 5.4 millones de casos por año.

Solo uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil es denunciado, según el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil. Estima que estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos. Los abusadores sexuales están en el seno de las familias.

Robo a casa habitación.

Una calificativa del delito de robo que ha incrementado en nuestro país y que tiene gran repercusión en la seguridad y el patrimonio de las personas, es la del robo a casa habitación. El artículo 381 Bis del Código Penal Federal establece una sanción de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos.

El SESNSP señala que el objetivo del robo a casa habitación es el apoderamiento de una cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que estén construidos.

En cuanto al número de robos a casa habitación, se aprecia un aumento de 2015 a 2017, para después tener un descenso en el número de denuncias por este ilícito. No obstante, en el primer bimestre de 2019 se rebasaron los 13 mil casos por este ilícito. En el primer bimestre de 2019 el número de casos denunciados fue de 1,310, de mantenerse esta tendencia en los meses subsecuentes (1,310 casos por seis bimestres), el número de incidentes reportados puede superar los indicadores registrados en el último trienio. En esta calificativa existe una cifra negra, es decir, no se reportan al Ministerio Público el total de incidentes, en gran medida por el temor a recibir posibles represalias por parte de los malhechores o por el monto de lo hurtado. El SESNSP informó que se cometieron 81,998 robos a casa habitación durante 2018. De estos, 75,307 fueron sin violencia y en 6,691 casos hubo violencia.

Es menester realizar todas las acciones tendientes a disminuir la incidencia delictiva de esta calificativa de robo que atenta contra un bien jurídico tutelado: el patrimonio de las personas. A esto se añade que su comisión tiene diversas consecuencias sociales, entre ellas la vulnerabilidad del derecho humano a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias, entre otros, aunado a las alarmantes cifras mostradas por el Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las referidas repercusiones que tiene frente a otros delitos patrimoniales.

Uso de programas sociales con fines electorales.

La definición básica de clientelismo refiere a la acción que denota el intercambio de bienes y servicios por apoyo político y votos. El clientelismo es una cultura política que no cuenta con estructuras estables y visibles, pero sí con ritos, valores y comportamientos concretos reiterados.

El vínculo clientelar es predominantemente vertical, ocurre entre desiguales y el intercambio clientelar es político (decisiones administrativas por votos). Es un intercambio extrínseco que beneficia a las partes dado que su situación de desigualdad funcional no afecta al intercambio de ambas partes para alcanzar sus fines.

El uso de programas sociales con fines electorales ha sido desde hace varias décadas, un instrumento de recolección de votos con el que se procura el favor del elector a cambio de ofrecerle respuestas a situaciones de crisis o pobreza en la población con recursos públicos. El uso político de los recursos públicos, en particular los dirigidos al desarrollo social, históricamente se han caracterizado por rasgos clientelistas, patrimonialistas y corporativistas.

Los programas sociales sin mecanismos de transparencia ni control por parte de la sociedad, han sido históricamente utilizados con fines electorales en nuestro país. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó el seminario "Candados y derechos: protección de programas sociales y construcción de ciudadanía. Entre sus principales conclusiones destaca que cuando se trata de recursos públicos en periodo preelectoral o electoral nunca son suficientes las medidas de precaución, pues la tentación de manipular el gasto con fines políticos se recrudece de cara a los comicios.

La normatividad vigente para México puede clasificarse en tres grandes ordenamientos jurídicos: el presupuestal (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Presupuesto de Egresos de la Federación), el de transparencia (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública) , y

el social (Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y Ley General de Desarrollo Social), ésta última destaca por su incidencia en la protección de los programas sociales, ya que norma con mayor precisión la gestión de los programas destinados al desarrollo social, en particular con la incorporación de las reglas de operación.

Una de las mayores estrategias para contrarrestar la manipulación política de los programas sociales es la fiscalización intraestatal. Los mecanismos de transparencia y acceso a la información dan pie a una mejor rendición de cuentas respecto a los programas sociales. Mediante publicación en el DOF del 4 de abril de 2019, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) fijó los criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los Procesos Electorales.

La protección de los programas sociales es un aspecto clave para que las demandas sociales puedan ser procesadas de forma democrática, sin desviación ni condicionamiento político de ningún tipo.

Enriquecimiento ilícito.

El artículo 224 del Código Penal Federal, establece que existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, entre los que se contemplan también los bienes que reciba o de los que dispongan el cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos. El sujeto activo del delito es cualquier persona que, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito, de donde se justifica que esta conducta sea sancionada en materia penal.

Conforme al artículo 108 de la Constitución Federal se consideran "servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores

públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El INEGI señala que en el 2017 fueron denunciados 408 servidores públicos de las administraciones públicas estatales por presuntos actos de corrupción relacionados con el ejercicio de sus funciones. Del total de servidores públicos denunciados, 40.7% fue por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; mientras que aquellos imputados por delitos relacionados con corrupción, 19.6% fue por peculado, 8.6% por cohecho y 5.9% por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La Secretaría de la Función Pública destaca en su informe de labores 2018 – 2019, que se presentaron 33 denuncias por hechos probablemente constitutivos de delito que pudiesen afectar los intereses de la Federación, lo que representa un 55.93% de efectividad de cumplimento.

Robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Otro delito que lamentablemente refleja una considerable incidencia en nuestro país es el relacionado con el robo a transporte de carga, pasajeros y turismo en todas sus modalidades, el cual fue tipificado como de fuero federal mediante Decreto publicado en el DOF, el 21 de febrero de 2018.
El artículo 376 Ter del Código Penal Federal sanciona con pena de 6 a 12 años de prisión a quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, cuando el objeto del robo sea las mercancías. Así como de 2 a 7 años de prisión, cuando se trate únicamente de equipaje o valores de turistas o pasajeros, con independencia del valor de lo robado.

El SESNSP indica que, durante el primer cuatrimestre del 2019, la incidencia delictiva del robo a autotransporte de carga ha aumentado 6% a nivel nacional respecto al mismo periodo del año 2018. De esa forma, durante el primer cuatrimestre 2018 se suscitaron 3 mil 899 delitos de ese tipo, mientras que, durante el mismo periodo, pero de 2019, aumentó a 4,134. En cuanto a los robos con violencia en los autotransportes de carga, la SESNSP reveló que durante el primer

cuatrimestre de 2018 se contabilizaron 3 mil 199 casos perpetuados con actos violentos y, en el mismo periodo de 2019, se llevaron a cabo 3 mil 652 actos con el mismo método agresivo, lo que quiere decir que hubo un aumento del 14%. El presidente de la CANACAR recordó que este delito se incrementó de 2013 a 2017 en un 480 por ciento y de enero a noviembre de 2018 se registraron 3 mil 775 robos a nivel nacional.

En ese contexto, es preciso que el Estado realice las acciones ejecutivas y legislativas tendentes a disminuir la incidencia de esta conducta que la ley señala como delito, en aras de proteger el patrimonio y la seguridad de las personas físicas y morales que desarrollan sus actividades y desplazan mercancías o bienes por medio del transporte de carga, pasajeros, turismo o transporte privado en cualquiera de sus modalidades.

Delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, en su artículo 8 establece que esta conducta delictiva implica la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin ningún derecho y sin el consentimiento de los asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos, además de que se aproveche de mala fe, de estos energéticos.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República detalló que en el año 2012, el número de tomas apócrifas llegó a mil 749, las cuales afectaron a refinerías, terminales de almacenamiento, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, lo que generó pérdidas por más de 3 mil 290 millones de pesos. Además, señaló que en 2014 se detectaron 4 mil 127 tomas clandestinas, lo que equivalió a un 57% más que en comparación de 2013. Asimismo, se estimó que cada dos horas la delincuencia perfora los ductos de PEMEX para robar combustibles.

El Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), señaló en abril de 2019 que este ilícito daña la economía nacional y pone en riesgo la vida de la ciudadanía. Asimismo, informó que de noviembre de 2018 a abril de 2019 disminuyó 95 por ciento y explicó que el robo de combustibles pasó de 81 mil barriles diarios en noviembre de 2018 a 4 mil en abril de 2019, por lo que la estrategia empleada por

el Ejecutivo Federal para la persecución de este delito es efectiva y ha generado un ahorro para PEMEX de 12 mil millones de pesos.

Desaparición forzada.

En cuanto al delito de desaparición forzada, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que la desaparición forzada es "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

México enfrenta una situación complicada debido al incremento de la violencia, principalmente relacionada con el crimen organizado. Esta violencia continúa a pesar de las detenciones de piezas importantes del crimen organizado, el significativo decomiso de armas y droga o el seguimiento de la ruta del dinero. La desaparición forzada no presenta un perfil claro de las víctimas, ya que éstas pueden pertenecer a diferentes grupos vulnerables, incluyendo a mujeres, migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos y/o periodistas.

Conforme a la entonces Procuraduría General de la República, en el año 2014 y 2015, se iniciaron 127 averiguaciones previas por desaparición forzada en el ámbito federal. Por su parte, el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el total de personas desaparecidas y no localizadas en México fue de 30 mil 499 casos, de los cuales 29 mil 485.

Según lo expresado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, a enero de 2019 se contabilizó 40 mil 180 personas sin localizar. Los estados que tienen este delito con mayor frecuencia son Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

En el Informe sobre Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No localizadas de enero de 2020, se señala que el número de personas desaparecidas hasta el 31 de diciembre de 2019 fue de 61,637. De esta

cifra 74% son hombres, 25.69% son mujeres y 0.31% de sexo indeterminado. El 53% de las personas desaparecidas se encuentran en el rango de edad entre 15 y 35 años. Del total de desapariciones, se registraron 5,184 de diciembre de 2018 a diciembre de 2019.

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los artículos 7o y 8o de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas y no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la Ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley. La propiedad de armas de fuego varía en los diferentes Estados, algunos permiten la propiedad de diferentes tipos de armas de fuego a civiles, estas mismas armas, en otros Estados sólo están permitidas para uso militar.

Es importante señalar que la palabra civil se relaciona a la persona que posee el arma, quien no pertenece al sector castrense, y el uso de dicha palabra no tiene que ver con un atributo de la personalidad jurídica, en este caso, su estado civil. Los delitos cometidos por medio de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea van en incremento día a día.

El flujo de municiones y armas de fuego ilegales hacia nuestro país se origina en Estados Unidos, más de 213 mil armas entran a México cada año por medio del mercado negro. La incidencia delictiva con armas de fuego, publicada en el portal de datos abiertos, señala que en la Ciudad de México existe un incremento de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. En el primer trimestre de 2016 se cometieron 110 homicidios por armas de fuego, en el mismo periodo de 2017 fueron 170. El primer trimestre de 2018 se registraron 215 casos y en ese lapso de 2019 se matricularon 289.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), especificó que de los 18.9 millones de delitos presenciales de 2018, en el 32.2% de ellos los

delincuentes portaban arma de fuego. También señaló que la comisión de delitos de armas de fuego en 2018 fue la más alta desde 2014. Durante el primer semestre del año 2019, se contabilizaron 7 mil 381 averiguaciones previas y carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, la posesión o portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin que hayan sido registradas previamente en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El SAT, indicó que entre el 2007 y hasta febrero del año pasado, se intentó ingresar por alguna de las 49 aduanas establecidas en el territorio nacional alrededor de 70,000 cartuchos y cargadores para armas de fuego, además de unas 700 armas. El SESNSP detalló que, en los años 2016, 2017 y 2018, las indagatorias iniciadas en el periodo enero-agosto fueron 400, 515 y 559, respectivamente. La proporción de ellas que asienta el uso de armas es de 23, 26.2 y 21.5%, respectivamente.

Delitos cometidos con armas réplica, falsas o de juguete.

El uso de armas réplica se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente por los delincuentes para intimidar a las víctimas y así cometer robos, entre otros delitos, esto en aprovechamiento de la facilidad con que pueden adquirirse este tipo de instrumentos y por ser igual de efectivos para amagar a sus víctimas, dada la dificultad que representa para una persona en una situación de temor identificar la diferencia con un arma de fuego real.

De acuerdo con información publicada en medios periodísticos, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de enero a abril de 2019 se contabilizaron 427 detenciones por la comisión de delitos con armas réplica; en el primer trimestre del año en el año 2018 se registraron mil 757 detenciones, mientras que en 2017 se registraron 713, lo que representa un 146%. En varias entidades de la República se encuentra tipificado como un tipo de violencia la utilización de armas réplica que tengan la apariencia de un arma de fuego, como juguetes o cualquier otro instrumento que se asemeje a una arma real, con el que es posible intimidad y amagar a la víctima del delito.

Transporte ferroviario y vías generales de comunicación.

Según informa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la red ferroviaria de nuestro país se integra por 26,914 kilómetros de vías, de los cuales 20,885 son vías principales, en su mayoría concesionadas. El sistema ferroviario es operado por ocho concesionarios y moviliza 13% de la carga total transportada en el país. Casi la mitad de los bienes transportados por este medio son productos industriales (46%), le siguen los productos agrícolas (26%) y los minerales (13%).

La red ferroviaria se conecta en 8 puntos con la de los Estados Unidos, y con 11 de los principales puertos del país. según el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano del Tercer Trimestre 2019, durante el segundo trimestre de ese año, ocurrieron un total de 2,840 eventos, de los cuales 1,064 (37.46%) corresponden a actos de robo y 1,776 (62.54%) a actos de vandalismo. En comparación, en el segundo trimestre de 2019 se observó una disminución de 19.48% en el número de sucesos de seguridad pública. Los datos anteriores representan un aumento de 8.35% respecto de casos de robos y un decremento de 30.22% en el rubro de vandalismo.

Por lo que hace al robo a tren, se presentó un incremento marginal de 25.69% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, el robo a vía tuvo un notable decremento de 40.31% en los mismos periodos, debido principalmente a una disminución sustancial (109 eventos equivalente a 70.78%) en el robo a componentes de vía.

Dentro de la categoría de robo a tren, el tipo de evento con una mayor participación es el de robo a producto/carga, el cual concentró el 85.71% de todos los casos de robo a tren, representando un incremento del 12.88% respecto al segundo trimestre. Los estados que más contribuyeron a este rubro durante el tercer trimestre de 2019 fueron Tlaxcala (152 eventos – 19.49%), Jalisco (101 eventos – 12.95%) y Sonora (71 eventos – 9.10%). Tan sólo los tres estados anteriores, en conjunto, representan el 41.54% del total de robos a producto/carga. En el informe de referencia destaca que el 76.79% de los robos a producto/carga ocurren en vías principales.

El subgrupo de mercancías con mayor número de incidencias de robos durante el periodo actual es el de granos, semillas y sus derivados, con un total de 26.97% de las incidencias. En segundo lugar, se encuentran las autopartes, las cuales representan el 24.94% del total de incidencias. El robo de trenes de consumo

contribuye con otro 14.68% del total. Todos los demás grupos tienen una aportación menor al 10% a los casos de robo a producto/carga.

En cuanto al robo a vía, el informe trimestral señala que esta categoría alcanza en este periodo su valor más bajo en épocas recientes del Sistema Ferroviario Mexicano, con un total de 154 incidencias, lo que corresponde con un decremento del 40.31% respecto al segundo trimestre. En el caso de los actos vandálicos, se muestra que existió un decremento en el número de eventos de vandalismo de 30.22% entre el segundo y tercer trimestre de 2019, al pasar de 2,545 a 1,776 eventos en el periodo mencionado. La categoría de vandalismo a tren, los casos de vandalismo a cierre de angulares (733 eventos) y a material rodante (769 eventos), constituyen en conjunto el 90.81% del total de casos reportados durante el tercer trimestre de 2019, teniendo como resultado neto un decremento en el número de eventos de vandalismo al tren.

Posteriormente, las Comisiones de dictamen procedieron al fundamento de las reformas que se realizan en los ordenamientos relacionados con la armonización legislativa de la prisión preventiva oficiosa, tomando en cuenta los planteamientos realizados por las y los legisladores promoventes de las iniciativas, con las modificaciones que consideraron necesarias, en aras de una mayor certeza jurídica en el establecimiento de los delitos que ameritan la aplicación oficiosa de la medida de prisión preventiva. El análisis se realizó por cada uno de los ordenamientos modificados.

CUARTO. Reforma al Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este artículo es de toral importancia para los propósitos del presente Dictamen, toda vez que en él se consigna prácticamente la regulación secundaria del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, al desarrollar tanto los supuestos por los que el Ministerio Público Federal puede solicitar la medida cautelar de prisión preventiva de manera justificada, como aquellos delitos por los que el juez debe ordenar dicha medida de manera oficiosa, que es precisamente el tópico que nos ocupa.

Destacan las siguientes reformas:

a) En primer lugar, tenemos la modificación al párrafo tercero, en el que se plantea incorporar la relación expresa de los nuevos delitos previstos en el artículo 19 constitucional, los cuales derivan de la reforma del mes de abril de 2019, cuya regulación en la ley secundaria es materia del presente Dictamen, ya que aún no se encuentran contemplados en este párrafo. Esto es, el texto señalado del párrafo tercero vigente establece el mandato para el juez de control de ordenar la prisión preventiva de oficio en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. A estos deben sumarse las conductas delictivas adicionadas al artículo 19 constitucional con motivo de la referida reforma.

b) En cuanto a la propuesta de incorporar en el artículo 167 la equiparación de los delitos cometidos con armas réplica a los perpetrados con medios violentos como armas de fuego, las Comisiones coincidieron con la propuesta, ya que las denominadas "armas réplicas" son empleadas en la actualidad como instrumentos que provocan a las víctimas una sensación de amenaza a la vida y a la integridad física, tal como lo provoca un arma de fuego real.

c) Se consideró necesario que el artículo 167 se reforme con la finalidad de incorporar la remisión precisa a las legislaciones secundarias que regulan las materias relativas a las conductas delictivas que se adicionaron al artículo 19 constitucional, toda vez que las disposiciones especiales sobre tales conductas se encuentran establecidas en dichos ordenamientos, por lo que en armonía con el texto vigente del artículo de mérito, que en sus actuales párrafos cuarto y quinto remiten a las leyes generales y federales especiales, es procedente el reenvío a las nuevas leyes que regulan los delitos adicionados en materia de prisión preventiva oficiosa. En el mismo contexto, se planteó reformar los actuales párrafos cuarto y quinto, fusionándolos para mayor claridad y quedar como párrafo quinto, consistente en la incorporación de las leyes generales y federales, las cuales en conjunto, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa, precisando con la frase "de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", para delimitar con claridad que estas leyes sólo

podrán regular la prisión preventiva oficiosa en aquellos supuestos expresos por el texto constitucional.

d) Se planteó adicionar las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del párrafo sexto, con la finalidad de establecer los artículos del Código Penal Federal que tipifican conductas consideradas como delitos que, en armonía con el vigente artículo 19 constitucional, habrán de ameritar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.

   a. Se adiciona la fracción XII al párrafo sexto del artículo 167, para agregar el abuso o violencia sexual contra menores. En ese sentido, es importante destacar que el artículo 261 del Código Penal Federal exclusivamente prevé el delito cometido contra las personas menores de quince años y, por tanto, quedarían desprotegidos aquellos adolescentes entre quince años y la mayoría de edad, razón por la cual resulta menester establecer también la remisión al artículo 260, a fin de brindarles protección a las personas cuyas edades oscilan entre los quince años y la mayoría de edad.
   b. En cuanto al robo a casa habitación, la fracción XIV adicionada, contempla el supuesto previsto en el artículo 381 Bis del Código Penal Federal.
   c. Se prevé que las nuevas fracciones XV, XVI y XVII, establezcan, respectivamente, los delitos de ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades.
   d. En consecuencia, las conductas que se contemplan en las fracciones adicionadas al artículo 167, son los siguientes:
      - Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 260 y 261;
      - Feminicidio, previsto en el artículo 325;
      - Robo a casa habitación previsto en el artículo 381 Bis;
      - Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;
      - Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y
      - Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el artículo 376 Ter, todos del Código Penal Federal.

e) En virtud de la reforma a la Ley General de Salud que se detalla en el apartado respectivo a dicha ley, se advierte que la fracción XI que contempla el artículo 196 Bis del Código Penal Federal, fue derogado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996 por lo que se plantea eliminar la referencia a dicho articulo por ya no estar vigente.

f) En observancia de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 17 Constitucional que prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, se previó la necesidad de reformar el párrafo octavo y adicionar dos párrafos noveno y décimo, respectivamente, para que exista la posibilidad de sustituir la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.

   Asimismo, en los párrafos adicionados, se propone establecer que, si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. Finalmente, que en los casos en los que la víctima u ofendido y el imputado deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que la persona imputada se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

QUINTO. Reforma y adición a Leyes Generales y Federales.

1. Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La colegisladora plantea adicionar un párrafo segundo al artículo 6 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a efecto de establecer en dicho dispositivo la procedencia de la prisión preventiva oficiosa respecto de los delitos

que guardan relación con el uso de programas sociales con fines electorales, previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 11, fracción II y 20 fracción II, lo cual es congruente con el mencionado artículo 19 de la Constitución Federal. Así, se incluyen las conductas consistentes en: amenazar con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien, para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición; o a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición.

De igual forma, se contemplan las conductas consistentes en condicionar el cumplimiento de programas sociales a la emisión del sufragio en favor de una o un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de una o un precandidato, candidato, partido o coalición. También, a quien destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de una o un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Finalmente, al servidor público que durante el procedimiento de consulta popular: condicione el cumplimiento de programas gubernamentales, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular.

2. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La colegisladora coincide con las diversas propuestas para establecer de forma específica en esta ley especial las conductas delictivas que deben ser merecedoras de la medida de prisión preventiva oficiosa, conductas que afectan a miles de familias mexicanas, quienes han sufrido la desaparición forzada de uno de sus integrantes y aspiran a que el Estado les garantice el derecho a la verdad y a la reparación. Derivado de la remisión que efectúa el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plantean adicionar un párrafo segundo al artículo 14 de la legislación en materia de desaparición forzada de personas, a fin de establecer que en los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de dicho

ordenamiento, el juez ordenará la aplicación de la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados.

3. Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

La colegisladora plantea la adición de un párrafo tercero al artículo 4 de este ordenamiento secundario, a efecto de contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa para los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley. Se considera pertinente la medida respecto de los siguientes delitos:

- Sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- Aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- A quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

- A quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre, oculte, altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Las conductas anteriores, cuando apliquen las sanciones previstas en los incisos b) al d) del párrafo segundo del artículo 9, cuyas penas van desde un mínimo de seis años hasta un máximo de diecisiete años.

- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización de las conductas previstas en los artículos 8 y 9, cuando se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar, propiedad o en uso de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o se utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

- Al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

- Finalmente, se incluyen las conductas delictivas previstas en las fracciones II y III del artículo 17 y los artículos 18 y 19 de la ley que contemplan penas de prisión que van desde los 10 hasta los 25 años, con la posibilidad de aumentar hasta en una mitad la sanción, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en la Ley.

La colegisladora sostiene que el motivo de exceptuar la fracción I del artículo 17, relativo a la alteración de los sistemas de medición, radica en qué dicha conducta puede ser resultado de un error humano o mecánico. Además, en lo que toca al control administrativo, es importante considerar que, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Hidrocarburos y en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las autoridades responsables de regular y vigilar tanto la calidad de los petrolíferos, como la medición de los instrumentos, son la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaria de Economía (a través de la Dirección General de Normas y de la Procuraduría del Consumidor), para lo cual, en apego a dichas disposiciones, emitieron dos instrumentos normativos que regulan los temas en comento:

- La Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

- La Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

Dichos instrumentos normativos determinan cómo se evalúa el cumplimiento y, de manera puntual establecen quién se encarga de su vigilancia. Atendiendo a dichos ordenamientos, es notorio que, en términos técnicos, un instrumento de medición puede ser alterado por muchos motivos, sin que ello implique dolo o fines de lucro indebido, por lo que es desproporcionado que ello implique un delito. Es el caso, por ejemplo, del empresario o empresaria de una gasolinera que adquiere un Dispensario del Fabricante o Distribuidor, que en el momento cumple con la normatividad y legislación vigente; sin embargo, al ser emitida una disposición en la que se establezca la obligación de instalar sistemas de interconexión con tal dispensario, significa una alteración al instrumento de medición, pero no necesariamente la comisión de un delito o la búsqueda de la obtención de un lucro indebido.

Esto es evidente al observar que, actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exige la instalación de Controles Volumétricos que van conectados directamente al dispensario, provocando con ello una alteración al instrumento de medición. Otro ejemplo, es que, en el caso de las Estaciones de Servicio del Valle de México, la autoridad ecológica, exige la instalación de sistemas de Recuperación de Vapores FASII, situación que altera consecuentemente el instrumento de medición.

En ese sentido, las dictaminadoras expresaron su preocupación por lo que implicaría aplicar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en estos casos, debido a la posible generación de incertidumbre jurídica para los concesionarios de estaciones de servicio, quienes por errores técnicos y sin ánimo de lucro, pueden ver el desarrollo de su vida y patrimonio amenazados. No obstante, se estima necesario un control para el correcto funcionamiento de los mencionados sistemas que, a su vez, repercute directamente en beneficio o perjuicio de los consumidores, lo cual motiva la existencia de sanciones en caso de incurrir en una conducta de carácter doloso o con fines de lucro.

4. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La propuesta de reforma a esta ley por parte de la colegisladora, se refiere a los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la

Fuerza Aérea, previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III, 83 Quat, fracción II, 84 y 85 Bis, fracción III, como se explica a continuación:

El texto vigente del párrafo segundo del artículo 19 constitucional realiza una clara referencia a delitos cuya comisión involucra este tipo de armamento y no así las armas que no tienen tal carácter, es decir, el Constituyente Permanente estableció la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para el tipo penal de arma exclusiva de las fuerzas armadas y no al tipo básico de posesión de armas sin la licencia respectiva, por lo que, en aras de la armonía que debe guardar la legislación secundaria con la Constitución General de la República, se consideran solamente tales conductas tipificadas como delitos. Cabe señalar que, en el caso de la fracción III del artículo 85 Bis, si bien se advierte que dispone una sanción de cinco a quince años de prisión y de cien a quinientos días multa a quienes dispongan indebidamente de las armas con que se haya dotado tanto a los cuerpos de policía federales, estatales o municipales, como al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, es necesaria su incorporación en el listado de tipos penales que ameritan prisión preventiva oficiosa únicamente para el caso de disposición indebida de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, por lo que la propuesta se especifica en esos términos.

El artículo 8o de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos determina que no se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la ley, ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en dicha Ley. Del anterior precepto se desprende un supuesto para la configuración del delito en estudio, el cual se integra por dos conductas necesarias para la actualización de cada tipo penal considerado en la ley, es decir, tanto los tipos básicos como los compuestos y agravados que el legislador secundario tuvo a bien sancionar con diversas penalidades, parten justamente de esas conductas.

Así, en primer lugar, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prohíbe la posesión y portación de las armas señaladas en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, esto es, la posesión "genérica" de armas prohibidas por la ley, referida a las señaladas en el artículo 251 del Código Penal para el Distrito

Federal, en el artículo 160 del Código Penal Federal y en el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que constituyen tipos básicos en relación con este delito. En segundo término, la parte final del referido artículo 8, instituye una prohibición respecto de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo cual representa una conducta distinta a la del supuesto señalado en la primera parte del dispositivo legal en cuestión que, para los efectos del presente Dictamen, constituye precisamente el supuesto previsto en el artículo 19 de la Constitución Federal en materia de prisión preventiva oficiosa.

De tal forma que el delito de portación de armas reservadas para las fuerzas armadas, constituye un delito complementado al de portación de armas de fuego sin licencia, previsto en el artículo 81 de la referida legislación, toda vez que el primero de estos no representa un tipo penal independiente, "sino que se constituye por el básico o fundamental, es decir, la portación de un arma de fuego, más el complemento, consistente en la calidad de reservada para el uso de las fuerzas armadas del país". Consecuentemente, para este tipo penal complementado se requiere acreditar: 1) la existencia del arma de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 2) Que el arma de fuego sea objeto de portación por parte del sujeto activo, sin que este pertenezca a alguna de las instituciones armadas del país; y 3) La conducta se lleve a cabo en contravención a las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo tanto, no basta la sola portación de arma prohibida por la ley para contemplar la medida de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 Constitucional, sino que es menester se actualicen los demás elementos del tipo para que el delito se considere de los contemplados en la Norma Fundamental. Por su parte, los artículos 9, 10, 10 Bis y 11 de la señalada legislación en materia de armas de fuego y explosivos establecen, en forma precisa, el tipo de armas que pueden poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones establecidas por la ley, sus características específicas, aquellas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para posesión en el domicilio y portar con licencia; los cartuchos correspondientes a las armas que pueden poseerse o portarse, limitadas a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de la ley, por cada arma manifestada en el Registro Federal de Armas, así como las armas y municiones para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Se plantea la incorporación de los diversos artículos para la procedencia de la medida de prisión preventiva oficiosa, respecto de la ley en materia de armas de fuego y explosivos, excepción hecha del artículo 81, que remite a las armas que pueden portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por la Ley (Artículo 9); así como a las que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, (Artículo 10), que escapan del supuesto constitucional. Por otra parte se convienen los siguientes incrementos de penas:

- El delito previsto en el artículo 81, relativo a la portación de arma comprendida en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin tener expedida la licencia respectiva, se conviene en incrementar a una pena de prisión de 3 a 8 años, en lugar de 2 a 7 años que dispone el artículo vigente, así como el incremento de 100 a 400 días multa.

- En la fracción II del artículo 83 Ter, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de la ley, se modifica la pena de prisión actual de 1 a 7 años para establecer en su lugar un mínimo de 4 años y dejar el máximo sin modificación en los términos vigentes.

- Para la fracción II del artículo 83 Quat, respecto de las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de la ley, se incrementa la penalidad actual de 2 a 6 años de prisión, en 4 a 7 años, así como de 100 a 300 días multa en lugar de los 25 a 100 que dispone el tipo penal.

- Respecto al artículo 83 Quintus, fracción II, se incrementa la pena de 2 a 5 años de prisión para establecerla en un mínimo de 4 y un máximo de 8 años, a la vez de incrementar la sanción actual de 100 a 200 días multa, para fijarla en 200 a 400 días multa.

5. Código Penal Federal.

Respecto a este ordenamiento, se analiza en primer lugar la propuesta de modificación al artículo 160, primer párrafo, del Código Penal Federal, la cual tiene el propósito de establecer una redacción que sea más precisa, en cuanto a otorgar certeza jurídica al tipo penal que tiene por objeto prohibir la portación, fabricación,

importación y acopio de instrumentos con la intención de agredir, a efecto de que el texto legal atienda a la intencionalidad que tiene la conducta desplegada por el sujeto activo del ilícito y no al uso que el arma respectiva pudiera o no tener; así como la propuesta de aumento de penalidad. Se considera que la descripción vigente del tipo penal contenida en el artículo 160, es subjetiva y ambigua, y adolece de los elementos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que para la actualización del delito se deba acreditar "la intención de agredir", para que la simple portación de las armas no sea un delito por sí misma y se garantice la presunción de inocencia.

Tomando en cuenta la incidencia que se manifiesta en la comisión del delito de portación de arma prohibida por la ley, que debe atenderse sin lugar a dudas por este órgano legislativo en el ámbito de su competencia, se plantea el incremento de la penalidad mínima de tres meses a un año y la máxima de tres a seis años, así como establecer la posibilidad de que se imponga tanto la pena de prisión como la sanción pecuniaria, cambiando la conjunción disyuntiva a copulativa e incrementando su monto expresado ahora en Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte se estima necesario derogar las fracciones I y III del artículo 162, en virtud de que su contenido hace alusión a la simple portación, fabricación, venta, tráfico o inclusive regalo de las armas a que se refiere el artículo 160 del código adjetivo penal, sin tomar en cuenta la intención de quien las porte o efectúe alguna otra de las conductas señaladas.

Por otra parte, se plantea adicionar un último párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal a fin de incrementar la punibilidad relativa al delito en contra del medio ambiente cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi, contemplando un mínimo de cinco años hasta un máximo de quince. Lo anterior, atendiendo a la gravedad que reviste para el medio ambiente de nuestro país la captura de una especie en peligro de extinción y declarada en veda permanente como la totoaba macdonaldi, así como la magnitud que reviste el daño que se genera de manera colateral a la existencia de ejemplares de vaquita marina, también en peligro de extinción.

En efecto, de conformidad con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie se encuentra clasificada en peligro de extinción por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 e incluida en el Apéndice I de

la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Según dicha dependencia, este pez es bastante valorado en el mercado asiático por su vejiga natatoria, dado que se le atribuyen propiedades curativas.

Lamentablemente en el proceso de captura con redes, también queda atrapada la vaquita marina, especie que, de igual forma, se encuentra en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. Ante ello, es conducente implementar acciones legislativas encaminadas a una mayor protección de estas especies pues, de lo contrario, se permite que la conducta delictiva incremente su incidencia en perjuicio de los valores jurídicamente tutelados por la norma.

6. Ley General de Salud.

Señala la colegisladora que se plantea reformar el artículo 480 de la Ley General de Salud, a efecto de establecer que el juez ordenará oficiosamente la prisión preventiva de los imputados en los delitos previstos en el artículo 475 de dicho ordenamiento en materia de salud. Lo anterior, dado que la modificación del texto constitucional vuelve necesaria la armonización del marco legal, por lo que se procede a realizar las consideraciones atinentes a su viabilidad. En el artículo 475 de la Ley General de Salud se contemplan las conductas delictivas siguientes:

- A quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla que contiene la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal.

- Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de éstos.

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:

- Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el capítulo de la ley.

- Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o;

- La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos.

Las anteriores conductas se enmarcan en el capítulo relativo a "Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo", en el que se entiende por "Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta Ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia." Debe destacarse que las conductas punibles a que se refiere el artículo 475, tienen que ver con la cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla que contiene la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal toda vez que, de acuerdo con el artículo 474 de la misma ley, dichas conductas son de competencia de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, y las conductas relacionadas con cantidades iguales o mayores a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las establecidas en la tabla, serán de competencia federal.

Las conductas delictivas relacionadas con cantidades iguales o superiores a las señaladas en la tabla en cuestión tienen un tratamiento diverso en cuanto a su sanción, según las disposiciones contenidas en el Capítulo I "De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos", del Código Penal Federal, particularmente en sus artículos 193, 194, 195 y 196 de dicho Código. Los anteriores dispositivos legales prevén conductas similares a las establecidas en el artículo 475 de la Ley General de Salud y, dichos artículos se encuentran contemplados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos

Penales, como acreedores de la medida de prisión preventiva oficiosa, excepción hecha de los artículos 193 y 195.

Por estas razones, se coincidió con la propuesta de reforma al artículo 480 de la Ley General de Salud, modificada, a efecto de establecer la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa únicamente respecto de las agravantes previstas en el párrafo segundo y en las fracciones I, II y III del tercer párrafo del artículo 475 de dicha Ley.

7. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La colegisladora plantea la reforma al artículo 2o. párrafo primero, fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de adicionar las conductas delictivas previstas en los artículos 81, 83, 83 Ter, 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de que se aplique la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa para quienes realicen dichas conductas. Las comisiones estimaron viable la adición de los artículos 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda vez que dichas disposiciones prevén conductas que pueden constituir la finalidad de una organización criminal, pues tienen que ver con la introducción al territorio nacional, comercialización, fabricación y exportación de armas, municiones y explosivos sin contar con los permisos respectivos.

8. Ley de Vías Generales de Comunicación.

Finalmente, se propone la modificación a los artículos 533 y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. En cuanto al primero de los artículos, al considerar la importancia que revisten las vías generales de comunicación para el bienestar y el desarrollo de las personas, y que el asalto a vías generales de comunicación es una actividad que provoca severas afectaciones para la sociedad y por ende, requiere de una decidida intervención del Estado que desincentive su realización, en este caso, aumentando la gravedad de la sanción de tal forma que la media aritmética exceda los cinco años, con las consecuencias que la normatividad penal prevé para este tipo de delitos.

Al respecto, se determinó reformar el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación mediante el incremento de las sanciones previstas en dicho artículo, tal y como lo plantea la iniciativa de mérito, pues la conducta sin duda alguna conlleva implícito el dolo en su realización y ocasiona afectaciones a las vías generales de comunicación, las que deben ser protegidas por la norma con penas más severas a las que se encuentran vigentes. La construcción del tipo en comento no contempla la comisión de la conducta delictiva por una sola persona, pues se refiere a una pluralidad de sujetos, lo cual no se considera correcto ya que la conducta prevista en este artículo puede ser realizada por un sujeto activo solamente.

Respecto al artículo 534, se advierte la conducta contemplada no implica una intencionalidad en su comisión, solo una acción imprudente que, en forma indebida, pero sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación, lleve a cabo alguna de las acciones descritas en este artículo, por lo que, si bien se ocasiona el daño previsto, no existe la intención de causarlo. Pese a este esclarecimiento, la colegisladora concluyó que a pesar de producirse sin intención, se coincide con la propuesta de la iniciativa a efecto de incrementar el monto de la multa, que actualmente es de mínimo de veinticinco hasta un máximo de doscientos pesos, para quedar con un límite inferior de doscientas y un tope de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en lugar de las mil propuestas, pues se considera desproporcionado incrementar la cantidad vigente de doscientos pesos hasta un monto de $86,880 pesos, considerando el valor actual de la UMA.

SEXTO. Cuadros Comparativos.

Con la finalidad de apreciar las modificaciones específicas contenidas en la Minuta, se presentan los siguientes cuadros comparativos:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras	**Artículo 167. Causas de procedencia** ...

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código.	
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva.	...
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.	El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores,** delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio,** violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales,** corrupción **tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de**

	carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como **los** delitos graves que determine la ley **en** contra **de** la seguridad de la **n**ación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.
Sin correlativo.	**Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.**
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.	Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada,**

La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: **I.** a **X.** ... **XI.** Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. **Sin correlativo.** **Sin correlativo.** **Sin correlativo.** **Sin correlativo.** **Sin correlativo.**	establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa **de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**. ... **I.** a **X.** ... **XI.** Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; **XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;** **XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;** **XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;** **XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;**

Sin correlativo.	**XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y** **XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.**
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera:	…
I. a **III.** …	
Sin correlativo.	**I.** a **III.** …
	El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad **o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.** La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la **Fiscalía** o **de la persona**
Sin correlativo.	

Sin correlativo.	funcionaria en la cual delegue esa facultad. **Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.** **En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.**

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES	
TEXTO VIGENTE	TEXTO DE LA MINUTA
Artículo 6. Las penas previstas en los delitos de este Título se aplicarán con	Artículo 6. ..

independencia de la sanción establecida para los tipos penales que concurran en la comisión de los delitos previstos en esta Ley. **Sin correlativo.**	**La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.**
Sin correlativo.	**Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.**
Sin correlativo.	**Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios,**

	o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 14. El ejercicio de la acción penal y la ejecución de sanciones penales que se impongan judicialmente para los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares son imprescriptibles y no están sujetos a criterios de oportunidad ni a formas de solución alterna al proceso u otras de similar naturaleza. **Sin correlativo.**	**Artículo 14.** ... **El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.**

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 4.- El Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la	**Artículo 4.-** ...

investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, salvo aquellos que conforme a la misma se perseguirán por querella de parte ofendida o del órgano regulador.	
Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra.	...
Sin correlativo.	**La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.**

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 81.- Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.	**Artículo 81.-** Se sancionará con penas de **tres** a **ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.
En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se	...

aumentará hasta en dos terceras partes.	
Artículo 83 Ter.- Al que sin el permiso correspondiente posea un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: **I.** Con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso i) del artículo 11 de esta Ley; **II.-** Con prisión de uno a siete años y de veinte a cien días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y **III.** Con prisión de dos a doce años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.	**Artículo 83 Ter.-** ... **I.** ... **II.-** Con prisión de **cuatro** a siete años y de **cien** a **trescientos** días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y **III.** ...
Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: **I.** Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y **II.** Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en	**Artículo 83 Quat.-** ... **I.** ... **II.** Con prisión de **cuatro** a **siete** años y de **cien** a **trescientos** días multa, si son para las armas que están

los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.	comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.
Artículo 83 Quintus.- Al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará: **I.-** Con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores. **II.-** Con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.	**Artículo 83 Quintus.-** ... **I.-** ... **II.-** Con prisión de **cuatro** a **ocho** años y de **doscientos** a **cuatrocientos** días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.
Sin correlativo.	**Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.**

CÓDIGO PENAL FEDERAL	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito instrumentos que sólo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso.	**Artículo 160.-** A quien porte, fabrique, importe, **venda** o acopie sin un fin lícito **o con la intención de agredir,** instrumentos que puedan ser utilizados para **el ataque o la defensa**, se le impondrá prisión de **uno a seis** años y de **quinientas** a **mil veces el** valor

	diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.
Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.	...
Estos delitos, cuyo conocimiento compete al fuero común, se sancionarán sin perjuicio de lo previsto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de aplicación federal en lo que conciernen a estos objetos.	...
Artículo 162.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión o de 180 a 360 días multa y decomiso:	**Artículo 162.-** ...
I.- Al que importe, fabrique o venda las armas enumeradas en el artículo 160; o las regale o trafique con ellas;	**I.- Se deroga.**
II.- Al que ponga a la venta pistolas o revólveres, careciendo del permiso necesario;	**II.-** ...
III.- Al que porte una arma de las prohibidas en el artículo 160;	**III.- Se deroga.**
IV.- Al que, sin un fin lícito o sin el permiso correspondiente, hiciere acopio de armas, y	**IV.-** y **V.-** ...

V.- Al que, sin licencia, porte alguna arma de las señaladas en el artículo 161. En todos los casos incluidos en este artículo, además de las sanciones señaladas, se decomisarán las armas. Los funcionarios y agentes de la autoridad pueden llevar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.	 ... ...
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: **I.** Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos; **II.** Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas declaradas en veda; **II Bis.** De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.	**Artículo 420.-** ... **I.** ... **II.** ... **II Bis.** ...

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;	**III.** …
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte, o	**IV.** …
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.	**V.** …
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.	…
Sin correlativo.	**En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal**

	contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

LEY GENERAL DE SALUD	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 480.- Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. **Sin correlativo.**	**Artículo 480.-** … **El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.**

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para	**Artículo 2o.-** …

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:	
I. ...	I. ...
II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;	**II.** Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis, 84, **84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis,** de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
III. a **X.** ...	**III.** a **X.** ...
Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.	...

LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO DE LA MINUTA**
Artículo 533.- Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los	**Artículo 533.- A quien dañe, perjudique** o **destruya** las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o **interrumpa** la construcción de dichas vías, o total o parcialmente **interrumpa** o **deteriore** los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los

medios de transporte, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal. Si el delito fuere cometido por imprudencia con motivo del tránsito de vehículos por carretera, aquél sólo se perseguirá por querella, la cual únicamente podrá formularse cuando no se repare el daño en un plazo de treinta días naturales. En este caso, el delito se sancionará con multa hasta por el valor del daño causado más la reparación de éste.	medios de transporte, **se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.** ...
Artículo 534.- El que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, incurrirá en multa de veinticinco a doscientos pesos.	**Artículo 534.- Al** que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **se le impondrá** multa de **doscientas** a **quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.**

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA

Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y dictaminar el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1 de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1, y 157, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA. FUNDAMENTO

De conformidad con el artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación, así como las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada. Asimismo, para legislar con respecto a la legislación única en materia procedimental penal. En consecuencia, tiene facultad para legislar el contenido relativo a la Minuta de mérito.

TERCERA. Como señala la colegisladora, el pasado 12 de abril del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el *"Decreto por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa"* (en adelante "Decreto"), el cual establece en el Artículo Segundo de su régimen transitorio la siguiente disposición:

> *"Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19".*

De la lectura simple de esta regla secundaria, se advierte la obligación del Congreso de la Unión de realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales las hipótesis delictivas contenidas en el artículo 19 Constitucional, dentro de los 90 días siguientes a su publicación. Por tal motivo, la aprobación del presente Dictamen constituye un acto legislativo tendiente al cumplimiento de la referida obligación constitucional.

Dada la materia que nos ocupa, es imprescindible que previo al estudio y análisis de la pertinencia, alcances y estructura del nuevo instrumento legislativo, se

esclarezca el origen y alcance de las facultades y obligaciones que debe cumplimentar este órgano del Estado, en cuanto integrante del Poder Legislativo. El establecimiento de la política criminal del Estado Mexicano es una de las facultades propias del Poder Legislativo; esta se ejerce mediante la elección de los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo.

Al establecer las bases sustantivas de la política criminal, el Poder Legislativo también está constreñido a diseñar las medidas adjetivas con las cuales se sustanciará su aplicación, incluyendo para el caso concreto, las medidas cautelares aplicables. Para el cumplimiento de esta tarea, es indispensable que estas reglas se establezcan con toda claridad, atento al criterio establecido en la tesis jurisprudencial de rubro *"POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD PROPIA DEL PODER LEGISLATIVO DISEÑAR SU RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"*[1].

---

[1]Tesis: VI.2o.P. J/1 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, 2017309, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Pag. 2683. Tribunales Colegiados de Circuito (Jurisprudencia).

POLÍTICA CRIMINAL. AL SER UNA FACULTAD PROPIA DEL PODER LEGISLATIVO DISEÑAR SU RUMBO, NO PUEDE TOMARSE EN CUENTA POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA IMPONER MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

El Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia P./J. 102/2008 y 1a./J. 114/2010, de rubros: "LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA." y "PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.", respectivamente, establecieron que en materia penal, el único que tiene un amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política criminal es el Poder Legislativo, quien está facultado para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; debiendo respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos, los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mientras que al juzgador constitucional le compete examinar la validez de las leyes penales, debiendo analizar que exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual, debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena, para

Ahora bien, en el establecimiento de la política criminal mediante la creación de penas y el sistema para su imposición, el Poder Legislativo no cuenta con libertad absoluta, sino que debe atender a diversos principios constitucionales (como los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica). Por ello, es indispensable que se justifique en todos los casos y, de forma expresa en el proceso de creación de la ley, las razones del establecimiento de las penas y su sistema de aplicación para que, ante la revisión de su constitucionalidad por parte del Poder Judicial, se atienda a las razones expuestas por el legislador y no a una interpretación abierta. Lo anterior, atento al criterio contenido en la tesis jurisprudencial de rubro *"PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY"*[2].

---

alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado. De ahí que en la labor interpretativa no pueden crearse tipos criminales y/o penas novedosas a partir de sus sentencias, pues se contravendría cada uno de dichos principios. En este sentido, para la imposición de una medida cautelar prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional del conocimiento no debe aducir como consideraciones, por ejemplo, que "es un hecho notorio que en algunos tipos de conductas delictivas, el crimen organizado participa activamente y ha involucrado a comunidades enteras de acuerdo con la región de consumación del delito, aprovechándose de las necesidades de sus habitantes, lo cual se ha convertido en un grave problema nacional, por afectar tanto a la economía del país como a la seguridad de los habitantes de esas comunidades, y que un porcentaje muy alto de las personas involucradas, que obtienen su libertad mediante medidas cautelares diversas a la prisión preventiva, han sido declarados sustraídos a la acción de la justicia, lo que ha ocasionado no sólo un peligro de obstaculización para el desarrollo de la investigación, sino también al fomento de actividades ilícitas, ante la evidente falta de acciones efectivas contra los sujetos activos de estos delitos", o algún otro razonamiento similar que implique destacar problemas nacionales de seguridad pública, pues ese aspecto corresponde a un dato de política criminal que tomó en cuenta el legislador al diseñar las medidas cautelares aplicables, y no al Juez de control, quien para resolver sobre esa petición cautelar, sólo debe atender a las reglas que para su imposición establecen el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal y los correlativos del código mencionado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

[2]163067. 1a./J. 114/2010. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, Pág. 340.

PENAS Y SISTEMA PARA SU APLICACIÓN. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO JUSTIFICAR EN TODOS LOS CASOS Y EN FORMA EXPRESA, LAS RAZONES DE SU ESTABLECIMIENTO EN LA LEY.

El legislador al crear las penas y el sistema para la imposición de las mismas, no cuenta con libertad absoluta para su establecimiento en la ley, sino que debe atender a diversos principios como lo es

En síntesis, la armonización del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales conforme con lo establecido en el artículo 19 Constitucional reformado, se justifica por tratarse del cumplimiento de una obligación legalmente establecida en el referido Artículo Segundo Transitorio del Decreto. Asimismo, el acto legislativo encuentra justificación en el diseño de la política criminal, que en la especie constituye el ejercicio de una de las facultades del Poder Legislativo.

CUARTA. Esta Comisión dictaminadora no omite en su estudio que el 10 de junio de 2020 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Contradicción de Tesis 551/2019, cuyo objeto era determinar si la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debe aplicarse a partir del 13 de abril de 2019, en virtud de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019, sin que obste que el Congreso de la Unión no ha realizado las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales el catálogo de delitos que ameritan dicha medida. A continuación, se esbozan los criterios controvertidos:

A. El Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/2019, sostuvo la constitucionalidad de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar de un juzgado de control pues afirmó que la norma constitucional se encontraba vigente a partir del 13 de abril de 2019 y que la *vacatio legis* plasmada en uno de los transitorios únicamente le imponía al órgano legislativo la obligación de realizar la reforma

---

el de la proporcionalidad entre delito y pena, ya que de ello dependerá si su aplicación es no humanitaria, infamante, cruel o excesiva, o por el contrario, es acorde a los postulados constitucionales. La proporción entre delito y pena, en el caso del Poder Legislativo, es el de hacer depender la gravedad de la pena en forma abstracta, lo cual se encuentra relacionado con la naturaleza del delito cometido, el bien jurídico protegido y el daño que se causa al mismo. Esto permite advertir la importancia que tiene el que el Poder Legislativo justifique, en todos los casos y en forma expresa, en el proceso de creación de la ley, cuáles son las razones del establecimiento de las penas y el sistema de aplicación de las mismas, para cuando una persona despliega una conducta considerada como delito. Lo anterior, permitirá que en un problema de constitucionalidad de leyes, se atienda a las razones expuestas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Así, lo relatado adquiere relevancia si se toma en consideración que al corresponderle al legislador señalar expresamente las razones de mérito, el órgano de control constitucional contará con otro elemento valioso cuyo análisis le permitirá llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos impugnados.

en la ley secundaria, a fin de que existiera concordancia entre la ley procesal penal y la norma suprema reformada, y no dejar a su arbitrio esa circunstancia.

B. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2019, sostuvo en cuanto a la exigibilidad y aplicación de la reforma constitucional en comento que, si bien entró en vigor el 13 de abril de 2019, no podía exigirse inmediatamente su aplicación dado que el propio Constituyente estableció una condición para que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones legales correspondientes. Además, la exigibilidad y aplicación de la reforma constitucional, estaba condicionada a la adecuación normativa que se ordenó al Congreso de la Unión, respecto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la fecha de la emisión del acto reclamado y del propio recurso de revisión, no se había realizado. Es decir, no se había satisfecho la condición a que estaba sujeta la exigibilidad y aplicación de la citada reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.

Teniendo en consideración, tales criterios, a continuación se explican las razones que se encontraron para determinar la existencia de la contradicción entre ambas tesis:

I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, pese a que el quejoso no expresó argumentos para impugnar la negativa del amparo respecto de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso; consideró, motu proprio, que la determinación del Juez de Distrito no le irrogaba perjuicio, porque la medida cautelar se ajustaba estrictamente a lo previsto en el párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución Federal, que se reformó en Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil nueve, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que ya era aplicable en la fecha de la resolución reclamada.

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consideró que no obstante que la reforma al párrafo segundo, del artículo 19 constitucional, entró en vigor al día siguiente de su publicación, no podía aplicarse al imputado al momento de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque el propio Constituyente estableció una

condición temporal en el artículo segundo transitorio de la reforma, consistente en que el Congreso de la Unión, en un lapso de noventa días siguientes, realizara las adecuaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de incluir en su texto los ilícitos respecto de los que, conforme a la disposición constitucional reformada, sería procedente la medida cautelar.

Al resolver la contradicción de mérito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era factible entender que la entrada en vigor del párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución, que se reformó el 12 de abril de dos mil diecinueve, no llevaba implícito el mandato de que se considerara exigible y aplicable, por el solo hecho de haber entrado en vigor al día siguiente de su publicación; ya que para ello era necesario verificar que el Artículo Segundo Transitorio de la propia reforma, no se tradujera en una condición impuesta por el Poder Reformador, sin cuyo cumplimiento resultara inviable hacer exigible y aplicable a partir de su entrada en vigor, lo dispuesto en el precepto constitucional.

Se hace alusión a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio de la reforma en cuestión, al dirigir un mandato al Congreso de la Unión para que en el lapso de noventa días modificara el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y homologara su texto a lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 19 constitucional, constituye una condicionante que limita la aplicación de la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. En ese orden de ideas, la Primera Sala tomó como precedente para resolver la citada contradicción de tesis el Amparo en Revisión 1312/2003, el cual estableció que "el inicio de vigencia de las reformas a la Constitución Federal solo podía obedecer a las reglas que al efecto determinara el propio Constituyente Permanente."

En efecto, en dicho precedente se fijó que para que una reforma constitucional tuviera ese carácter, bastaba con que se incorporara al texto mismo de la Constitución. Así, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los decretos de reforma constitucional emitidos por el Congreso, tenían como finalidades:

a) Hacer saber a los gobernados y los órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico había sido modificado por virtud del acto legislativo, y

b) hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se había perfeccionado la voluntad del Constituyente Permanente en ese sentido.

En el precedente de referencia, se sostuvo que sobre esa base podía afirmarse que la publicación de un decreto de reformas constitucionales era, en primer lugar, una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y de garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas. En este contexto, se señaló que de lo anterior podía derivarse válidamente el siguiente principio: las reformas constitucionales tenían vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia de manera inmediata, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Tal criterio resulta acorde con los principios de supremacía y de eficacia inmediata de la Constitución, según los cuales, debían ser atendidas por todos los operadores jurídicos, en aras de hacerlas efectivas. Establecida la validez de tales conclusiones, se comprendería bien que la regla en materia del inicio de vigencia de las reformas y adiciones a la Constitución era que empezaban a regir desde el mismo día de su publicación; y la excepción, que empezaran a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiera determinado en disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo, no fuera posible hacerlas exigibles de manera inmediata.

Con base en tales razonamientos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el Artículo Primero Transitorio del Decreto en estudio, señala que la reforma al párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por ello, se debe entender que a partir del inicio de su vigencia deben considerarse a los nuevos ilícitos dentro del catálogo por los que procede, por excepción, la prisión preventiva oficiosa; sin soslayar que ello se encuentra sujeto a las reglas dadas por el Constituyente Permanente, en el Artículo Segundo Transitorio.

Así, dicha reforma no podrá tener aplicación, en tanto no se supere la condición que se impone al Congreso de la Unión, de modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos las hipótesis delictivas de la reforma constitucional. Tomando en consideración tal criterio jurisprudencial,

derivado de una contradicción de tesis, esta Comisión considera impostergable la aprobación de la armonización contenida en la Minuta de mérito, en aras de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica en todos los procesos penales que se inicien por la persecución de las hipótesis delictivas contenidas en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

QUINTA. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar disponible en el proceso penal, mediante la cual se suspende el derecho a la libertad de una persona imputada por la comisión de algún delito sancionado con la privación de la libertad. La figura está establecida en el artículo 18, párrafo primero de la Constitución, el cual dispone literalmente lo siguiente:

> "**Artículo 18.** Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
>
> [...]".

Lo anterior, en relación con el diverso 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone al tenor literal lo siguiente:

> "**Artículo 19.** [...]
>
> El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como

los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud".

De la lectura integral de ambas normas, se desprende que la prisión preventiva es una medida cautelar de **carácter excepcional**, aplicable únicamente en procesos relacionados con la comisión de delitos que ameriten pena privativa de la libertad y, cuando ninguna otra medida cautelar garantice:

1. Que el imputado comparezca en juicio,
2. El desarrollo de la investigación, y
3. La protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Así mismo, se añade una causa adicional que se actualiza si el imputado está siendo procesado o ya ha sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En principio, las disposiciones Constitucionales que establecen la prisión preventiva la sujetan al criterio de dos sujetos activos: el Ministerio Público, quien la puede solicitar y el Juez de Control, a cuyo criterio queda el otorgamiento o la negación de la medida.

Sin embargo, en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 19 de la constitución, el legislador se reservó diversas hipótesis delictivas para las cuales la aplicación de la medida cautelar se realiza de oficio[3]. Es decir, con la actualización de estas hipótesis, se cancela la **excepcionalidad** de la medida, así como los factores de examen previo a su aplicación.

Al respecto, es pertinente recordar los argumentos esgrimidos por el legislador para establecer estos supuestos de excepción que dan lugar a la aplicación directa de la medida cautelar:

"**Prisión preventiva y delitos graves**

A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se

[3] De acuerdo con el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española: "De oficio: *Adm. y Proc.* Dicho de una actuación administrativa o judicial: realizada a iniciativa del órgano administrativo o judicial, actuando en ejercicio de sus funciones, **sin solicitud ni requerimiento previo de un tercero**" (Énfasis añadido). Disponible en línea en: https://dej.rae.es/lema/de-oficio

pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio texto constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional.

Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva.

El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el ministerio público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos.

La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley."[4]

---

[4] México, Congreso de la Unión. *Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. 12 de diciembre de 2007. Disponible en línea en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf

De la lectura de estos argumentos, se desprende que las hipótesis delictivas reservadas en la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, delimitadas con arreglo al principio de taxatividad que rige al Derecho Penal, se establecieron en la Constitución para fortalecer el principio de supremacía constitucional. Asimismo, fueron incorporados en la "Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública" del 18 de junio de 2009 como resultado de una selección de delitos que en aquel momento eran considerados como graves.

Como efectivamente lo argumenta la colegisladora, la relevancia de la incorporación de las hipótesis delictivas establecidas en el artículo 19 de la Constitución, susceptibles de la aplicación de prisión preventiva oficiosa, encuentra su justificación en razones tales como la incidencia delictiva o la grave afectación al orden social y a los bienes jurídicos tutelados. Se trata de delitos de alto impacto cuya probable comisión trae consigo la imperiosa necesidad de suspender el derecho a la libertad del imputado debido a las consecuencias jurídicas y sociales que ha traído consigo la acción cometida, así como al riesgo que supone para la sociedad que el imputado permanezca en libertad.

SEXTA. PARLAMENTO ABIERTO

El 5 de octubre de 2020 se realizó un ejercicio de parlamento abierto para someter la Minuta de mérito al análisis de especialistas y representantes de la sociedad civil organizada, a fin de enriquecer el criterio de esta comisión dictaminadora. A continuación, se transcriben las principales opiniones vertidas en tal ejercicio:

Mtro. Pablo Héctor González Villalobos,
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua.

En su oportunidad, señaló que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos a la luz de lo establecido en diversos tratados internacionales y en tribunales. Lo anterior, dada la existencia de la garantía constitucional consistente en la privación de derechos bajo sentencia firme.

Asimismo, precisó que la detención de una persona se ejerce bajo la actualización de tres supuestos: primero, la existencia una certeza razonable de la existencia de un delito; segundo, la necesidad de cautela ante un riesgo concreto, no abstracto y sujeto a valoración judicial en el que el detenido pueda fugarse o destruir pruebas y tercero, la comisión de nuevos delitos.

Finalmente, enfatizó que el sistema penal anterior (2008), se distingue del actual por su carácter estricto, puesto que, para la sujeción al auto de formal prisión, debía existir certeza de un delito. En contraste con lo anterior, el sistema actual posee una valoración de pruebas mucho más ténue.

Mtra. Estefanía Vela Barba,
Directora Ejecutiva de Intersecta.

En su participación precisó que la medida de la prisión preventiva oficiosa representa un fracaso y un retroceso. Desde su perspectiva, en el sistema actual basta la existencia de alguna sospecha de la comisión o participación de un delito para ser remitido a una cárcel. A su vez, enfatizó que la prisión preventiva oficiosa se contrapone con la prisión preventiva justificada, dado que arriesga a las víctimas y no se realiza la justificación caso por caso.

Por otra parte, señaló que en el dictamen se observa una vulneración del entendimiento de la prisión preventiva oficiosa. Es menester recordar que, esta medida prisión fue incluida en el año 2008, dado el contexto del narcotráfico; sin embargo, en el 2019 se fueron adicionadas nuevas hipótesis delictivas.

De igual forma, expresó que la reforma no cumple con los propósitos, pues si bien, se ofrece como una alternativa a las víctimas, ésta aumenta la violencia y no se garantiza el acceso a la justicia a las víctimas. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa, debilita a las instituciones y las corrompe, puesto que convierte a las Fiscalías en organismos ineficientes. Además, señaló que conviene analizar la prisión preventiva oficiosa ante el panorama de una pandemia, ya que ante el caso del SARS-Cov2(COVID-19), esta medida representa un riesgo debido a la alta población carcelaria.

Finalmente manifestó que, en los primeros años de implementación del sistema, se observó un mayor número de mujeres en prisión sin sentencia que hombres. Recalcó que México ratificó la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en virtud de la cual, se prohíben leyes que vulneran derechos, así como medidas que representan un efecto desproporcionado sobre las mujeres. En consecuencia, la aprobación de esta reforma violentaría el mandato contra la CEDAW y representa machismo legislativo.

Mtro. Alejandro Ponce de León,
Fundador de Institución RENACE A.P.B.

Señaló la existencia de consideraciones en el dictamen que rebasan la reforma constitucional de 2019. Tal es el caso de la consideración de "armas de juguete", que además de tipificar la violencia y relacionarse con el derecho penal sustantivo, representa una contradicción con lo estipulado en el artículo 19 constitucional.

Asimismo, manifestó que la conversión de una prisión preventiva a oficiosa genera la imposición de una pena anticipada. En este sentido, también es entendida una medida arbitraria, toda vez que no cumple con la necesidad de cautela.

Por otro lado, puntualizó que el segundo párrafo de artículo segundo del dictamen se establece que la aplicación de prisión preventiva oficiosa depende la gravedad de las conductas. Sin embargo, se contemplan delitos cuya gravedad e incidencia no justifican su imposición.

Dr. Octavio Amezcua Noriega,
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Manifestó que la imposición de la prisión preventiva oficiosa vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la integridad personal, dadas las condiciones de hacinamiento que se presentan en las cárceles. A su vez, precisó que la Alta Comisionada emitió un comunicado a todos los países dirigido a limitar la prisión preventiva oficiosa y despresurizar las prisiones.

En este año se han registrado más de 10,000 personas en prisión y esto se debe -en gran medida- a la prisión preventiva oficiosa. Es necesario que el Congreso restrinja aquellos casos en los que se contempla la prisión preventiva oficiosa. Por otro lado, también es indispensable la introducción de salvaguardas como la revisión periódica de la medida o la estricta temporalidad.

Finalmente, puntualizó que, es menester subrayar el mandato constitucional establecido en la reforma de 2019, en virtu de la cual, se incita a los actores políticos a realizar un análisis de la eficacia de la medida.

Mtro. Alejandro Jiménez Padilla,
Coordinador de la Clínica de Defensa Penal Pública de la Universidad Iberoamericana.

Precisó que esta medida no simboliza un gran aporte al combate a la impunidad, ya que solo el 0.3% de todos los delitos denunciados son conocidos por el juez. Bajo este contexto, aún existen procesos de denuncias sumamente burocráticos y policías con baja capacitación, por lo que no es posible afirmar que las personas que se encuentran en prisión sean realmente culpables.

En este sentido, enfatizó que la reforma de 2019 ha representado un incremento de la población carcelaria. Se estima que actualmente existen poco más de 6,000 personas encarceladas esperando a ser juzgadas.

Asimismo, expresó que la inclusión del uso de armas réplica incita la extorsión y siembra de estos artefactos por parte de los policías. Por otra parte, advirtió que la tipificación de conductas relacionadas con el ataque a las vías de comunicaciones representa una problemática ante la protesta ciudadana.

Lic. Susana Camacho Maciel,
PROJUSTICIA

Expresó que la ampliación del catálogo de delitos graves implica otorgarle mayores atribuciones a las Fiscalías para señalar un hecho delictivo. No obstante, el sistema de justicia elegido no dio los resultados esperados.

En este tenor, es indispensable considerar la regulación de las investigaciones en cuanto a las detenciones, dado que la política pública empleada se reduce a detener y posteriormente investigar. Ante esta situación, sugirió analizar las carencias existentes en el sistema de investigación y precisó que la reforma constitucional derivó en un mensaje político y no jurídico.

Las categorías abiertas y la inclusión de armas de juguete y delitos contra la salud en el dictamen simbolizan un peligro. Por lo tanto, es necesario restringir los supuestos de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

SÉPTIMA. Esta Comisión dictaminadora reafirma que el proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos concatenados cronológicamente, para la formación de leyes, así como para reformar la Constitución y las leyes secundarias. Tiene como características:

1. Ser constitucional, ya que su procedimiento se expresa en los artículos 71 y 72 de la Constitución;

2. Ser formal, en función de que su validez debe respetar los procedimientos previstos en las normas constitucionales; y

3. Ser bicamaral, ya que requiere de la participación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Ambas cámaras tienen igualdad de poder y facultades, salvo en los casos correspondientes al ejercicio de las facultades exclusivas de cada una. Por lo tanto la deliberación en torno a la legislación debe darse en ambos recintos[5].

De acuerdo con el sistema bicameral establecido en la Constitución, la división de poderes dentro del Poder Legislativo es simétrica e incongruente[6]. Simétrica porque las cámaras son democráticamente electas; por tanto, con legitimidad democrática y con poderes constitucionales iguales o ligeramente desiguales. Por otro lado, son

---

[5] "Proceso legislativo". Sistema de Información Legislativa, Diccionario de Términos Parlamentarios, Secretaría de Gobernación. Disponible en línea en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=192

[6] Jorge A. Schiavon, Bicamarelismo. Configuración Institucional, pág. 129-131.

cámaras incongruentes porque la forma de elección es distinta. Mientras la Cámara de Diputados se rige por un criterio poblacional en virtud que sus integrantes son electos por distrito, la Cámara de Senadores es electa por la representación territorial de las entidades federativas.

El bicameralismo cumple con diversas finalidades: equilibrar la fuerza del Ejecutivo y del Congreso; moderar la aprobación precipitada de los asuntos parlamentarios por parte de diputados o senadores y propiciar la detección de errores o carencias de la cámara de origen en esta función. Lo anterior, a través de la intervención de la cámara revisora en el analisis y dictaminación en sentido negativo o positivo, según su propio criterio deliberativo, de una iniciativa de ley, decreto o proyecto legislativo que ya ha sido aprobado previamente por la Cámara de origen.

Bajo esta esta tesitura, en el caso en concreto del este proceso legislativo bicamaral, esta Cámara de Diputados funge como Cámara revisora, la cual debe cumplir con una doble función: 1) la del control de la legalidad del procedimiento aprobatorio adquirido en la primera cámara; y 2) la de revisión del objeto y fin del proyecto de ley o decreto aprobado. De este modo, la segunda aprobación que hace la cámara revisora debe comprenderse como la aprobación final, necesaria para que el proyecto avalado por la Cámara de origen se perfeccione y se convierta en ley[7].

En otras palabras, una segunda discusión en sede de la Cámara revisora constituye una especie de control legislativo interno de racionalidad e, incluso, de constitucionalidad. Con ello, se garantiza que las decisiones de política legislativa no agoten su deliberación en un solo órgano, lo cual consolida su legitimidad democrática, así como su racionalidad y primordialmente su viabilidad jurídico-constitucional.

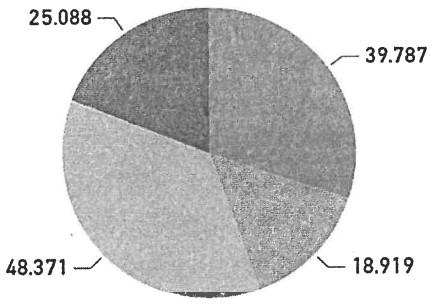
En ese orden de ideas esta Comisión de dictamen -en tanto integrante de la Cámara revisora del proceso legislativo en cuestión- ha realizado un amplio examen del contenido de la Minuta de mérito. Adicionalmente a los criterios ya expresados, esta Comisión no omite señalar el particular interés en evaluar el ejercicio del principio de excepcionalidad que rige a la prisión preventiva oficiosa.

---

[7] Berlín Valenzuela, Francisco, Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 1997, pág. 102 - 103.

Tras un análisis integral, se advierte que la colegisladora excluyó diversos supuestos normativos correspondientes a algunas hipótesis delictivas, en aras de brindar un menor grado de lesividad en la esfera de derechos de la ciudadanía. Con ello, se garantiza en el ámbito legislativo la excepcionalidad de la aplicación de tal medida, aspecto que adquiere especial relevancia a partir del análisis de las condiciones reales de su aplicación.

De acuerdo con datos oficiales del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, actualizados el 30 de junio de 2019, desde 2017 han sido imputados 132,165 personas, de los cuales al 81% (107,077) se les impuso alguna medida cautelar. Sin embargo, al desglosar la aplicación de las medidas cautelares, resulta que el 30.1% de los imputados han recibido prisión preventiva oficiosa, y el 14.3% ha recibido prisión preventiva justificada, lo cual suma un total de 44.4% de los imputados con prisión preventiva, como se expone en la siguiente gráfica[8]:



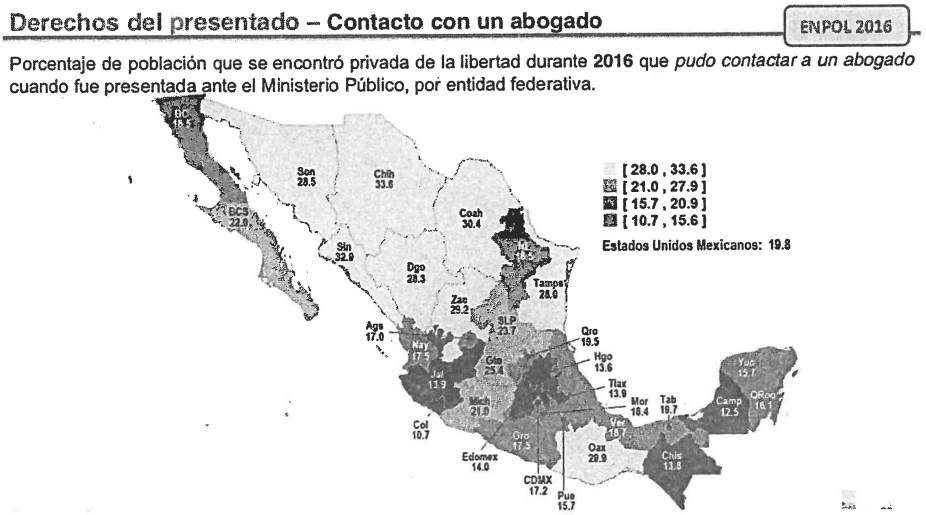
Prisión Preventiva Oficiosa	30,1 %
Prisión Preventiva No Oficiosa	14,3 %
Otra Medida Cautelar	36,6 %
Sin Medida Cautelar	19,0 %

Fuente: Modelo de Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del SJP (2019)

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias que precedieron o sucedieron la aplicación de la medida, es indispensable hacer una revisión de los datos disponibles de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, presentados en julio de 2017. De acuerdo con la encuesta de referencia, sólo el 19.8% de la población privada de la libertad pudo contactar a un abogado en

[8]Modelo de Evaluación y Seguimiento de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, actualizado al 9 de agosto de 2019. Disponible en línea en: https://sesnsp.net/mes/

el momento de su presentación ante el Ministerio Público, como se muestra en el siguiente mapa[9]:



Fuente: INEGI, ENPOL, 2016.

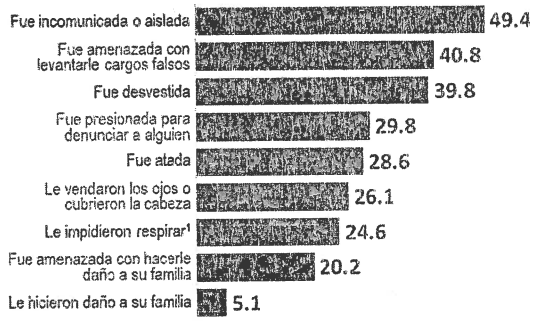
De lo anterior, se desprende que la mayoría de las personas presentadas ante el Ministerio Público no están en aptitud de comprender el alcance de la medida cautelar. En relación con lo anterior, los imputados son susceptibles de presiones para modificar sus declaraciones y, con ello, alterar los hechos que motiven la determinación de la prisión preventiva. Esto queda de manifiesto con las cifras que demuestran los casos de violencia psicológica de la cual son objeto las personas durante su presentación en el Ministerio Público, entre las cuales resalta el 40.8% de personas que fue amenazada con levantarle cargos falsos:

[9] INEGI, *Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Principales Resultados.* Julio. Disponible en línea en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

Violencia psicológica durante la presentación ante el Ministerio Público ENPOL 2016

De la población que se encontró privada de la libertad durante **2016, 49.4%** fue *incomunicada o aislada* durante su estancia en el Ministerio Público, mientras que **40.8%** fue *amenazada con levantarle cargos falsos.*

Situaciones de violencia psicológica durante la etapa de presentación ante el Ministerio Público identificadas por la población privada de la libertad, 2016



Fuente: INEGI, ENPOL, 2016.

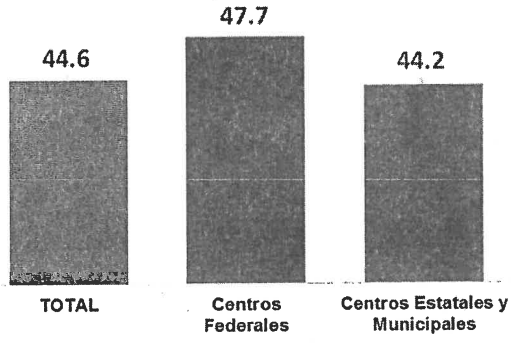
Ahora bien, ya en la etapa del cumplimiento de la prisión preventiva como medida cautelar, debe resaltarse que el 45.6% de las personas privadas de la libertad compartieron la celda con más de cinco personas.

Finalmente, como un dato trascendente para los fines del presente Dictamen, esta Comisión advierte que sólo el 44.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional identificó algún tipo de separación por parte del Centro Penitenciario entre los internos que cuentan con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla. En otras palabras, el 55.4% de las personas privadas de la libertad tienen convivencia plena sin distinción de que estén cumplimentando una medida cautelar o compurgando una sentencia condenatoria.

Separación entre sentenciados y procesados — ENPOL 2016

44.6% de la población privada de la libertad a nivel nacional en **2016** identificó algún tipo de *separación* por parte del Centro Penitenciario entre los internos que cuentan con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso de obtenerla.

Población privada de la libertad que identificó algún tipo de separación física entre internos con sentencia dictada y aquellos que se encuentran en proceso. 2016



Fuente: INEGI, ENPOL, 2016.

De lo expuesto con anterioridad, se concluye que existen diversos retos en los procesos concatenados con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; particularmente, en cuanto a la garantía del principio de excepcionalidad. Por esta razón, esta Comisión considera acertada la determinación de la colegisladora en cuanto al ejercicio de tal principio en sede legislativa y así, desde el planteamiento normativo, determinar la imposición de tal medida para un menor universo de casos posibles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y para efectos del Apartado A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, estimamos procedente **aprobar en sus términos** la Minuta de mérito, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y **se adicionan** el párrafo cuarto, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de **abuso o violencia sexual contra menores**, delincuencia organizada, homicidio doloso, **feminicidio,** violación, secuestro, trata de personas, **robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares,** delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, **delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea,** así como **los** delitos

graves que determine la ley **en** contra **de** la seguridad de la **nación**, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, **delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada,** establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa **de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.**

...

I. a **X.** ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a III. ...

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad **o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento.** La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la **Fiscalía** o **de la persona funcionaria en la cual** delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Organo especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y **se adiciona** un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de **tres** a **ocho** años de prisión y de **cien** a **cuatrocientos** días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83 Ter.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de **cuatro** a siete años y de **cien** a **trescientos** días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.- ...

Artículo 83 Quat.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de **cuatro** a **siete** años y de **cien** a **trescientos** días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de **cuatro** a **ocho** años y de **doscientos** a **cuatrocientos** días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 160, primer párrafo; se adiciona un párrafo tercero al artículo 420, y **se derogan** las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, **venda** o acopie sin un fin lícito **o con la intención de agredir,** instrumentos que puedan ser utilizados para **el ataque o la defensa**, se le impondrá prisión de **uno** a **seis** años **y** de **quinientas** a **mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el** decomiso.

...

...

Artículo 162.- ...

I.- Se deroga.

II.- ...

III.- Se deroga.

IV.- y **V.-** ...

...

...

Artículo 420.- ...

I. ...

II. ...

II Bis. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480.- ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis, 84, **84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis,** de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a **X.** ...

...

Artículo Noveno.- Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533.- A quien dañe, **perjudique** o **destruya** las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o **interrumpa** la construcción de dichas vías, o total o parcialmente **interrumpa** o **deteriore** los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, **se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.**

...

Artículo 534.- Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, **se le impondrá** multa de **doscientas** a **quinientas veces** el **valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.**

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 6 del mes de octubre de 2020.

13-10-2020
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 266 votos en pro, 127 en contra y 2 abstenciones.
Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 6 de octubre de 2020.
Discusión y votación 13 de octubre de 2020.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

Diario de los Debates

Ciudad de México, martes 13 de octubre de 2020

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén Cayetano García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en lo que va de esta legislatura, la Comisión de Justicia de esta honorable Cámara de Diputados se ha caracterizado por su excepcional estudio y dictaminación de iniciativas trascendentales.

El día de hoy, tengo el honor de presentar, ante esta soberanía, un dictamen que da cumplimiento a un mandato derivado de una reforma al artículo 19 constitucional de 2019, que reafirma nuestras responsabilidades como ente configurador de normatividad.

En el artículo segundo transitorio de dicha reforma se encomendó a este Poder el armonizar las leyes secundarias conforme a las disposiciones constitucionales, en materia de prisión preventiva oficiosa. Derivado de lo anterior es que el dictamen sometido a consideración de este honorable pleno viene a dar cumplimiento a este deber.

Este proyecto reforma nueve leyes y más de 15 artículos. Las modificaciones son realizadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de

Hidrocarburos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Penal Federal, la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Vías Generales de Comunicación.

De manera detallada el dictamen incorpora, en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la procedencia de prisión preventiva oficiosa, los delitos de: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, delitos de corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y delitos en materia de desaparición forzada de personas.

Podemos constatar que los delitos antes citados son de carácter grave y lesionan significativamente el tejido social, impidiendo la correcta administración de justicia en favor de la sociedad mexicana. Aunado a lo anterior, el dictamen permite la posibilidad de que, aun implementada la prisión preventiva oficiosa, las partes pueden acceder a un acuerdo reparatorio y, por efecto, la sustitución de la medida cautelar y de prisión preventiva.

Se puntualiza entonces, que la armonización que propone el dictamen, a todas luces viene a reforzar el sistema jurídico mexicano, poniendo en sintonía la Ley Fundamental y los compendios legales secundarios.

También es de resaltarse que el dictamen propone la agravación de penas para los delitos de portación de armas de fuego, actividad que ha comenzado a ser más recurrente en el territorio mexicano y que pone en peligro a miles de mexicanas y mexicanos. Aunado a esto, se mejora la descripción para ciertos delitos en materia de importación, venta y acopio de instrumentos que puedan ser utilizados para atacar.

El dictamen es trascendental y necesario, pues no solo se trata de dar cumplimiento a una obligación emanada de una reforma constitucional, sino que se trata de una armonización legislativa que otorgue mayor certeza jurídica a la población mexicana y mejore el actuar de los órganos jurisdiccionales.

Consecuentemente, es por eso que los invito, compañeras y compañeros, a aprobar este dictamen. Demos cumplimiento al mandato constitucional de 2019. Sumemos esfuerzos en la consolidación de cuerpos normativos, que permitan establecer mecanismos que contribuyan al combate de la delincuencia y la corrupción.

Hagamos nuestro trabajo legislativo, exhortando a las instituciones de procuración e impartición a elevar los más altos principios de la justicia para bien de los justiciables. Que se cumpla el ideal de Morelos: Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García.

En términos del artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidenta. Muy buen día tengan todos ustedes. El dictamen que hoy nos ocupa no solo tiene como fin dar cumplimiento al Segundo transitorio de la reforma constitucional del artículo 19, en materia de prisión preventiva oficiosa, sino que representa la construcción de un marco jurídico efectivo para forjar un verdadero Estado de derecho, donde la justicia sea una realidad y que exista más allá de la letra de las leyes.

Con la reforma que hoy nos ocupa, esta Cámara de Diputados contribuye a la procuración de justicia y la persecución de los delitos en beneficio de los ciudadanos de este país. Muy pocas veces esta Cámara puede contribuir con algo tan tangible y directo que genere beneficios a miles de ciudadanos.

Con la reforma que hoy nos ocupa, feminicidas, ladrones de casa-habitación, ladrones de transporte, portadores de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, no podrán salir de la cárcel en caso de ser detenidos en flagrancia como viene sucediendo hasta el día de hoy. Todos los días salen noticias en la que delincuentes entraron y salieron de las cárceles a pesar de ser detenidos en flagrancia, para seguir delinquiendo.

Lo anterior, de razón de que nuestro sistema legal permite que estos delincuentes puedan llevar su proceso en libertad, lo que resulta inexplicable para las víctimas, minando con ello la confianza en nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Con la reforma que hoy nos ocupa, el ladrón de casa-habitación, el feminicida, el ladrón a transportistas y quien porte armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros, llevarán su proceso en la cárcel.

Sobre esta reforma, hoy vamos a escuchar diversos argumentos en contra de la misma, argumentos que fueron planteados por diversos grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia, los cuales resumo de forma genérica de la siguiente forma:

La prisión preventiva es violatoria de tratados internacionales, pues esto atenta contra la presunción de inocencia. Otro argumento es que la participación del Ministerio Público es discrecional y no puede quedar en sus manos el ejercicio de la prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se presta a corrupción.

Como respuesta a estos argumentos, les comparto las siguientes reflexiones. La situación delincuencial en México no es la misma a la que sucede en Suiza, Suecia, Noruega, entre muchos otros países. En México el número de delitos que afectan a los ciudadanos mexicanos son enormes, infinitivamente superiores a los países que mencioné.

Por ello, al legislar debemos reconocer donde vivimos, nuestra realidad y los problemas que debemos enfrentar como sociedad. Es un error, para mí, compararnos con países con realidades distintas o pretender importar soluciones de otros países por modas que se alejan a la realidad que viven millones de mexicanos.

La reforma que hoy nos ocupa tiende a una realidad delincuencial en México que debe ser atendida de forma particular y con acciones concretas del Estado mexicano, acciones como las que hoy se ponen a consideración de este pleno.

Si el día de mañana logramos controlar las tasas delincuen-ciales tan altas que tenemos, entonces sí procuraremos ser más garantistas conforme a los estándares internacionales. Hacerlo antes es simplemente darnos un tiro en el pie.

Por último, el Ministerio Público es quien ejercerá en primera instancia la prisión preventiva oficiosa, pues es él quien tiene la inmediatez y el conocimiento de los hechos en el campo. El juez valorará con posterioridad si se perfecciona o no la prisión preventiva oficiosa, teniendo el imputado todas las garantías procesales para defenderse.

Por tanto, argumentar la existencia de una violación a la presunción de inocencia es un argumento falaz, por decir lo menos. Por las razones anteriores, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gómez Alcantar. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en México el sistema de justicia penal acusatorio privilegia el derecho de las personas que cometen un delito a seguir su proceso en libertad, en tanto no se compruebe su responsabilidad penal.

Sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada, contiene disposiciones que violan lo previsto en las convenciones internacionales, previendo medidas cautelares, como la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos, con el pretexto de garantizar que la persona imputada esté presente en el desarrollo del proceso y se proteja a las víctimas.

Debemos ser conscientes de que las carencias de nuestro sistema de justicia penal son muchas y, debido a ello, la justicia en nuestro país ni es pronta ni es expedita. Este fue uno de los principales problemas que se buscó resolver con la reforma en materia de seguridad y justicia en 2008.

La sobrepoblación de personas procesadas no sentenciadas en las cárceles, que en ocasiones esperan años para que pueda determinarse su culpabilidad fue otra de las razones. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que las modificaciones contenidas en este dictamen únicamente incidirán en agravar el problema, incrementando la sobrepoblación y en hacinamiento en las cárceles, en su mayoría con personas de escasos recursos, cuyas posibilidades de defenderse son exiguas.

La prisión preventiva constituye una restricción temporal e instrumental de la libertad a un sujeto involucrado en hechos que tipifican como delito, que tiene como fin garantizar su presencia en el juicio oral y evitar que obstruya con su actual desarrollo de la investigación en el proceso.

Como intervención en la esfera privada de un individuo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por la austeridad vulnera el derecho a la libertad, a la igualdad, la presunción de inocencia, así como la correcta implementación de los principios de legalidad, imparcialidad, contradicción y proporcionalidad del proceso, causando con ello daños psicológicos y materiales irreparables.

El grupo parlamentario de la mayoría se justifica en el raquítico argumento de que con la aprobación de este dictamen se estaría atendiendo el mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que ellos mismos aprobaron.

Sin embargo, con la minuta en discusión estamos haciendo caso omiso del llamado que nos hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inicios de 2019, para derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, exhortando en su momento a los órganos legislativos, al no aprobar una reforma contraria a los estándares interamericanos en materia de libertad, que atenta contra la presunción de inocencia, lo que constituye una de las garantías judiciales más elementales dentro del ámbito penal. Es decir, lo que hoy aprueban puede ser constitucional, pero, definitivamente, es inconvencional y violatorio de los derechos humanos.

Debemos avanzar en la extinción del segundo párrafo del artículo 19 constitucional y no en la ampliación de los delitos a los cuales se aplica. Debemos avanzar en el respeto a los derechos humanos y no en propuestas electoreras que no abonan para garantizar el debido proceso.

Es de recordarse que en el año 2002 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, en su visita a México, recomendó al Estado mexicano modificar la legislación interna, de modo de que esta adopte las normas internacionales, en especial sobre la presunción de inocencia, la flagrancia, la proporcionalidad de las penas en delitos denominados graves, así como los beneficios de preliberación e iniciar un debate en profundidad sobre la necesidad de reformar el sistema penal y procesal penal.

Ante el justificado reclamo social que exige reducir la impunidad, las y los legisladores del grupo parlamentario de la mayoría se han inclinado por el populismo penal, dejando de exigir a nuestras instituciones los estándares de actuación que corresponde al nuevo sistema penal y que garantizan los derechos humanos.

No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por altos índices delictivos y una cifra negra superior al 90 por ciento. Por ello, en un debate que gira mayormente en torno a suposiciones, miedos y prejuicios, el análisis de la evidencia nos indica, efectivamente, que tener más personas acusadas dentro de las cárceles no implica tener un menor número de víctimas afuera.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen que ignora la normatividad internacional, desconoce los derechos humanos y condena a aquellos que menos tienen a sufrir por la ineficiencia de las instituciones de procuración de justicia.

El Grupo Parlamentario del PRD, como lo hemos hecho históricamente, seguirá impulsando la derogación de figuras como el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, que transgrede, sin lugar a duda, los derechos humanos. Es cuanto, presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Tiene la palabra el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en el PES, durante esta LXIV Legislatura, nos hemos comprometido en establecer mecanismos y acciones, a fin de disminuir acabar con los lastres de la inseguridad y la corrupción que seguimos cargando desde varios sexenios.

Por ello, nuestro grupo parlamentario fue partícipe activo y votó a favor de la reforma constitucional del artículo 19, a fin de establecer nuevos tipos penales en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Destacando entre ellos el feminicidio, el abuso sexual contra menores, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción, el robo de hidrocarburos y la portación de armas de fuego de uso exclusivo.

En dicha reforma nos comprometimos a que dentro de un plazo de 90 días se realizaría su precisión en la legislación secundaria, para dar cumplimiento al principio de exacta aplicación de la ley.

Por ello, en el PES creemos que lo correcto es afianzar, mediante las reformas a las leyes secundarias, lo establecido en el precepto constitucional, a fin de cerrar caminos que eviten que los que dañan a la sociedad y a las familias y a los recursos de todas y todos los mexicanos se sustraigan de la acción de la justicia, siempre bajo el principio de que esta medida cautelar es excepcional. Por lo que estamos limitando su aplicación solo a determinadas conductas, a fin de que los imputados enfrenten un juicio justo por los posibles actos delictivos que hubiesen cometido.

En Encuentro Social estamos convencidos de que la reforma planteada consolidará la estrategia que se ha emprendido para el fortalecimiento del tejido social y el orden institucional, a fin de que todas las familias mexicanas se puedan desarrollar en un ambiente de bienestar.

A las y los ciudadanos que nos ven y nos escuchan, les decimos: seguimos trabajando por su seguridad y por proteger el bienestar de todas y todos, dotando de ordenamientos confiables y claros que permitan a la autoridad judicial realizar su trabajo de manera eficaz. Con esta reforma, reafirmamos que el PES siempre actuó conforme a lo socialmente correcto, cumpliendo los compromisos que hizo con el pueblo de México: acabar con la corrupción y mejorar la seguridad de las familias mexicanas.

Basta de personas que con dinero público y con recursos de la nación se enriquezcan. Basta de abusos contra las mujeres. Basta de abuso sexual contra menores. Basta de impunidad de los criminales que dañan a nuestra población. En el PES buscaremos acabar con el cáncer que ha afectado por muchos años a nuestro país, logrando con ello un país de crecimiento con seguridad para mujeres y menores de edad, todo en un ambiente de bienestar que permita el desarrollo adecuado de las familias mexicanas.

En Encuentro Social, sabemos que la libertad de las personas es un derecho fundamental, por eso, reconocemos que la aplicación de esta medida cautelar respectiva será de carácter excepcional y que solo se aplicará al imputado para garantizar el orden social, y siempre con el pleno respeto al debido proceso.

Finalmente, debemos reconocer que la prisión preventiva oficiosa no es determinante para disminuir la delincuencia en el país, por lo que esta reforma debe acompañarse de una urgente capacitación y profesionalización de los operadores del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, cuya labor es fundamental para lograr el éxito en una imputación.

Un tema pendiente en el que Encuentro Social ha trabajado y seguirá impulsando por el bien y el bienestar de todas las familias de México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cruz Aparicio. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. Todos conocemos que en 2018 se llevó acabo una gran reforma en materia de justicia penal, en la que se privilegiaron los principios para garantizar la seguridad y la justicia para los mexicanos.

En aquel esfuerzo propuesto por el Ejecutivo y diversas iniciativas de ambas Cámaras, se modificaron más de 10 artículos de nuestra Constitución Política. El principal objetivo de gran giro a la procuración y administración de justicia fue el responder a la exigencia ciudadana de transformar y dar un sentido más humano a la justicia

penal, preponderando el principio de la presunción de inocencia, la cercanía, confiabilidad y el oportuno y transparente actuar de las instituciones.

En dicha reforma, la prisión preventiva se limitaba como caso de excepción para cuando otras medidas cautelares no fueran suficientes para garantizar que el imputado compareciera a juicio y garantizar los derechos de la víctima, los testigos y la comunidad en general cuando se tratara de casos de reincidencia en delitos dolosos y un catálogo muy concreto y específico de delitos.

Sin embargo, en el ánimo de darle instrumentos al gobierno federal para enfrentar la delincuencia organizada y por los delitos que más afectan a la sociedad, como argumento, el 19 de febrero de 2019 se aprobó por esta soberanía la reforma constitucional al artículo 19 en materia de prisión preventiva oficiosa, de donde, mediante el artículo transitorio segundo se mandató la adecuación de las correspondientes legislaciones secundarias con la finalidad de armonizar y dar vigencia a esa reforma constitucional.

Pero, lo digo con toda claridad, la minuta que hoy se debate, que dicho de paso, no se le permitió, como diario, ninguna modificación en su proceso legislativo aquí en la Cámara de Diputados, en lugar de transitar hacia un régimen garantista en el que el Ministerio Público deba probar alguna de las circunstancias a favor de la justicia y las presuntas víctimas del delito, más bien fortalece a un sistema punitivista que busca utilizar la prisión preventiva oficiosa como una medida de castigo y persecución social de la seguridad. Nada más alejado de la realidad que vive nuestro país.

En la presente propuesta se incorporan reformas que no corresponden al fin específico de la armonización en materia preventiva oficiosa. Se trata de reformas de corte sustantivo en materia penal que no guardan relación con las hipótesis delictivas contenidas en la Constitución, por lo que se extralimita en sus alcances afectando e incluyendo un desdoble de más de 150 conductas delictivas diferentes a las que aprobamos en la reforma constitucional.

La reforma del Poder Judicial es fundamental para atender de manera integral los alarmantes porcentajes de personas privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia condenatoria, quienes en estricto sentido ya están purgando una condena sin sentencia.

Esta minuta, por mucho, no resuelve el tema de la impunidad y no atiende la necesidad urgente de restablecer la paz y la seguridad en el país. Lo que como legisladores tenemos que hacer es revisar a fondo la figura y el actuar del Ministerio Público que, dicho de paso, ahí también tenemos mucho que profesionalizar y fue una promesa cuando se hizo la reforma constitucional.

Ante el justificado reclamo de la exigencia social de reducir la impunidad, los legisladores de la hoy mayoría han declinado a mejor llevar al populismo penal. No debería sorprender la popularidad de la propuesta en un contexto caracterizado por los altos índices delictivos y la cifra negra de impunidad.

Por ello, en un gran debate que gira mayormente en torno a las medidas inquisitorias, sin tomar en cuenta la presunción de inocencia, buscamos analizar con evidencia si efectivamente tener a más personas acusadas dentro de las cárceles implica un menor número de víctimas afuera.

Los diputados ciudadanos votaremos en contra de esta minuta, ya que defrauda la confianza que le dimos al gobierno federal, aprobando temas como la Guardia Nacional, la Fiscalía General y este que fue el artículo 19. Al contrario de fortalecer a las policías municipales, las policías estatales, la profesionalización de los Ministerios Públicos hemos visto recortes a los recursos en materia de seguridad.

Por eso hoy ya no existe ese voto de confianza, por eso hoy ya no confiamos en la estrategia fallida del gobierno federal, por eso hoy los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta reforma que es insuficiente y no cumple con las expectativas de combatir la impunidad de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar. Tiene la palabra el diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas leyes penales para ponerlas en concordancia con las reformas a la Constitución General de la República en su artículo 19, en materia de prisión preventiva oficiosa.

En la reforma constitucional incluimos diversos tipos penales por cuya comisión el juez de la causa podría dictar de manera oficiosa la prisión preventiva, con el propósito de que el presunto delincuente no se sustraiga de la acción de la justicia.

Hoy, modificamos, a partir de la minuta enviada por el Senado de la República, nueve ordenamientos de leyes secundarias. El primero de ellos se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir en el artículo 167 las causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, se replican las hipótesis delictivas del artículo 19 constitucional.

Es necesario recordar que el robo a casa-habitación agravia a los mexicanos que son víctimas de la delincuencia. Por primera vez se sanciona penalmente el uso de programas sociales con fines electorales, que era una práctica común en anteriores gobiernos.

Con la aprobación de la presente reforma, el gobierno del presidente de la República da la cara a la sociedad, mandando un mensaje claro de que ningún servidor público del gobierno federal podrá distraer los programas sociales con fines político-electorales, quien lo haga se irá a la cárcel.

También se introducen a la legislación penal los delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones. Indudablemente, la sociedad mexicana se manifestó en 2018, harta por la gran corrupción de los gobiernos de 1988 a 2018. El erario público fue visto como caja sin fondo, donde podían robarse de manera impune el esfuerzo de los mexicanos en el pago de sus contribuciones fiscales, sin que hubiera sanción para los responsables.

Para quienes afirman que este gobierno no se ocupa de los feminicidios, hoy les decimos que quienes cometan estos delitos estarán restringidos de su libertad a lo largo del proceso penal. Como sociedad, tenemos la obligación de velar porque cualquier agresión a las mujeres, sea física o de orden sexual, no quede sin castigo. De igual manera, el secuestro, que agravia a las familias, generando una gran preocupación por la suerte del familiar privado de su libertad, no quedará impune.

Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad mexicana reclama que el Estado mexicano garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial. Y que todas aquellas personas que delinquen sean sancionadas. Al Estado mexicano corresponde el monopolio legítimo de la fuerza. Y esta debe ser usada para que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia funcionen adecuadamente.

Debemos fortalecer a las instituciones de prevención del delito y, una vez que esto se llega a materializar, que los ministerios públicos y las policías a su cargo tengan la capacidad de investigar adecuadamente. Es imperativo del Estado mexicano y de la sociedad restañar el tejido social para inhibir las conductas delictivas. Pero, que éstas, cuando se cometan, no queden impunes.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aún hay temas pendientes en esta gran agenda. Para la seguridad de los mexicanos estamos considerando en esta reforma el robo al transporte de carga. Pero no hemos todavía considerado el robo al transporte público de pasajeros, que cada día se incrementa y flagela a la clase más desprotegida de este país.

Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará el dictamen en sus términos, con la convicción de que estamos dotando a las instituciones de los instrumentos legales que les permitirán realizar mejor tarea en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Con su venia, diputada presidenta. Locura, compañeras y compañeros, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Y, ¿por qué viene al caso esta frase atribuida a Albert Einstein, en este momento? Porque aquí lo único que estamos haciendo, a través de esta reforma que se propone el día de hoy, es incrementar aún más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Permítanme recordarles, compañeras y compañeros, que existe un catálogo desde el 2008, en el que por ejemplo, el homicidio está incluido y este delito no solo no ha disminuido, sino se ha incrementado conforme lo dicen cifras oficiales —no me lo crean a mí— y está desde 2008.

Cuando dimos aquí la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional, nosotros, el Grupo Parlamentario del PRI y varios otros grupos parlamentarios, hicimos nuestra una propuesta que cambiaría esto que les mencioné, que no sería seguir haciendo lo mismo, sino sería obligar al Ministerio Público o a los fiscales, a solicitar ante un juez la prisión preventiva justificada.

Y voy a tratar de explicar esta diferencia, compañeras y compañeros, porque yo aquí he escuchado, aparte de varios discursos que únicamente están dando argumentos políticos, en ningún momento, técnicos, cosas que son inexactas.

En todos y cada uno de los delitos que ameritan prisión, puede solicitar el Ministerio Público esta medida cautelar de manera justificada. Y, nosotros fue lo que dijimos, para no violentar los tratados internacionales de los cuales México es parte; para no violentar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; para hacer caso a las recomendaciones que en reiteradas ocasiones le han hecho a nuestro país, de abandonar la figura de la prisión preventiva oficiosa, nosotros pretendíamos fortalecer la de la prisión preventiva justificada, al quitarle al Ministerio Público la posibilidad de decidir si lleva o no ante un juez, a las personas que vengan acusadas de haber cometido este catálogo de delitos.

Aquí lo que estamos haciendo es únicamente poner más delitos. No tenemos un solo indicio que diga que por haber estado ahí desde el 2008 se ha reducido su comisión. Pero sí, por el contrario, tenemos muchos indicios que nos dicen que esté aprestado a una serie de injusticias y a una serie de violaciones a los principios constitucionales, por ejemplo, que aquí ya se ha mencionado, el de presunción de inocencia.

Y, por ejemplo, por supuesto, el de derecho que tenemos todas y todos a un debido proceso. El querer aquí justificar violaciones a derechos humanos fundamentales como lo es de la libertad, porque la prisión preventiva oficiosa, compañeras y compañeros, es privar a alguien de su libertad sin que haya sido juzgado previamente. Estamos hablando de uno de los derechos más preciados para cualquier ser humano, el de la libertad.

Y aquí, con el pretexto de encubrir las deficiencias de los operadores del sistema, particularmente de los Ministerios Públicos y de las Fiscalías, les queremos hacer su trabajo, como si el hecho de estar ya en la ley por una varita mágica y por el discurso que ustedes aquí están diciendo, y que también dice este gobierno, se fueran a mejorar las cosas.

Les recuerdo que estamos en el año más violento del que se tiene registro y que esta reforma que ustedes están haciendo es cosmética y están engañando a las y los mexicanos diciéndoles que, por el simple hecho de que el feminicidio ahora esté en ese catálogo, va a dejar de ocurrir.

Dejará de ocurrir cuando exista una estrategia en seguridad que sea correcta, que otorgue presupuesto a los operadores de justicia para que se puedan capacitar y para que puedan también tener una policía mejor de proximidad, para que pudiéramos llevar a cabo un programa de prevención del delito.

Esto, compañeras y compañeros que ustedes plantean, no es una estrategia de seguridad y tampoco será el resultado que estamos buscando. La historia nos juzgará a todos y cada uno de nosotros y la realidad se seguirá imponiendo, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hace aproximadamente dos siglos, en el debate académico de los teóricos del derecho penal, se señalaba que el encarcelamiento era la base y el edificio casi entero del sistema penal. Se señalaba que este sistema de encarcelamiento era producto del avance de ideas modernas.

A casi dos siglos de distancia de que estas ideas se convirtieron en el pilar central de la tradición penalista en el mundo, esto ha cambiado, esto se ha transformado y estas tesis han quedado rebasadas porque demostraron su ineficacia. Pero, en México, es evidente que hay quienes insisten en hacer de este modelo punitivista e inquisitorio el centro de la política criminal.

En contraparte a esta visión que permeó prácticamente durante todo el siglo XX con el sistema inquisitivo y después el sistema mixto que reproducía el mismo sistema, se impulsó la construcción de un nuevo sistema de justicia penal, que nació a raíz de la reforma constitucional de 2008 y entró en pleno vigor en 2016, con la expedición del Código Nacional y con la obligación de las entidades federativas de adoptar ese sistema, basado en principios como el de la legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El nuevo sistema de justicia se concibió con el objeto del esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la garantía de la reparación del daño.

Por primera vez, se puso a la víctima como parte y centro de este proceso. Sin embargo, en su diseño se conservaron resabios de una política punitivista. El mayor ejemplo de ello lo es justamente este catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional.

Este catálogo de delitos que establecía excepciones a la prisión preventiva justificada, aplicada como medida cautelar a petición del Ministerio Público, cuando pudiera correr peligro la víctima o cuando el imputado pudiera extraerse de la acción de la justicia o en otros casos excepcionales. Sin embargo, se estableció un catálogo para que en una serie de delitos el juez debiera otorgar la prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, desde que es posible aplicar dicha medida de manera oficiosa, se han advertido dos efectos negativos graves. Uno, que se incumple con el principio de excepcionalidad que establece que esta medida se debería aplicar solo cuando otras medidas no sean suficientes. Y dos, que la medida se ha aplicado en exceso.

De acuerdo con el Inegi, al menos el 44.4 por ciento, casi la mitad de los imputados procesados, han recibido prisión preventiva, con lo cual queda en evidencia que no se trata de una medida excepcional, sino de la regla en los procesos penales.

Es un asunto grave si recordamos que la sola privación de la libertad podemos estar hablando de una pena anticipada que es violatoria de derechos humanos. En términos institucionales, abrir la puerta a la prisión preventiva oficiosa es grave, pues implica que no se desarrollen capacidades para la persecución efectiva de los delitos.

Lejos de ser una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal. Solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia, no genera incentivos para que los ministerios públicos realicen una investigación integral del fenómeno criminal. Y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario. En pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad.

Durante la discusión a la reforma del 19 constitucional, publicada el año pasado, donde se abre la puerta todavía más a la prisión preventiva oficiosa, sumando nueve conductas más, hubo posicionamientos encontrados al interior de distintos grupos parlamentarios. Y finalmente se introdujeron estas nuevas hipótesis delictivas al Catálogo de la Prisión Preventiva Oficiosa.

Una vez que la reforma constitucional fue publicada correspondía armonizar al Poder Legislativo y, de hecho, la Comisión de Justicia el año pasado emitió un dictamen. Sin embargo, ahora vemos que en un caso lamentable de falta de técnica legislativa el Senado de la República nos envía una minuta que excede con mucho el propósito de armonizar la prisión preventiva en la legislación secundaria.

De manera indebida se pretende engrosar la lista aprobada por este mismo Congreso, creando todavía nuevos tipos penales, modificando otros e incrementando penas en una suerte mal lograda de miscelánea penal. Esta modificación unilateral del Senado representa un fraude a la ley...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Termino, presidenta, gracias. Pues es evidente que este Congreso aprobó la prisión preventiva para los delitos que en ese momento estaban vigentes. Desde Acción Nacional no consentiremos ningún acto que rompa el principio de legalidad, por ello votaremos en contra de este dictamen que claramente va más allá de la sencilla obligación que tenía este Congreso de armonizar la reforma al 19 constitucional. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez. Tiene la palabra la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy avanzamos en la lucha contra la impunidad, respecto de los aspectos técnicos de la reforma al artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en la integración del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ello desde el 12 de abril de 2019, en que se reformó el aludido numeral.

Lo anterior es así porque el nuevo texto constitucional incorporó los delitos de feminicidio; robo en casa habitación; uso de programas sociales con fines electorales; corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Sin embargo, quiero resaltar que el presente dictamen de la Comisión de Justicia no constituye una pena adelantada, ya que es solo una medida cautelar provisional para garantizar que el imputado acuda al desarrollo del juicio y al procedimiento penal. Misma que obliga tanto al fiscal como a los operadores del sistema a realizar su función sin corrupción, con profesionalismo y honestidad.

Y con ello, lograr que el juez de control necesariamente decrete de oficio la prisión preventiva respecto de los delitos establecidos en la Constitución, como lo mandató el artículo segundo transitorio del referido decreto, en el que existe la obligación para el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días, que se realicen las adecuaciones necesarias respeto al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos relativos, así como las hipótesis delictivas contenidas en el artículo aludido 19 constitucional.

Por ello, en la Comisión de Justicia —en la cual soy secretaria— actuamos con responsabilidad y este dictamen que estamos discutiendo en este momento se incorporan las conductas delictivas referentes al artículo 167 del Código Nacional, y con ello, damos cumplimiento a un mandato constitucional, ya que como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estábamos incurriendo en una omisión legislativa y, por ello, los jueces de control no podían decretar de oficio la prisión preventiva oficiosa respecto de los especificados delitos.

Por lo que es de relevancia la incorporación de las hipótesis delictivas en mención para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Y ello, encuentra justificación en razones tales como la incidencia delictiva, la grave afectación al orden social, los bienes jurídicos tutelados de alto impacto, cuya probable comisión traen consigo la imperiosa necesidad de suspender el derecho de la libertad del imputado para que no se fugue, compañeros, y por las consecuencias de estas conductas jurídicas y sociales que traen consigo para que el inculpado cumpla el procedimiento.

Por todo lo anteriormente dicho, es que la prisión preventiva de oficio debe aplicarse en aras de la preservación del proceso judicial, considerando que los delitos que afectan a bienes jurídicos sensibles de las personas y de toda la sociedad, deben estar detenidos los imputados, logrando con ello un real equilibrio entre la víctima y el imputado. Es cuanto, compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Rodríguez. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión. Está a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos.

Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Aquí se ha dado un falso debate sobre la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa ha sido señalada por distintas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como una salida falsa, como una puerta falsa para resolver los problemas de inseguridad.

Lo tuvimos en el parlamento abierto que se llevó a cabo, organizado por integrantes de la Comisión de Justicia de esta misma Cámara de Diputados hace unos días, y lo tuvimos también hace un año cuando se discutió la reforma constitucional. Y es un falso debate porque aquí se ha establecido equivocadamente que la prisión preventiva oficiosa la resuelve el juez.

De ninguna manera es así. De hecho, la crítica principal que se tiene sobre la prisión preventiva oficiosa es que descansa en el eslabón más débil del sistema de justicia penal, el Ministerio Público, la fuerza de enviar a la cárcel a una persona durante el proceso penal.

El juez de control, contrario a lo que se ha dicho aquí, no tiene opción de negar la prisión preventiva; dado que es oficiosa, está obligado a determinarla. Aquí se ha dicho que eso es para aquellos casos en flagrancia. Bien, pero, no solo para esos casos, el Ministerio Público no está limitado para pedir la prisión preventiva oficiosa para casos de flagrancia, también aplica para aquellos casos que el Ministerio Público encuentra en no flagrancia.

Y, más allá de eso, el problema es que ahí pagarán justos por pecadores, donde el Ministerio Público pueda llevar a cabo una acusación equivocada y el juez de control no tenga la facultad constitucional para revisar las pruebas y, en consecuencia, llevar a cabo lo que con derecho corresponde.

Lo lamentable de esta propuesta es que van a pagar justos por pecadores, se va a castigar a inocentes a que lleven a cabo su proceso judicial en la cárcel, estableciendo una pena anticipada.

Aquí se ha dicho, equivocadamente, que ese castigo es de carácter provisional, no es cierto. De acuerdo con la legislación que está establecida en la minuta que se votará el día de hoy, no es provisional el carácter de la prisión preventiva oficiosa. De hecho, su carácter es a lo largo de todo el proceso de justicia penal y solo se resuelve cuando el juez determina la absolución de la pena y eso es hasta el final de un proceso que puede durar más de dos años.

En consecuencia, un inocente puede estar adentro de la cárcel por una medida que ustedes van a votar en este momento. Eso no va a generar de ninguna manera justicia, lo que va a generar es impunidad, porque un inocente va a estar en la cárcel durante el proceso penal y el verdadero responsable va a estar afuera delinquiendo.

La prisión preventiva oficiosa es una falsa salida, compañeras diputadas y diputados, porque le están dando al eslabón más débil del sistema de justicia penal la facultad de meter a la gente a la cárcel, que es el Ministerio Público.

Hay que dársela a los jueces, que sean los jueces quienes valorando las pruebas que presente el Ministerio Público puedan dictar o no la prisión preventiva y la prisión preventiva para los delitos que están en el artículo 19, pero esa se llama prisión preventiva justificada. Que, es decir, sea el juez, sea el juez el que tenga el poder, una vez valoradas las pruebas para determinar quién vive el proceso penal al interior de un reclusorio y quién lo hace en libertad.

Pero, esa facultad ustedes se la están dando al Ministerio Público que es el eslabón más débil del sistema de justicia. Es equivocada esta reforma y así lo han señalado especialistas en materia de derechos humanos del país e internacionales.

Es una puerta falsa porque lo que va a generar es impunidad. Es una puerta falsa porque inocentes van a terminar teniendo su proceso penal en la cárcel, mientras los verdaderos responsables de una conducta delictiva van a estar libres. Es una puerta falsa porque le da al Ministerio Público la posibilidad de corromperse, porque tiene un poder absoluto que no tiene control por parte de los jueces. Es una puerta falsa porque en lugar de apoyar a los jueces locales o federales para que puedan establecer los castigos que consideren consecuentes con la peligrosidad del hecho o del individuo, ustedes están dándoselo al Ministerio Público.

Es una puerta falsa la que están promoviendo, porque, en contra de todas las opiniones de especialistas en la materia, ustedes se empeñan en tratar de confundir una cosa que no lo es. Lo que están haciendo con esta reforma es darle poder al Ministerio Público para determinar quién vive en prisión su proceso penal.

Mentira que se lo están dando al juez. El juez tiene la obligación, al ser prisión preventiva oficiosa, de enviar a la persona que determina el Ministerio Público, durante todo su proceso penal a la cárcel.

Mentira que sea provisional. No lo es, es de manera permanente a lo largo del juicio. Y mentira que están pensando en resolver el problema de impunidad, por el contrario, inocentes van a terminar en la cárcel por culpa de esta legislación mal hecha.

Son más de 150 conductas delictivas que van a tener como consecuencia la prisión preventiva oficiosa, y eso caerá en sus conciencias. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ochoa. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con su permiso, presidenta. Las reformas que hoy se ponen a consideración de esta soberanía son para proteger a la sociedad, para garantizar la vida, para garantizar la libertad, son producto, justamente, de la transformación de la sociedad.

Esta armonización y legislación secundaria es la consecuencia, justamente, de la reforma constitucional al artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa, como ya se ha dicho aquí repetidamente.

Lo que estamos haciendo aquí es continuar el compromiso con millones de mexicanos que se habían sentido tan agraviados con la impunidad que imperaba en nuestro país. No olvidamos la impotencia sentida por tantas víctimas de feminicidios, el huachicoleo, los corruptos y narcotraficantes.

Cuanta gente vio salir casi de manera inmediata bajo fianza a todos estos delincuentes. Muchos de ellos aprovecharon la laxitud de las leyes para escapar y para seguir delinquiendo, para seguir dañando a los mexicanos y a los bienes nacionales, que son de todos nosotros.

Nunca más vamos a permitir la impunidad de los delincuentes. Nunca más que se escapen. Ya no más Lozoyas, ni Duartes y tantos más personajes que huyeron fácilmente gracias al apoyo de la normatividad que había antes. En este sexenio los estamos deteniendo y ahora sí, ahora sí verán el castigo. Y entendemos, claro, por qué esta oposición, que aquí se ha subido antes que yo, votará en contra. Pero, no se preocupen, que también la sociedad los está observando.

Esta es una reforma que refleja la congruencia de nuestro gobierno y la congruencia de nuestro grupo parlamentario en la transformación real de la vida pública. Vamos a pasar de la corrupción galopante a un manejo ético de los recursos.

Hoy el sello de este gobierno es el castigo a la impunidad y a la corrupción. Va a haber total respeto a los imputados. Se mantiene la posibilidad de apelar o de recurrir al amparo. Lo que hace esta regulación en realidad es poner por encima los derechos de todo el colectivo. Además, los derechos de las víctimas en este país son los que estarán más resguardados.

Estas reformas son producto de una muy necesaria adecuación de la norma a la realidad que hoy estamos viviendo. Ahora sí habrá justicia.

Antes los ciudadanos no entendían cómo era posible que la delincuencia organizada fuera detenida con cientos de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y que pudieran salir libres casi al mismo momento de ser aprehendidos. Teníamos una legislación que protegía a los delincuentes. Ya no más simulación ni impunidad. Vamos por un estado de derecho que de verdad sirva a los millones de mexicanos honrados y trabajadores.

Que quede claro, esta reforma es benéfica para los ciudadanos honrados y, por supuesto, protege a la sociedad. Quienes se oponen, pues buscan, evidentemente, que siga imperando el estado de impunidad que daba puerta libre y abierta a los delincuentes, incluidos a los de cuello blanco.

Pero, nosotros, los legisladores de Morena, les decimos con firmeza, con mucha firmeza, como lo sabemos hacer: nunca más. Nunca más seguirá eso ocurriendo, porque ahora es el momento en el que estamos dando un marco jurídico adecuado al Ministerio Público, a los jueces, etcétera, para combatir de forma muy firme a quienes tienen que ser castigados adecuadamente.

Por eso la prisión preventiva oficiosa en los delitos que ya se han mencionado queda ahora en la ley. Mienten y mienten quienes pretenden ahora justificar su oposición argumentando derechos humanos. Sí, mienten, porque sus derechos serán respetados, los de las víctimas y, por supuesto, los de los delincuentes, pero los juicios se van a llevar a cabo en prisión para quien sea un delincuente.

Finalmente, quiero mencionar que en este dictamen se garantiza que todos los que tienen que ser castigados ahora sí lo serán y lo serán en prisión. Los derechos de todos también van a ser protegidos. Aquí es para lo que estamos los diputados de Morena, defendiendo y legislando en favor de todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Para hablar en contra, tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en esta Cámara tuvo lugar la discusión de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, con independencia de que hubo una expresión dividida respecto de la procedencia de dicha reforma, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dejó muy clara su preocupación por el descuido y desinterés de diversas autoridades, especialmente las del orden federal en la consolidación y fortalecimiento del sistema penal acusatorio.

En las últimas mediciones las cifras del Inegi arrojan que en nuestro país se están cometiendo 33 millones de delitos en el año. Ante dicho fenómeno observamos la inexistente estrategia y el nulo liderazgo del gobierno federal en la materia. Muestra evidente de lo anterior es la capitulación de las labores de investigación y seguridad de parte de las autoridades civiles en favor de las Fuerzas Armadas.

En términos de rendición de cuentas, el Informe de gobierno es carente de información sustantiva, ya que no se puede informar sobre lo que no se ha hecho. En adición a lo anterior, no hemos recibido el informe de la Fiscalía General de la República, lo cual agrava el estado de incertidumbre sobre el momento en el que estamos como país. Prácticamente estamos a ciegas en materia de seguridad y de justicia.

En este entorno se produce el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la minuta en materia de prisión preventiva oficiosa, y siendo una de las principales preocupaciones del Grupo Parlamentario del PAN, la impunidad rampante es que de buena fe se aportaron votos a favor de la reforma constitucional al artículo 19. Pero es un hecho que, en la representación de la mayoría en ambas Cámaras, ha habido una actuación poco aseada, por decirlo de alguna manera, en la dictaminación de la reforma de la ley secundaria.

Adicionalmente a lo anterior, se han incluido temas que exceden el mandato de la reforma constitucional, se ha utilizado el ejercicio de reforma de manera alevosa para alterar temas diversos a la discusión central.

Recibimos una minuta que se excede, una minuta que no cumple los compromisos básicos. Esta conducta se ha hecho costumbre en esta legislatura, pues aprovechando el bicameralismo, la discusión de las dos Cámaras se ha utilizado como un pretexto para manipular al procedimiento legislativo.

Enfatizando, recalcando y subrayando nuestro compromiso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio, el del Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de este dictamen y exhortamos a los demás grupos a actuar con seriedad en esta delicada materia. No permitamos más ocurrencias y abusos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guzmán Avilés. Para hablar en pro, tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María del Carmen Bautista Peláez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: "La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad". Simón Bolívar.

Con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, México dio un paso firme, contundente y sin titubeos para cerrar las puertas de la impunidad por la que por décadas los delincuentes entraban y salían para eludir a la justicia.

Esta reforma ha sido una pieza fundamental para el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia penal, de ahí que la armonización de las leyes secundarias es una herramienta indispensable para asegurar el desarrollo del debido proceso.

La prisión preventiva oficiosa permite garantizar la comparecencia de la persona imputada al procedimiento penal, impide la obstaculización de las investigaciones y contribuye a salvaguardar la integridad, tanto de las víctimas como de los testigos.

Cabe señalar que esta medida cautelar debe ser dictada por el juez en aquellos delitos de alto impacto y, por ende, considerados como graves. Ahora, los ilícitos que por años han dañado a la sociedad mexicana serán castigados con toda la fuerza de la ley, porque se evitará que los delincuentes escapen de la justicia. Lo anterior, mediante un proceso apegado a derecho y siempre con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad y hacer valer la ley. Nuestro compromiso es que la justicia sea oportuna y efectiva. Nuestro compromiso es que las víctimas nunca más vuelvan a estar solas. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Peláez. Para hablar en contra, tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, pueblo de México, soy egresado de la facultad de Derecho de mi gloriosa Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí aprendí que quienes ejercen la noble labor de la abogacía cuidan uno de los derechos humanos más importantes que como seres humanos poseemos: la libertad. Y hoy, justamente con esta reforma, estamos degollando este derecho humano consagrado en el artículo 7o. de nuestra máxima norma constitucional.

Pero el partido oficial del gobierno en turno, léase Morena, está intentando disfrazarlo, diciéndonos que con esta reforma ahora se acabará con la comisión de todos los delitos enmarcados en este artículo. Nada más alejado de la realidad. Esto que hoy estamos aquí discutiendo es una intentona para tratar de disfrazar, de maquillar la fallida estrategia de seguridad de este fallido gobierno.

Hoy, nuevamente yo les pregunto, amigas diputadas y diputados, para qué estar haciendo los parlamentos abiertos, para qué si no los vamos a escuchar, para qué si vamos a hacer oídos sordos. Porque no nos importó lo que nos dijo el representante de la ONU, no nos importó lo que dijo el presidente del Tribunal de Justicia de Chihuahua, tampoco lo que dijeron representantes de asociaciones tan importantes como Justicia para Todos e Intersecta. No nos importó. Lo echamos en saco roto.

Pero miren, esta reforma no tiene nada de cierto de lo que ustedes están planteando, porque es mentira que sea para proteger a los ciudadanos, porque no se están atacando las causas de este delito, se están atacando las consecuencias. Y es ahí donde estriba el más grave error. Si no atacamos las causas jamás podremos combatir los delitos que le hacen tanto daño a la sociedad.

Pero miren, me llama la atención. Una diputada hace rato se subió aquí a decir y a hablar de las víctimas. De verdad, con qué cara vienen a esta tribuna a hablar de las víctimas. Con qué cara. No tienen vergüenza. Si la semana pasada eliminaron el fondo para proteger a los familiares de víctimas del delito. Cómo es posible que vengan a hablar aquí de las víctimas. Cómo se atreven a hablar de ellas si no tienen el menor remordimiento...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Zarzosa. Con qué objeto, diputado Cayetano García.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para solicitarle, presidenta, si por su conducto puede preguntarle al diputado Zarzosa si me acepta una pregunta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Zarzosa, acepta usted una pregunta del diputado.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Zarzosa, ¿acepta usted una pregunta del diputado Cayetano García?

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: No, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No la acepta, diputado. Adelante, siga, diputado Zarzosa.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Aquí vinieron a decir que el sello de este gobierno es acabar con la corrupción. De veras, da risa, dan risa, con tantas cosas, con tantas cosas que hemos visto de la corrupción en su actual administración, vienen aquí a hablarnos y a decirnos que están actuando en contra de la corrupción, ¿es en serio? ¿Es en serio que nos lo están diciendo? ¿Cómo se atreven ustedes a hablar si este gobierno, el único sello que lo caracteriza es el populismo, la mitomanía y la falta de resultados? Ese es el verdadero sello que los caracteriza a ustedes como gobierno.

Y miren, lo que están intentando hacer ustedes es crear un estado de terror, para que la política de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia no sea una democracia, pero sí una orden directa de quienes no estén a favor de sus procedimientos y de sus políticas.

Nos queda claro que lo que están buscando con esta reforma no es ayudar a las víctimas, no es proteger a los ciudadanos, no, es tener un arma letal para aquellas personas que no están a favor de ustedes, para que aquellos ciudadanos que no tengan la posibilidad de poder defenderse se queden ahí por años, en lo que juntan las pruebas, porque como esto es, no es una prisión preventiva que tenga las características de tener los mínimos requerimientos para que una persona sea juzgada, ustedes lo van a hacer así, con la simple razón de decir: es un delito que merece prisión preventiva oficiosa y por eso vamos a encarcelar a todos los ciudadanos que estén en contra de nosotros.

Yo los llamo, diputadas y diputados, a que entren en la razón, sé que les estoy pidiendo mucho, sé que no es lo suyo pues un poco razonar y decir que lo que estamos haciendo hoy aquí es una grave falta a los derechos humanos, más allá de todo lo que está pasando, pero seguramente habrá instancias internacionales que pidan y que nos escuchen, que escuchen este llamado de auxilio, porque es evidente que las consecuencias negativas de la prisión preventiva oficiosa no daña solamente lo más valioso de un ciudadano, que es su estado y su libertad, además produce consecuencias cautelares nefastas, pues como el hacinamiento, la violencia, la incapacidad de proporcionada para cubrir fianzas, el elevado costo de la gestión penitenciaria y, muy tristemente, genera sentencias condenatorias a efecto de justificar todo el tiempo previo que pasó la persona en la cárcel.

El Grupo Parlamentario del PRI rechazamos contundentemente este dictamen que rebasa el mandato constitucional, que atropella sin freno los derechos humanos y que se convertirá en una potencial arma de acoso

en contra de quien piense diferente al tlatoani en turno. Decimos sí a la urbanización del artículo 167, pero, no a este lobo disfrazado de cordero que nos presentan en este pleno. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa Sánchez. Para hablar en pro, tiene la palabra la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. En abril del año pasado, adicionamos al artículo 19 constitucional una serie de conductas delictivas que lesionan y ponen en peligro el bienestar social, por lo que justifican prisión preventiva oficiosa.

Ello, porque se coincidió en que el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la desaparición forzada de personas, el robo de hidrocarburos, de transporte de carga y la corrupción necesitan medidas que garanticen la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

Además, porque la medida cautelar para estas conductas de alta peligrosidad asegura que el inculpado no se evada de la justicia, entorpezca las investigaciones o ponga en peligro la integridad física de las víctimas, testigos o cualquiera otra persona.

Es de señalar que la referida figura ha contribuido a que el Estado proporcione un efectivo acceso a la justicia, sin embargo, no debemos olvidar que la Constitución federal solo establece las bases generales que han de regir el procedimiento penal y que se necesitan ajustes específicos para su mejor implementación, por lo que en la reforma en alusión adquirimos el compromiso de que, en un lapso de 90 días, realizaríamos las adecuaciones normativas para el correcto funcionamiento de las instituciones.

Por lo anterior, debe precisarse que hoy acudimos a armonizar las leyes penales con lo que aquí ya se había aprobado, no como dicen algunos grupos parlamentarios al legislar sobre la prisión preventiva.

Compañeras y compañeros, los exhorto a rectificar su dicho, porque lo que estamos discutiendo no es un asunto de constitucionalidad o de legalidad, sino de mera formalidad. Es un mandato que nos dimos para hacer que las disposiciones jurídicas relacionadas estuvieran en sintonía con las cuestiones de fondo, ya las cuestiones de fondo fueron discutidas ampliamente en la reforma constitucional. Por eso, les pido con todo respeto no esgrimir argumentos mentirosos y centrarse en la discusión principal.

Este gobierno federal está buscando terminar con las prácticas de corrupción que se llevaron a cabo por muchos años y de las cuales, como legisladores, somos responsables, responsables de armonizar esas leyes, de escuchar a los ciudadanos que nos han dado un mandato a todos los que estamos aquí y que nos han pedido terminar con esa corrupción.

Les pido, por eso, que sean congruentes y que aprobemos esta armonización a las leyes. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. La corrupción ya no se tolera en México. La corrupción no es bien vista, el que la practique será juzgado por el pueblo. Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Robles Gutiérrez. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea, relativo a la minuta enviada por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa, tiene por objeto dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que conlleva la materialización de las reformas legales en las que se establezcan, específicamente, cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos que ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa, a fin de homologarlos como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD votó en contra de la ampliación de este catálogo, por considerarlo una regresión a lo establecido en la reforma constitucional de 2008, en materia de seguridad y procuración de justicia, ya que el principio fundamental de esta reforma fue garantizar el respeto a la presunción

de inocencia y de acceso a la justicia para todas y todos los imputados, generando un proceso acelerado de modernización del sistema de justicia en nuestro país, que a partir de ese momento transitaría hacia la oralidad, priorizando los derechos de quienes se encuentran involucrados en el proceso penal.

Al implementar la figura de la prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano ha sido observado por diversas instancias internacionales en materia de derechos humanos, ya que se considera que esta medida es de carácter punitivo, que transgrede a los tratados internacionales de los cuales formamos parte y que violenta los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, bajo el falso argumento de la protección a la sociedad.

Es por ello relevante mencionar que el alto grado de impunidad en nuestro país se debe a las facultades arbitrarias concedidas al Ministerio Público, para decidir sobre la liberación del imputado y no por la aplicación intransigente de la prisión preventiva.

La ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional no constituye una respuesta para la correcta impartición de justicia. Y es por ello que consideramos indispensable que esta medida cautelar sea examinada en cada caso, sustituyendo la prisión oficiosa por la obligación del Ministerio Público para solicitar esta medida cautelar y dejando al juez en libertad de otorgarla cuando existan circunstancias que actualicen los supuestos establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo indispensable la realización de las actuaciones que provean su suficiencia y su solicitud ante el órgano jurisdiccional.

Lo anterior implica, igualmente, la eficaz concurrencia de los cuerpos de policía de investigación que intervengan, así como de los peritos que aporten los datos de prueba suficientes y pertinentes para la satisfacción de los requisitos señalados por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que la prisión preventiva es una medida extrema, excepcional, del último recurso, por lo que es necesario que los jueces realicen en cada caso una motivación individualizada de las razones que justifiquen su aplicación, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. De lo contrario, se estarán violentando los derechos humanos del imputado, como el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, así como al buen funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y el diseño de las políticas públicas de seguridad. La prisión preventiva debe de ser la excepción, no la regla.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen, ya que nos encontramos convencidas y convencidos de que, en un verdadero estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia por regla general, los juicios se enfrentan en libertad.

No podemos dar marcha hacia una realidad en que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria, tal como lo pretende el presente dictamen y como lo señaló el maestro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte y entusiasta promotor de las consultas de la cuarta transformación.

Y se comentaba en esta tribuna que anteriormente se encontraban personas con grandes cantidades de armamento y no pasaba nada. Ahora, simplemente, ya no pasa nada, porque ya no se persigue a esos delincuentes, ahora se les permite irse.

No olvidemos lo sucedido con el hijo del Chapo Guzmán en este actual gobierno. Ahí la incongruencia de lo que se dice en esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista. Tiene la palabra el diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Buenas tardes, compañeras y compañeros, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, y a los mexicanos que nos ven por los medios de comunicación les pregunto:

¿Quién está a favor de que un violador de menores escape de la justicia? ¿Quién de ustedes está de acuerdo en que México conserve un sistema penal acusatorio débil en el que el delincuente, luego de haber irrumpido

una casa-habitación y saquear el patrimonio de una familia, quede impune? ¿Quién de aquí está en contra de garantizar que un feminicida pague por sus actos atroces? ¿Quién de ustedes considera que los corruptos no deben pisar la cárcel? Compañeras y compañeros, el pueblo está harto, harto de la impunidad y de las injusticias.

El presente dictamen busca establecer en la legislación secundaria que los infractores de los delitos previstos en el artículo 19 constitucional enfrenten el proceso penal mediante la aplicación de la prisión preventiva oficiosa.

La aplicación de esta medida cautelar tiene como objetivo principal garantizar el esclarecimiento de los hechos, asegurar la presencia del imputado durante el desahogo del juicio, robustecer las medidas de protección a las víctimas, impidiendo que estas sean sujetas a represalias y facilitar las condiciones para la reparación del daño que se lleve a cabo.

Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que este compendio de modificaciones al marco jurídico mexicano impedirá, impedirá que los delincuentes evadan la justicia y la enfrenten de inicio a fin y debido proceso, respetando en todo momento, el principio de presunción de inocencia.

Terminaremos con las lagunas jurídicas que han impedido la correcta aplicación de la ley, favoreciendo así la seguridad de las víctimas y de la sociedad en general, con sanciones ejemplares para contribuir en la reducción de su incidencia.

Por ello, quienes voten a favor del presente dictamen, estarán votando a favor de proteger la integridad de las niñas, niños, mujeres y muchos ciudadanos en México. Estará favor de castigar con severidad el saqueo al erario público para fines electorales.

Estará a favor de terminar con las desapariciones forzadas, con los robos a casa-habitación, con el robo de hidrocarburos y en contra, por supuesto, de la portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Estarán votando a favor de un México más seguro.

Y termino diciendo lo siguiente: en esta tribuna se ha dicho que hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos, de aquellos ciudadanos que se les están imputando un delito porque así lo han cometido. Hay que respetarlos, por supuesto, y se va a llevar un debido proceso. Pero, también les pregunto ¿y quién protege los derechos de aquellas víctimas que han sido violentadas en sus domicilios, en sus recorridos a su trabajo, en sus hijas, en sus hijos, a los estudiantes? ¿Quién nos protege? ¿Quién habla de sus derechos?

Hoy en día, hoy nos espantamos diciendo que todo aquel imputado tiene derechos y garantías. Efectivamente, y se les van a respetar. Pero, insisto, ¿quién ha garantizado los derechos de aquellas víctimas que no tienen un centavo siquiera para poder presentarse a los juzgados y así poder llevar a cabo la justicia que merecen? Yo creo que debemos pensar en ellos, y por eso insisto al Grupo Parlamentario de Morena, estamos de acuerdo, a favor de estas leyes secundarias. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Onofre Vázquez. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Hace un momento el diputado se refirió acerca del apoyo a las víctimas. Yo también comento, pues sí, ahora menos van a tener atención con la desaparición del Fondo de Atención y Reparación del Daño Integral de las Víctimas, y con ese tipo de reformas agravamos más la situación.

Miren, después de haber sido secuestrado, torturado y recluido en prisión por un 1 año y 2 meses, Roberto, de 52 años, fue liberado por un delito que nunca cometió. Después de que un juez invalidó las pruebas en su contra, porque violentaron sus derechos fundamentales en su obtención.

En Movimiento Ciudadano siempre estaremos del lado de la justicia y de la aplicación de la ley. Estamos de acuerdo en castigar a quienes cometen un delito, pero apegados a nuestra Constitución y siguiendo, por supuesto, el debido proceso.

No podemos exponer los derechos de los mexicanos para que sean violentados y castigar a quien presuntamente cometió un delito, sin antes haber probado y justificado su culpabilidad. Si bien algunos legisladores dimos el voto de confianza al gobierno federal en las reformas del artículo 19, ni la impunidad ni la corrupción han disminuido, así como tampoco la incidencia delictiva, independientemente del delito que se cometa.

Lo cierto es que no se han dado los resultados en procuración de justicia a los que se comprometieron. Al contrario, se disminuyó el presupuesto a la Fiscalía y a las instituciones de seguridad pública. Es evidente que así no podemos avanzar.

El procesamiento de estas conductas delictivas, como se propone, provocará que no sea excepcional, proporcional, innecesaria esta figura, sino que se convierta en regla. Es decir, se utilizará de manera irresponsable, ya que como se propone en la minuta que nos ocupa, la armonización de las leyes secundarias en la materia no establece un proceso claro para que el juez determine que este instrumento jurídico deba implementarse.

Recuperar la confianza ciudadana en relación a la impartición de justicia no va a lograrse a través de esa reforma, la cual solo ingresa a personas inocentes a la cárcel, pero no mejora las capacidades del Ministerio Público. Es decir, se justifica la ineficiencia por medio de la secesión arbitraria e injustificada.

Las reformas que se proponen únicamente avalarán la incapacidad del Ministerio Público para investigar, ya que las pruebas para encarcelar a una persona no serán necesarias cuando una persona, por error o por desconocimiento de la ley, presuntamente cometa un delito y, por lo tanto, pierda la libertad sin mediar juicio alguno.

Votaremos en contra porque el dictamen que hoy discutimos no proporciona justicia, ya que en el fondo no resuelve lo que se busca, combatir la incidencia delictiva, y fomenta la corrupción y el abuso de poder de los encargados de impartir justicia, impidiendo con ello el acceso a la verdad.

Un cambio de esta magnitud implica saber qué cambio queremos y para qué lo queremos. En este caso, que es el de disminuir la delincuencia, esto no va a lograrse a través de la reforma. Las personas privadas de su libertad por esta medida tardan aproximadamente dos años en salir de la cárcel, cuando todo el tiempo fueron inocentes y sí se les condena de antemano al hacinamiento, a la insalubridad, a la violencia, impactando profundamente esto de manera directa y negativa a sus familias.

Este dictamen es la prueba más palpable de que no hay interés por mejorar, interés del gobierno para crear y mejorar el sistema, un sistema de procuración de justicia eficaz, ya que prefieren tomar el camino más fácil, el cual en la mayoría de los casos no siempre es el correcto, sin importar las consecuencias negativas que traerán consigo. De aprobarse esta reforma, el Congreso mexicano estaría enviando el mensaje negativo a la sociedad de que, a falta de justicia, nos ofrecen el castigo.

Por todo lo anteriormente expuesto, Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen, ya que estamos convencidos de que se deben garantizar los derechos, pero sin vulnerar garantías, teniendo la certeza de que el tiempo nos dará la razón. Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Prudencio González. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Con el permiso del pueblo de México. (Habla en lengua originaria.) Gracias, hombres y mujeres, legisladores compañeros. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman diversos ordenamientos panales en matera de prisión preventiva oficiosa.

Es necesario destacar que la prisión preventiva es una medida cautelar que no prejuzga sobre la culpabilidad del presunto autor del delito, y cuyo efecto es restringir su libertad a efecto de que al enfrentar su proceso penal en la cárcel se evite el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia.

En particular, me interesa destacar la reforma que se nos presenta a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para sancionar las conductas consistentes en el uso de programas sociales, con fines electorales.

Por fin, ya era hora, basta, como se dice en tojolabal (habla en lengua originaria). Basta ya de que se lucre, abuse con la necesidad de la gente, utilizando programas públicos para forzar a la población a que vote a favor o en contra de determinado candidato de algún partido. Lo que se hace es lucrar con el hambre de los mexicanos, y eso no se puede permitir más. Sinvergüenzas, cínicos, ladrones, ya no más.

En los gobiernos neoliberales la utilización de programas sociales con fines electorales fue práctica común, en donde Pronasol y los subsecuentes fueron utilizados para el mismo fin. Láminas, tinacos, despensas, dinero, garrafones de licor, abrazos, besos y tantas burlas. Basta ya. Para no ir muy lejos, en la elección que se realizará el próximo domingo 18 de octubre, el PRI sigue con su vieja práctica de entregar tarjetas a cambio de votos. Dejen ya de engañar a la gente.

Destaca también el robo de hidrocarburos como delito de prisión preventiva oficiosa, puesto que quienes cometen este delito se roban los combustibles, que son de la nación, y también afectan las finanzas públicas, que hoy requieren ser fortalecidas para destinar esos recursos a atender la grave situación que el país enfrenta. No obstante que el gobierno federal ha desmantelado organizaciones delictivas, como el Cártel de Santa Rosa, que operaba en Guanajuato, aún siguen otras organizaciones delictivas afectándonos a todos los mexicanos.

Como mecanismo de combate frontal a la corrupción, que es una lucha en la que quienes integran la cuarta transformación estamos impulsando que se incorporen las figuras de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Los servidores de esta cuarta transformación que consideren que pueden violentar la ley, deben tener mucho cuidado de dejarse seducir por el poder económico para realizar actos de corrupción. Esta conducta, que fue práctica común en los gobiernos priistas y panistas, como el caso de la compra de toallas y las corruptelas de los hijos de Martha, o los perpetrados en el gobierno de Felipe Calderón, así como la casa de Malinalco de Luis Videgaray o la tristemente célebre casa blanca de la exesposa de Enrique Peña Nieto, no se permitirán más.

Debemos honrar el compromiso del presidente de la República de erradicar la corrupción. En esta lucha, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, somos tus firmes y decididos aliados. Pero también debemos ser vigilantes de que se combatan los actos de corrupción que se producen en las entidades federativas.

Que quede bien claro, nadie quedará impune si traiciona la confianza de los mexicanos. Se está limpiando, se está barriendo. No más mugre ni lacras. No más burlas, traiciones, hediondez, mugre que lastima no solo el cuerpo, sino el alma.

Con la aprobación del dictamen que recae en la minuta en cuestión, estamos otorgando el medio previsto en el artículo 19 constitucional para que las autoridades combatan de manera frontal a la delincuencia.

Compañeras y compañeros legisladores, por estas consideraciones y porque sabemos que es un beneficio de nuestro pueblo, quienes orgullosamente conformamos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, votaremos a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Jiménez Pérez. Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Combatir a los gobiernos populistas es un deber y requiere convicción y valor, porque sus propuestas son, en mucho, propaganda, trampas de siempre envueltas en novedad, es decir, solo vienen a promocionarse, pero esconden golpes brutales a los cimientos del estado de derecho y los sistemas de justicia que son debidos y necesarios porque centran las decisiones de justicia en los derechos humanos.

Su visión de buenos contra malos es tan obsoleta, jurídica y filosóficamente, que pese a eso vienen a vender bajo esas frases, que van a combatir la impunidad. Se los reitero, nosotros rechazamos categóricamente cualquier forma de conducta que se encuentre tipificada.

Sin embargo, para poner en claridad cuáles son estas mentiras que ustedes insisten en repetirnos una y una y otra vez, les voy a decir que, por ejemplo, si el debate es la impunidad, entonces, vienen a vendernos que van contra ella en un, prácticamente, todos se van a la cárcel. Primero mato y después averiguo. Pero claro...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputada Pastor. ¿Con qué objeto, diputado Eduardo Zarzosa? Sonido, por favor, a la curul del diputado Eduardo Zarzosa.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez(desde la curul): Gracias, presidenta. Si por su conducto podría preguntarle a la diputada Pastor si me acepta una pregunta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada Pastor, ¿acepta usted una pregunta del diputado Zarzosa? Adelante, diputado Zarzosa.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Sí.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Zarzosa.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (desde la curul): Gracias. Diputada Claudia Pastor, tengo una duda. ¿Me podría usted explicar si el Ministerio Público, con la presente reforma, tiene la obligación de mandar a la cárcel a todos los individuos que cometan los delitos que estamos discutiendo? Gracias por su respuesta.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Muchas gracias por su pregunta, diputado. Y, además, me da la enorme oportunidad de explicar algo que hemos venido diciendo desde que inició esta discusión. El problema de la llamada puerta giratoria radica en la discrecionalidad de los Ministerios Públicos para solicitar, o no, la prisión preventiva oficiosa. Ustedes no tocan ese punto, sigue existiendo.

¿Qué pasa con esta reforma, diputado? Con esta reforma a quien le quitan la posibilidad de justificar si procede o no esta medida es al juez. Así de grave. No resuelven el problema y, por el contrario, sacan a uno de los poderes más importantes en la impartición de justicia de la decisión de la prisión preventiva oficiosa.

De ahí que desde origen estamos en contra, en el Grupo Parlamentario del PRI, de esta propuesta. Con eso daría respuesta, presidenta, y continúo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor.

La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias. Les decía yo hace un momento que, si el debate es la impunidad, vienen con su propuesta de que se vaya todo mundo a la cárcel, en un primero mato y después averiguo. Pero, claro, si el debate es que las cárceles no tienen diagnóstico, que se encuentran sobrepobladas, que es indispensable entrarle a la política penitenciaria, ah, claro, entonces ustedes vienen con la propuesta de la amnistía con una posibilidad y una lista enorme de ambigüedades para que la Segob sea quien decida quién sale.

Es decir, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Por un lado, se van todos a la cárcel, pero, por el otro, pueden salir. ¿En dónde está la prevención, en dónde está la inversión en desarrollar estructuras policiales municipales y estatales? No existe, no la tienen.

Le quitan al Poder Judicial su labor fundamental, pero, no obligan ni resuelven la discrecionalidad del Ministerio Público para solicitar, o no, la medida cautelar. Y, si todo esto fuera poco, en este esquizofrénico e irresponsable modo de gobernar tienen aprobada también la extinción de dominio, con lo cual abren un catálogo de arbitrariedades de que todos se vayan a la cárcel, salgan a gusto de Segob quienes decidan y las personas no tengan su patrimonio para defenderse.

Así está la suma de contradicciones fundadas en una finalidad única de ser populares. Tienen a la deriva al país, en jaque a la cosa pública y en extrema preocupación a la comunidad internacional.

Están instalados en la máquina de fango, hay que hacerlo mal todo para demostrar que todo está mal. Se deben, como gobierno, tomar decisiones responsables y técnicas, aunque no les gusten. Dejen atrás la campaña y pónganse a gobernar, por favor. Muchísimas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pastor Badilla. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores, creo que todo lo que se ha dicho de este dictamen, todo es muy importante porque para eso estamos aquí, para debatir y para sacar lo mejor que beneficie a todo el sector y a todo el pueblo de México.

No me voy a extender mucho, porque tengo poco tiempo por mi oxígeno, pero, sin embargo, era importante que yo participara con una pequeña exposición en este tema.

En esta ocasión, yo vengo a sumarme al dictamen en discusión, que refuerza la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Sobre todo, reforzando el tema del huachicoleo, realizado siempre, por muchos años a Pemex y afectando con más de 60 mil millones de pesos al erario público.

En este tema, es un tema que ha venido de muchos años atrás y no se había tomado en cuenta y no se había hecho nada. Al contrario, se habían sumado muchos políticos, muchos gobernadores y mucha gente que se beneficiaba en el tema del huachicoleo. Hoy se pone orden y no les gusta, hoy se pone orden y las cosas están de otra manera. Sin embargo, es respetable todo lo que aquí vengan y podamos exponer.

Pero, mi intervención es más relacionada al robo de transporte de carga federal. Para conocimiento de todos ustedes, diariamente se roban de 30 a más camiones diarios en el país. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el tema de la justicia? Los delincuentes que se roban nuestros vehículos en todo el país y, sobre todo, en los estados que más nos pegan, como San Luis Potosí, Querétaro, el estado de México, Tlaxcala, Veracruz y, por decir uno de muchos, no pasa nada. Y, aparentemente ese no es un delito. Pero los que nos roban los tráileres salen inmediatamente, en el mismo día. ¿Por qué? Porque la corrupción que existe en los juzgados, desde el Ministerio Público hacia arriba no se ha detenido. ¿Por qué? Porque son más los arreglos económicos que enfrentar la justicia como debe hacerse.

Es por eso que los transportistas, a nivel nacional, exigen que verdaderamente se aplique la justicia como debe ser. Es muy importante que la prisión preventiva oficiosa se aplique de manera concreta y contundente para disminuir este delito de robo al transporte.

Aparte de este tema de robo del transporte, tenemos un tema que está relacionado también con el tema de seguridad nacional. ¿Y por qué lo relacionamos? Porque los operadores del transporte de servicio público federal venden el combustible a los huachicoleros que están en las carreteras de todo el país y los cambian por algunas sustancias ilícitas. Eso es lo que está provocando, que tengamos más accidentes en el país, que tengamos más muertes en el país.

Y, en ese sentido, tenemos que ser más concretos y reforzar las leyes de este país. Tenemos que frenar los accidentes y las muertes por un tema de seguridad nacional. Por eso es de suma importancia la implementación de las leyes secundarias en materia de prisión preventiva oficiosa del artículo 19.

Compañeros diputados y diputadas, hagamos verdaderamente las cosas como se tienen que hacer. Si ustedes les preguntan a transporte nacional si esto es impunidad, para que vean qué les van a contestar. Impunidad es que les roben los vehículos y no se haga justicia. Eso sí es impunidad. Y, ¿por qué? Porque siempre ha habido y se ha permitido que toda la ley se pisotee y que prevalezca la corrupción. Eso se tiene que terminar.

Yo los exhorto a que nos sumemos y verdaderamente hagamos justicia para el transporte nacional. No más robo a transporte nacional. No más robo al huachicoleo nacional. No más accidentes en las carreteras federales de México. Acompáñennos en esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Borrego Adame. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos dos años, hemos visto a varias diputadas y diputados que antes eran de izquierda, defendían derechos humanos y pugnaban por la presunción de inocencia. Pero hoy niegan sus posiciones históricas y se plantan dóciles ante el gobierno.

En campaña prometieron fortalecer derechos humanos, cambiar la manera en la que se persiguen los delitos y pulir el sistema de impartición de justicia para combatir la impunidad. Sin embargo, hoy, dócilmente promueven reformas y políticas que directamente contradicen lo que ustedes ofrecieron al electorado.

Nadie puede estar a favor de quienes lesionan nuestra democracia. Nadie puede estar a favor de quienes violentan a las mujeres, niñas y niños, y nadie en, su sano juicio, estaría a favor de promover el robo de hidrocarburos. Pero en la definición de los medios y modos para combatir esos y otros terribles delitos, una redacción descuidada puede profundizar la impunidad y la injusticia.

Quienes sí trabajamos como representantes en esta soberanía, tenemos elementos de sobra para reconocer que en estas reformas se enmiendan algunos errores advertidos en la reforma constitucional. Desafortunadamente, aún hay cosas por modificar en el dictamen, cosas que nos permiten deducir que lo que estamos a punto de aprobar, puede generar más injusticias, y potencialmente está sentando las bases de instrumentos útiles para un sistema que envidiarían las mentes más autoritarias.

Les pongo un par de ejemplos: se escucha muy bien castigar a quienes violan las leyes electorales, pero bajo el texto que estamos por votar, correspondiente a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quién creen que caiga en prisión primero, ¿las personas que trabajan entusiasmadamente e ilusamente como servidoras y servidores, o algún operador del gobierno en turno?

Otro ejemplo está en la Ley de Vías Generales de Comunicación. Hoy nuestro marco jurídico permite que la autoridad haga su función y evita que elementos antisociales tomen carreteras, casetas y bloqueen vías del tren, pero la autoridad no ejecuta el mandato de la ley.

Masificar un mecanismo como la prisión preventiva puede hacer que la autoridad haga el trabajo que hoy se puede y debe hacer. Innegablemente es el esfuerzo para atender los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil y el mundo de la academia, en virtud de las generalidades que quedaron abiertas desde la reforma constitucional.

Sin embargo, aún es necesario que reconsideremos todo el proyecto y lo regresemos a comisiones para pulirlo. O bien, darnos la oportunidad de discutir y cambiar en las reservas aquellas generalidades que peligrosamente se mantienen en el dictamen, mismas que constituyen riesgos reales a los derechos humanos y a los pocos o muchos avances que han hecho para revertir la impunidad en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Medina Ortiz. Tiene la palabra la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Gracias, diputada presidenta. Primero quiero aclarar que mi participación no es a favor, sino es una posición en abstención. Y esto porque me parece que tenemos que cautelar un valor fundamental como diputados y diputadas, que es la congruencia.

Algunos de nosotros, como diputados de Morena, no fui la única, votamos en la discusión del artículo 19 constitucional en abstención, justamente porque nos parece que este es un tema muy importante, porque estamos ampliando en los hechos la facultad punitiva del Estado, en contra de los derechos humanos y de los derechos procesales.

Pero también me parece muy importante comentar, para evitar los maniqueísmos y hablar con toda seriedad, que en este tema estamos implicados todos. Recordemos que la discusión del artículo 19 de la Constitución, donde se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, viene del Senado de la República, donde los distintos grupos parlamentarios —hablo de todos—, presentaron sus propuestas para ampliar ese catálogo indebidamente.

Porque, efectivamente, como aquí se ha dicho, la prisión preventiva de oficio no resuelve el problema de la inseguridad ni de la impunidad ni baja los índices de delincuencia. Eso lo estamos viendo en este momento donde, a pesar de estar endureciendo los delitos, se siguen cometiendo todos los días y van a la alza.

Sabemos que es una forma de aparentar frente a la sociedad, el supuesto funcionamiento del sistema de justicia, un mensaje de mano dura que no tendrá como consecuencias más sentencias condenatorias contra los delincuentes. Y les adelanto que se ampliarán las injusticias en el país para después otorgarles amnistía.

Sé que es una forma de visibilizar los delitos, pero no una vía para derrotarlos ni sancionarlos. La prisión preventiva de oficio se planteó como una alternativa entre el sistema inquisitorio y el sistema penal acusatorio.

Fue concebida como una medida temporal que afecta el propósito del nuevo sistema penal para humanizar la justicia, hacerla transparente y lograr un debido proceso para la víctima y el acusado, donde las partes que intervienen en el proceso, policías, ministerios públicos, lo hacen frente al juez, el cual anteriormente se refugiaba en la intimidad del papel, delegando su función en otros y ahora está obligado a emitir su sentencia en un juicio oral con la máxima publicidad.

Pero la columna vertebral de este sistema de justicia es el principio de presunción de inocencia, donde nadie es culpable mientras no se declare su responsabilidad, mediante sentencia emitida por el juez, la cual es vulnerada por la prisión preventiva de oficio. Con esta reforma regresaremos a la criminalización de la pobreza para luego otorgarles amnistía.

La prisión preventiva existe porque es una medida cautelar que se aplica para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o la comunidad, o en el caso de haber sido sentenciado previamente por la comisión de un delito.

Y es importante señalar que, en la mayoría de los casos que los ministerios públicos —esto es muy importante— solicitan la prisión preventiva, el juez se las otorga. Ahora, con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, lo que ya dije, que se vulnera la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia judicial y la individualización del proceso y diversas convenciones internacionales.

Y lo más grave es que se encerrarán a quienes siempre se encierran en este país: a los más pobres. Aquellos que no tienen derecho a un abogado que los defienda ni dinero para extorsionar a la policía y al Ministerio Público. Poblaremos las cárceles al último eslabón de las cadenas de la delincuencia organizada, la mayoría mujeres y jóvenes.

Termino diciendo dos cosas. ¿No es mejor incentivar a quienes participan en el proceso penal, donde las policías hagan bien su trabajo, para preservar pruebas y realizar las indagatorias y sus funciones? ¿No es mejor que las unidades de medidas cautelares y el Ministerio Público valoren adecuadamente las pruebas e integren adecuadamente las carpetas de investigación?

Con esta medida seguiremos posponiendo la posibilidad de tener un verdadero sistema de justicia. Por eso les convoco a que en la discusión del Presupuesto, si realmente queremos fortalecer la justicia en este país, que se vea claramente consignado, que se vea claramente definido en el próximo presupuesto del 15 de octubre.

Este país necesita un verdadero sistema de justicia. No necesita que se subsidien las responsabilidades de ninguna de las partes, de ninguno de los operadores del sistema de justicia penal acusatorio de este país. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Villavicencio Ayala. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.

La diputada Anilú Ingram Vallines: Con su venia, señora presidenta. Esto que pretenden aprobar y que nos están vendiendo como la panacea que arreglará milagrosamente la situación de seguridad es una vil mentira, un discurso hueco y populista, con el que pretenden engañar nuevamente al pueblo de México.

Vayan a ver a mi estado, Veracruz, si se han reducido los homicidios, delito que está en este catálogo desde el 2008, y no solo no se ha reducido, se ha incrementado de manera dramática. De la misma forma los feminicidios, que hoy pretenden incluir en este catálogo, como si con esto fueran a dejarse de cometer. No es así, compañeras y compañeros. Si realmente pretenden disminuir delitos y que los culpables enfrenten la justicia, asignemos presupuesto para la prevención, para la atención y la restructuración del tejido social.

Y quisiera yo citar algunas reflexiones de la maestra Estefanía Vela Barba que se llevaron a cabo en el parlamento abierto. Ella es especialista en derecho a la no discriminación, y políticas públicas para la igualdad de género. Cito: "La prisión preventiva oficiosa no solo viola los derechos de las personas acusadas, también afecta a sus familias que, en muchos casos, son mujeres".

En el dictamen se dice que la prisión preventiva oficiosa no es un castigo. Pero, *de facto,*en la realidad, y más con la covid, vimos que la prisión preventiva oficiosa es una condena de muerte. Es una medida que afecta desproporcionalmente a las mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres sin sentencia que los hombres. La brecha se fue ampliando a partir del 2008. A partir de la prisión preventiva oficiosa también hay mayor tasa de encarcelamiento de mujeres sin sentencia.

Compañeras y compañeros, dejen de engañar al pueblo de México. Esta solución es cosmética y no resolverá la alarmante situación de zozobra e inseguridad que vivimos todos los mexicanos, en especial las mujeres. Y lo digo una vez más en esta tribuna: tanto poder para no poder. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ingram Vallines. Tiene la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

La diputada Abelina López Rodríguez:(Habla en lengua originaria) O populismo, a como le quieran llamar. Cómo podemos llamarle a eso del ayer. Soy de Guerrero y hablo por ese dolor, ese dolor que no se olvida, justamente fue en el año de 1998 el caso de El Charco, 11 personas resultaron asesinadas.

El 28 de junio de 1995 el caso de la Organización de la Sierra del Sur, ¿quién gobernaba en ese entonces? ¿Gobernábamos nosotros o gobernaba el PRI en contubernio con el PAN? ¿Quién gobernaba, pregunto yo? Preferible ser populista que un violador de derechos humanos. ¿Acaso se nos ha olvidado el caso de Ayotzinapa? Quién gobernaba, pregunto yo, ¿nosotros o ustedes? ¿Quién violó los derechos?

El estado de Guerrero fue el centro de la corrupción del Estado mexicano. Gobernaba, gobernaba el PRI...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, permítame un momento compañera López. Compañeras y compañeros, reitero lo indispensable del respeto a la exposición de las oradoras y oradores desde la tribuna. Adelante, diputada López.

La diputada Abelina López Rodríguez: Ahí, Guerrero fue el claro centro de la viva corrupción del Estado mexicano. Hoy lo que estamos haciendo, ¿por qué me adhiero? Porque lo único que estamos haciendo es armonizar las leyes. La reforma del 19 constitucional que fue en abril, lo único que estamos haciendo es meterla a la ley secundaria, que es el artículo 167, precisamente para que de manera oficiosa sea el juez quien dicte prisión preventiva oficiosa.

¿Dónde está el verdadero, la verdadera corrupción del sistema? Yo litigo, cuando te vas a los juicios abreviados para que tú, agraviado o tú, presunto delito o presunta violación, tiene que solicitarlo el Ministerio Público, si no, al juez de control para que te conceda el juicio abreviado.

Tuve que dar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Son ignorantes, porque no saben del procedimiento. Por eso digo que los verdaderos violadores de derechos son ustedes, y cínicos, vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia.

¿De qué honestidad? Más bien vinieron a hablar pura barbaridad. Es cuanto. Hoy sí estamos haciendo justicia, porque a través de los programas sociales se está beneficiando a la población. Hoy sí estamos haciendo justicia. Te pregunto a ti, mi querido pueblo, que tú sabes que te llega ahora un apoyo, antes le llegaba el apoyo al político, al corrupto, al violador de derechos humanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Abelina López. ¿Con qué objeto, diputado Lixa?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta, solicito que sea turnada de inmediato la participación de la diputada al Comité de Ética, toda vez que se trató de un acto de corrupción confeso en la tribuna, que se investigue cuándo sucedió ese acto de soborno al que hizo referencia la diputada, porque además si fue después de la entrada en vigor de las reformas al artículo 19, es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, según las reglas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada López, si es usted tan amable de pasar a ocupar su lugar y desde allá solicitarme la palabra. Antes, en relación al trámite solicitado por el diputado Lixa, será turnado al Comité de Ética para su atención. Diputada Abelina López, por alusiones, tiene usted el uso de la palabra.

La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): ...copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el Ministerio Público federal de Acapulco. En el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran, para que solicitaran el juicio abreviado. Fue en el periodo de Peña Nieto, los corruptos son ellos. Habré de entregárselo certificadamente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Abelina López. Tiene la palabra el diputado Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en contra.

El diputado Lenin Nelson Campos Córdova: Compañeros y compañeras diputadas, en materia de valoración de la prueba todavía prevalece el principio justo de que la confesión solo opera en lo que perjudica al que la hace. Y, en este caso, yo creo que sin agarrar partidarismos de ningún tipo esta regla de valoración de la prueba, además, ante la fe de todos los diputados, es una regla que se tiene que aplicar. ¿Por qué razón? Porque aquí hubo una confesión.

Por lo demás, yo creo que como se sabe desde 1605, la libertad, mexicanos y mexicanas, es el don más precioso que a los hombres dieron los cielos. Con ella no se pueden comparar los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, como por la honra, se puede y se debe arriesgar la vida. Esto lo dijo don Miguel de Cervantes Saavedra, en su inmortal Quijote de la Mancha.

Por eso, creo yo que este debate es uno de los debates en los que se está jugando la libertad de muchos inocentes. Porque la prisión preventiva oficiosa contradice la letra de la Constitución, en el sentido de que no se puede, sin ningún motivo, sin ley anterior que aplique un juez competente, no se puede aplicar penas trascendentales a nadie.

Y, ahora es claro para todo aquel abogado principiante, que las penas trascendentales están de regreso en la vida democrática y en la vida pública del país.

Ahí está una pena trascendental, exhibir como delincuentes a los enemigos políticos del régimen en cada una y en todas las mañaneras, que se han convertido realmente en el método de persecución y de represión política.

Esta circunstancia, mexicanos, diputados amantes de la libertad, ahora ha cobrado carta de naturaleza con el tribunal, que también aplica penas trascendentales, en que se ha convertido la Unidad de Inteligencia Financiera.

¿Para qué ha servido la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Dónde está el alboroto aquel que se hizo por el huachicoleo y otras cosas? ¿Dónde están las acciones de la justicia mexicana en la materia? Es imposible, es imposible que se hagan esas acciones y lo único que se ha hecho es atropellar a inocentes, a gente pacífica. Y nosotros creemos que eso no debe continuar.

¿Dónde están los huachicoleros? Las reformas al 19 constitucional que pusieron al huachicoleo como delito no distinguen, fueron reformas ciegas, que no distinguen entre lo que es robarse una cubeta de combustible y robarse una pipa. No distingue esa ley.

Y, entonces, ¿cómo podemos nosotros combatir ese tipo de delitos, si realmente desconocemos lo que es el derecho? Estamos llenos de penas trascendentales y ahora, compañeros diputados y diputadas, ahora tenemos que el señor Santiago Nieto, aparece en las mañaneras y congela cuentas.

Y después, ¿qué pasa? Pues ahí tienen los particulares su dinero, hasta que el señor se digne en poner el procedimiento respectivo ante las autoridades jurisdiccionales y hasta que las autoridades jurisdiccionales, que con aquello de las tres instancias puede empobrecer a un ciudadano próspero y dejarlo en la miseria los próximos 10 años.

No tiene facultades para eso la Unidad de Inteligencia Financiera. La honra de los mexicanos requiere de respeto al ciudadano mexicano. Pero esto ahora son tortas y pan pintado, ahora es la época de la cuatro T.

Por eso, compañeros, yo quiero llamar a la consciencia nacional a que se terminen las penas trascendentales, a que se gradúen con técnica legislativa las cosas que haya que graduar. Porque de otra manera, no se puede hacer ninguna justicia.

Y que no se olvide, la prisión preventiva oficiosa es el nuevo garrote que está empleando el gobierno de la cuatro T para perseguir a sus enemigos políticos. Y ahí está, ahí está la propuesta...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero Lenin Campos, su tiempo se ha agotado.

El diputado Lenin Nelson Campos Córdova: ...ahora prisión preventiva oficiosa para que todos los enemigos que participen electoralmente puedan ser reprimidos con la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Campos Córdova. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, presidenta. Consta en este pleno que subí de manera institucional a nombre de la Comisión de Justicia, este asunto. Y tengo que reasumir, sorprendido por los comentarios en contra.

Me veo obligado, como secretario de la Comisión de Justicia y también como abogado, a reasumir la tribuna y, aclaro, que un servidor tiene licencia como litigante. No estamos en los tiempos de antes, en que los juristas eran hasta diputados federales y se les antojaba poner hasta procuradores, eran jueces y parte, metían y sacaban delincuentes de la cárcel.

Nosotros no simulamos. En este debate ha quedado claro que la derecha, el PRIAN ya no tiene argumento, y entiendo, porque muchos de los que suben aquí, traen escritos que les dan, pero que son ausentes de contenido jurídico.

He preguntado aquí y se niegan a permitir preguntar, y por eso he reasumido. Se refieren a este dictamen como si en este país nunca se hubieran cometido sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No hablan de la tortura, los chivos expiatorios, testigos falsos, sobornos, encarcelamientos de inocentes, parece que nunca hubiese ocurrido eso en México.

¿Cuántas violaciones se han cometido en México bajo el discurso simulador del estado de derecho y el imperio de la ley? ¿Cuántas veces no han sustituido todo esto por la presunción de inocencia? Si el problema no son las leyes, el problema es un sistema de justicia corrupto, una procuración e impartición de justicia que se echó a perder desde el poder central del país.

En México, la presunción de inocencia fue sustituida por las matanzas durante Calderón, las masacres, los montajes de televisión. ¿Dónde están, por ejemplo, nadie menciona aquí las ejecuciones extrajudiciales, Aguas Blancas, El Charco, Atenco, Tlatlaya, Nochixtlán? ¿Qué presunción de inocencia hubo ahí? ¿Cuántas

violaciones más quieren que les nombre a los derechos humanos? ¿Qué dijeron entonces que hallaron como momias? La gente está agraviada, porque el infractor de la ley sale con una facilidad extrema de la cárcel y libra una detención y la víctima, incluso, se revictimiza.

Llaman error y una mancha a esta reforma. Y nosotros les decimos: que no se desinforme y que no se tergiverse. Vamos a armonizar y a cumplir el mandato constitucional.

¿Por qué culpar al gobierno federal de cuestiones que corresponden a la Fiscalía y a los tribunales? Aquí todo el discurso que ha venido a decir la derecha es como si fuera un asunto del Poder Ejecutivo federal.

Aquí hay división de poderes. Ha quedado plenamente demostrado. Ha quedado plenamente demostrado que hay división de poderes. Eso corresponde a los peritos, a los ministerios públicos, a los secretarios de acuerdo, a los jueces, a los secretarios de estudio y cuenta, tribunales, magistrados y ministros.

Estamos hablando de procuración e impartición de justicia, no de un tema que corresponda al gobierno de la República. Solo son razones políticas las que esgrime la oposición que, por cierto, ni eso saben ser, ni saben ser, por lo menos una oposición. No manchen, no tiznen, ahora hay división de poderes.

Amigas y amigos, todos. En lo que corresponde a las tareas del gobierno de la República, eso sí se está atendiendo, las causas que generan la violencia. Y vamos a serenar nuestro país, a terminar con la corrupción, la impunidad. Y por eso Morena va a favor. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Agotada la lista de oradoras y de oradores. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido este dictamen en lo general.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.

En términos del artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos. Del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 167. De la Ley General en Materia de Delitos Electorales, los artículos 6, 7 Bis y 11 Bis. De la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el artículo 14. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, el artículo 4. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter y 92. Del Código Penal Federal, el artículo 420. Y se presentó una propuesta de adición de un artículo transitorio.

A continuación se realizará la votación en lo general y sobre los artículos no reservados, que son los siguientes: de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el artículo 83 Quintus. Del Código Penal Federal, los artículos 160 y 162. De la Ley General de Salud, el artículo 480. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el artículo 2o. De la Ley de Vías Generales de Comunicación, los artículos 533 y 534. Y los artículos primero, segundo, tercero y quinto transitorios.

Esta Presidencia instruirá a la apertura del sistema electrónico de votación hasta por 15 minutos. En primer lugar, se harán los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento, para que las y los diputados que se encuentren presentes emitan su voto. Después se llamará a las y a los diputados en bloques por grupo parlamentario, de menor a mayor, para que de igual manera registren su voto. El tablero electrónico de votación permanecerá abierto hasta los 15 minutos señalados, inmediatamente la Secretaría dará cuenta del resultado de la votación. Informo a la asamblea que, una vez agotado el tiempo para recabar la votación, la Secretaría no recibirá votos de viva voz.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por 15 minutos, para que las y los diputados presentes procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y los diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones, para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque, integrado por diputadas y diputados, para que procedan a votar en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Revolucionarios Institucional y Acción Nacional, y diputadas y diputados sin partido procedan a emitir su voto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al segundo bloque. Se pide a la Secretaría que llame al segundo bloque integrado por diputadas y diputados para que procedan a votar en lo general y en lo particular los artículos no reservados y pida, también, por favor, le solicito a la Secretaría, también, requiera a las y los diputados de los otros grupos parlamentarios para que vengan a emitir su voto. Nos restan 4 minutos con 25 segundos. Adelante, diputada secretaria.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena procedan a emitir su voto. A todas las diputadas y los diputados que faltan de hacerlo, procedan a emitir su voto.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Reitero a la Secretaría, realice el llamado para que las y los diputados que aún no han votado lo puedan hacer antes del cierre del tablero electrónico de votación.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados que falten de emitir su voto, pasen al pleno a hacerlo.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación para dar cuenta con el resultado de la misma.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presienta, el resultado es el siguiente: 266 en pro, 2 abstenciones y 127 votos en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 266 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento se concederá a las y los diputados el uso de la palabra para presentar su propuesta de modificación, hasta por cinco minutos. Comenzamos con el artículo 1o., relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tiene la palabra la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 167.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero: Con su venia, señora presidenta. El objetivo de esta reforma es dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la

Federación, el 12 de abril de 2019. Que ordena al Congreso de la Unión realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en las leyes secundarias las hipótesis delictivas establecidas en el 19 constitucional.

Sin embargo, con relación a la adición del párrafo quinto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se plantea en la minuta en cuestión, supuestamente se intenta precisar que cuando se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no, o sea, pistolitas de juguete o de utilería, y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima como medio para cometer una conducta delictiva, deben considerarse esos actos como delitos cometidos con medios violentos. No obstante, salvo su mejor opinión compañeros, estimo que dicho párrafo resulta excesivo y desproporcional, ya que impondría prisión preventiva oficiosa a un delito que no involucra ni siquiera una puesta en peligro de la vida o la integridad física de la víctima.

Por si esto fuera poco, dicho párrafo se extralimitaría al legislar más allá de lo ordenado por el decreto previamente mencionado.

Aunado a lo anterior, la precisión que intenta hacer el presente dictamen o minuta es en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un conjunto de leyes de carácter procesal. Sin embargo, dada a la redacción del párrafo quinto en comento, sin duda describe una hipótesis delictiva equiparada, lo cual es una precisión de naturaleza sustantiva. Y, por ende, no es adecuado que se manifieste en una ley adjetiva, sino que en última instancia procedería a hacerla en el Código Penal Federal o en algún otro cuerpo de leyes.

Lo anterior es así, porque esta parte de la minuta define un acto, una conducta antijurídica, cuya perpetración se pretende sea sancionada por la ley. Luego entonces, de ninguna manera esta hipótesis debe aparecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que traería aparejada una evidente falta de técnica legislativa que redundaría en perjuicio del justiciable, desatendiendo el hecho de que corresponde al legislador crear normas claras y concisas. Esta es nuestra principal labor, compañeros diputados y, por ello les pido apoyar esta reserva. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ramírez Lucero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión. No habiendo oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría si se acepta la modificación propuesta por la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto.

Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. En virtud de que voy a presentar nueve reservas en un solo turno, le pido, por favor, me considere tiempo para poderlas presentar en conjunto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputada.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: En primer lugar, quiero decir que algo que me sorprende y ojalá y eso nos lleve a la reflexión seria en este momento en la Cámara de Diputados, es que al aceptar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema necesariamente se va a devolver al Senado, porque es una minuta que viene del Senado.

Y, por lo tanto, ojalá nos diéramos el tiempo entonces, de discutir seriamente estas reservas, porque hay un dictamen de la Comisión de Justicia que supera, por mucho, la minuta que llegó del Senado, y le dieron prisa a la minuta del Senado para que quedara aprobada. Pero al aprobar la reserva que presentó la diputada Ramírez Lucero, el tema nuevamente queda sin aprobarse, algo que es de celebrarse porque hace falta mucho por hacer a este dictamen.

Ojalá, diputados de la mayoría, reconsideren la aprobación de este dictamen, y nos demos el tiempo de discutir el que preparó la Comisión de Justicia, porque, insisto, en ese hay muchos mayores elementos para poder realmente regular la prisión preventiva oficiosa.

Otra cosa que me parece importante decirles es, que si se tuviera que definir en una sola palabra cuál es el método de legislar de las mayorías en esta LXIV Legislatura, la mejor palabra para definirlo es chimoltrufio, así como legislan una cosa, legislan otra.

Apenas el 22 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas en materia de la Ley de Amnistía, que buscan o que tienen como objetivo sacar de la cárcel, particularmente a aquellas personas que han llegado de manera injustificada a la cárcel.

Y hoy estamos en la discusión de exactamente lo contrario: reformas a diferentes ordenamientos legales que tienen como objetivo llevar a la cárcel, precisamente, a aquellas personas que al no tener un medio de defensa idóneo —es decir, que carezcan de los recursos para proveerse de una defensa legal adecuada—, justamente llegarán a la cárcel.

Así que, simple y sencillamente, habría que apelar a su congruencia porque, o sacan a las personas de la cárcel o las meten, pero simple y sencillamente las dos cosas no se pueden hacer, sobre todo porque estamos hablando de las personas de más escasos recursos y de una violación a los derechos humanos.

Quiero, en este momento presentar algunas reservas que me hicieron llegar a través del colectivo Justicia sin Pretextos, que ahora soy la voz de ellos, simple y sencillamente para presentar y poner a consideración de ustedes estas reservas que me parecen fundamentales.

En materia de defensa y protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, eliminar la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a estos.

Particularmente, en el caso del Estado mexicano, la Corte Interamericana ha expresado su preocupación por las diversas reformas legislativas que buscan ensanchar el catálogo de delitos para la aplicación de la prevención preventiva automática u oficiosa. Dado que estas iniciativas son contrarias a los principios que rigen la utilización del uso de la prisión preventiva, lo que convierten a esta medida en una pena anticipada.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas se ha pronunciado en diversas ocasiones desde 2010, invitando a nuestro país a eliminar la prisión preventiva oficiosa. Si bien, reconoce que la prisión preventiva es una figura permitida por el derecho internacional, siempre y cuando se determine su pertinencia por la autoridad judicial de manera individualizada, caso por caso.

Es la prisión preventiva oficiosa, la que resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez en cada caso, según las circunstancias, haga las consideraciones necesarias.

En tanto, la comisión nacional de derechos en nuestro país ha manifestado en muchas oportunidades que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, en particular cuando esta trasgrede diversos derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, el debido proceso, la seguridad jurídica a la presunción de inocencia y contraviene el derecho internacional de los derechos humanos.

Además de que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia, promueve la ineficiencia de fiscales y jueces al ahorrarles la valoración de la procedencia de la prisión preventiva, caso por caso.

Es muy importante decirles que, de acuerdo al Inegi, en sus estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en 2017, el uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido —y escúchenlo bien— a llenar las cárceles del mundo. La evidencia mexicana es que más del 40 por ciento de los presos se encuentran sin sentencia.

De acuerdo con la proporción de personas sin sentencia, 21 entidades se encuentran por encima del nivel nacional y 14 estados están arriba del promedio de la región. Por si esto no fuera necesario, para el caso femenino, para el caso de las mujeres, se agudiza el problema, 30 estados superan el promedio nacional y 25 el estándar latinoamericano.

En Michoacán se reportó que todas las mujeres que están privadas de la libertad carecen de condena. Todas las mujeres que están en Michoacán en cárcel carecen de condena. En Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, 78 por ciento de las mujeres reclusas se encontraban sin sentencia, salvo en Michoacán de Ocampo, ninguna entidad alcanza la cifra anterior para el caso de los hombres.

En la minuta que el Senado remite a la Cámara de Diputados se establecen nuevas causales para implantar la prisión preventiva oficiosa, una categoría a la que aplicaría la prisión preventiva oficiosa que ni siquiera remite a una figura típica como la zona de los delitos cometidos por medios violentos, como son el uso de los objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego.

Esta ampliación es abiertamente inconstitucional, ya que establece un supuesto demasiado amplio en el que afectaría la libertad de las personas que utilicen juguetes como armas de fuego, y que no está autorizada en la Constitución.

Otro caso en el mismo sentido sería la redacción y propuesta de la fracción XI, que pretende introducir el Senado al artículo 167, donde se establece la prisión preventiva oficiosa a delitos que representan un alto número de los catalogados como delitos contra la salud.

Antes de tomar una decisión sobre el encarcelamiento automático de personas detenidas por delitos contra la salud, es necesario revisar el impacto que tendría una disposición de esta naturaleza.

Hasta mayo de este año había 209 mil personas privadas de la libertad en México, tanto del fuero común como del fuero federal por delitos contra la salud. De acuerdo con esta información, 40 por ciento de ellas privadas de su libertad no cuentan con una sentencia.

La política penal contra delitos por la salud ha implicado que un importante número de personas, especialmente jóvenes, sean criminalizados y encarcelados. Ello ha significado que sectores completos de la sociedad vean vulnerado su derecho a la vida. Además, ha implicado importantes gastos del Estado.

Por otra parte, en materia de robo a casa-habitación nos parece importante que el dictamen que se elaboró en la Comisión de Justicia por la Cámara de Diputados acota de manera objetiva los supuestos que aplicaría la prisión automática en estos casos, al establecer con un mínimo del valor de lo robado y además se realice con medios violentos.

Esta redacción podría permitir a personas que tienen acceso consentido a un homicidio, escúchenme bien, como son los parientes cercanos y personas trabajadoras del hogar, que son imputadas por el delito de robo,

llevar un proceso en libertad. No hagamos que las personas trabajadoras del hogar sean acusadas por robo en domicilio y lleguen a la cárcel por este supuesto.

Con respecto a la fracción XV, sobre el uso de programas sociales con fines electorales —para quienes han presumido aquí que por fin se va a acabar la corrupción—, el Senado es omiso tratándose del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es erróneo, ya que las facultades legislativas en materia procesal penal, como es la prisión preventiva, solo pueden regularse en una ley de carácter nacional y no simplemente en la legislación federal o local. Los supuestos en materia electoral están más acotados en el dictamen de la Cámara de Diputados.

En el caso de la categoría enunciada en la constitución de delitos de corrupción, específicamente en los tipos penales que refiere, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, en el Senado no se acotan los supuestos en los que aplicaría la prisión preventiva oficiosa, solo los menciona en el segundo párrafo del artículo 167.

Sobre el robo de transporte de carga, de la reforma constitucional del artículo 19 se declaró el robo de autos, transporte, como un delito del fuero federal. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que de enero a junio de 2019 se han cometido 6 mil 16 atracos, es decir, el casi el 2 por ciento más que el año pasado.

También existen algunas omisiones graves en la minuta del Senado, solo se contemplan los supuestos específicos en la ley federal correspondiente, lo cual es un error por tratarse de normas de delitos cometidos en materia de hidrocarburos y no materia procesal, que debían estar en una legislación de carácter nacional, como el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por otra parte, en el supuesto se introducen, deja en mano de particulares su aplicación. Establecer que si existe voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio puede no aplicarse la prisión preventiva.

Finalmente, consideramos que para el trabajo de la elaboración del dictamen de la minuta deberían tomarse en cuenta los trabajos que sobre la materia se desarrollaron en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y que consideran que no es necesaria la repetición de este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, la minuta del Senado incurre en errores sobre la materia.

Finalmente, en Movimiento Ciudadano no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa, desde un principio hemos señalado que la reforma no cumple con los propósitos para los cuales fue creada: disuadir el delito. No garantiza el acceso a la justicia de las víctimas. Además, así fue planteada la prisión preventiva oficiosa, debilita aún más a nuestras instituciones.

Quiero señalar que la impunidad en México coincide con alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa, en muchas ocasiones de manera indebida, está en la lista de prisión preventiva oficiosa.

Compañeras y compañeros legisladores, de verdad, espero que se tomen con seriedad la reforma que hoy se está discutiendo, en virtud, además, que han tomado la decisión de aceptar una de las modificaciones y ello nos da el tiempo, de verdad, a que tomemos esta reforma con mucha seriedad, por los impactos que puede tener en la vida de las personas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Tagle Martínez. La diputada Tagle Martínez ha presentado reservas a nueve artículos de cuatro leyes de las que están en este momento a consideración, pero en este momento solo voy a solicitarle a la secretaria que ponga a consideración de la asamblea si se discute la reserva relativa al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva de la diputada Tagle Martínez, con relación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Tagle. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reservas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su primero y segundo párrafos.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Presidenta, si me lo permitiera usted, quisiera presentar la reserva de este artículo que acaba usted de mencionar y dos más que tengo listados en las reservas, rogándole que me concediera un poquito de espacio en el tiempo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy estamos en una reforma importante que permitirá operar la reforma que hicimos, y que algunos la votamos a favor y otros en contra, al artículo 19 constitucional, que busca que la prisión preventiva oficiosa se dé en diversos tipos penales.

Y voy a permitirme parafrasear a lo que señalaba en principio la diputada Martha Tagle. Porque sí es importante que nos demos la oportunidad de reflexionar qué estamos legislando. Más allá del debate de si la prisión preventiva es debida o no es debida, es correcta o no es correcta, como lo hicimos o como lo reformamos en la Constitución, que es un debate para efectos prácticos ya superado porque ya es texto constitucional, tenemos que ver cómo se va a aplicar.

Esta Cámara de Diputados, este Congreso de la Unión, lamentablemente se ha distinguido por legislar cosas, textos normativos que no son aplicables y que nos vienen a enmendar la plana. Yo quisiera llamar su atención, con mucho respeto, para decirles que establezcamos redacciones que no se vayan a caer, porque pareciera y sé que no todas las diputadas ni todos los diputados lo hacen con intención, pero pareciera que estamos legislando para que la ley no se aplique porque está mal hecha.

El artículo 14 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, establece que en los juicios del orden penal queda prohibido imponer, por simple analogía o mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable al caso concreto del que se trate.

Si no tenemos un tipo penal aplicable exactamente al caso concreto del que se trate, aun cuando varios digamos: no pues esto si es o esto no es, no se podrá aplicar. Y tenemos textos que dicen, por ejemplo, hablan de la utilización de fondos, servicios, bienes relacionados con programas, ¿cuáles son estos relacionados? La ambigüedad del tipo penal vulnera el principio de taxatividad en materia penal.

Aquí se ha hablado de principios, aquí se ha hablado de máximas del derecho penal, máximas del derecho en general y se ha hablado de justicia. Una máxima dice que, a confesión de parte, relevo de prueba, y eso relacionado a las manifestaciones de actos de corrupción cometidos por una legisladora.

Hablar de principios, hablemos del principio de taxatividad. Es un tema que el diputado que está gritando allá no le entiende, no lo ha entendido...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Espadas.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Sí, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho:¿Con qué objeto, diputado Riggs? Sonido a la curul del diputado Riggs, por favor.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Gracias, presidenta. A ver si por su conducto me permite formularle una pregunta al compañero diputado Jorge Espadas.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento. Diputado Espadas, ¿acepta?

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Con mucho gusto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Sí, a ver, aquí me están haciendo una observación en cuanto a procedimiento, diputado Riggs. Le ruego, por favor, que espere. Si esta reserva se admite a discusión, con mucho gusto le doy la palabra al diputado para responder a la pregunta, bueno, primero a usted para hacer la pregunta y luego al diputado Espada para contestarla. Permítame, por favor, que termine su exposición. Adelante, diputado.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván: Muchas gracias, presidenta. Continúo. Entonces les decía que es un principio que no aspiro a que todos lo entendamos, porque no todos somos técnicos en derecho ni esta Cámara ha demostrado que nuestros productos legislativos son tan deficientes que hay una ley capricho que hemos votado aquí tres veces, y la vamos a volver a votar por el capricho de gente que no tiene el menor entendimiento de nuestro sistema jurídico y de lo que es un estado de derecho.

Pero, no todos somos así ni todas somos así, yo a lo que apelo es que busquemos redactar una norma que se aplique, porque nosotros como legisladores estamos obligados a respetar el principio de legalidad en materia penal en su vertiente de taxatividad.

Ya es de explorado derecho, la Corte se ha pronunciado porque los textos legales en materia penal sean aplicables al caso concreto de que se trate y eviten ambigüedades. Hoy, estamos redactando tipos penales muy defectuosos, muy defectuosos que no van a ser aplicables, y entonces aquellas diputadas y aquellos diputados que están impulsando esta reforma, están pretendiendo engañar a las mexicanas y a los mexicanos diciéndoles que están aprobando un texto que va a permitir sancionar a quien cometa ilícitos en estas materias, y eso es una mentira.

Con este texto no va a suceder, como les mintieron con la Ley de Remuneraciones del diputado caprichos. Tenemos que legislar de manera técnica y de manera correcta. Hoy, como está redactado, no se va a aplicar, diputadas y diputados.

Por ello, es importante corregir los tipos que se están contemplando en esta reserva, en este dictamen, perdón, y establecer supuestos que permitan una descripción típica correcta, y no supuestos tan ambiguos que van a requerir de interpretaciones por mayoría de razón, lo que prohíbe nuestra Constitución.

La invitación es a no engañar, no engañar al pueblo de México. Hagamos leyes que sean aplicables. Esto, otra vez, diputadas y diputados, no va a ser aplicable. Yo, con mucho respeto, me permito llamar su atención y sugerirles que demos el debate, que lo platiquemos aquí, que lo debatamos y que construyamos la mejor redacción para que esto se aplique.

Hoy, como está, no se va a aplicar. Hoy, tenemos la oportunidad de regresarlo al Senado. Admitamos a discusión las reservas y construyamos las mejores redacciones. No seamos levanta manos, razonemos, discutamos y construyamos algo que sirva para aplicarse y no letras muertas que no van a permitir una administración correcta de justicia.

Aquí se dijo que no es un tema del gobierno federal que es de la Fiscalía, sí, ineficaz, sí, comparto lo que se dijo. No funciona esta Fiscalía General de la República, hay que fortalecerla, pero si les damos estas herramientas, jamás la estaremos fortaleciendo. La estamos condenando a que continúen sus ya tan grandes fracasos.

Es por ello que llamo su atención, apliquemos justicia cumpliendo nosotros con nuestro deber, legislar de manera adecuada, formular tipos penales de manera adecuada, respetar el principio de taxatividad y permitir que la ley se aplique, y no que nazca muerta como han nacido ya en varias ocasiones otras leyes por capricho de un solo legislador.

Dense la oportunidad ustedes de leerlo. Dense la oportunidad ustedes de analizarlo. No piensen a través de la cabeza de quien no piensa. Ustedes, por favor, lo pueden hacer, y yo creo que lo deben de hacer y, más de alguno les entiende bien a estos temas. En conciencia creo que deben revisarlo.

Finalmente, se habló aquí de justicia, yo los invitaría a aplicar a que nos sumemos a una consulta más, hay que preguntarle al pueblo sabio, hay que consultarle si se debe llevar a juicio a Pío López Obrador. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas Galván. El diputado. Permítame un momento, ¿con qué objeto diputado Riggs?

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Es formular la pregunta, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No diputado. Primero hay que poner a consideración de la asamblea si se acepta a discusión, porque durante la presentación de las reservas no se puede aceptar ni por parte del orador ni por parte de la Presidencia que se formulen preguntas. Pero, insisto diputado, y sin ánimo que sea un diálogo entre usted y yo. Nada más recordar que en este momento acaba de presentar el diputado Espadas Galván sus reservas.

A continuación, la Secretaría va a consultar a la asamblea si se admiten a discusión. Si se admite a discusión, entonces, en ese momento se abre el registro de oradores para la discusión. Y, en caso de que a algún orador u oradora, haciendo uso de la tribuna, usted quisiera hacerle alguna pregunta, entonces, en ese momento sí podría usted hacérsela. Pero no en este ni en el anterior.

Quiero solamente puntualizar que el diputado Jorge Arturo Espadas Galván presentó reservas a dos leyes. En este momento se pondrá a consideración de la asamblea si se admiten a discusión las reservas al artículo 167, primer y segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, en relación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva al artículo 167, tercer y cuarto párrafos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La diputada Ximena Puente de la Mora: Con su venia, señora presidenta. Es necesario hablar las cosas con claridad. La reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no logrará lo que promete.

Estas modificaciones no garantizan la disminución de los delitos y sí el aumento de personas recluidas en prisión, sin un juicio de por medio.

Quienes han impulsado esta modificación aseguran que aumentar el catálogo de delitos es crucial para combatir la inseguridad del país. Pero la realidad es que carecen de evidencia para respaldar sus argumentos.

Esta iniciativa no aporta los datos que demuestran una relación significativa entre encarcelar imputados y disminuir la incidencia delictiva. La prisión preventiva oficiosa lesiona el derecho a la libertad personal, violenta la presunción de inocencia, vulnera el derecho a la defensa adecuada y trastoca la independencia judicial.

No olvidemos que uno de los propósitos de la reforma penal del 2008 fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia. Específicamente observamos las modificaciones al artículo 167, causas de procedencia, donde se establece: para los efectos de este artículo también se considerarán cometidos con medios violentos, los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego, o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.

Este párrafo es inconstitucional, puesto que es contrario a lo establecido por el artículo 19 de nuestra Ley fundamental, el cual debe interpretarse en estricto sentido. Es el mismo artículo 19, en su segundo párrafo, que establece delitos cometidos con medios violentos, con armas de fuego y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Este artículo no da pie a la ambigüedad que pueden generar las apariencias.

De la misma forma, estas modificaciones estarían invadiendo una facultad que es propia de los Congresos estatales, en lo referente al derecho penal sustancial. Por ello, celebramos la iniciativa de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, en torno a las modificaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el Grupo Parlamentario del PRI entendemos perfectamente la demanda de reducir los índices de inseguridad en el país. Pero, no es a partir de trasgredir derechos humanos y los derechos consagrados en la Constitución como lograremos un verdadero estado de derecho.

Compañeras legisladoras y legisladores, esta es una gran oportunidad para atender las voces de las organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas en derecho penal y de seguridad, organismos de derechos humanos, para favorecer la instrumentación de medidas alternativas a la prisión preventiva, robustecer la defensoría pública, combatir el retraso en procesos judiciales. Pero, sobre todo, fortalecer la independencia del Poder Judicial, que permitan resolver los niveles de criminalidad, pero solo de impunidad que tenemos en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Puente de la Mora. Consulte la Secretaría, a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Ximena Puente de la Mora.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Puente de la Mora. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, para presentar reserva al artículo 167 con la adición de dos párrafos. Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Ante una serie de afirmaciones falsas que se han hecho aquí en la tribuna, vale la pena poner los hechos sobre la mesa.

Primero hecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado a todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, de la cual México forma parte, que se elimine la prisión preventiva oficiosa por considerarla contraria a los derechos humanos.

Segundo hecho. En el parlamento abierto que se organizó aquí en la Cámara de Diputados, sobre este tema, Octavio Amézcua, oficial representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que este dictamen era contrario a la presunción de inocencia y era violatorio a los derechos humanos. Y dijo: la prisión preventiva oficiosa debe ser de excepción y con una interpretación estricta. La minuta no debe ser un permiso para meter un catálogo de delitos o hacer una interpretación extensiva. Hay que limitar que se exceda el mandato constitucional.

Su propuesta era muy clara, introducir salvaguardas a la prisión preventiva oficiosa, revisiones periódicas de su necesidad, estricta temporalidad y uso racional y excepcional de esta medida con miras a su eventual eliminación del marco constitucional.

Este aspecto, el de establecer estricta temporalidad es lo que propongo en la reserva que someto a su consideración. Y la reserva sostiene lo siguiente: que la prisión preventiva oficiosa no podrá exceder de 90 días

naturales, a fin de que sea un juez quien analice las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determine si se extiende la prisión preventiva, o si bien, se establecen otras medidas cautelares para llevar a cabo el proceso penal, en consecuencia.

Es decir, que después de 90 días descanse en un juez valorar precisamente si continúa la prisión preventiva, una vez que conozca los elementos aportados por el Ministerio Público, o que se establezca por el razonamiento del juez la medida cautelar correspondiente para salvaguardar a las víctimas, pero también para proteger los derechos humanos.

De hecho, la minuta que hoy se conoce tiene graves problemas de inconstitucionalidad. Problemas de inconstitucionalidad que deberá conocer la Suprema Corte para determinar si este trabajo parlamentario, que hoy parece que llegará a su fin, estuvo bien hecho o no.

Y aquí hay que subrayar algo, y lo conocen las compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, la propia comisión había identificado que estos elementos que vienen del Senado son inconstitucionales y había establecido un propio dictamen para poder cumplir con el mandato de 90 días que nos establecimos en un transitorio constitucional en aquella reforma del artículo 19. Y el trabajo que había hecho la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados era mejor al trabajo que se está votando el día de hoy, que proviene del Senado.

Tan era mejor, que ustedes, a pesar de no haberlo aceptado en las comisiones, ya corrigieron el bodrio jurídico que se había establecido de mandar a prisión preventiva oficiosa a quienes cometieran un posible ilícito con un arma de juguete. Lo acaban de corregir en una reserva hace unos minutos. Eso lo discutimos en la Comisión de Justicia, pero ahí traían la instrucción las diputadas y los diputados de la mayoría de no moverle una coma al dictamen que venía del Senado de la República.

Se equivocaron en la Comisión de Justicia en dos sentidos. Debieron haber corregido ese error que venía del Senado, como vienen muchos más del Código Federal de Procedimientos Penales, que seguramente serán declarados inconstitucionales en la Suprema Corte, que también vienen en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que también será declarada en su momento inconstitucional por la Corte. O en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Derechos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, donde también vienen excesos inconstitucionales que tendrá que revisar la Suprema Corte.

Pero todo esto lo saben los integrantes de la Comisión de Justicia, porque lo habíamos identificado en un dictamen que habíamos hecho correcto de aquella reforma constitucional, pero que se decidió dejar a un lado para darle paso a este que viene del Senado de la República, que trae estos errores. Y sí, son errores de inconstitucionalidad.

Por eso, compañeras y compañeros, propongo que acepten esta reserva, que le den oportunidad, 90 días después de iniciada la prisión preventiva oficiosa, a que el juez valore las pruebas y determine cuáles son las medidas cautelares hacia adelante.

De no hacerlo, será una causa más de una acción de inconstitucionalidad que deberá conocer y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Ochoa. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Enrique Ochoa.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Enrique Ochoa Reza. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Pasamos a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó reserva al artículo 6 de esta ley, ha solicitado su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Así será.

La diputada Martha Tagle Martínez presentó, en su primera intervención, reservas a los artículos 7 Bis y 11 Bis, proceda la Secretaría a consultar a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión estas reservas.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, para presentar reservas al artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, presidenta. El dictamen que hoy discutimos falta a la verdad que en este momento todos los delitos, si así lo considera el Ministerio Público, pueden ser sujetos de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, es mentira que en esta reforma se resolverán delitos, como los de homicidio, el robo a hidrocarburos y los feminicidios, que tanto aquejan a las mujeres y a esta sociedad.

Esto es una reforma tendenciosa, porque no contempla en las modificaciones a la Ley General en materia de Delitos Electorales, a la ley que debieron haber incluido, que Morena y sus aliados han utilizado a los llamados siervos de la nación para ejercer presión al electorado y obligarlos a votar o su abstención.

Para terminar de una vez con todas estas malas prácticas, presento una reserva al artículo 7o. Bis, para que se sancione a toda persona que, ostentándose como voluntario, simpatizante, militante de un partido o coalición, utilice recursos públicos para beneficiar a un partido o candidato, visitando casa por casa.

Ya basta de quien quiera darle vuelta a la ley para beneficiarse y actuar en total impunidad. En los estados, en los municipios, en donde no tienen la posibilidad de ganar, hacen el trabajo que no requiere este país. El uso de estas medidas... y los usan, porque así es... violentan y llegan al terrorismo electoral.

De aprobarse mi reserva, se garantizarán mayores condiciones de competitividad electoral y se dejará que el ciudadano, con libertad, elija a sus autoridades, sin la presencia de personas que a cambio de un voto prometan programas, dinero público y apoyos a sectores vulnerables, como son los adultos mayores o los jóvenes.

La prisión preventiva oficiosa no resolverá de raíz la inseguridad en el país. Dejen de engañar a los mexicanos, quienes les dieron su confianza y que hoy la ven traicionada. No hagan del estado de derecho una falsa bandera electoral, ya que con ello están vulnerando las bases de nuestro régimen democrático, nuestras instituciones y, en general, nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Desde mi grupo parlamentario, el PRI, les pedimos hacer un voto de conciencia y garantizarles a los mexicanos un marco jurídico acorde con nuestra realidad, que asegure mecanismos de acceso a la justicia sin vulnerar derechos humanos y las libertades más elementales. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sara Rocha Medina. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sara Rocha Medina.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Sara Rocha Medina. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó reserva a los artículos 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión ambas reservas.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

La diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó reservas a los artículos 7 Bis y 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ha solicitado su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Así será.

Pasamos a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La diputada Martha Tagle Martínez, presentó reserva al artículo 14 de esta ley en su primera intervención, por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta reserva.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

La diputada Martha Tagle Martínez presentó, en su primera y única intervención, reservas al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión esta reserva.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, presentó reservas a los artículos 81, 83 Ter y 83 Quáter, así como al artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su primera intervención. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Martha Tagle Martínez. Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

La diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha presentado reserva para el artículo 420, tercer párrafo, del Código Penal Federal. Tiene el uso de la palabra.

La diputada Norma Guel Saldívar: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la totoaba es una especie de pez endémica del norte del golfo de California, que actualmente se encuentra en peligro de extinción, por lo que se encuentra protegida por la legislación mexicana y la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Sin embargo, su pesca y tráfico ilegal continúan debido a la alta demanda del buche de la totoaba, esto en el mercado asiático, donde se le atribuyen diversas propiedades afrodisíacas. El precio del kilo del buche de totoaba oscila entre los 572 y los 8 mil dólares. La pesca es tan masiva que incluso se ha puesto en peligro de extinción a la vaquita marina, especie que en ocasiones queda atrapada en las redes de los pescadores furtivos.

En el Partido Revolucionario Institucional siempre hemos estado a favor de la defensa de las especies en peligro de extinción. Durante la administración pasada se llevaron a cabo esfuerzos extraordinarios para detener la pescar de la totoaba y evitar así la desaparición de ambas especies. Pero, la totoaba no es el único animal en peligro. México es un país megadiverso y alberga cerca del 10 por ciento de las especies registradas en todo el mundo. Muchas de ellas endémicas y gran parte se encuentran en peligro de extinción.

Existe a nivel mundial una importante demanda para comprar animales que habitan en México por lo que su caza, captura y comercio representan un negocio muy lucrativo para la delincuencia organizada ambiental en nuestro país.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que este mercado negro obtiene ganancias de hasta 100 mil millones de dólares al año y se encuentra solo después del contrabando de drogas y el de armas.

El tráfico de especies constituye uno de los principales problemas medioambientales en México, por lo que estamos de acuerdo en fortalecer nuestra legislación para combatir este delito.

Sin embargo, creemos que en lo que respecta a las cuestiones de técnica legislativa, la adición de un párrafo al artículo 420 del Código Penal Federal, que especifique una pena por la pesca de la totoaba contraviene al principio que señala que toda ley o toda norma deben de ser generales, abstractas e impersonales.

Una modificación a la legislación en esta materia debe de ser más general, con el objetivo de que no solo la totoaba sino todas las especies que sean objeto del tráfico ilegal se encuentren protegidas. No podemos cambiar el Código Penal Federal cada vez que una especie se encuentre en peligro de extinción y amenazada.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta tribuna para presentar una reserva al artículo sexto del presente dictamen, por el que adiciona un párrafo tercero al artículo 420 del Código Penal Federal, de modo que la redacción quede de la siguiente manera:

En los casos previstos de la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrá la pena de 5 a 15 años de prisión y el equivalente de 3 mil a 6 mil días multa cuando se trata de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de especies de fauna protegida.

Con este cambio no solo combatimos el tráfico ilegal de la totoaba sino de todas las especies que están protegidas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guel Saldívar. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Norma Guel Saldívar.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Norma Guel Saldívar. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

La diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta de adición de un artículo transitorio. Ha solicitado que su propuesta íntegra sea insertada en el Diario de los Debates. Así será.

Agotada la lista de oradoras y oradores, se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, hasta por quince minutos, para que las y los diputados presentes procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, que corresponden a: artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. artículos 6, 7 Bis y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Los artículos 81, 83 Ter, 83 Quáter y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo 420 del Código Penal Federal y con la eliminación del cuarto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aceptado por la asamblea.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por quince minutos, para proceder a la votación de los artículos en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Espadas? Adelante, diputado Espadas.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solo para rogarle que nos permita la votación separada, porque estamos coincidiendo con la reserva que se aprobó, pero con el resto no. Entonces, para permitir las dos votaciones y poder expresar el voto en contra de los artículos reservados que se quedan en los términos del dictamen y el voto a favor de la reserva que se aprobó.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Espadas, aquí sí lamento mucho que no hubiera recibido este comentario de su parte antes de anunciar la votación. Lamentablemente ya lo hice y no puedo echar atrás el trámite.

Por favor, remítanos un documento para que quede constancia en el Diario de los Debates la posición de usted y —asumo— de su grupo parlamentario, en relación a esta reserva. Así como también a otros grupos parlamentarios que así lo deseen, para que sus documentos queden insertos en el Diario de los Debates.

A las diputadas y diputados que hayan registrado su voto, les solicitamos que abandonen el salón de sesiones para dar paso al primer bloque. Se pide a la Secretaría que llame al primer bloque de diputadas y diputados para que procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del primer bloque, pertenecientes a los grupos parlamentarios de los Partidos: Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, del Trabajo, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y diputadas y diputados sin partido, procedan a emitir su voto de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito atentamente a la Secretaría, que llame al segundo bloque de diputadas y diputados, para que procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen, y la modificación aceptada por la asamblea. Así como a diputadas y diputados de otros bloques que no aún no hayan emitido su voto.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y los diputados integrantes del segundo bloque, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena y las y los diputados que falten, que procedan a emitir su voto de los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que reitere el llamado a diputadas y diputados que aún no hayan emitido su voto, para que lo emitan.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Se pide a las y a los diputados que falten de emitir su voto que pasen a este pleno a hacerlo.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación, para dar cuenta con el resultado de la misma.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, el resultado es el siguiente: 258 votos en pro, 2 abstenciones y 118 votos en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos reservados en términos del dictamen y la modificación aceptada por la asamblea al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **Se devuelve al Senado de la República, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.**

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados con el que devuelve, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA"

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-7-2209
EXP. 8453

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de devolver a ustedes para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

Dip. Mónica Bautista Rodríguez
Secretaria

RECIBIDO
2020 OCT 14 PM 12 52
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL
DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
005078

JJV/rgj

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y **se adicionan** las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

I. a X. ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a III. ...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo.- Se **adiciona** un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero.- Se **adiciona** un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se **adiciona** un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

Artículo Quinto.- Se **reforman** los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y se **adiciona** un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83 Ter.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.- ...

Artículo 83 Quat.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- ...

I.- ...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

II.- Con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo Sexto.- Se **reforma** el artículo 160, primer párrafo; se adiciona un párrafo tercero al artículo 420, y se **derogan** las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa, se le impondrá prisión de uno a seis años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.

...

...

Artículo 162.- ...

I.- Se deroga.

II.- ...

III.- Se deroga.

IV.- y **V.- ...**

...

...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 420.- ...

I. ...

II. ...

II Bis. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Artículo Séptimo.- Se **adiciona** un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480.- ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo.- Se **reforma** el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis, 84, 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a X. ...

...

Artículo Noveno.- Se **reforman** los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533.- A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

...

Artículo 534.- Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, se le impondrá multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

Dip. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta

Dip. Mónica Bautista Rodríguez
Secretaria

Se devuelve a la Cámara de Senadores
para efectos de la fracción E
del artículo 72 Constitucional
Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020

Lic. Hugo Christian Rosas de León
Secretario de Servicios Parlamentarios

9

El Presidente Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro:

Recibimos en la Mesa Directiva el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de prisión preventiva.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza incorporar el dictamen al Orden del Día de la sesión de hoy.

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorpore el dictamen referido. Quienes estén porque se autorice favor de levantar la mano.

Les pido mantengan su mano un momentito levantada a todas y todos los Senadores.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar su mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Gracias, señora Secretaria.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

(Dictamen de primera lectura)

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 114 numerales 1 y 2, 117, 135 fracciones I y II, 136, 150, 178, 182, 187 numeral 1, 188, 190 y 191 del Reglamento del Senado de la República y demás relativos y aplicables, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

METODOLOGÍA

I. En el apartado de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del Proceso Legislativo, así como de la recepción del turno para la elaboración del presente Dictamen.

II. En el apartado **"CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO"**, se presentan los términos, sentido y alcance del Proyecto de Decreto de la Cámara de Diputados.

III. En el apartado **"CONSIDERACIONES"**, se expresan los argumentos y razonamientos que sustentan el sentido del presente Dictamen.

IV. En el apartado relativo al **"TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO"**, se da cuenta del texto del Decreto aprobado por las Comisiones Unidas.

I. ANTECEDENTES

1. A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, doce iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones, a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Salud.

2. En fecha 27 de julio de 2020, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron en reunión extraordinaria el "DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ASÍ COMO REFORMAS, ADICIONES Y EN SU CASO DEROGACIONES, A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN."

3. En sesión extraordinaria de fecha 29 de julio de 2020, el Pleno del Senado de la República aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto, referido en el punto anterior.

4. Como se hace constar en el Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, publicado el 7 de octubre de 2020 en la Gaceta Parlamentaria de dicha Cámara, con fecha 2 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva de esa Soberanía dio cuenta del oficio de la Cámara de Senadores, con el que remitió el expediente con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y

adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

5. Asimismo, como se desprende del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en misma fecha, la Mesa Directiva turnó la Minuta citada en el punto anterior, para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia de dicha Cámara.

6. En sesión ordinaria celebrada el 06 de octubre de 2020, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

7. El 7 de octubre de 2020 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria Año XXIII, Número 5625-II, de la Cámara de Diputados, para declaratoria de publicidad,

el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto referido en el punto que antecede.

8. En fecha 13 de octubre de 2020, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió y aprobó en lo general, el Dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

9. En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados fueron presentadas diversas reservas relativas a las modificaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al Código Penal Federal, así como a las disposiciones transitorias, de las cuales únicamente la presentada por la Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en votación económica, se admitió a discusión y fue aprobada por el Pleno.

10. En fecha 13 de octubre de 2020, la Minuta con proyecto de Decreto en comento, fue devuelta a esta Soberanía mediante oficio D.G.P.L. 64-II-7-2209,

para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. El 20 de octubre de 2020, mediante oficio DGPL-1P3A.-3083, la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso el turno correspondiente a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, en virtud de la recepción de la Cámara de Diputados del oficio con el que devuelve, para efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

II. CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, tiene como cámara de origen el Senado de la

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

República, en virtud de doce iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de dicha Soberanía.

La idea central de dichas iniciativas fue dar cumplimiento al mandato constitucional respecto de la obligación del Congreso de la Unión para efectuar las modificaciones normativas necesarias a fin de incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos legales que se involucran, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal y, de esta manera, dar certeza jurídica a las y los destinatarios de la norma superior para que, tanto los juzgadores como la autoridad persecutora de los delitos y las propias personas justiciables, conozcan de manera puntual e indubitable el alcance de la reforma constitucional aludida en la legislación secundaria.

Al respecto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó casi la totalidad de los diversos ordenamientos secundarios reformados, adicionados y derogados, salvo un párrafo cuarto que se encontraba adicionado en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establecía que **para los efectos de ese artículo, también se considerarían cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima**.

Dicha modificación fue resultado de la reserva presentada por la Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, referida en el apartado de Antecedentes, quien señaló que dicho párrafo se extralimitaría al legislar más allá de lo ordenado por el decreto y que, al describir una hipótesis de naturaleza sustantiva, lo adecuado sería plasmarla en el Código Penal Federal u otro cuerpo de leyes.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para clarificar las diferencias entre el proyecto propuesto por esta Soberanía y la Minuta aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, en lo que concierne al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, en los demás ordenamientos fueron aplicables modificaciones de carácter técnico legislativo.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y se adicionan el párrafo cuarto, las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:	**Artículo Primero.- Se reforman** el artículo 167, párrafo tercero, los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto, y los párrafos sexto, fracción XI y octavo, y **se adicionan** las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto, así como los párrafos noveno y décimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 167. Causas de procedencia … … El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación,	**Artículo 167. Causas de procedencia** … … El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.	electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima.	**SIN CORRELATIVO**
Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos	Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... **I.** a **X.** ...	electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... **I.** a **X.** ...
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;	**XI.** Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;
XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;	**XII.** Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;
XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;	**XIII.** Feminicidio, previsto en el artículo 325;
XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;	**XIV.** Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;	**XV.** Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;
XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y	**XVI.** Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y
XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.	**XVII.** Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.
...	...
I. a **III.** ...	**I.** a **III.** ...
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un	El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia,	acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia,

para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.	para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Tomados en cuenta los antecedentes señalados, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras hacen las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Cámara de Diputados, en su facultad de cámara revisora, con fundamento en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resolvió devolver al Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

En ese sentido y en virtud del turno correspondiente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, estas Comisiones Unidas son competentes para pronunciarse respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto referida.

SEGUNDA.- En cuanto al contenido del mencionado documento, la colegisladora aprobó casi en su totalidad la Minuta con Proyecto de Decreto enviada por el Senado de la República, salvo una disposición que constituía el cuarto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de armas

réplica, la cual fue referida en el Artículo Primero del Proyecto de Decreto como quinto, así como modificaciones de técnica legislativa.

Al respecto, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas se suman a la modificación propuesta por la colegisladora y se allanan al Proyecto aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el día 13 de octubre de 2020, toda vez que coinciden en que incorporar la conducta equiparable a los delitos cometidos con armas réplica en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que amerite la implementación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.

Finalmente, estas dictaminadoras estiman conveniente señalar que, en virtud de que la colegisladora omitió realizar un ajuste adecuado a la descripción normativa relacionada con las reformas y adiciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por técnica legislativa y para expresar con claridad las reformas y adiciones ya aprobadas por ambas Cámaras, es pertinente hacer notar que, en la referencia a "los actuales párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo quinto", en realidad estos párrafos se fusionan para quedar como párrafo cuarto, especificando cómo se recorren los correspondientes párrafos, aún y cuando se utiliza la referencia "recorriéndose en su orden los subsecuentes", en el entendido que dicho ajuste no altera la eliminación del párrafo propuesto por la colegisladora, ni mucho menos las porciones normativas aprobadas.

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Con base en los razonamientos vertidos, para efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los integrantes

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a consideración del Pleno y, en su caso, aprobación el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, la fracción XI del párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como el párrafo octavo que pasa a ser séptimo, y **se adicionan** las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como los párrafos octavo y noveno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

…

…

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

I. a **X**. ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a **III.** ...

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control

podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4.- ...

...

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y **se adiciona** un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

...

Artículo 83 Ter.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.- ...

Artículo 83 Quat.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 160, primer párrafo; **se adiciona** un párrafo tercero al artículo 420, y **se derogan** las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la

defensa, se le impondrá prisión de uno a seis años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.

...

...

Artículo 162.- ...

I.- Se deroga.

II.- ...

III.- Se deroga.

IV.- y **V.-** ...

...

...

Artículo 420.- ...

I. ...

II. ...

II Bis. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480.- ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis, 84, 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a **X.** ...

...

Artículo Noveno.- Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533.- A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

...

Artículo 534.- Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, se le impondrá multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2020.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sesión a distancia vía webex, a 15 de febrero de 2021.

De acuerdo a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de hoy, y disponible en la plataforma digital, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, queda de primera lectura

18-02-2021
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de prisión preventiva oficiosa.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 62 votos en pro, 36 en contra y 1 abstención.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 16 de febrero de 2021.
Discusión y votación 18 de febrero de 2021.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria a Distancia Celebrada en la Ciudad de México, el 18 de Febrero de 2021

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Muy bien, Senador Napoleón. Tanto el Senador Ricardo Monreal como el Pleno lo ha escuchado.

Tenemos la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de prisión preventiva oficiosa.

Este dictamen se origina por una iniciativa que el Senado aprobó el 29 de julio de 2020 como Cámara de origen, y que la Colegisladora nos devolvió con modificaciones el 20 de octubre de 2020.

La minuta devuelta suprime el cuarto párrafo que se adicionaba al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, solo es susceptible de discusión la supresión de ese cuarto párrafo.

Si el dictamen se aprueba en sus términos, se remitirá al Ejecutivo Federal.

En caso de insistir en nuestra versión, se devolvería a la Cámara de Diputados.

A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 16 de febrero de 2021.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

(Dictamen de segunda lectura)

Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y está disponible en la plataforma digital, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del dictamen y se pone a discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano y mantenerla levantada hasta por diez segundos.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Está a discusión en lo general y en lo particular.

Para ello, tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta por cinco minutos.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Gracias, señora Presidenta.

Hemos tenido un par de discusiones a o más en el Senado de la República con respecto a la reforma al artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa. Y esta reforma del 6 de diciembre de 2018 en realidad constituye el error, primero, y en lo sucesivo hemos tenido errores secundarios que ha llevado a la reproducción, como dicen los clásicos: hay un error primero y lo demás son consecuencias.

Esta reforma es justo la discusión que hoy tenemos, es una réplica de servicio de origen. Y me parece, debemos insistir, debo insistir en congruencia y en consecuencia con mi voto en contra, insistir en contra de este modelo de la prisión preventiva oficiosa.

A lo largo de estos años ya, el Congreso de la Unión ha ido aprobando distintas piezas legislativas que tienen un profundo carácter punitivo y que constituyen un error en la concepción democrática de celeridad y que constituyen un error en la concepción democrática en materia de derechos humanos.

Lo han referido distintos organismos internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Expertos, Relatores y muy diversas organizaciones en nuestro país, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y múltiples organizaciones de la sociedad civil han señalado el equívoco del uso de la prisión preventiva oficiosa, del abuso de lo que eso significa al revertir la noción de la última radio que se establece en derecho penal a una primera respuesta del Estado.

En este tiempo hemos podido ya incluso documentar el error que ha significado ya el uso de la prisión preventiva.

Aún, es más, estando claramente en el desafío y el problema que vivimos del incremento de inseguridad, claramente hay errores porque es un modelo esencialmente que se conoce como populismo punitivo; es pensar que con el incremento de las penas, es pensar que con mayores sanciones se disminuirá el delito.

Este modelo fue justo el que se dijo que se iba a desmontar, y lejos de desmontarse se ha impulsado muy fuertemente.

Aquí es el tema incluso en materia electoral. Y claro que hay errores, y claro que hay sanciones, y tiene que ser, y hay incluso ya previsto por ley, mecanismos para que no esté en la Constitución la prisión preventiva oficiosa y la consecuencia que se hace derivar.

Incluso debo decir que veo con enorme preocupación que se está haciendo un uso electoral de la vacuna contra el COVID. Veo con enorme preocupación que hay militantes de Morena que están participando en las brigadas o cercano a las brigadas de vacuna, han salido ya videos que denuncian incluso en lo que se suponía que era un modelo distinto de gobierno y que vemos ahora el partido en el poder, con militantes del partido en el poder, con un chaleco casi igual de los Siervos de la Nación, que los Siervos de la Nación son una estructura electoral de Morena contratada con servidores públicos prestándose a un abuso.

El Presidente del Senado incluso hizo un llamado muy poderoso a que no censara la vacuna de forma electoral. Hay evidencia videográfica de cómo se prestan a confusión. En esos casos, incluso, ni siquiera estoy de acuerdo que haya prisión preventiva oficiosa, por supuesto que tiene que haber una sanción, por supuesto que me parece un acto de corrupción, me parece un asunto desmedido el uso de la vacuna del COVID con fines electorales.

Que se tomen los datos de la credencial de elector y que se tomen fotografías por militantes de Morena e incluso se advierta, como hay videos, que si no se dan sus datos no se recibirá la segunda vacuna; incluso propios militantes que dicen que es lo mismo el gobierno que Morena, me parece un exceso. Ni en esos casos estoy de acuerdo con la presión preventiva oficiosa.

Por eso, colegas, insisto una vez más, no podemos seguir avanzando en esta construcción de un rompecabezas punitivo que es regresivo en materia de derechos humanos y que es absolutamente contrario a lo que queremos, un modelo democrático de seguridad.

Por esa razón, mi incongruencia con lo que se ha dicho en toda esta discusión, aviso que votaré en contra, porque no es aceptable bajo ninguna circunstancia que estemos previendo que incrementar las penas, resuelve el problema de la seguridad. Todo lo contrario, tenemos que garantizar derechos aún en esos casos e inclusive cuando estamos siendo testigos de un uso perverso de la campaña de vacunación con fines electorales.

Muchas gracias por su atención.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Gracias, Senador Álvarez Icaza.

Omití decir que la intervención del Senador Álvarez Icaza es en contra.

Tenemos la participación del Senador Eruviel Ávila, del PRI, a favor.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Señora Presidenta, buenas tardes, muchas gracias. Compañeras y compañeros Senadores.

Quiero comentar que mi voto será a favor de este dictamen, por los siguientes razonamientos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que México es parte, contempla que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe de ser la regla general, coincido. Si bien la reforma constitución de 2008 reconoce, por primera vez, la presunción de inocencia como un derecho humano, además de que también privilegió que el derecho de las personas a permanecer en libertad durante el proceso.

Lo cierto es que la propia Carta Magna establece que la regla general tiene límites, al considerar la prisión preventiva oficiosa en ciertos casos, en específico, cuando se trata de evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, pero, sobre todo, para proteger a las víctimas en atención a la gravedad de la conducta.

Como los llama la Declaración de Ginebra de 2006, cito: *"Vivir libre de amenaza, de violencia armada es una necesidad humana básica y es responsabilidad central de los gobiernos proveer la seguridad de sus ciudadanos".* Termino cita.

En esta línea, el pasado 25 de octubre de 2008, presenté ante esta Soberanía una iniciativa de reforma al artículo 19 de nuestra Constitución, a fin de incluir, de manera expresa, la portación ilegal de armas de fuego dentro del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hay que recordar que muchos de los delitos que hoy se cometen, son precisamente con armas de fuego.

América Latina es la región del mundo en donde más se utilizan las armas de fuego para la comisión de homicidios. En México, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la última década.

El propio dictamen aprobado por este Senado reconoce la gravedad del tráfico ilegal de armas, que gran parte del problema de inseguridad en el país es derivado del relativamente fácil acceso que tiene la población, en general, a este tipo de artefactos.

Si bien, el artículo 10 de nuestra Ley de Leyes otorga el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, se deben establecer medidas estrictas para prevenir que se utilice un arma de fuego para un fin distinto, a través de controles normativos.

Termino. Existen varios casos, casos documentados y muchos de ellos conocidos por la opinión pública que advierten sobre la importancia de determinar la prisión oficiosa, tratándose de la portación ilegal de armas de fuego, incluso se ha señalado que existe frustración de las corporaciones de seguridad cuando ven que la persona que detuvieron enfrenta su proceso en la calle e incluso con armas más poderosas de las que portan algunos miembros de la seguridad.

Por ello, toda vez que la Colegisladora aprobó casi en su totalidad la minuta enviada por el Senado de la República, salvo el cuarto párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimiento Penales en materia de armas de réplica, manifiesto, nuevamente, que mi voto será a favor.

Gracias.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra para argumentar en contra, el Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: La prisión preventiva oficiosa representa la mayor violación de derechos humanos legal, que existe en México, es una aberración, es un error grave que viola completamente los derechos humanos de los mexicanos.

Más allá de rollos que se dicen, con supuesto interés de bajar los índices de inseguridad que todos compartimos, lo único que representa la prisión preventiva oficiosa es que se meta a la cárcel a gente sin haberles probado que son culpables, eso significa, compañeros, no se equivoquen, no quiere decir que haya mano dura contra el crimen, quiere decir que con el solo hecho de que el Ministerio Público, las fiscalías que no son autónomas en términos reales en este país, digan que una persona cometió el delito, no prueben, digan, lo acusen nada más. Con eso esa persona va a pasar todo el juicio en la cárcel sin habérsele probado su culpabilidad, esto viola por completo el principio de presunción de inocencia.

¿Tiene derecho el gobierno, la Fiscalía, de acusar a alguien por un delito? Claro que sí.

¿Queremos que vayan a la cárcel los delincuentes? Claro que sí.

Lo que no tienen derecho es meter a la cárcel a una persona inocente, y eso es lo que hace la prisión preventiva oficiosa, porque prejuzga la culpabilidad de la persona; no lo va a valorar el juez. Están confundidos, compañeros, lo que hace la prisión preventiva es quitarle la valoración al juez.

En México existe la prisión preventiva como medida cautelar, hay 14 medidas cautelares que un juez puede valorar cuando le llevan a un acusado, desde que vaya a firmar, desde la prohibición de ver a una persona, desde la prohibición de salir del país, hasta la más grave, que es meterlo a la cárcel. Sí pueden mandar a prisión preventiva a una persona si eso asegura o evita el riesgo de fuga, de la comparecencia de la persona, si eso evita que se obstaculice la investigación, si eso evita que se le haga un daño a la víctima, que exista algún riesgo, si hay un caso de reincidencia. Digamos las cosas como son.

El juez puede valorar dependiendo del caso, hoy en México, mandar a prisión preventiva a alguien, pero lo que hace la prisión preventiva oficiosa es obligar al juez, obligarlo, le quita su decisión por el solo hecho de que una persona sea acusada de un delito, ya no hay de otra, se va a ir a la cárcel, allá va a llevar su juicio y si después prueba que es inocente, fíjense nada más, usted disculpe y va para afuera.

¿Saben qué porcentaje de la gente que está en la cárcel no se le ha probado su culpabilidad? Alrededor del 40 por ciento.

¿Pueden dormir tranquilos sabiendo que se va a mandar a gente inocente a la cárcel, quitarle su libertad sin que se le haya probado su culpabilidad? De veras, compañeros, yo hago un llamado porque no hagamos esto.

Se ha agarrado una moda política diciendo que se quiere combatir la inseguridad, pero así no se combate la inseguridad, cómo va bajar la inseguridad con prisión preventiva oficiosa si fíjense nada más, en México el 90 por ciento de los más de 30 millones de delitos que se cometen al año no se denuncian, y de los que se denuncian, solo el 7 por ciento se abre una carpeta de investigación y de los que se abre una carpeta de investigación, solo cerca de la mitad llegan al juez, es decir, 3.5 por ciento de los delitos. Esta figura le pega un pedacito de esos 3.5 por ciento.

¿Cómo creen que esto va a ayudar a bajar la inseguridad? Es falso, es un pretexto que ponen las fiscalías ante la incompetencia de llevar a los culpables a la cárcel, así de claro, que la puerta giratoria no está ahí, la puerta

giratoria son mentiras, el caso de un reincidente amerita la prisión preventiva justificada, no se necesita una prisión preventiva oficiosa.

Esta es una violación flagrante no nada más a nuestra Constitución, la presunción de inocencia, sino a tratados internacionales que hoy, por cierto, citan, lo que dicen todos los organismos internacionales de derechos humanos, todos, no hay uno solo que defienda esto, todos dicen es una violación de derechos humanos, no puedes, de manera general decir: todos tienen que ir a la cárcel sin juicio. Dejen que el juez valore.

Y sé que hay críticas de que no hay una buena relación del juez, compongamos eso, pero no es justo que una persona, por el solo hecho de que el Ministerio Público la acusó, ya vaya a la cárcel.

De veras se los digo, les ruego que no continúen haciendo este daño a México. Si tuviera éxito esta figura, yo les pregunto, ¿y por qué no ha bajado la delincuencia organizada?

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Le suplico que pueda concluir, Senador.

El Senador Damián Zepeda Vidales: Concluyo.

En México, porque no es nueva, y no solo no ha bajado, sino que se ha incrementado, no tiene nada qué ver con la inseguridad, es un abuso y un populismo penal que se está dando.

Entonces hoy no solo van ya con delincuencia organizada, ni con robo, ahora hasta delitos electorales, quiero ver los abusos que van a existir en este país y lo van a ver y lo van a vivir, de parte de personas que abusan de la autoridad, que van a mandar a la cárcel por motivos políticos a gente.

Quiero ver los miles y miles de mexicanos que gracias a esta reforma que hoy están haciendo, van a estar en la cárcel de manera injusta, porque simplemente alguien los acusó y después, usted disculpe.

¿Saben cuánto puede durar la medida cautelar de prisión preventiva? Un año, compañeros.

¿Les paree justo que alguien pase en la cárcel un año sin que le hayan probado que es culpable? A mí no.

Ya chole, ya chole del abuso de la prisión preventiva.

Ya chole de cárcel sin juicio.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del PT, a favor.

El Senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Con su venia, señora Presidenta.

Como lo he manifestado en anteriores ocasiones, dentro de las comisiones y dentro de las lecturas, es tiempo de quien la hace, la pague.

Entiendo las palaras de mi antecesor, el Senador Zepeda, sin embargo, ahorita hay mucha gente que está fuera de las fronteras de este país, incluso paraísos fiscales, disfrutando, mientras, es cierto, hay gente que está presa por delitos que no cometieron, pero no es este el caso.

Compañeras y compañeros legisladores, con diez leyes que reforma este dictamen, hoy se armoniza un marco jurídico para esta figura.

Lo hacemos por seguridad, por aquellos niños y mujeres que merecen tener la seguridad de que la justicia no será retrasada y se aplicará.

Es una medida que asegura la presencia de aquellos que han … la sociedad completa en la cárcel.

Cree uno un México que quiere hacer las cosas bien, sin corrupción, de personas trabajadoras que piensan mejorar y defender a aquellos que lo necesitan.

Hoy tenemos ante nosotros el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en su facultad de Cámara Revisora y donde se abordó el dictamen aprobado, esta Cámara, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, entre otras.

Así como el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que el juez de control dicte la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la

corrupción, tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y de ejercicio abusivo de funciones, así como el robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Las y los Diputados aprobaron el proyecto, pero consideraron necesario eliminar el cuarto párrafo al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que trataba en materia de armas de réplica.

La prisión preventiva oficiosa es una figura especial que ha sido incorporada a nuestra Constitución con el objetivo de combatir eficazmente al crimen organizado, y de esta manera crear un México en paz.

Debido al carácter especial de nuestra figura, es de nuestra opinión que solamente mediante el proceso de reforma de constitución, se pueden introducir nuevos tipos penales al artículo 19.

Por ello hoy aprobamos las reformas que armonizan las leyes secundarias para fortalecer las instituciones de administración e implementación de justicia en la lucha contra la impunidad y la pacificación de nuestro país.

Sin embargo, en un futuro, ante coyuntura distinta, éstas serán necesarias revisar en el catálogo del artículo 19 constitucional.

Con el presente dictamen se dan pasos firmes en la lucha contra la impunidad, enfermedad heredada por un antiguo régimen de corrupción, así como presidentes omisos ante las necesidades del pueblo mexicano, incluso uno de ellos inició por una absurda y sangrienta guerra contra el crimen organizado.

Como consecuencia de ese acto, hoy nos vemos forzados a legislar y, en consecuencia, a corregirlo.

En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos que con la aprobación de esta minuta se contribuya a la armonización legislativa y la reforma del artículo 19 constitucional. Es momento de acabar y erradicar en este país la impunidad y la acción de daño al otro.

Es momento de la que la justicia prevalezca en las y los mexicanos.

Las Senadoras y Senadores del Partido del Trabajo estamos conscientes de la seguridad de los mexicanos y tiene que atenderse prioritariamente y consistentemente al conjugarse una cultura de la paz.

Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la clase política corrupta del viejo régimen y en contra del crimen organizado, la cual ha comenzado a rendir frutos.

Por ello, el sentido de nuestro voto será favorable al presente dictamen.

Es cuanto.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra, para argumentar en contra, la Senadora Claudia Ruiz.

La Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea:

Hoy nos convoca la discusión de un tema que divide más de lo que une.

La prisión preventiva oficiosa ha sido, es y seguirá siendo objeto de grandes controversias entre grupos parlamentarios y desde luego, al interior de ellos.

Y qué bueno que sea así, es un tema de principio y solo así puede valorarse la propuesta.

La riqueza del debate parlamentario en términos cuantitativos como cualitativos, suele ser directamente proporcional a la complejidad del tema que se discute y las opciones para las decisiones del Legislativo.

La prisión preventiva oficiosa es también un tema complejo.

En el grupo parlamentario del PRI, la pluralidad de posiciones en torno a esta figura es innegable, no obstante, sin renunciar a nuestras diferencias, coincidimos en una perspectiva fundamental, cómo ser leales al propósito de no retroceder en el reconocimiento a los derechos humanos y su expansión en virtud de la dignidad de las personas.

Por ello, en el PRI hemos establecido que por respeto a las convicciones personales de cada quien y la libertad de voto, sus integrantes votaremos sobre esta figura a partir de la posición de fondo de cada uno de nosotros.

Reconocemos la diversidad de posiciones, pero en lo personal reafirmo un ejercicio de congruencia con mi oposición a que de oficio haya prisión preventiva.

En principio, reconozco que en muchas ocasiones la procuración de justicia requiere la aplicación de la prisión preventiva y de otras medidas cautelares para garantizar la impartición de justicia, particularmente cuando de ello depende la protección efectiva de las víctimas o el éxito de una investigación.

Sin demérito de ello debemos analizar si la prisión preventiva ha de ser una decisión previa del legislador para transformarla en una medida automática o si se trata de una decisión que requiere ser argumentada, ahí sí, de oficio, por el Ministerio Público y justificada por la autoridad jurisdiccional.

Tal como se ha planteado en las reformas aprobadas con el respaldo mayoritario de esta Soberanía, una medida cautelar que debería constituir un recurso excepcional en la práctica funcionará como una apena anticipada de aplicación general a un catálogo de delitos cada vez más amplio.

Soy consciente de que las modificaciones constitucionales y legales que preceden al debate del día de hoy están prácticamente consumadas, hoy solo nos corresponde avalar o rechazar el planteamiento de la Colegisladora con respecto a un párrafo de aparente mejoría.

Sin embargo, no voy a dejar de insistir, muchos de nosotros no acompañamos la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio porque es contraria al principio de progresividad del reconocimiento de los derechos humanos.

En ese sentido, la modificación del artículo 19 constitucional fue una regresión de los compromisos internacionales en materia de derechos de las personas en el proceso penal.

Una ampliación que atenta contra el principio de presunción de inocencia fundamental para nuestro sistema penal acusatorio.

Una ampliación que valida en los hechos la restricción a la libertad de una persona sin que para ello se deba aprobar su absoluta necesidad.

La aplicación de la prisión preventiva debe ser el resultado del análisis de cada caso particular con base en los elementos de prueba que el Ministerio Público presente sobre las razones que avalan una medida excepcional y de la valoración que el juez haga de dichos elementos. Debe ser una determinación extrema, emanada del conocimiento del caso y las circunstancias, y de razonamientos consecuentes para proteger un valor superior; no debe ser el resultado automático de una determinación genérica en la legislación.

Compañeras y compañeros, sabemos que la ciudadanía exige resultados contundentes ante la insuficiencia de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia contra la inseguridad, la violencia o la corrupción. Es una exigencia comprensible y que, desde luego, requiere atención de cara a la situación crítica que persiste en buena parte del territorio nacional.

Es una exigencia legítima, pero no obstante haber ampliado el catálogo de tipos penales para avalar de facto la aplicación de una pena anticipada para un indiciado está muy lejos de ser una solución. Como todos los grandes problemas que tiene el país, la inseguridad y la impunidad exigen cambios profundos con visión de largo plazo; no respuestas fáciles de corto plazo.

Algunos, incluso, las han denominado como populismo penal. Si realmente queremos responder a la exigencia ciudadana por un país más seguro, más transparente y más justo, revisemos de fondo todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.

Fortalezcamos las capacidades de investigación de los ministerios públicos.

Mejoremos la capacitación, el equipamiento y la remuneración de nuestras policías en los tres órdenes de gobierno. Revisemos las insuficiencias y las oportunidades del sistema penitenciario con el faro de la protección de los derechos humanos, pero no sigamos alimentando falsas expectativas que inevitablemente se verán insatisfechas frente a una realidad que no se ajusta a la buena voluntad del Poder Legislativo.

Lo he dicho antes y lo reitero ahora.

La seguridad ciudadana no es excluyente de la protección de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos no es excluyente de la seguridad ciudadana.

Garantizar la seguridad de la ciudadanía es un deber del Estado, pero también lo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Con esa convicción votaré en contra de este dictamen.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra el Senador Luis David Ortiz, de Movimiento Ciudadano, a favor.

El Senador Luis David Ortiz Salinas: Mi intervención es en contra, señora Presidenta. Preciso eso.

Continúo.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Perdón, en contra, aquí nos pasaron la lista a favor.

En contra.

El Senador Luis David Ortiz Salinas: Gracias.

Ratifico la muy acertada intervención aquí del Senador Álvarez Icaza, del compañero del PAN y de la Senadora del PRI, que me antecedieron en su voto en contra, y creo que hicieron una intervención muy clara, pero quiero ampliar.

La reforma penal en México, que se hizo hace unos años, fue para pasar de un sistema inquisitivo a un acusatorio, precisamente, respetando tratados internacionales y el sentido original de la Constitución para respetar los derechos humanos.

El tema de la prisión preventiva debió haber desaparecido con este nuevo sistema; sin embargo, se mantuvo en el tema de narcotráfico y delincuencia organizada previendo la complejidad que estos asuntos presentan y que la autoridad no se quedara sin herramientas para poder actuar por las circunstancias.

Pero ahora este catálogo se ha ampliado y, como bien se dijo aquí, se está utilizando el derecho penal o la última ratio del Estado no buscando respetar los derechos humanos y buscando mantener la paz; sino utilizándolo como una herramienta represiva por las incapacidades del Estado.

El camino es fortalecer las capacidades de investigación de los ministerios públicos, de las instituciones del Estado; no violar los derechos humanos.

El acusar a alguien es una presunción y si no hay los elementos para determinar la prisión preventiva, que deben de estar basados en la peligrosidad que representan para la sociedad, la posibilidad de que huya, no solo el hecho de que se le esté acusando es completamente contrario a la Constitución y al principio de inocencia que se establece en ella.

Yo creo que estamos pasando en lugar de ser gobierno de izquierda, que siempre ha enaltecido los temas de derechos humanos, un Estado que respeta más los derechos humanos, estamos pasando hacia un Estado represivo y autoritario. Y ese no es el camino que queremos los mexicanos, queremos que haya respeto a la dignidad de las personas, y endurecer estas penas y tomar estas medidas autoritarias, contrarias a la Constitución, son un paso equivocado.

Yo voto en contra de esto.

Y creo que es un gran retroceso de la reforma, quizá la más importante que se ha hecho en las últimas décadas, que es la reforma penal que se hizo en México, y esto representa un gran retroceso para ella.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del PRI, hasta por cinco minutos, a favor.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con el permiso de la Presidencia.

Hoy se materializa uno de los compromisos que muchas y muchos de nosotros hicimos en nuestra campaña.

Hoy, con la aprobación de esta minuta, terminamos el proceso de modificación, de andamiaje jurídico necesario para que la prisión preventiva oficiosa sea una realidad.

Ahora sí, como lo dice el artículo 19 constitucional, deberán seguir su proceso en la cárcel todos los que hayan cometido alguno de estos delitos.

Uno, delincuencia organizada, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros.

Y, por supuesto, con esta importante reforma esperamos que por fin se acabe la llamada puerta giratoria en los penales del país y que los delincuentes estén donde deben de estar, de esto no tengo la menor duda, en la cárcel.

Ya basta de escuchar historias de terror en las que las víctimas de alguno de estos delitos sean revictimizadas una y otra vez porque los delincuentes siguen en las calles.

Es común, sobre todo en un tema muy sensible, en campaña, muchos de nosotros recibimos como queja de la ciudadanía en el robo a casa habitación que anteriormente se hacía, con mucha valentía, una denuncia, la denuncia se presentaba y, obviamente, los delincuentes andaban en la calle y nuevamente amenazando a quienes con valentía habían levantado una denuncia y andaban, por supuesto, cometiendo fechorías sin que nadie los pudiera detener.

Estamos ciertos que con estas reformas avanzamos, también quiero decirlo, como lo he dicho, en la protección de las víctimas y reforzamos la procuración de justicia de nuestro país.

Evidentemente la prisión preventiva oficiosa sigue siendo una situación extraordinaria que solo se aplica en los casos más agravantes para la sociedad; es decir, estas reformas no buscan llenar las cárceles de inculpados ni que la administración de justicia sea todavía más lenta; por el contrario, lo que se busca es garantizar en primerísimo lugar la integridad y la seguridad de las víctimas, pero el objetivo final, y así lo veo en esa pluralidad que tenemos en nuestro grupo parlamentario, como lo ha dicho mi amiga Claudia Ruiz Massieu, es lograr que se haga justicia en todos los casos.

Compañeras y compañeros, los que recorremos nuestros estados hemos escuchado, como lo he dicho una y otra vez, el reclamo popular de que no sirve de nada denunciar los delitos, ya lo he señalado anteriormente, porque el ratero, el delincuente sale en libertad prácticamente ese mismo día con artimañas jurídicas que obviamente todos sabemos que se pueden dar de manera inmediata; o sea, tarda más uno en ir al Ministerio Público o el hombre o mujer valiente para presentar una denuncia y levantarla, que lo que se tarda el delincuente en salir de la cárcel a seguir delinquiendo e incluso a tomar represalias en contra de los denunciantes. Y no me canso de insistir en este tema.

Todo esto debe parar, por eso votaré a favor de este dictamen, porque estoy convencido de que la prisión preventiva oficiosa bien regulada es una herramienta que puede salvar, incluso, la vida de las víctimas.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta Senadora Imelda Castro Castro: Tiene el uso de la palabra la Senadora Kenia López, del PAN, para argumentar en contra.

La Senadora Kenia López Rabadán: Muchas gracias, señora Presidenta.

Dicen que *"de la moda, lo que te acomoda".* Y la verdad es que la prisión preventiva oficiosa no le acomoda al ser humano.

La prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos de las personas. Eso dicen organismos internacionales, eso ha emitido, incluso ha enviado al Senado de la República, a través de distintas comunicaciones, la ONU. También lo dice Amnistía Internacional, incluso la CNDH, cuando funcionaba, lo dijo.

La Comisión Interamericana es uno de los organismos que nos ha dicho que la prisión preventiva oficiosa no debería de aplicarse ni en México ni en el mundo. ¿Cuál es el problema de la prisión preventiva oficiosa? Pues de manera prioritaria es que viola el principio de inocencia.

Así es, compañeras y compañeros, lo que hoy están aprobando, si es que eso sucede en este Senado de la República, es que los mexicanos entrarán a la cárcel y después averiguarán si son o no culpables.

Con estas reformas se están violando tratados internacionales que México ha firmado y que evidentemente va en una lógica distinta desde el Senado de la República, que ya se había aprobado anteriormente. Fíjense nada más, vamos a tratar de contextualizar qué está pasando en la realidad en las cárceles en nuestro país. De cada 10 personas que están en una prisión, que están en una cárcel, de cada 10 personas, cuatro no tienen sentencia.

Hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos a muchísimas personas que acuden al Senado buscando justicia, buscando un canal de comunicación para que los Senadores de la República puedan conocer la problemática que les aqueja.

Hay muchas historias de adultos mayores, de indígenas, de defensores de derechos humanos. Tenemos un testimonio en la Comisión de Derechos Humanos de este Senado de la República de un compañero, de un hombre integrante de una comunidad indígena, lleva 18 años en prisión y no tiene sentencia.

Esa es la realidad, compañeras y compañeros, de la justicia en nuestro país; viola la presunción de inocencia, pero también viola el principio de excepcionalidad, porque con estas reformas que se están planteando y que se están aprobando ya no es una excepción, la prisión preventiva oficiosa ya no es una excepción a la regla, lo están convirtiendo en la regla.

Como bien ha comentado aquí el Senador Zepeda, obligan al juez directamente a enviar a las personas al reclusorio. Es claro que podríamos ahora politizar el tema hablando de los delitos electorales, porque justo este dictamen contiene la sanción de prisión preventiva oficiosa para quienes durante el proceso electoral usen recursos públicos y se vayan a la cárcel.

Y primero que nada decirles, compañeros de Morena, no van a estar para siempre en el poder. Eso significa que habrá, teóricamente, a futuro, la posibilidad de que apliquen esta reforma y este articulado en contra de quienes hagan uso de los recursos públicos.

Y podríamos empezar hoy, por ejemplo, hablando de las vacunas, de este lucro político inhumano de las vacunas; podríamos hablar incluso de las lamentables filas que hoy se ven en las redes sociales de adultos mayores queriendo obtener una vacuna; de la irresponsabilidad del gobierno para que no tengan ni la infraestructura ni el acceso a una vacuna. Menos del 1 por ciento de los mexicanos ha sido vacunado y todavía quieren lucrar políticamente con las vacunas. Lamentablemente es una vergüenza.

Pero, ni, aun así, ni aun con eso podremos justificar la prisión preventiva oficiosa para el gobierno que quiera usar en un proceso electoral los recursos públicos para su beneficio.

Votaremos en contra, por supuesto, de manera congruente con los derechos humanos y de manera congruente con lo que nos han solicitado diversos organismos protectores de derechos humanos.

Muchísimas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Se concede el uso de la palabra a la Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor.

La Senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Creo que Acción Nacional, que se dedicó, a partir de la creación del nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es tan nuevo, tiene 13 años, se dedicó solamente durante mucho tiempo a hacer edificios suntuosos, a una inversión de recursos impresionantes; se construyeron edificios enormes, se llenó de burocracia, pero se les olvidó lo más importante. Es decir, se dedicaron a crear un envase, pero se les olvidó el contenido, el contenido que hoy lastima tanto a la sociedad.

Por eso estoy a favor de estas reformas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy estamos aquí deliberando como un acto de justicia elemental y en un país donde la justicia ha quedado pendiente para muchos de los mexicanos, las medidas han sido laxas, las medidas cautelares muchos delitos; por ejemplo, en el feminicidio, que tanto lastima a nuestra sociedad.

Afortunadamente, antier aquí mismo aprobamos diversas reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y con esas iniciativas, como la de antier y la de hoy que estamos deliberando, estamos otorgando mayor capacidad a nuestras autoridades judiciales para actuar de manera inmediata y contundente en los casos de agresiones a mujeres víctimas de violencia, feminicidios, violencia sexual contra menores, robo a casa habitación, corrupción de funcionarios, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, robo de hidrocarburos.

Nadie puede negar que la percepción ciudadana desde hace tiempo es de una injusticia que suele otorgar impunidad al delincuente y que en nuestro país solo dos de cada 100 casos penales logran verdaderamente la justicia de la víctima.

Nuestro país, y de manera más precisa nuestra sociedad, espera que nosotros tengamos mano firme para que aquellos que sin ningún temor a ser sancionados se dedican a cometer todo tipo de delitos, conociendo las facilidades que le ofrecen las leyes y aquí se pregunta ¿estas reformas pueden ocasionar actos de injusticia en los procesos penales? No serán mayores a los miles y miles de actos de injusticia que dejan las decisiones judiciales al liberar a un delincuente para que siga y siga lastimando a la sociedad.

La capacidad del crimen organizado, la escalada de violencia que estamos viviendo, se debe en mucho a la gran cantidad de puertas abiertas para quienes han hecho del delito una forma de vida. Lo diré en términos coloquiales, es importante darles dientes a nuestros juzgadores, muchas veces criticados por dejar en libertad a quienes incurren en conductas delictivas; los estamos dotando de un marco legal acorde con el nuevo sistema de impartición de justicia.

Compañeros legisladores, no hay peor acto de injusticia que el temor a cometer una injusta decisión, permítanme repetirlo así, mientras nosotros tengamos temor de legislar por dañar a terceros.

Hoy tenemos a toda una sociedad siendo asaltada una y otra vez, tenemos funcionarios que hemos visto, que seguimos viendo, que seguimos discutiendo, que seguimos criticando, que han cometido todo tipo de corrupción y, peor aún, gozan de fortuna y se ríen de la justicia; feminicidas violentando mujeres sin temor a sufrir castigo alguno.

Las leyes siempre son perfectibles y seguramente seguirán reformándose para adecuarse a las circunstancias de cada momento, pero hoy la sociedad nos demanda mano dura contra la delincuencia, mano dura contra la impunidad, mano dura contra los juzgadores, para que ellos terminen con este lacerante daño social, ese desdén de los criminales por la legalidad y sin temor a cometer delitos y ser castigados.

Es por nuestras familias, por nuestra sociedad, por todo lo aquí expuesto, que los conmino a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Xóchitl Gálvez, del grupo parlamentario del PAN, para hablar en contra.

La Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz: Muchas gracias, señor Presidente.

Creo que hay una confusión, los que estamos votando en contra no estamos a favor de los delincuentes, eso es un error. Lo que nosotros queremos es que el Ministerio Público justifique la prisión preventiva oficiosa.

Qué fácil es para los juzgadores ahora darla de oficio y vámonos, y saben qué, ¿cuál es la mala noticia? Que ni siquiera vamos a castigar a los delincuentes, porque eso no implica que tengamos pruebas para poderlos sentenciar, en cambio, cuando un Ministerio Público tiene que justificar la prisión preventiva tiene que hacerse de todas las pruebas, tiene que hacer periciales detalladas, tiene que haber una investigación seria.

¿Hoy qué va a pasar? Lo único que va a pasar es que van a decir: “ya está en la cárcel, ya se hizo justicia” y esto no es cierto. No se hace justicia dando la prisión preventiva oficiosa, porque ese delincuente va a salir muerto de la risa porque no se presentaron las pruebas de su culpa. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es que realmente los Ministerios Públicos tuvieran una serie de elementos, sobre todo científicos, para hacer una verdadera investigación de los culpables.

Miren, aquí se han desgarrado las vestiduras hablando de la corrupción del pasado. Primero, les digo que de sus 15 candidatas y candidatos a gobernadores ocho vienen del PRI, no se confundan, ocho vienen del PRI, seis vienen del PRD, PAN, y otros partidos, y solo uno de su Movimiento. Así es que creo que ese discurso del pasado ya no les queda. Uno de sus principales delincuentes, Emilio Lozoya, está muerto de la risa en su casa. ¿Ahí no se justificaba la prisión preventiva oficiosa? ¿Ahí no debieron haberlo mantenido en prisión? Mejor España lo tuvo en prisión y cuando llegó aquí lo mandaron a su residencia, impresionante, de Lomas de Bezares.

Esa es la enorme hipocresía de este gobierno. Tienen a uno de los delincuentes más impresionantes consentido de su gobierno, Manuel Bartlett, acusado de muchos delitos, millones de pesos en su haber, el hijo haciendo mega negocios con los insumos médicos ¿y saben qué? Van a dar el ejercicio de la no acción penal porque resulta que el delito de corrupción no se encuentra en el Código Penal.

Entonces nos llenamos la boca aquí diciendo que van a hacer justicia y sus delincuentes, que ya los tenían en la cárcel en España, el más importante, el que dio los pagos, el que dio los sobornos, ahora dice: “Es que yo fui un instrumento del poder”. Mangos, no fue un instrumento del poder, es un corrupto y ese corrupto se va a quedar muerto de la risa del delito grave de corrupción. ¿Y quién va a ir a la cárcel? Van a ir a la cárcel sus adversarios políticos en algunas ocasiones, cuando no les convenga; van a ir a la cárcel gente inocente.

Entonces, no se confundan, estar en contra de la prisión preventiva oficiosa no es estar a favor de los delincuentes, es estar a favor de un estado de derecho, es estar a favor de que se investigue con detalle y se castigue, pero realmente se castigue a personas que sean culpables.

Entonces mi voto será en contra por ese motivo, porque no les creo nada.

Pudieron haberlo demostrado ya con algunos personajes que les he mencionado y ahí está ya, exculparon al hijo de Manuel Bartlett, a León Bartlett, por haberle vendido ventiladores al Seguro Social.

Y les aseguro que la denuncia que presenté en la Fiscalía General de la República, va a tener no ejercicio de la acción penal por mil razones y el señor sí que le quiso ender a tres veces el valor los ventiladores, el señor sí que entregó ventiladores en mal estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Se le concede el uso de la palabra a la Senadora Jesús Lucía Trasviña, del grupo parlamentario del Partido Morena, para hablar a favor.

La Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros Senadores.

Hoy me estoy dando cuenta que hay argumentaciones que más que nada pudiera decir que son infodemia, porque precisamente nosotros en esta tribuna, al hacer, por medio del Canal del Congreso, una tribuna pública, tenemos la obligación legal y moral de informar al pueblo de México con veracidad, con respeto, una información fidedigna de cuál es el propósito de esta reforma.

No se engañen, bien saben ustedes que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas”.

Y eso lo estableció el Constituyente del 17.

Ustedes saben bien que con anterioridad a que entrara en vigencia este nuevo sistema penal acusatorio, cuando se iniciaba ese proceso penal, la indagatoria era llevada a cabo por el representante social previa denuncia o querella que se presentara ante el agente del Ministerio Público del fuero común o del fuero federal.

Luego entonces, cuando había elementos suficientes para considerar que había la presunción de la consumación de un hecho delictivo de un presunto responsable, era puesto a disposición del juez penal de la causa y el juez penal de la causa dentro de un término legal de 72 horas podía dictar un acto de libertad, auto con sujeción a proceso y auto de formal prisión.

Ahora, no pretendan confundir, estamos ante un tema que es la prisión preventiva oficiosa, que solamente significó la inclusión dentro del catálogo de delitos graves, delitos como son los delitos electorales, cuando se utilizan recursos públicos o también el ser funcionario público y llevar a cabo actos de proselitismo o a favor de equis o de cualquier candidato o fórmula política.

También se incluye el robo de hidrocarburos, no se les olvide el caso Odebrecht.

Un caso donde están inmersos en la corrupción y el saqueo al país de cientos de millones de pesos funcionarios públicos, de regímenes de gobiernos del PRI y del PAN que están en una lista de investigación y que eso ocasionó la gravedad, que quede muy claro, la gravedad de sumir al pueblo de México en la extrema pobreza, la gravedad de que hoy estamos padeciendo con la pandemia del COVID-19, de que la infraestructura hospitalaria no recibió los recursos que debió haber recibido para atender a todas las mexicanas y mexicanos que estamos sufriendo con las consecuencias de una pandemia que es global, que no es local, señores, la pandemia está en el mundo.

No argumenten con falsedad, están hablando de la vacuna, señores.

Si a mí me permitieran como ciudadana mexicana poder participar en la aplicación de esas vacunas, yo lo haría, señores. Y el hecho de que alguien que trabaje en instituciones de gobierno y esté dispuesto al contagio es de valientes, señores, no minimicen la actividad de quienes hoy están participando, de un grupo de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes que quieren a la patria.

No como ustedes que han sido saqueadores, que han sido sátrapas y que han sido ratas, señores.

No confundan con infodemia, solamente en este momento estamos tratando la inclusión o reformas del artículo 167 del párrafo cuarto donde no se incluyen las armas réplicas, lo demás nosotros ya lo aprobamos, señores.

Y la prisión oficiosa no viola los derechos humanos, definitivamente no los viola, la violaban los anteriores procedimientos penales, señores.

Hoy, en la “Cuarta Transformación”, estamos transformando integralmente el sistema judicial de México, no el sistema, el que ustedes conservaron para cometer delitos, para cometer crímenes.

Gracias.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: En virtud de que se han agotado los oradores, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.

Proceda la Secretaría a recoger la votación del proyecto en términos del dictamen.

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Procederé a recoger la votación, señor Presidente.

Solicito a las Senadoras y a los Senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, su nombre y grupo parlamentario.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Permítame, señora Secretaria.

¿Está solicitando el uso de la palabra el Senador Damián?

El Senador Damián Zepeda Vidales: Así es, señor Presidente, para rectificación de hechos.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Adelante, Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: A ver, respeto profundamente quien con argumentos sólidos toma una decisión distinta, nadie tenemos la verdad absoluta, pero creo que es solo justo que sepan lo que están votando, porque lo que están argumentando no es lo que están votando.

Si ahorita hablaban del artículo 19, y que solo 72 horas puede estar detenido, es que no puede ser que piensen que eso estamos votando.

Esas 72 horas son que no puede estar detenida una persona más allá de ese tiempo sin que el Juez le dicte un acto de vinculación a proceso, no tiene nada que ver con la prisión preventiva, nada qué ver, más que está en el mismo artículo.

La prisión preventiva oficiosa entra después de ese momento. Ya te llevaron, te acusaron, te abrieron el juicio, y en lo que se lleva el juicio vas a estar en la cárcel.

Un año, un año puedes estar legalmente en la cárcel sin que te hayan probado la culpabilidad.

Entonces, de veras si creen que es eso, pues, por favor, rectifiquen.

Segundo, dice también otra compañera para rectificación de hechos, es que queremos que el delincuente esté en la cárcel. Todos queremos que los delincuentes estén en la cárcel, pero una persona no es culpable por el hecho de que las fiscalías digan que es culpable, es culpable cuando el Juez lo declara culpable.

Tercero, hablan como si ya sabemos que es el culpable porque lo detuvieron.

Señores, no es solo para flagrancia, de hecho, hemos puesto en la mesa que, si quieren, pues, bueno, que sea al que agarraron robando, lo agarraron en flagrancia, tienes elementos.

No es así esto que están votando, puede ser una persona que ni estaba en la ciudad cuando pasó el robo, que en el juicio va a probar que estaba fuera, pero mientras, cárcel.

Entonces, no, no es lo que están argumentando, lo digo con profundo respeto.

Y ojalá y tuviéramos esa oportunidad de tener ese análisis más profundo porque esta es una injusticia, la que se está cometiendo.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: Proceda la Secretaría a recoger la votación.

La Secretaria Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez: Procedo a recoger la votación, señor Presidente.

Solicito a las Senadoras y a los Senadores que cuando escuchen su nombre manifiesten el sentido de su voto, su nombre y grupo parlamentario.

En caso de que no se registre su voto haremos una segunda consulta inmediatamente para su comprobación.

Iniciamos en sentido alfabético, de la A hacia abajo.

Menciono nada más a quien no quedó registrado, igualmente en orden alfabético.

Quedan registrados, señor Presidente, 62 votos a favor, 36 en contra y 1 abstención.

El Presidente Senador Eduardo Ramírez Aguilar: En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. **Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.**

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN.

Artículo Primero.- Se reforman el artículo 167, párrafo tercero, los párrafos cuarto y quinto, que se fusionan para quedar como párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, la fracción XI del párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como el párrafo octavo que pasa a ser séptimo, y se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII al párrafo sexto que pasa a ser quinto, así como los párrafos octavo y noveno, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

...

I. a **X. ...**

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260;

XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325;

XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis;

XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo;

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII.

...

I. a **III. ...**

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad.

Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia.

En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente.

Artículo Segundo.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6; así como los artículos 7 Bis y 11 Bis, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

La persona juzgadora ordenará la prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos previstos en los artículos 7, fracción VII, párrafo tercero; 7 Bis; 11, fracción II; 11 Bis y 20, fracción II, de esta Ley, cuando se encuentren relacionados con el uso de programas sociales con fines electorales.

Artículo 7 Bis. Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular.

Artículo 11 Bis. Se impondrá de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la servidora o servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

Artículo Tercero.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para quedar como sigue:

Artículo 14. ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las o los imputados por los delitos previstos en los artículos 27, 28, 31, 34, 35, 37 y 41 de esta Ley.

Artículo Cuarto.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

4.- ...

...

La medida de prisión preventiva será aplicable de oficio tratándose de los delitos previstos en los artículos 8; 9, primer párrafo, fracciones I, II y III, en relación con el segundo párrafo, incisos b) al d) y cuarto párrafo; 10, párrafo segundo, incisos a) y b); 11; 12, fracción III; 14; 15, párrafo segundo; 17, fracciones II y III; 18 y 19, de esta Ley.

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 81, primer párrafo; 83 Ter, fracción II; 83 Quat, fracción II y 83 Quintus, fracción II, y se adiciona un artículo 92, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 81.- Se sancionará con penas de tres a ocho años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente.

...

Artículo 83 Ter.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, cuando se trate de las armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III.- ...

Artículo 83 Quat.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a siete años y de cien a trescientos días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta Ley.

Artículo 83 Quintus.- ...

I.- ...

II.- Con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.

Artículo 92.- Los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de esta Ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa.

Artículo Sexto.- Se reforma el artículo 160, primer párrafo; se adiciona un párrafo tercero al artículo 420, y se derogan las fracciones I y III del artículo 162, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, importe, venda o acopie sin un fin lícito o con la intención de agredir, instrumentos que puedan ser utilizados para el ataque o la defensa, se le impondrá prisión de uno a seis años y de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como el decomiso.

...

...

Artículo 162.- ...

I.- Se deroga.

II.- ...

III.- Se deroga.

IV.- y **V.- ...**

...

...

Artículo 420.- ...

I. ...

II. ...

II Bis. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

...

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.

Artículo Séptimo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 480 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 480.- ...

El juez o la jueza ordenará la prisión preventiva de manera oficiosa a las y los imputados por los delitos previstos en los párrafos segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 475 de esta Ley.

Artículo Octavo.- Se reforma el artículo 2o., fracción II, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o.- ...

I. ...

II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis, 84, 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III. a **X. ...**

...

Artículo Noveno.- Se reforman los artículos 533, primer párrafo y 534 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:

Artículo 533.- A quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se le sancionará con pena de dos a nueve años y multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito.

...

Artículo 534.- Al que indebidamente y sin el propósito de interrumpir o perjudicar las vías generales de comunicación arroje en ellas cualquier obstáculo, impida sus desagües, descargue aguas, tale, pode o maltrate los árboles del derecho de vía, se le impondrá multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de incurrir en la falta.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

Tercero. Los procedimientos penales que se estén substanciando a la entrada en vigor del presente Decreto se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos.

A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente Decreto con anterioridad a su entrada en vigor, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido.

Cuarto. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.

Quinto. La aplicación de las normas en los supuestos delictivos a que se refiere el presente Decreto, se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021.- Dip. **Dulce María Sauri Riancho**, Presidenta.- Sen. **Oscar Eduardo Ramírez Aguilar**, Presidente.- Dip. **Julieta Macías Rábago**, Secretaria.- Sen. **Lilia Margarita Valdez Martínez**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021.- **Andrés Manuel López Obrador**.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. **Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila**.- Rúbrica.